



EL *CASO CUTTING* ¿EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY?

JORGE ALBERTO SILVA

Estudio introductorio y compilación



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

EL CASO CUTTING
¿EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY?

*Documentos derivados de una reclamación diplomática de Estados Unidos
de América contra México, incluyendo un estudio introductorio del caso*

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Serie DOCTRINA JURÍDICA, núm. 815

COORDINACIÓN EDITORIAL

Lic. Raúl Márquez Romero
Secretario Técnico

Lic. Wendy Vanesa Rocha Cacho
Jefa del Departamento de Publicaciones

Ricardo Hernández Montes de Oca
Edna María López García
Cuidado de la edición

Javier Mendoza Villegas
Formación en computadora

Mauricio Ortega Garduño
Elaboración de portada

EL CASO CUTTING ¿EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY?

*Documentos derivados de una reclamación
diplomática de Estados Unidos de América
contra México, incluyendo un estudio
introdutorio del caso*

JORGE ALBERTO SILVA
Estudio introductorio y compilación



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
México, 2017

Primera edición: 27 de octubre de 2017

DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Ciudad de la Investigación en Humanidades
Ciudad Universitaria, 04510 México, Ciudad de México

Impreso y hecho en México

ISBN 978- 607-02-9614-7

CONTENIDO

Estudio introductorio.	1
Jorge Alberto SILVA	

DOCUMENTOS DERIVADOS DE UNA RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA
DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONTRA MÉXICO
EL CASO *CUTTING*

PRIMERA PARTE

Correspondencia diplomática	33
---------------------------------------	----

SEGUNDA PARTE

Nueva correspondencia diplomática	85
---	----

TERCERA PARTE

Reporte sobre el delito extraterritorial	139
--	-----

ESTUDIO INTRODUCTORIO

I. RESUMEN DEL CASO

No son pocos los casos judiciales que logran impactar las relaciones internacionales de un país. Los documentos del caso que se presentan en este ejemplar corresponden a uno de esos.¹ Debo resaltar que no es la cuestión meramente penal la de importancia, sino el *affaire* diplomático que a partir de este asunto se generó; de ahí que el centro de atención de estas notas se inclinará hacia ese punto, en especial, la reclamación diplomática de Estados Unidos de América.

Comenzaré por ubicar al lector en Paso del Norte —hoy Ciudad Juárez— en 1886.² En ese lugar y momento se desarrolló un proceso judicial que por sí solo carecía de importancia fuera de casa, pero dio lugar a un enredado problema internacional, en cuyo desenlace había quienes auguraban otra guerra entre Estados Unidos y México. Y cabe mencionar que por ese entonces gobernaba el país el general Porfirio Díaz.

En ese contexto, residían en Paso del Norte dos personas que no parecían congeniar. Ambas se dedicaban al periodismo: uno, mexicano; otro, estadounidense. Permítaseme presentarlos:

Emigdio Medina era un mexicano que se dio a la tarea de crear una prensa propia que circulaba en su comunidad. Y un buen día del año ya mencionado, informó a sus amigos que pronto aparecería un nuevo medio de difusión: la *Revista Internacional*.³

¹ Debo agradecer a los profesores José Luis Vallarta Marrón, Ricardo Méndez-Silva, Manuel Becerra Ramírez y Nuria González (todos de la UNAM), las explicaciones y sugerencias que me auxiliaron a conformar las presentes notas y reflexiones. Asimismo, agradezco al licenciado Raúl Márquez Romero, secretario técnico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por aceptar la presente publicación e invitarme a enriquecer la nota de presentación de los documentos históricos. Y va, por igual, mi agradecimiento a mi asistente, Edwin Carlos Valenzuela, quien logró obtener diversos datos y documentos. Finalmente, hago notar que estos documentos fueron distribuidos previamente entre varios amigos y profesores en un ejemplar que se multiplicó sólo por unos cuantos. Ahora contiene algunas notas adicionales que lo complementan.

² En 1888 cambió su nombre de Paso del Norte por el de Juárez.

³ En realidad, la *Revista Internacional* ya existía. Fue fundada en 1872 por Espiridión Provensio (1840-1913). Más bien, Medina trató de resucitarla.

Augustus K. Cutting, originario de Nueva York, residía tanto en Paso del Norte como en El Paso, Texas —es decir, tanto del lado mexicano como del estadounidense—. Al momento del caso era un hombre de 40 años de edad, editor de un periódico semanal llamado *El Centinela*, que circulaba en Paso del Norte. No era un tipo conocido, aunque, a raíz de los hechos que protagonizó, sería conocido mundialmente.

El anuncio de Emigdio Medina fue el punto por donde se inició el problema, pues a Cutting no pareció gustarle el proyecto de empresa que anunciaba. Unos días después, el 6 de junio, Cutting publicó en su periódico una nota en la que agredía a Medina; insultándolo, llamándolo defraudador, estafador, cobarde y ladrón, y declarando “que el periódico en español que anunció publicar en Paso del Norte, era una maquinación para engañar a los que dieran anuncios”.

Obviamente, Medina se molestó, por lo que presentó una queja contra Cutting ante el juez segundo municipal, juez conciliador, de Paso del Norte.⁴ Este funcionario llamó al neoyorquino con el objetivo de procurar una amable solución y evitar que se agravara el distanciamiento entre ambos periodistas. Frente al juez se llegó a un convenio conciliatorio entre los contendientes: Cutting se comprometió a retractarse, disculpándose con Medina, para lo cual haría una nueva publicación en los términos acordados. La disculpa prometida satisfizo a Medina.

Sin embargo, Cutting no cumplió con lo pactado, pues hizo una publicación dejando las expresiones a Medina y la retractación en letras tan pequeñas que no se alcanzaban a leer, sólo en inglés y “con faltas sustanciales que la hacen casi ininteligible”, como según dijo más tarde el juez.

Cutting publicó un aviso o remitido en *El Paso Sunday Herald*, así como en el *The Evening Tribune* —periódicos de la ciudad de El Paso, Texas—, en los que ratificó y amplió sus palabras difamatorias contra Medina y calificando la conciliación habida de indigna. En la nueva publicación, reafirmó la original aserción de que Emigdio Medina era un defraudador y un estafador. Y aunque esa publicación se hizo en El Paso, Cutting se encargó de distribuir varios ejemplares en Paso del Norte; incluso de su oficina ahí la autoridad recogió varios ejemplares.

A consecuencia de lo anterior, al sentirse herido e infamado, Medina presentó una querrela contra Cutting por el delito de difamación; querrela

⁴ Es interesante saber de un juez conciliador, diferente al de instrucción y proceso que existía en el lugar. Un juez conciliador, o funcionario adecuado para conciliar de ese entonces, desapareció del país. No fue sino hasta más de cien años después cuando comenzamos a ver algo semejante otra vez.

que dio lugar a una orden de aprehensión girada por el juez penal del lugar. Cutting fue aprehendido el 23 de junio y llevado a la cárcel de Paso del Norte.⁵

Vale la pena mencionar que el artículo 186 del Código Penal del estado de Chihuahua —y el de varias entidades federativas— prescribía que “los delitos cometidos en otro país por un extranjero contra un mexicano se sancionarían conforme a la ley mexicana, siempre que el acusado, entre otras condiciones, se encontrara en el país”.

Volviendo al suceso, casi de inmediato, el cónsul de Estados Unidos en Paso del Norte se apersonó ante el llamado de Cutting, y al parecer, le aconsejó que no declarara y que rechazara la competencia del juez mexicano para conocer el asunto. Así ocurrió. En los mismos documentos estadounidenses aparece que “El Sr. Cutting apeló inmediatamente al cónsul de los Estados Unidos para la protección, indicando que él había sido puesto en la cárcel”.

Durante la declaración preparatoria, Cutting, muy engreído, declaró ante el juez que “a la única autoridad que reconocía era a su cónsul y no a las autoridades mexicanas”, negándose a emitir una declaración y a designar defensor. En la sentencia el juez expresó que Cutting “declinó la jurisdicción del juzgado”. Es decir, que Cutting estaba demasiado convencido de su valer, incluso por sobre el juez. De cualquier forma, el juez —licenciado Miguel Zubía—,⁶ luego de designarle defensor, le decretó la sujeción a proceso, imponiéndole la formal prisión (prisión preventiva).

Debo destacar la rebeldía del señor Cutting durante todo el proceso. Nunca aceptó la jurisdicción de las autoridades mexicanas. Para él, su soberano era Estados Unidos. Por ello no quiso designar defensor, ni en primera ni en segunda instancia; no quiso solicitar la libertad bajo caución, y cuando se la dieron no quiso tomarla; tampoco quiso apelar —eso lo hizo el defensor de oficio—. Por ser extranjero pensó que sólo su país podría juzgarlo. Fue por ello que invocó la protección de su gobierno.

⁵ Durante el siglo XIX y antes, el delito de difamación fue estimado como un delito contra el honor. Delito grave, sobre todo cuando las palabras difamatorias afectaban la vida privada de una persona.

La difamación consiste en desacreditar a uno frente a otros. Ataca la fama o reputación de una persona, rebajándola en la estima o concepto que los demás tienen de ella. Y se concreta cuando se comunica a una o a varias personas una imputación de hechos ciertos o falsos, tratando de conseguir en forma dolosa una lesión a la reputación, ya sea personal, familiar o profesional.

⁶ De entre las notas obtenidas sobre Miguel Zubía, encuentro que era abogado y notario hacia 1882. Egresado del Instituto de Chihuahua.

La negativa a designar defensor se advierte en los resultados de la sentencia del juez (misma que se publica en esta compilación), al asentar (se respeta la ortografía original):

Resultando, 8o.: Que seguida la averiguación por todos sus trámites, el inculcado insistió en su anterior respuesta, y al prevenirle nombrara defensor por haber renunciado el C. Lic. José María Barajas, se negó á hacerlo, nombrándose de oficio al C. A. N. Daguerre, socio del mismo Cutting en la redacción de *El Centinela*; pero habiendo renunciado á su vez, recayó el nombramiento en el C. Jesús E. Islas, quien ha desempeñado el cargo hasta presentar su alegato de defensa.

A lo anterior cabe agregar que en apelación le fue designado como defensor al licenciado Joaquín Villalva. Lo que no es entendible es por qué Daguerre, siendo defensor de Cutting y, a la vez, su socio en el periódico, renunció.

Por otro lado, el juez de Paso del Norte expresó, con inteligencia, que la publicación hecha en *El Centinela* —de Paso del Norte—, fue ratificada por Cutting en el periódico de Texas, sin que esa ratificación constituyera un nuevo delito que debiera ser castigado con una pena diferente de la que correspondía por la primera publicación; pero que, aun cuando la difamación procediera de la publicación en *El Paso Sunday Herald*, el artículo 186 del Código Penal mexicano prevenía “que los delitos cometidos en territorios extranjeros por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, podrán ser castigados en la República y con arreglo a sus leyes”.

El hecho es que Cutting —asentó el juez— fue aprehendido en territorio de la República debido a la queja de Medina, quien presentó su querrela en la forma prescrita por la ley; no obstante, Cutting no había sido juzgado definitivamente, ni absuelto, amnistiado, ni indultado en el país en que delinquirió, siendo que el delito por el que se le acusó tenía el mismo carácter delictuoso tanto en el país en que lo ejecutó como en la república, según el Código Penal vigente en el estado de Texas, artículos 616, 617, 618 y 619, y en el del estado de Chihuahua, artículos 642 y 646.

II. EL CONTEXTO HISTÓRICO

Paso del Norte, una ciudad al norte de México, frontera con Estados Unidos, y en esa época con menos de ocho mil habitantes, había sido dividida luego de la guerra de 1846-1847. Quedó en el margen sur del río Bravo, en tanto

que en el margen norte quedó lo que hoy es la ciudad de El Paso, Texas (ya sin el agregado “del Norte”). Era una ciudad sin pavimentar, con pocas escuelas para niños, sólo tres templos, y con más del 90% de la población sin saber leer ni escribir. Y aunque no era una ciudad de inmigración, el comercio comenzó a incrementarla. Además, durante nueve meses se convirtió en la residencia del presidente de la República, hasta que Benito Juárez la trasladó de vuelta a la ciudad de México.

La importancia comercial del lugar logró muy pronto que Estados Unidos acreditara un cónsul que no sólo se dedicara a impulsar esa actividad. Dos años atrás, el ferrocarril había llegado de la Ciudad de México y el comercio internacional creció de forma impresionante; un tranvía de mulas Paso del Norte-El Paso inició su recorrido y el tipo de cambio era uno a uno. Asimismo, no eran necesarios pasaporte ni visa para cruzar en ambos sentidos.

El señor J. Harvey Brigham,⁷ cónsul de Estados Unidos en Paso del Norte, describía en su correspondencia a la ciudad (cuatro años antes del evento que nos ocupa) como la más emprendedora y progresiva, una que rápidamente se inmiscuyó en los negocios hacia el interior del país. El Paso Texas apenas si contaba con unos 800 habitantes, y en esa ciudad el ferrocarril conectaba con una línea transcontinental, donde el comercio unía a ambos países. El mismo cónsul hacía notar a Washington que las exportaciones hacia Estados Unidos habían sido mayores a los siete millones, excediendo a las de Honolulu y Hong Kong.

En el estado de Chihuahua gobernaba Félix Francisco Maceyra, quien inició su gobierno provisional ya sin el problema de la guerra apache,⁸ que durante siglos había azotado al estado, especialmente a Paso del Norte. No hay nota sobre el caso por parte del gobierno estatal, pero se dice en la biografía de este gobernador que “afrontó con dignidad el incidente de Cutting”. Y lo cierto es que lo único que aparece en documentos es que el gobernador envió al secretario de Gobierno a Paso del Norte para que informara acerca de las condiciones de la cárcel y “hacer lo posible” en favor de Cutting. Pero por otro lado, lo que sí existe es una nota en la que, por medio del secretario

⁷ J. Harvey Brigham era originario de Louisiana. Poco después del *affaire* en Paso del Norte fue comisionado como cónsul en Kingston, Jamaica, donde falleció en 1888. Tras su actividad en Paso del Norte hubo quejas en contra de él, sujetándolo a investigación el Departamento de Estado. *The Ogdensburg Journal*, Nueva York, 17 de agosto de 1886.

⁸ En 1886, el mismo año del *affaire*, en enero, falleció Mauricio Corredor, un indígena tarahumara que fue quien mató al indio Victorio, jefe de los apaches. En ese mismo mes se dio la última batalla, en la que también participaron soldados de Estados Unidos (batalla de Tiópar). En julio del mismo año, Gerónimo, el otro jefe apache, se rindió en Sonora y fue entregado al ejército estadounidense.

de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, el presidente recomienda al gobernador de Chihuahua “cuide de que se administre pronta y cumplida justicia, aliviando la situación material en que se encuentra el Sr. Cutting, hasta donde lo permitan las leyes”.

México, por medio de su presidente, había iniciado —hacia el momento del *affaire*— un proceso de unificación del país, tras una larga y amplia anarquía. Aunque se iniciaba una dictadura, no hay que olvidar el cambio político, económico y comercial que México gozó. Fue el momento de la gran codificación, de la centralización, del nacionalismo, etcétera. Y uno de los aspectos que quiero destacar es el relacionado con la “unidad mexicana”, en la que se consolidaron las políticas hacia el exterior. Sobre todo, la aspiración en lo político a una igualdad soberana entre los Estados y un respeto hacia los extranjeros.

Al mismo tiempo, en la vieja Escuela Nacional de Jurisprudencia, se hablaba de derecho internacional en una cátedra ya establecida —a la que se adicionó lo de público—, y se inició la asignatura de Derecho internacional privado. Ambas disciplinas con un buen número de libros especializados y de texto. Lo que es de importancia, porque el estudio de los documentos que se anexan presenta una diferencia tenue entre ambas disciplinas con un buen número de libros especializados. Como más adelante se explicará, en la bibliografía mexicana Manuel Cruzado citaba diversas obras dedicadas al derecho internacional;⁹ algunas anteriores al evento, como las de José H. Ramírez, o la de Isidro Montiel y Duarte.¹⁰

Daniel Margolies explica que el caso Cutting surgió en un momento en que la frontera era vista por medio del prisma de una política global y de ambiciones económicas.¹¹

A lo largo del siglo XIX, Estados Unidos se caracterizó por ser un país ávido de poseer más territorios, lo que se enfatizó en el *Destino Manifiesto*. México venía de diferentes guerras con Estados Unidos, en una de las cuales perdió Texas; en otra, más de la mitad de su territorio; y en un “negocio de venta de inmuebles” se “deshizo” de la Mesilla. Todo en favor del acrecentamiento del territorio estadounidense.

⁹ Cruzado, Manuel, *Memoria para la bibliografía jurídica mexicana*, México, Antigua Imprenta de E. Murguía, 1894.

¹⁰ Ramírez, José H., *Código de los Extranjeros. Introducción al estudio del derecho internacional desde los tiempos antiguos hasta nuestros días*, México, Imprenta de I. Escalante, 1870, 2 ts.; Montiel y Duarte, Isidro, *Tratado de las leyes y su aplicación*, México, José María Sandoval, Impresor, 1877.

¹¹ Margolies, Daniel S., *Spaces of Law in American Foreign Relations: Extradition and Extraterritoriality in the Borderland and Beyond, 1877-1898*, Athens (Georgia), University of Georgia Press, 2011, pp. 91 y 92.

De igual manera, hay otra variable que vale la pena destacar: desde tiempo atrás hubo estadounidenses que intentaban una guerra con México para anexarse otros espacios. La tesis era que si el país poseía más territorio se colocarían más pronto los productos fabricados. Tal política auspiciada por los grandes comerciantes y fabricantes.

Finalmente, el no reconocimiento del general Díaz por parte del gobierno de Estados Unidos también abrió un espacio contra México, y a eso se sumaban las políticas de México que impedían que fuerzas militares estadounidenses entraran a territorio mexicano para perseguir a los apaches y otras tribus que se movían sin problema en la frontera; el robo de ganado en Estados Unidos y traído a México; la apertura de una zona libre en el norte de Tamaulipas, con productos europeos, que intranquilizaba a los comerciantes texanos; el odio creciente de los mexicanos hacia la gente de Estados Unidos —especialmente sus funcionarios—, mucho de lo cual era auspiciado por la prensa de la época, etcétera.¹²

Dejo hasta aquí estos datos o variables del contexto histórico para comenzar a describir el *affaire* a que se refieren los documentos que se presentan en esta recopilación.

III. EL *AFFAIRE* DIPLOMÁTICO. LA PRIMERA FASE

El *affaire*¹³ descrito en los documentos comprende dos fases o momentos. Comenzamos con el primero: el cónsul de Estados Unidos en Paso del Norte, Mr. J. Harvey Brigham, le informó a Henry R. Jackson —representante de aquel país en México— de la detención del señor Cutting.¹⁴ A la vez, Jackson produjo una nota que dirigió al secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal.¹⁵

¹² Lajous, Roberta, “Las relaciones con Estados Unidos”, en *México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores*, México, Senado de la República, 1990, t. IV.

¹³ La expresión *affaire*, en el sentido en que la Real Academia de la Lengua lo define, es “negocio, asunto o caso ilícito o escandaloso”. La Academia lo tomó del francés y, al parecer, se generó en el siglo XII. Conjuntó la preposición *a* y *faire*, “lo que se hace”. El *Diccionario Larousse* de la lengua francesa lo define como una fuente de preocupaciones y dificultades, una situación delictuosa no reglamentada. Ese es el sentido en que lo tomo en esta obra.

¹⁴ Henry R. Jackson (1820-1898) se graduó como abogado en la Universidad de Yale. Obtuvo el grado de coronel en la guerra México-Estados Unidos, fue juez y trabajó ante el Imperio austriaco. También fue poeta. Tras la Guerra de Secesión, en la que participó, se incorporó al servicio diplomático, siendo adscrito a México de 1885 a 1886.

¹⁵ Ignacio Mariscal (1929-1910), político y diplomático oaxaqueño, secretario de Relaciones Exteriores en el momento del *affaire*. Sirvió en la presidencia de Benito Juárez y en la

En esa nota se quejó de la “detención de un ciudadano respetable”, que había sido confinado en una cárcel inmundada que no le ofrecía seguridad, e incluso, que el juez se negó a proporcionarle al cónsul la información relacionada con la detención.¹⁶ En ese momento no se atrevió a plantear el problema de la competencia internacional, según lo confesó. Y expresó, a la vez, que tampoco pidió instrucciones a su gobierno, pues lo que estaba haciendo lo emprendía por “el aspecto grave de esta cuestión”.

Si lo hasta aquí narrado sólo pareciera una queja del representante de Estados Unidos en México, tal vez no habría habido un verdadero problema, pero Jackson recibió, casi de inmediato, un telegrama enviado por Thomas Francis Bayard —secretario de Estado de Estados Unidos—,¹⁷ donde le ordenaba “exigiéndose al gobierno mexicano la inmediata libertad de A. K. Cutting”. Acto seguido, Jackson reenvió a Ignacio Mariscal el telegrama recibido:

TELEGRAMA: Se le instruye para exigir al gobierno mexicano la liberación inmediata de A. K. Cutting, un ciudadano de los Estados Unidos, ahora ilegalmente encarcelado en Paso del Norte.

Bayard.¹⁸

Exhorto a mi lector a que preste especial atención a este documento, pues dicho telegrama es lo que desencadenaría el *affaire*.

Ya no se trataba de una simple queja, ahora se pasaba a una reclamación internacional, una reclamación diplomática —así fue entendida por ambos Estados—, y fue el inicio de una gran presión extranjera para resolver un caso. Como veremos posteriormente, Estados Unidos reclamó la inmediata libertad del preso y que se derogara la ley de Chihuahua.

de Porfirio Díaz. Inició su carrera diplomática como consultor en la Legación Mexicana, en Washington, junto con Matías Romero, durante la época de la intervención francesa. Autor de varias obras.

¹⁶ En el mes en que transcurrió la detención seguramente el clima debió ser terrible. La ciudad siempre se ha caracterizado por las más altas temperaturas; difíciles, si se toma en cuenta que está ubicada en pleno desierto, y que no había medios para reducir la temperatura. La temperatura promedio debió ser de unos 40 grados centígrados.

¹⁷ Thomas F. Bayard (1928-1898), abogado, político y diplomático. Estuvo nominado para ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos, no habiendo sido favorecido. En 1885 el presidente Groover Cleveland lo designó secretario de Estado. En su actuar, promovió el comercio de Estados Unidos en el Pacífico, evitando la adquisición de colonias en un momento en que muchos estadounidenses clamaban por ellas.

¹⁸ “You are instructed to demand of the Mexican Government the instant release of A. K. Cutting, a citizen of the United States, now unlawfully imprisoned at Paso del Norte”.

Mediante este telegrama se inició una controversia internacional. El *affaire* se conformó por un profuso intercambio de notas entre la legación de Estados Unidos y el gobierno de México, así como entre el secretario de Estado estadounidense y el representante de México en Washington, Matías Romero.¹⁹

Estados Unidos exigió la libertad incondicional del preso —así es, ¡la exigió!—, pero el gobierno de México (el Poder Ejecutivo) contestó que no podía interferir en la función del Poder Judicial.

La exigencia de Estados Unidos quedó planteada y la respuesta de México fue categórica. Los planteamientos fueron: “exijo que lo liberen” y “no puedo acceder a tu pedimento”. La diferencia entre ambos fue el campo de batalla que se había iniciado, pero sobre esto volveré más adelante.

Mientras tanto, el gobierno de Chihuahua se involucró por medio del juez de la causa, pues se logró que se le concediera al preso el derecho a la libertad bajo caución, a pesar de que no la había solicitado. Pero el preso se negó a obtener la libertad caucional que se le otorgaba. ¿Cuáles fueron sus razones? Posiblemente convertirse en mártir, en una víctima caída y sacrificada, como santificado por su gobierno y, tal vez, lograr convertirse en héroe nacional de los Estados Unidos.

El gobierno de Chihuahua, y más acertadamente el gobierno municipal, a medida que pasaban los días hizo modificaciones a la celda en que se encontraba el preso —la cárcel inmunda a la que se refirió Jackson—. Quizá con la finalidad de hacer menos tensa la situación, se atendió al preso proporcionándole comida especial por cuenta del ayuntamiento local, así como una celda más a su gusto (seguramente todo con cargo al erario municipal, no al federal).²⁰

Se hicieron muchas cosas con tal de disminuir la tensión internacional, pero Cutting no obtuvo su libertad caucional —no quiso—. Se sintió victimizado por el gobierno mexicano, pero protegido por su gobierno —que dicho sea de paso, después del asunto lo olvidó—. Estuvo dispuesto a sacrificarse por

¹⁹ Matías Romero Avendaño (1837-1898), diplomático mexicano, acreditado como embajador de México en Estados Unidos al momento del *affaire*. Inició al lado de Benito Juárez, pero en Estados Unidos. Regresó a México para enfrentar la lucha contra los franceses, luego volvió a Estados Unidos como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, cuando Abraham Lincoln era presidente. Regresó a su país para luego retornar a Estados Unidos. México carecía de embajada en Washington, pues sólo contaba con una legación.

²⁰ Es probable que los miembros del ayuntamiento hubieran tomado en cuentas diversas notas de prensa en El Paso, que hablaban de lo paupérrimo de esa cárcel. Seguramente con un argumento consecuencialista pensaron mejorar las instalaciones (aunque sólo las del preso) para dar una mejor imagen al mundo. “Si los reflectores del mundo están aquí puestos, el escenario debe verse lo mejor posible”.

algo que no puedo adivinar. Tal vez para que sus “ideales” triunfaran por sobre el gobierno de México, para obtener su libertad sin condiciones; o tal vez, como dijo José Martí, que la detención de Cutting en México fue deliberada por él mismo, para provocar una guerra entre México y Estados Unidos. Esto último lo tomo con reservas al no poderse comprobar, como adelante se explicará, al hacer referencia a las observaciones de Martí.

Cutting fue presentado en la prensa estadounidense como un abnegado mártir. Acaso por eso se negó a obtener la libertad bajo fianza que le fue otorgada. También se negó a designar defensor —aunque el juez le designó al de oficio—. En forma reiterada se encargó de afirmar que él era sólo un súbdito de Estados Unidos, no de México. Y al igual que los que le siguieron en su sainete, sostuvo que se le había impuesto una ilegal detención, producto de una actitud extraterritorial.

4. EL DESENLACE DEL PROCESO PENAL Y FIN DE LA PRIMERA FASE DEL *AFFAIRE*

Ante un problema diplomático tan grave como el que se había presentado, el gobierno de México prefirió que el asunto penal se arreglara lo mejor posible, pero sin acceder a la ilegal presión de que se otorgara la libertad al preso y se derogara la ley de Chihuahua. Se prefirió dar el mejor alivio posible dentro de la ley y seguir el camino diplomático.

De esta manera, fue posible que el gobierno mexicano apresurara a las autoridades para que dictaran sentencia. Afortunadamente, la carga de trabajo del juez no era tan pesada, por lo que coadyuvó, en la medida de lo posible, para terminar la instrucción, pasar al periodo del juicio y dictar sentencia. El proceso siguió acatando la normatividad procesal. Nadie se quejó de algún desvío en el procedimiento. Nadie dijo que la actividad procesal estuvo amañada o “arreglada”; de eso ni siquiera se quejó el preso.

Finalmente llegó el momento y el juez dictó sentencia. Es posible que Cutting, sus partidarios y tal vez algunos políticos, creyeran que la sentencia sería absolutoria. Incluso en la Ciudad de México la prensa había pensado que la sentencia declarararía compurgada la pena. ¡Muy equivocados! La sentencia fue condenatoria.²¹

Pero para aliviar la tensión —que se agravó— todavía quedaba el recurso de apelación. Posiblemente los magistrados del más alto tribunal del estado

²¹ Puede consultarse esta sentencia en la tercera parte de esta obra, casi al final de la misma. Se encuentra transcrita en *Report on Extraterritorial Crime and the Cutting Case* (1887).

podieron dar la salida que lograra la terminación del *affaire* diplomático y se cumplieran los mandatos que llevaba la reclamación diplomática. Sin embargo, el preso, que no quiso obtener la libertad bajo caución, ahora tampoco interpuso el recurso de apelación. Por fortuna, lo hizo el defensor, aun contra la decisión de su cliente. La rebeldía de Cutting frente al proceso mexicano fue absoluta.

Se dio inicio al trámite de apelación. Se envió el expediente al tribunal superior —de Paso del Norte a la ciudad de Chihuahua—. El alto tribunal lo recibió y antes del momento de expresión de agravios, sorprendentemente, el ofendido se desistió de su querrela. De esta forma, la sentencia se vino abajo; ya no hubo base para resolver el recurso, ni base para que el preso continuara detenido. Así las cosas, el Supremo Tribunal de Justicia ordenó su libertad inmediata.

En esta ocasión el preso si aceptó la libertad que le concedían. Aquí no hubo rebeldía ni rechazo a todo acto jurisdiccional. Aceptó lo que las autoridades mexicanas le otorgaron y salió por su propio pie.

Es interesante tomar en cuenta parte de la resolución del alto tribunal en Chihuahua, pues el quinto considerando de la resolución, donde se admitió el desistimiento y se ordenó la libertad del acusado, dice (se respeta la ortografía original):

Considerando, 5o.: Finalmente, que el desistimiento del ofendido se concibe que tuvo ó ha tenido por objeto principal acallar la alarma suscitada por su queja, pues así lo dan claramente á entender sus conceptos (fojas 8 del segundo cuaderno), y al continuar los procedimientos sobre un punto resuelto legal y acertadamente en primera instancia, sería no solo desvirtuar ese loable propósito, sino ir más allá de lo que reclaman los fueros de la ley y el decoro nacional.

Nótese que el alto tribunal no sólo aludió al efecto jurídico del desistimiento, sino que también asentó que “tuvo ó ha tenido por objeto principal acallar la alarma suscitada”, a la vez que ese mismo desistimiento propiciaba el “decoro nacional”. La primera parte nos muestra que el tribunal superior tuvo cierto conocimiento del problema nacional. En cuanto al segundo, cabe mencionar que lo ahí dicho fue tomado en cuenta en los documentos de Estados Unidos. En estos, se dijo que lo resuelto por el tribunal mexicano correspondió a una “declaración implícita del gobierno mexicano y su aplicación por parte de los tribunales mexicanos”; que no se trató de una cuestión “de oportunidad”, sino de expresiones para ser discutidas acorde a los principios del derecho internacional.

Un mes se prolongó el proceso. Un plazo breve, si se observa lo que tardan los actuales procesos penales.

Es difícil saber qué fue lo que animó al ofendido, Emigdio Medina, a desistirse de la querrela cuando ya había ganado el asunto, e incluso, un pago indemnizatorio. Conjeturando un poco, es posible que diversos agentes de autoridad coadyuvaran para que el ofendido se desistiera, pero eso no está confirmado. Méndez-Silva piensa que tal vez el hecho de que Medina hubiera estado detenido el 23 de julio —luego de haber estado tomando “cruzó algunas palabras con el cónsul americano” y “fue puesto en la cárcel”— lo llevó a repensar y a otorgarle el perdón a Cutting, luego de la sentencia del 6 de agosto. Acaso se “dolió” del sacrificio de Cutting al estar en una cárcel o pensó en el “espíritu de cuerpo”, por ser ambos periodistas. ¡Qué sé yo! A Cutting se le regaló su libertad (sin hacer nada para merecerla).

En el informe de Estados Unidos, hay un párrafo que dice:

Es justo señalar aquí lo que puede llamarse un incidente del caso Cutting, que el 14 de agosto, mientras el recurso estaba pendiente ante el Tribunal Superior de Chihuahua, el señor Mariscal, por orden del Presidente de México, envió a los gobernadores de los estados de esa república, una circular instruyéndolos para que en el futuro, cuando se arreste a un extranjero por cualquier causa, deberán rendir, con especial cuidado, un informe detallado de las causas de la acción al gobierno Federal.

Así terminó la primera fase o capítulo del *caso Cutting*, que en cierta forma le permitió al gobierno mexicano respirar y pensar que todo había terminado, y afortunadamente, sin haber tenido que llegar a las armas. Sobre todo cuando había estadounidenses que pensaban que varios territorios mexicanos debían ser anexados a Estados Unidos, para lo cual agitaban a su gobierno, como adelante se explica.

V. LA SEGUNDA E IMPREVISIBLE FASE DEL *AFFAIRE*

La liberación del detenido no calmó los ánimos estadounidenses. A no mucho tiempo de concluido el proceso penal se inició la segunda fase del *affaire*. Una fase no esperada por el gobierno de México e iniciada con una nueva comparecencia del representante de Estados Unidos reactivando el asunto.

¿Cuál podría ser la nueva petición de Estados Unidos tras la liberación de Cutting? Si uno de los argumentos que rodearon el *affaire* consistió en que México había abierto un proceso por hechos supuestamente ocurridos fuera

de México, lo que diplomáticamente se podía esperar era que Estados Unidos pidiera celebrar algún tratado sobre la competencia judicial internacional. Pero no fue así.

El encargado de negocios de Estados Unidos presentó una nota al gobierno de México que decía (se respeta la ortografía original):

Apenas sorprenderá á V. E. saber que en esta comunicación me propongo abrir de nuevo, por orden de mi gobierno, la discusión de las importantes cuestiones suscitadas por el arresto, prisión y sentencia, de Mr. A. K. Cutting.

Volvió, pero esta vez pidiendo que el gobierno de México le otorgara una indemnización pecuniaria a Augustus K. Cutting y que se derogara el delito previsto en la ley mexicana; lo que reactivó el trabajo diplomático.

Las notas entre los gobiernos se pusieron en marcha nuevamente. México se negó al pago de lo reclamado y calificó a Cutting de filibustero. Y es que Cutting —según José Martí— ahora estaba en Washington, al frente de una organización que trabajaba por una intervención armada de Estados Unidos en México, con el fin de lograr su anexión. A mi parecer, con esta calificación México se equivocaba, al confundirlo con el que aludía Martí y que no era el que estuvo procesado en Paso del Norte. Enseguida se explicará la tesis de la confusión al revisar las notas de José Martí.

VI. NOTAS DE JOSÉ MARTÍ

En gran medida, la mayoría de citas contemporáneas a Cutting como filibustero se le deben a José Martí. Me detengo en sus observaciones porque aunque Martí no elaboró una detenida reseña del caso, aludió a una reunión de la liga de anexión habida en Nueva York, en la que involucró a un Cutting militar y coronel. Su trabajo se encuentra en una nota de prensa (una carta),²² y en sus escritos —que fueron varios—, Martí expresó que el coronel Cutting asistió a la Liga Americana Anexionista (American Annexation League), creada en 1878, como presidente de la Company for the Occupation and Development of Northern Mexico, con el fin de llegar a acuerdos tendientes

²² Esta carta de Martí se presenta en Martí, José, *Obras escogidas*, La Habana, 1979, pp. 201 y 202. Igualmente, Martí, José, *Selected Writings*, Penguin Group, 2002, p. 428. Originalmente la publicó en “A Vindication of Cuba”, en el *New York Evening Post* del 25 de marzo de 1889, y más amplia en un opúsculo denominado *Cuba and the United States*. De igual forma, hay una carta de Martí titulada “México en los Estados Unidos, sucesos referentes a México”, Nueva York, 23 de junio de 1887.

a la anexión de los territorios adyacentes a Estados Unidos —México y Canadá—.

Asimismo, presenta una pequeña referencia a los sucesos ocurridos en Paso del Norte, asociando al Cutting de Paso del Norte con la misma persona que luchaba por anexar a Estados Unidos parte del territorio mexicano. A mi parecer, Martí sufrió una confusión. Se trata de dos personas, y tanto el nombre como la actividad profesional entre ambos difieren, aunque coinciden en el apellido.

Martí confundió a Francis Cutting —un anexionista— con Augustus Cutting. Confundió al sujeto que fue procesado en Paso del Norte con aquel otro Cutting, anexionista, que pretendía junto a otros provocar una guerra con México.²³

La persona a que se refiere Martí la identifica, expresamente, como coronel Francis Cutting, fundador de la American Annexation League y presidente de la Company for the Occupation and Development of Northern Mexico. Agrega que éste abogó por la anexión de todo México desde antes de la Guerra Civil, y que nació en 1828 y falleció en 1892.²⁴ No obstante, aunque identifica a este Cutting anexionista, no hay en sus líneas alguna referencia que identifique en forma similar al Cutting que estaba en Paso del Norte.

Hacia 1886, momento del suceso en Paso del Norte, el militar (Francis) contaba con 58 años de edad —según se desprende de las notas de Martí—, mientras que el periodista (Augustus) contaba con 40 —según el proceso judicial y el informe al Departamento de Estado—. El procesado se llamaba Augustus, en tanto que el otro, Francis. Además, no se encuentra confirmado que el procesado fuera militar para ese momento, y menos que en ese mismo año (1886) ya tuviera el grado de coronel.

¿Cómo podría entenderse que un militar y coronel estadounidense estuviera residiendo durante más de dos años en Paso del Norte?²⁵ Con ese grado debió estar en Estados Unidos, trabajando en sus intereses

²³ Martí, José, *Crónicas sociales*, Barcelona, *www.linkgua.com*, Linkgua ediciones S.L., 2007, p. 28.

²⁴ Martí, José, *Inside the Monster: Writings on the United States and American Imperialism*, Nueva York y Londres, Monthly Review Press, 1977, p. 325 (nota al pie de página).

²⁵ En el considerando 13 de la sentencia se lee (se respeta a ortografía original): “Se tiene en consideracion que el inculpado reside en esta villa, donde tiene su domicilio hace más de dos años, segun consta de las declaraciones visibles á fojas 20, 21 y 22 del proceso, afirmacion que no ha sido contradicha por Cutting, quien declara á fojas 19 que reside en ambos lados, esto es, en Paso del Norte, México, y en El Paso, Texas, sin residencia fija en ninguno de los dos lados”.

expansionistas. México, además, sabiendo de esos intereses ¿cómo era posible que admitiera durante tanto tiempo al enemigo dentro de su territorio?

Por otro lado, en una lectura del informe a Washington del cónsul de Estados Unidos, Harvey Brigham, al referirse a Cutting se advierte que alude al sujeto de 40 años de edad, llevado a un proceso penal habido en Paso del Norte. Nada hay en su informe que incluya a alguien semejante a un filibustero que pretendiera hacer guerra contra México.²⁶

A partir de las notas de Martí otros escritores han ligado, hasta ahora, a ambos personajes, como si fueran el mismo sujeto; lo que genera problemas y distorsión en la interpretación histórica. Principalmente por la no identificación de cada personaje y que Martí toma como uno solo.

A pesar de ello, Martí advierte a las autoridades mexicanas obrar con cautela. Aunque esta advertencia no fue publicada en México; posiblemente para no alarmar a la población, para no hacer más grande el problema o simplemente porque se desconocía la misma.²⁷

VII. LOS AGENTES PARTICIPANTES

¿Quiénes participaron y estuvieron involucrados en el célebre y dolorido *affaire*? Puntualizaré rápidamente en algunos de los personajes.

El presidente de cada país estuvo enterado al momento de lo que ocurría —el telégrafo auxilió en esto—, así como sus respectivos congresos.

El presidente de México manejó suave y de manera inteligente el *affaire*, procurando no aparecer como protagonista; en tanto que el de Estados Unidos se movió ampliamente, y hasta en el informe al Congreso de su país reflejó su protagonismo. De hecho, es posible que el presidente estadounidense, Grover Cleveland, hubiera obrado más como populista, dada la fuerza de la prensa de su país, puesto que no hubo orden de su parte para invadir a México.²⁸

Cabe destacar, de la biografía de Cleveland, lo siguiente: se le describe como un presidente “no-intervencionista”, queriendo decir no intervenir

²⁶ Stout, Joseph Allen, *Schemers & Dreamers: Filibustering in Mexico, 1848-1921*, Fort Worth, Texas Christian University Press, 2002.

²⁷ Sarracino, Rodolfo, *Martí y el caso Cutting, ¿extraterritorialidad o intervencionismo?*, en <http://www.cubarte.cult.cu/paginas/actualidad/print/noticia.php?id=124865>.

²⁸ Stephen Grover Cleveland (1837-1908), impulsado por el Partido Demócrata, ocupó el cargo como presidente en dos ocasiones. Su participación en el *caso Cutting* puede verse en *Grover Cleveland, Twenty Second President of the United States, March 1885 to March 1889*, Washington, Government Printing Office, 1889, pp. 186 y ss.

con el ejército los países de América. Incluso durante su campaña política se caracterizó por su oposición a la expansión y el imperialismo. Cuando tuvo problemas negoció, por medio de su secretario de Estado, Thomas F. Bayard, con la oposición de los miembros del Partido Republicano. Al momento del *caso Cutting* se encontraba recién casado, e inaugurando, en octubre, la famosa Estatua de la Libertad.

También resulta interesante la nota que el presidente Cleveland asentó en sus memorias, publicadas en 1889, a propósito de este caso:

La admisión de tal pretensión [la de México al asumir competencia] podría haber sido acompañada de graves resultados, invasión de la jurisdicción de este gobierno, y sumamente peligrosos para nuestros ciudadanos en tierras extranjeras. Por lo tanto, he negado y he protestado contra su intento de ejercicio, al estar injustificado por los principios del derecho y los usos internacionales.²⁹

Líneas adelante agregó:

En el caso de México hay razones especialmente fuertes para una armonía perfecta en el ejercicio mutuo de la jurisdicción. La naturaleza nos ha hecho irrevocablemente vecinos, y la sabiduría y el sentimiento amable deben hacernos amigos.

El desbordamiento de capitales y empresas de los Estados Unidos es un factor potente para ayudar al desarrollo de los recursos de México y para aumentar la prosperidad de ambos países.

Para ayudar a esta buena obra deben eliminarse todos los motivos de aprehensión por la seguridad de la persona y la propiedad; Y confío en que, en aras de una buena vecindad, el estatuto aludido se modifique de tal manera que se eliminen las posibilidades actuales de peligro para la paz de los dos países.³⁰

Como haya sido, por un lado, las resoluciones de los gobernantes mexicanos se dieron con mano fuerte y decidida; por el otro, la del gobierno federal mexicano, que no se amilanó, siguió con destreza su política de no cejar ante las amenazas.

El secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores mexicano trabajaron intensamente. Lo mismo ocurrió con las legaciones de uno y otro país acreditadas en México y Washington.³¹

²⁹ *Ibidem*, p. 188.

³⁰ *Ibidem*, p. 187.

³¹ Cabe recordar que México carecía de embajada en Estados Unidos; se logró hasta 1898 con Matías Romero.

Con respecto al cónsul, señor J. Harvey Brigham, cabe recordar que en la función de todo cónsul se encuentra vigilar que se cumplan las leyes a favor de sus connacionales; por ejemplo, que se respete al detenido, que se le otorgue el derecho a contar con un defensor, procurar su salud, en la medida de lo posible buscar su libertad, etcétera. Pero no puede desconocer la autoridad del juez ni aconsejar al detenido que sacrifique su libertad para lograr otros intereses políticos.

También se involucraron una gran cantidad de funcionarios, incluidos los del estado de Chihuahua, cuyo presidente del Supremo Tribunal de Justicia viajó a Paso del Norte para inspeccionar el asunto —aunque carezco de los datos que observó—. Hasta el Ayuntamiento municipal fue involucrado, pues se logró que durante la detención se le proporcionara una mejor alimentación, alojamiento y comodidad al preso.

Pero de todos los participantes, hay que destacar al juez del caso: licenciado Miguel Zubía. Examinando el proceso y la sentencia, Zubía fue respetuoso de la ley, aceptó la competencia internacional que el caso le atribuía, dio inicio al proceso, ordenó la prisión como medida cautelar, siguió cada paso del procedimiento; a pesar del rechazo de Cutting a su poder jurisdiccional, le designó defensor, le dio derecho a la libertad caucional y le admitió el recurso de apelación. Fue, como lo expresó el profesor José Luis Vallarta Marrón, prudente; algo digno de ser reconocido. La sentencia del juez fue larga y detallada —al menos al compararla con otras de la época—. Y me gustaría destacar un apartado de su sentencia en la que asentó (se respeta la ortografía original):

Considerando, 7o.: Que según la regla de derecho *Judex non de legibus, sed secundum leges debet judicare*, no corresponde al juez que decreta examinar el principio asentado en el referido artículo 186, sino aplicarlo en toda su plenitud, por ser la ley vigente en el Estado.³²

Desgraciadamente, hasta ahora nadie le ha hecho un reconocimiento ni agradecimiento. En el Poder Judicial nadie lo cita ni lo recuerda, y entre los hombres destacados de México, Zubía no ha sido recordado; ni memoria del mismo existe. Y ¡vamos, que se merecía un reconocimiento, y lo merece aún!, pues nadie ha manifestado gratitud por su actuar.

Zubía manejó el asunto con gran inteligencia, no se dejó amilanar, condujo el proceso por el camino legal y produjo una sentencia, que fue la

³² Traducción: “el juez no debe juzgar las leyes, sino conforme a las leyes”. Seguramente el juez tuvo a su lado la obra de Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, *Pandectas hispano-megicanas*, en donde bajo el número 128 aparece esta expresión.

adecuada. No estoy seguro de que en lo personal conociera el terreno político y la responsabilidad internacional en la que se involucraba, pero a pesar de todo, realizó su mejor tarea como verdadero juez. Sin embargo, Zubía estuvo enterado, al menos en algunos detalles, de las actividades diplomáticas generadas entre los dos gobiernos —las alturas a que llegaron—; aunque tal vez no conoció de los alegatos y argumentos que se cruzaron entre los dos países. Digo lo anterior porque en su sentencia expresó (se respeta la ortografía original):

Considerando, 14o.: Que á mayor abundamiento, Cutting reconoció expresamente la jurisdicción de las autoridades de esta villa, compareciendo ante el Alcalde de 2o. turno de lo criminal y contestando la demanda conciliatoria que por difamacion interpuso en su contra el C. Medina.

Esto es, estaba consciente de que el debate político era la soberanía, el ejercicio de la jurisdicción, pues Zubía inserta un argumento relacionado con la competencia internacional. Como observa Ricardo Méndez-Silva:

El juez Miguel Zubía despachaba en una latitud distante y apartada, sin embargo, su sentencia es sólida y hace gala de grandes conocimientos. Tal vez conoció el alegato de México ante su contraparte en los escarceos diplomáticos, pero si ello fue así, de todas maneras no le resta mérito.

Paso del Norte era un pueblo pequeño al que el gobierno central no parecía darle importancia. Los del centro no parecían obligados a informar a los fronterizos lo que ocurría. Tal vez pensaron ¿para qué informarle a un juez de pueblo? Algo que aún ocurre en la actualidad, aunque los medios de comunicación soliviantan de alguna manera lo que acontece. Pero medios de comunicación como los actuales eran inexistentes por aquella época, lo más con lo que se contaba era con una oficina de telégrafos y un ferrocarril que tardaba varios días entre la ciudad de México y Paso del Norte.

Por desgracia, no hay, ni en Chihuahua ni en México, alguna nota o memoria que recuerde a Zubía —ni siquiera del Poder Judicial, al que perteneció, o de la Secretaría de Relaciones Exteriores—, para reconocer sus méritos en defensa de México.

VII. LA IMPORTANCIA DEL CASO

No hay que olvidar que el asunto debatido puso en tensión a los gobiernos de ambos países. Por un lado, la presión política, que algunos vieron como

el preludeo de una guerra; por otro, los problemas jurídicos, que en ese momento no estaban muy bien afinados en el ámbito del derecho internacional.

El *affaire* pareció centrarse en lo jurídico, aunque con una evidente carga política, sin que se hubiera hablado —en las discusiones diplomáticas— de preparativos militares. No obstante, no faltaron los temores ni reuniones de enemigos de México; sobre todo de quienes deseaban la expansión estadounidense y la inteligencia de México. Pero aun así, hay que resaltar que el presidente de cada país actuó con serenidad y entereza. Asimismo, los juristas más reconocidos fueron llamados a colaborar al lado de sus gobiernos, produciendo opiniones de interés. Incluso el gobierno de Estados Unidos ordenó un estudio sobre el caso, *Report on Extraterritorial Crime and the Cutting Case*, mismo que se reproduce en esta compilación.

El caso ha sido citado en varias fuentes generales;³³ a él han concurrido algunos juristas estadounidenses de derecho internacional público; se formó una obra especial, a cargo de Moore —un empleado del secretario de Estado—; y a los internacional privatistas les interesa el tema por referirse a la competencia judicial internacional, pese a que el asunto está ligado a lo penal.

Entonces, la importancia de los documentos compilados en este libro —resultado de este polémico caso— reside en el concepto de soberanía de cada país, así como en el ejercicio de la actividad jurisdiccional a cargo de cada uno y la forma en la que la perciben.

Los estudiosos del derecho internacional público y del privado están interesados en la temática, sin olvidar a los políticos y a los que manejan la teoría general del Estado.

Desde un enfoque jurídico no cabe olvidar el artículo 35 de la Ley de Extranjería de aquella época, que prescribía (se respeta la ortografía original):

Los extranjeros tienen la obligación de... obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que las leyes concedan a los mexicanos. Sólo pueden apelar a la vía diplomática en el caso de denegación de justicia ó retardo voluntario en su administración, después de agotar inútilmente los recursos comunes creados por las leyes, y de la manera que lo determine el derecho internacional.

Si Cutting se encontraba en territorio mexicano, lo menos que podía hacer era respetar las leyes mexicanas, entre otras, evitar injuriar a otro mexicano, que fue lo que no cumplió.

³³ *V. gr.*, Ruiz de Burton, María Amparo, *Conflicts of Interest. The Letter of Maria Amparo Ruiz de Burton*, University of Houston, 2001.

Pero además, si hubiera sentido que las autoridades mexicanas lo agredían, debió sujetarse a los procedimientos legales establecidos, “sin poder intentar otros recursos que las leyes concedan a los mexicanos”. Y si hubiera querido recurrir a la vía diplomática, sólo lo podría haber logrado de haberse concretado una “denegación de justicia o retardo voluntario en su administración”. Es decir, si hubiera optado por defenderse por la vía diplomática, eso lo podría haber hecho sólo “después de agotar inútilmente los recursos comunes creados por las leyes, y de la manera que lo determine el derecho internacional”.

Cutting no sufrió denegación de justicia, no hubo retardo en la administración de la misma y no agotó los recursos que la ley le otorgaba. Intentó de inmediato la protección diplomática del gobierno de Estados Unidos, rechazando la jurisdicción de los tribunales mexicanos.

Hubo quien estimó las acciones del gobierno mexicano como una defensa de México, sus leyes y autoridades; mientras que en Estados Unidos se le entendió como una defensa de sus compatriotas y de la soberanía de cada Estado de la comunidad internacional. Obviamente, la controversia presentó el fundamento de las pretensiones de cada país contendiente, en las que se escondían sus intereses políticos. Y de seguro, es en el ámbito político donde resuena más el interés por los documentos que se compilan en esta obra, puesto que, sorprendentemente, los enfoques político-partidistas aún son expresados en notas de prensa recientes.³⁴

Así pues, el problema generado se manifestó en las reclamaciones diplomáticas iniciadas prácticamente el mismo día en que Cutting fue encarcelado y fue ratificado el famoso telegrama del secretario de Estado de Estados Unidos. Con el agravante de que no se limitó a simples reclamaciones o protestas, sino a verdaderas presiones y “órdenes”, como la de exigir la inmediata libertad del detenido sin agotar recurso judicial alguno.

La reclamación diplomática se inició sin respetar la Ley de Extranjería mexicana, ya que no se agotaron los recursos internos establecidos en las leyes. En México, la cláusula Calvo, a que aludía el artículo 35 de la Ley de Extranjería ya mencionada y el artículo 33 de la Constitución de 1857 —vigente al momento del *affaire*—, impedían a los extranjeros acudir a la protección diplomática de su país, pues debían de obedecer y respetar las instituciones, las leyes y las autoridades mexicanas, sujetándose a los fallos y

³⁴ *V.gr.*, Vera, Ernesto, “La actual dictadura militar del imperio”, en *Arcano político*, 28 de enero de 2010, en: http://www.arcanorevista.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2572:la-actual-dictadura-militar-del-imperio&catid=93:guatemala&Itemid=102. Orozco, Víctor, “José Martí y Ciudad Juárez”, en *El Diario de El Paso*, 5 de mayo de 2010, en: http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=e166e222_8073c94027a6915a7742621b.

sentencias de sus tribunales, sin posibilidad de “intentar otros recursos, que los que las leyes conceden a los mexicanos”.

Dicha prescripción constitucional significa que otro Estado y sus súbditos deben de respetar las leyes mexicanas, a la vez que debe haber un trato de igualdad soberana, sin que en ello militen órdenes de otro gobierno al propio, ni que cada extranjero sea quien se juzgue a sí mismo, porque el país cuenta con instituciones especiales para ello.

Ya Castillo Velasco, en sus célebres *Apuntamientos*, anteriores a este *affaire*, anotaba que (se respeta la ortografía original):

...seria innecesario demostrar que [los extranjeros] deben obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, si no fuera porque muchos de los extranjeros que han venido á él se han querido juzgar superiores á las leyes y á los hombres de esta República, que aparecía débil y atrasada en la civilizacion porque no era bastante conocida; si no fuera porque esas absurdas pretensiones han sido apoyadas por algunos de los representantes de sus gobiernos respectivos, hasta llegar á pretender que los fallos y sentencias de los tribunales no les fuesen obligatorios.

Abusos de esta especie y las consideraciones exageradas que gobiernos mexicanos tuvieron para con muchos extranjeros, juzgando con error á la República más débil de lo que puede ser en realidad, llegaron á ser tan frecuentes y á veces tan notables, que en el concepto popular se estimaba preferible la condicion de extranjero á la de mexicano.

El artículo constitucional que determina la condicion de los extranjeros, ha destruido el derecho de extranjería que se ha pretendido en otros tiempos fundar en la República para sustraerse á todo lo que pudiera ser gravoso para los intereses de algunos de los extranjeros y que especialmente se hacía valer en cuestiones relativas á la administracion pública, y en particular á negocios de hacienda. No es éste el lugar propio para referir todas las pretensiones exageradas que se han manifestado en favor de extranjeros; pero hay ejemplos muy conocidos de ellos que justifican plenamente la disposicion constitucional que previene que los extranjeros no puedan “intentar otros recursos que los que las leyes conceden á los mexicanos.” Y aun sin el fundamento referido es justo el precepto constitucional, porque sería harto repugnante que los extraños fueran preferidos á los propios ó de mejor condicion que éstos.³⁵

Durante el procedimiento desencadenado por la reclamación diplomática estadounidense se presentó una gran variedad de argumentos y contraargumentos orientados a convencer —uno a otro— sobre un punto

³⁵ Castillo Velasco, José María del, *Apuntamientos para el estudio del derecho constitucional mexicano*, 3a. ed., México, Librería de Juan Valdez y Cueva, 1885, pp. 89 y 90.

de vista o tesis. Y aunque seguramente estaremos o no de acuerdo con algunos de ellos, fueron los que se presentaron.

Se debatieron varias cuestiones: si la ley nacional le otorga a los jueces mexicanos el poder para conocer y resolver ciertos asuntos —determinar la jurisdicción penal de los tribunales de cada Estado—; precisar hasta dónde la ley de un estado puede conocer de hechos ocurridos fuera del territorio estatal o, en su caso, reducirse a una *lex loci factum*; la posibilidad o imposibilidad del presidente de la República para inmiscuirse en las actividades del Poder Judicial de su Estado, etcétera.

También cabe destacar el inteligente manejo de la política internacional mexicana a cargo del presidente de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comparada con la seguida en Estados Unidos, que fue de abierta hostilidad y aversión a lo mexicano. El hecho es que si algún rencor pudiera haber existido en uno u otro lado, ese debió haber estado del lado de México, no de Estados Unidos, porque sí, en las negociaciones privó la rivalidad y el desacuerdo político —aunque disimulado, hábil y sutil—, sin embargo, la antipatía, animadversión y encono vino, más bien, y con mayor fuerza, de la prensa y de otros políticos estadounidenses.

Lo ocurrido contrasta con lo que después se llamó “política de buena vecindad” que inauguró el presidente Franklin D. Roosevelt, muchos años después y como preámbulo a la Segunda Guerra Mundial (1933). Pero en el momento del *affaire*, como se mencionó antes, predominó la arrogancia de Estados Unidos y se distinguió la inteligencia de México. Sin olvidar la insolencia, soberbia y desplante de Cutting.

Por último, vale la pena mencionar que en la argumentación mexicana destacaron los concienzudos y astutos planteamientos, apoyados en precedentes judiciales y leyes de todo el mundo —incluidos algunos de Estados Unidos—, de la doctrina de los juristas y del derecho comparado. La elegancia y gallardía de México sobresalieron. Como dice Manuel Becerra, el material compilado comprende diferentes lecturas: la exposición de la parte mexicana, la conjunción de una gran cantidad de juristas que participaron en los debates y publicaciones, y aún más, las exposiciones de Estados Unidos son también dignas de tomarse en cuenta, aunque varias no sean del agrado propio.

IX. PRENSA Y OPINIÓN PÚBLICA

Me detengo en la prensa estadounidense para destacar, en forma de listado, algunas de sus notas:

- Nueva York, agosto 10: Los de Mississippi forman sus tropas; se ha producido una muy importante conversación acerca de la guerra con México; hay movilización del ejército; se han inspeccionado las fuerzas del Fuerte Hamilton, lo que ya ocurrió con las del Fuerte Wodsworth (*sic*); al muelle ha sido llevado un cargamento de 10 carros con armas.
- Washington, misma fecha: El Departamento de Guerra declaró que las ramas del gobierno están en su preparación habitual para una acción ofensiva o defensiva; las actuales diferencias con México se encuentran en el área diplomática.
- El Paso, misma fecha: De momento todo está tranquilo; hubo un intercambio de expresiones entre autoridades municipales de cada lado; en ambos lados se mantienen oficiales de policía adicionales para cualquier acto de erupción; el momento de comenzar en Chihuahua no se ha dado a conocer; no se han recibido noticias de Washington; hay ansiedad; se esperan nuevos avances de cada capital.³⁶

En general, las notas estadounidenses mantienen en tensión al lector. Por otro lado, la prensa y opinión pública mexicana de la época le fue favorable al gobierno del general Porfirio Díaz; la de Estados Unidos apoyó a su presidente y se lanzó contra México con rabia.

Roberta Lajous resume con claridad la importancia del evento y su trascendencia:

De 1886 a 1888 el *caso Cutting* ocupó la atención de la prensa de ambos países convirtiéndose en un escándalo de nivel internacional. También originó una intensa actividad diplomática que involucró inclusive a los presidentes de ambos países. Pero lo más notable fue la movilización de la opinión pública. Hizo evidentes los prejuicios y distorsiones que en cada país se tenían respecto al vecino. En Texas la distancia cultural entre el mundo anglosajón y la población mexicana residente en ambas riberas del Bravo provocaron protestas en El Paso donde la prensa local se expresaba en forma peyorativa respecto de las autoridades mexicanas. *The New York Times* reflejó el clima de hostilidad al comentar que “la mejor prueba de que México no vale nada para ningún propósito nuestro es el hecho de que no hemos anexado ninguna parte de ese país desde el tratado que concluyó la guerra con México”. Si viniera la guerra, comentaba, los Estados Unidos podrían fácilmente destruir

³⁶ “Cutting’s case. It is still a topic of conversation”, en *Los Angeles Herald*, vol. 25, núm. 135, agosto de 1886, p. 1.

a México, pero como no tenían nada que ganar, podrían darse el lujo de ser magnánimos hacia ese país.³⁷

X. REPERCUSIÓN EN OTROS PAÍSES

En otros países el *affaire* no sólo fue recordado en su momento, sino que, en ocasiones, continúa sonando. El caso fue reseñado, e incluso se transcribieron documentos completos, en Francia³⁸ y en Perú,³⁹ mientras que en Cuba se le cita con frecuencia, aunque sin adentrarse en su contenido, porque, más bien, se hace con el fin de destacar a José Martí.

XI. LITERATURA PRODUCIDA

La literatura jurídica sobre el tema no sólo ha sido materia de la prensa de cada país, sino que también produjo una ligera literatura jurídica, desde ese momento y hasta la actualidad.

En México el caso fue presentado —muy sumariamente— en los trabajos jurídicos de Alberto G. Arce,⁴⁰ Luis Pérez Verdía⁴¹ y José Luis Siqueiros.⁴² Algunas obras posteriores han hablado tangencialmente sobre la cuestión,⁴³ pero ninguna ha profundizado analíticamente la temática debatida, y hay otras que no estuvieron en mis manos, pero que deben ser

³⁷ Lajous, Roberta, *op. cit.*, pp. 57 y ss.

³⁸ *Archives Diplomatiques 1887. Recueil mensuel international de diplomatie et d'histoire publiée sous la direction de M. Louis Renault*, professeur de droit des gens a la Faculté de Droit de Paris et à l'École Libre des Sciences Politiques, deuxième Série, tome XXI, Janvier, Février, mars. Paris, Féchoz, Libraire-éditeur.

³⁹ Hurtado Pozo, José, *Manual de derecho penal*, 2a. ed., Lima, Eddili, 1987; García, Juan Agustín, “Reclamación de los Estados Unidos contra México en el caso Cutting: proceder correcto de este gobierno; renovación de la discusión diplomática é insistencia del secretario Bayard; actitud del gobierno mexicano. Doctrinas de derecho internacional”, en *Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*, Perú, Imprenta de Coni Hermanos, t. IV, pp. 77 y ss.

⁴⁰ Arce, Alberto G., *Derecho internacional privado*, México, Universidad de Guadalajara, 1973, pp. 257 y 258.

⁴¹ Pérez Verdía, Luis, *Tratado elemental de derecho internacional privado*, Guadalajara, Tip. de la Escuela de Artes y Oficios del Estado, 1908, pp. 332 y ss.

⁴² Siqueiros, José Luis, “Los conflictos de leyes en el derecho penal”, en *El Foro*, julio-septiembre de 1969. Este estudio también se encuentra en la obra de Siqueiros y S. A. Bayitch, *Conflict of Laws: Mexico and the United States*, cap. XXII, Miami University Press, 1968.

⁴³ *V. gr.*, García Granados, Ricardo, *Historia de México desde la restauración de la República en 1867 hasta la caída de Huerta*. Editorial Jus, 1956, p. 265; Gil, Mario, *Nuestros buenos vecinos*, México, Azteca, 1964.

interesantes.⁴⁴ Una obra mexicana importante, a mi parecer, es la de José M. Gamboa, quien va atendiendo cada uno de los argumentos expresados en las notas diplomáticas.⁴⁵

No obstante, un trabajo de esa época que atendió el caso con mayor detalle político y jurídico fue el de Juan Agustín García —un profesor y diplomático argentino, comisionado en Estados Unidos, que tomó partido a favor de México y criticó al gobierno estadounidense—, especializado en las reclamaciones diplomáticas.⁴⁶

Sin embargo, en la bibliografía mexicana de fines del siglo XIX es sorprendente no encontrar citadas las publicaciones hechas en la célebre obra de Manuel Cruzado, puesto que la mayor parte de su memoria está dedicada al derecho internacional.⁴⁷ Y salvo la cita del caso, que con frecuencia se hace en Cuba, en México la literatura dejó de hablar del asunto, al menos durante el siglo XX. Raro y tangencial fue lo que se dijo.

XII. LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENE ESTA OBRA

Si bien la lectura, estudio y análisis de los documentos incluidos en esta compilación son apasionantes, de los mismos se pueden desprender varias lecturas y enfoques. El lector encontrará varias vetas o filones en los que hay que escarbar, especialmente cuando se introduzca en la investigación a partir de estas fuentes; razón especial de la publicación de estos documentos.

En realidad, aunque se ha hablado del caso, los documentos que hoy se publican habían permanecidos casi ocultos, a pesar de su importancia. Pienso que lo sustancial del caso está en sus fuentes, motivo por el cual me complace presentarlas.

Obtuve los documentos por casualidad. Los he ordenado y estimo que deben ser de gran interés tanto para el curioso y el investigador del derecho como para el historiador. Asimismo, espero que el lector no vea ni entienda fantasmas nacionalistas en los documentos que aquí se muestran, pues esta obra contiene las fuentes básicas de la época, que proporcionan una fotografía del problema jurídico, y se compone de:

⁴⁴ Por ejemplo, aparece en el catálogo del *Archivo Ignacio L. Vallarta y estudios diversos* la siguiente obra: “Estudio de fecha 3 de septiembre sobre el negocio Cutting hecho por el Lic. José López Portillo y Rojas”, publicado en *El Litigante* de Guadalajara, núm. 927, p. 2.

⁴⁵ Gamboa, José M., “El caso Cutting”, en *Revista Nacional de Letras y Ciencias*, México, Oficina de la Secretaría de Fomento, 1889, t. I, pp. 83 y ss.

⁴⁶ García, Juan Agustín, *op. cit.*

⁴⁷ Cruzado, Manuel, *Memoria para la bibliografía jurídica mexicana*, México, Antigua Imprenta de E. Murguía, 1894.

- a. La correspondencia diplomática sobre el caso del ciudadano de los Estados Unidos de América, A. K. Cutting, publicada en México por la Imprenta del Gobierno Federal en 1886 (primera parte).
- b. Las nuevas notas cambiadas entre la legación de los Estados Unidos de América y el ministerio de Relaciones Exteriores de la República Mexicana, publicadas por la Imprenta de Francisco Díaz de León en 1888 (segunda parte).
- c. El *Report on Extraterritorial Crime and the Cutting Case*, de 1887 (Cutting ya había sido liberado para esta fecha). Se trata de un estudio jurídico que el gobierno de Estados Unidos ordenó hacer sobre el caso.⁴⁸

Estos tres documentos no sólo son de importancia para la historia, sino también por la muy interesante exposición de opiniones y teorías jurídicas que contienen. El lector se regocijará con las espléndidas citas que hace cada uno de los gobiernos para mantener sus argumentos y contraargumentos. Tal pareciera que cada gobierno estaba en competencia para ver quién hacía más y mejores citas, o por fincar el argumento más convincente y razonable. Se trata de citas y argumentos sobre uno de los más interesantes problemas relacionados con la competencia internacional y el ejercicio de la soberanía de cada Estado. ¿Acaso cada Estado de la comunidad internacional es juez de su propia causa y ha de juzgarse conforme a sus propias leyes? ¿Hasta dónde un país es competente para juzgar los actos acaecidos en otro país?

En general, se advertirá que los sucesos se dividen en dos partes: la primera, el debate propiamente político en el que Estados Unidos exigió la liberación del señor Cutting, iniciado en 1886 y terminado con la liberación del preso; la segunda corresponde a diversos argumentos en torno a si un Estado puede sancionar delitos cometidos en otro país contra propios nacionales, iniciándose más de un año y medio después (1888), y donde Estados Unidos reclamó una indemnización y que se derogara la correspondiente ley penal mexicana que sancionaba a los que cometían delitos en el extranjero.

Además, es interesante saber que el contenido de la ley que Estados Unidos pedía se derogara existía en las leyes de otros países, e incluso en la de Nueva York, como lo hizo notar México en sus argumentos.

⁴⁸ Habría sido interesante haber obtenido y presentado una copia del expediente del caso. El hecho es que, según los datos que obtuve, tal expediente salió del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Bravos (en Ciudad Juárez) para ser destruido. En 1971, el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Mauro Antonio Rodríguez Leegi, ordenó que los expedientes anteriores a 1930 fueran incinerados para dejar lugar al archivo. De cualquier forma, en este volumen aparece la sentencia del juez mexicano.

Así pues, recapitulando, la primera parte del problema trata el caso de si un Estado es competente para juzgar los actos cometidos en otro Estado, incluido todo el *affaire* relacionado con la reclamación diplomática; la segunda va dirigida a reclamar indemnización para uno de sus súbditos y para pedir la derogación de una ley; finalmente, el tercer documento corresponde al *Report on Extraterritorial Crime and the Cutting Case*.

Hay otros varios documentos que complementan la correspondencia diplomática que se presenta, como el informe que rindió el presidente de Estados Unidos a su Congreso en 1888, impreso en junio de ese mismo año, y que hubiera resultado interesante acumularlo con los documentos de esta obra. No obstante, debo decir que, aunque el informe consta de más de cien páginas, la mayor parte del mismo corresponde al *Report on Extraterritorial Crime and the Cutting Case*, así como a otros documentos que en esta obra se encuentran traducidos.

Y para concluir, debo anotar que los ejemplares de estas tres partes han sido escritos de nuevo, pero se ha respetado la ortografía original. El tercer documento va en idioma inglés —salvo la sentencia mexicana que ahí se inserta— como copia fiel, también respetando la ortografía original. Esta deferencia hacia los textos originales es muestra de las políticas de publicación de documentos de gran importancia para México que sigue el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Lo que supone un respeto al “sabor” de la época.

Jorge Alberto SILVA

BIBLIOHEMEROGRAFÍA SOBRE EL CASO

Para los interesados, se agrega un pequeño listado bibliohemerográfico selectivo de las obras principales que han presentado el caso.⁴⁹

ARCE, Alberto G., *Derecho Internacional Privado*, México, Universidad de Guadalajara, 1973.

Archives Diplomatiques 1887. Recueil mensuel international de diplomatie et d'histoire publié sous la direction de M. Louis Renault, professeur de droit des gens a la Faculté de Droit de Paris et à l'École Libre des Sciences Politiques, deuxième Série, tome XXI, Janvier, Février, mars, Paris, Féchoz, Libraire-éditeur.

⁴⁹ Algunas de estas obras se obtuvieron en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

- Case of the American, A. K. Cutting. Latest notes exchanged between the legation of the United States of America and the minister of foreign relations of the Republic of Mexico*, Washington, D. C., Judd and Detweiler Printers, 1888.
- Caso del americano A. K. Cutting. Nuevas notas cambiadas entre la Legación de los Estados Unidos de América y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Mexicana*, México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1888.
- Correspondencia diplomática sobre el caso del ciudadano de los Estados Unidos de América, A. K. Cutting*, Imprenta del Gobierno Federal, México, 1886.
- CYBICHOWSKI, S., “La compétence des tribunaux á raison d’infractions commises hors du territoire”, *Recueil des cours*, 1926, II, t. 12.
- FERNANDES MORE, Rodrigo, *A efetividade das decisões judiciais nacionais em território estrangeiro*, disponible en: <http://www.buscalegis.cj.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/21783/21347>.
- GAMBOA, José, M., “El caso Cutting”, en *Revista nacional de letras y ciencias*, México, Oficina de la Secretaría de Fomento, t. I, 1889.
- GARCÍA, Juan Agustín, “Reclamación de los Estados Unidos contra México en el caso Cutting: proceder correcto de este gobierno; renovación de la discusión diplomática é insistencia del secretario Bayard; actitud del gobierno mexicano. Doctrinas de derecho internacional”, en *Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*, Perú, Imprenta de Coni Hermanos, t. IV.
- HURTADO POZO, José, *Manual de derecho penal*, 2a. ed., Lima, Eddili, 1987.
- KING, John Floyd, *Detention of A. K. Cutting in Mexico*, July 26, 1886. Referred to the Committee on Foreign Affairs and ordered to be printed, United States Congress House, Washington, D. C., s.n., 1886.
- LAJOUS, Roberta, “Las relaciones con Estados Unidos”, en *México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores*, México, Senado de la República, 1990, t. IV.
- MARGOLIES, Daniel S., *Spaces of Law in American Foreign Relations: Extradition and extraterritoriality in the borderland and beyond, 1877-1898*, Athens (Georgia), University of Georgia Press, 2011.
- MARISCAL, Ignacio, *The case of A. K. Cutting: views of the Mexican government in relation to it*, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Joseph Meredith Toner Collection (Library of Congress), Washington City (D. C.), W. J. Murtagh, 1886.
- MARTÍ, José, *Selected writings*, Penguin group, 2002.
- MURTAGH, W. J., *Law in the Cutting case: an able review collating all authorities on the subject*, Washington City (D. C.), 1887.

- _____, *The case of A. K. Cutting: views of the Mexican government in relation to it*, Mexico, Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Paper Relating to the Foreign Relations of the United States for the year 1887, transmitted to Congress, with a message of the president*, Government Printing Office, 1888.
- PALACIOS, Jesús M., *La prisión del americano A. K. Cutting en el Paso de Norte: estudio sobre el artículo 186 del Código Penal del Estado de Chihuahua*, Chihuahua, Imprenta Gómez del Campo, 1886.
- PÉREZ VERDÍA, Luis, *Tratado elemental de Derecho internacional privado*, Tip. de la Escuela de Artes y Oficios del Estado, Guadalajara, 1908.
- RUIZ DE BURTON, María Amparo, *Conflicts of interest. The letter of María Amparo Ruiz de Burton*, University of Houston, 2001.
- SARRACINO, Rodolfo, *Martí y el caso Cutting, ¿extraterritorialidad o intervencionismo?*, disponible en: <http://www.cubarte.cult.cu/paginas/actualidad/print/noticia.php?id=124865>.
- SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, *Correspondance diplomatique sur le cas du citoyen des États-Unis d'Amerique A. K. Cutting*, Mexico, Imprimerie du gouvernement fédéral, 1886.
- SIQUEIROS, José Luis, “Los conflictos de leyes en el derecho penal”, en *El Foro*, julio-septiembre, 1969.
- UNITED STATES. Congress. House Committee on Foreign Affairs, *Imprisonment of A. K. Cutting in Mexico. Message from the President of the United States, transmitting certain correspondence and documents relating to the arrest and imprisonment at Paso del Norte, by Mexican authorities, of A. K. Cutting, a citizen of the United States*, e-book, 1886.
- UNITED STATES. Department of State, *Report on extraterritorial crime and the Cutting case*, Washington, Gov't print off., 1887.
- UNITED STATES. Department of State, *Report on the alleged illegal detention of A. K. Cutting, by the Mexican authorities*, Wash., 1886.
- WITTICK, Ben, “Entrance to Barracks and Prison, Paso del Norte, Mexico. Prison in which A.K. Cutting was confined”, *Palace of the Governors Photo Archives, New Mexico History Museum*, Santa Fe, 1880-1890?

DOCUMENTOS DERIVADOS DE UNA RECLAMACIÓN
DIPLOMÁTICA DE ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA CONTRA MÉXICO
EL CASO CUTTING

PRIMERA PARTE

CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA

CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA

SOBRE EL CASO

DEL CIUDADANO DE LOS ESTADOS-UNIDOS

DE AMERICA

A. K. CUTTING



MÉXICO

IMPRESA DEL GOBIERNO FEDERAL, EN EL EX-ARZOBISPADO

Dirigida por Sobis A. y Mungula.

1886

SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES

SECCIÓN PRIMERA

Traducción

LEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

México, Julio de 1886.

SEÑOR:

He recibido una comunicacion oficial del Sr. J. Harvey Brigham, Cónsul de los Estados-Unidos en Paso del Norte, acompañando unas declaraciones juradas de varias personas en que aparece, que el día 23 de Junio último fué puesto en prision en esa ciudad por orden del Juez del Juzgado segundo, el Hon. Regino Castañeda, el Sr. A. K. Cutting, ciudadano respetable de los Estados-Unidos; que el lugar de su confinamiento es abominable y sucio; que está encerrado con ocho ó diez presos más puestos en la cárcel por varios delitos, en un cuarto de 18 piés de ancho por 40 de largo, con una sola puerta que se cierra de noche, quedando en todos respectos cubierto por no tener otro medio de ventilacion. El cuarto es sucio, malsano y tiene piso de tierra.

Dicen además las declaraciones, que el Sr. Cutting no solo puede dar amplia seguridad de las personas más ricas y caracterizadas de la ciudad de que se presentará para ser juzgado, sino que de hecho ha ofrecido una seguridad de esta clase y no le ha sido admitida; que por esta razon ha ocurrido al Cónsul de los Estados-Unidos en busca de proteccion, y Mr. Brigham se ha encargado de impartírsela por medio de una nota respetuosa dirigida al Juez, pero su intervencion solo ha obtenido el más desdeñoso silencio, y que Mr. Cutting ha sido retenido en la cárcel no obstante esa intervencion.

Aparece, además, de las declaraciones, que el único delito de que ha sido acusado Mr. Cutting, es la publicacion de un remitido á Emigdio Medina,

de Paso del Norte, en un periódico que se publica en El Paso, en el cual se hacen reflexiones sobre el carácter de este último.

No es mi objeto en la presente nota discutir la cuestion de si es ó no competente un tribunal mexicano para conocer de un delito cometido en territorio de Texas, ni emitir opinion sobre la controversia entre Mr. A. K. Cutting, por una parte, y el Sr. Emigdio Medina por la otra. Sé que estos puntos los ha sometido el Cónsul Mr. Brigham al Departamento de Estado en Washington. Mi objeto es solamente llamar la atencion de Vuestra Excelencia hácia el hecho de que un ciudadano americano de respetabilidad, acusado no de un grave crimen sino de actos que, aun en el caso de que fuera culpable, constituirian una falta de las más leves, está hoy sufriendo severísimo castigo antes de ser convicto y despues de ofrecer la mejor garantía de su presentacion para ser juzgado, y de que su salud y hasta su vida han sido puestas en peligro y continúan estándolo á pesar de los esfuerzos hechos en su favor por un representante oficial de su país. Aunque por el aspecto grave de esta cuestion deberia haber esperado instrucciones de mi Gobierno antes de dirigirme á Vuestra Excelencia sobre el asunto, lo hago, sin embargo, con el objeto de suplicar se imparta la proteccion debida al Sr. Cutting, á la mayor brevedad posible y por el conducto más violento y practicable.

Aprovecho la ocasion para renovar á Vuestra Excelencia la seguridad de mi muy distinguida consideracion.—Henry S. Jackson.—A su Excelencia Ignacio Mariscal, &c., &c., &c.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

México, Julio 7 de 1886.

SEÑOR MINISTRO

Tengo la honra de acusar recibo á Vuestra Excelencia de su nota fechada el 6 del presente, relativa á la prision en Paso del Norte del Sr. A. K. Cutting, y de manifestarle que, por acuerdo del Señor Presidente, con esta fecha me dirijo al Señor Gobernador del Estado de Chihuahua recomendándole cuide de que se administre pronta y cumplida justicia, aliviando la situacion material en que se encuentra Mr. Cutting, hasta donde lo permitan las leyes.

Prometiéndome comunicar á Vuestra Excelencia tan pronto como la reciba, la respuesta del mencionado Gobernador, me complazco en renovarle las seguridades de mi consideracion muy distinguida.—Ignacio Mariscal.—A su Excelencia Henry R. Jackson, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados-Unidos de América.

Traducción

LEGACION DE LOS ESTADOS-UNIDOS

México, Julio 19 de 1886.

SEÑOR:

Me apresuro á comunicar á Vuestra Excelencia el siguiente telegrama que acabo de recibir de Mr. Bayard, Secretario de Estado en Washington: “Se le ordena á vd. que exija al Gobierno mexicano la inmediata libertad de A. K. Cutting, ciudadano americano, hoy ilegalmente preso en Paso del Norte”.

Habiendo examinado mi correspondencia con el Gobierno de los Estados-Unidos, creo oportuno manifestar que el dia 8 del corriente, inmediatamente despues de haber recibido la estimable nota de Vuestra Excelencia del dia 7, remité copia de ella á Mr. Bayard, y en consecuencia debe haberla recibido antes del dia 19, fecha de su telegrama.

Al hacer esta peticion por conducto de Vuestra Excelencia, le renuevo la seguridad de mi muy distinguida consideracion.—Henry B. Jackson.—A su Excelencia Ignacio Mariscal, &c., &c., &c.

Traducción

LEGACION DE LOS ESTADOS-UNIDOS

México, Julio 21 de 1886.

SEÑOR:

Con fecha 19 del corriente tuve el honor de solicitar del Gobierno mexicano, por conducto de Vuestra Excelencia, la inmediata libertad de Mr. A. K. Cutting, ciudadano de los Estados Unidos, ilegalmente encarcelado en Paso

del Norte. Esta petición la hice por orden telegráfica recibida de mi Gobierno. Aunque ordené á Mr. Brigham, Cónsul de los Estados- Unidos en Paso del Norte, que me telegrafara el hecho de la libertad de Mr. Cutting, no he recibido ninguna noticia de él hasta la fecha.

Por estas razones temo que tal vez mi nota de 19 del corriente no haya llegado á manos de Vuestra Excelencia, aunque fué dirigida por el conducto ordinario.

Al llamar la atencion sobre este asunto, le renuevo la seguridad de mi muy distinguida consideracion.—Henry E. Jackson.—A su Excelencia Ignacio Mariscal.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

México, Julio 21 de 1880.

SEÑOR MINISTRO:

Hasta ayer tuve la honra de recibir la nota de V. E., fechada el día anterior, en la que inserta un telegrama del Secretario de Estado, Sr. Bayard, dirigido á que esa Legacion exija del Gobierno mexicano la inmediata libertad de A. K. Cutting, preso ilegalmente, segun lo dice ese mensaje, en Paso del Norte; y hoy acaba de llegar á mis manos otra nota de esta mañana en que V. E., no habiendo tenido noticia de que el preso haya salido de la cárcel, supone que no he recibido la primera de las citadas notas.

Tan luego como me impuse de ella, telegrafié al Sr. Gobernador de Chihuahua recomendándole de nuevo el asunto y pidiéndole se sirviera informarme sobre el estado que guardase. Aun no he recibido contestacion á ese telegrama hasta estas horas (2 de la tarde); y no debo extrañarlo en verdad, porque comprendo que dicho funcionario ha tenido que dirigirse al Tribunal Superior del Estado y el Tribunal al Juez de Paso del Norte. Demoras son estas, Sr. Ministro, inevitables en un país regido por instituciones como las nuestras, donde el Ejecutivo federal no puede comunicarse directamente con funcionarios locales de los Estados. Mucho menos podria darles órdenes; hacerlo así constituiria un verdadero atentado, especialmente tratándose de jueces independientes aun del poder administrativo del Estado á que pertenecen. Y ese atentado seria aun más escandaloso si se cometiera para dar fin atropellado y violento á un proceso legal promovido por una parte interesada, como entiendo que sucede en el caso de Mr. Cutting.

Estas consideraciones no pueden haberse ocultado á la ilustracion del Gobierno de V. E., supuesto que se refieren á la naturaleza de instituciones en el particular idénticas á las que rigen en los Estados-Unidos de América. Creo, por lo mismo, que solo la presion ocasionada por instancias de particulares, ó tal vez de una prensa mal informada, han podido dar por resultado que un Gobierno amigo de México y que hasta ahora no tiene queja contra esta nacion por falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales, exija de un modo absoluto lo que á todas luces es moralmente imposible. En el negocio de que se trata se ha hecho hasta ahora por este Gobierno cuanto cabe en la esfera de sus facultades, cuanto puede pedírsele reinando una paz amistosa entre los dos pueblos. Interpuesta, como ya lo ha sido, la influencia moral del Presidente de la República, para que en él se proceda con arreglo á justicia, debe confiadamente esperarse que terminará muy pronto de una manera satisfactoria.

Así lo infiero no solo de estas reflexiones, sino de la recomendacion hecha por el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, que verá V. E. en el anexo que tengo la honra de acompañarle, y cuyo original he recibido hoy mismo, habiéndoseme enviado á consecuencia de la comunicacion que dirigí sobre el asunto, con fecha 7 del actual, al señor Gobernador de aquel Estado.

Me honro, con este motivo, en reiterar á V. E. las protestas de mi muy distinguida consideracion.—Ignacio Mariscal.—A su Excelencia Henry R. Jackson, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados-Unidos de América.

ANEXO

Un sello: República Mexicana.—Gobierno del Estado de Chihuahua.—Seccion 2a.—Ramo de Justicia.—Núm. 1,339.

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en oficio núm. 733, de 14 del que cursa, dice á este Gobierno:

“Impuesto el Supremo Tribunal de Justicia que tengo el honor de presidir, de su atenta nota núm. 279, fecha 12 del actual, en la que se sirve transcribir la que le dirigió el Secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores, en que se recomienda se atienda en justicia al Sr. A. K. Cutting en la prision á que se le tiene reducido y de la cual se queja; con esta fecha el mismo Supremo Tribunal acordó lo que copio:

“Sin perjuicio de que el Juez 2o. de Bravos administre pronta y cumplida justicia en el asunto á que se refiere el Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores en el oficio que transcribe el Ejecutivo del Estado, informe con justificacion el expresado Juez 2o. en el término de tres dias y por conducto del Letrado del Distrito, sobre los hechos que menciona dicha nota que original se le remitirá, recomendándole la aplicacion del artículo 260 del Código de Procedimientos penales”.

“Y me honro en comunicarlo á vd. para su conocimiento y en debida contestacion á su nota referida”.

Tengo la honra de insertarlo á vd. para su conocimiento y como resultado de su nota relativa de 7 del actual.

Libertad y Constitucion. Chihuahua, Julio 17 de 1886.—Félix Francisco Maceyra.—Al Secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores.—México.

Un sello: República Mexicana.—Gobierno del Estado de Chihuahua.—Seccion 2a.—Ramo de Justicia.—Núm. 1,390.

El presidente sustituto del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Miguel Aldaz, con fecha 24 del actual, dice á este Gobierno:

“Con fecha de ayer el Supremo Tribunal de Justicia, en despacho extraordinario, tuvo á bien acordar lo que copio:

“Habiéndose recibido por la vía telegráfica noticias y tambien comunicaciones del Ministro de Relaciones Exteriores, en que se recomienda la actividad, rectitud y justificacion en los procedimientos contra el americano A. K. Cutting, preso en Paso del Norte por el delito de difamacion, el Supremo Tribunal, considerando grave el caso de que se trata, dispuso: que por el tren de esta tarde pase á aquel lugar el presidente de esta corporacion, Lic. Francisco N. Ramos, acompañado del secretario de la 2a. Sala, C. Jesus O. Nájera, á fin de que con su presencia y autorizada intervencion evite cualquiera conflicto que pueda surgir en lo que se relacione con la recta administracion de justicia. El mismo Supremo Tribunal dispuso se comuniquen este acuerdo al Ejecutivo del Estado, para que, si lo tiene á bien, se sirva transcribirlo á la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República”.

“Y me honro de comunicarlo á ese de su digno cargo para su conocimiento y demas efectos que se indican”.

Tengo la honra de insertarlo á vd. para su conocimiento.

Libertad y Constitucion. Chihuahua, Julio 26 de 1886.—Félix Francisco Maceyra.—Al Secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores.—México.

TELEGRAMAS

Telegrama depositado en Paso del Norte el 23 de Julio de 1886.—Recibido en México el mismo día á las 9 horas 35 minutos de la noche.

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES:

Tribunal de Justicia de Chihuahua dispuso se pusiera Cutting en libertad bajo de fianza. Cutting rehusó darla, desconociendo de nuevo toda autoridad en el juez para juzgarle. Se ha mandado abrir una ventana en la sala en que está preso y que se le den cincuenta centavos diarios para su subsistencia, en lugar de diez que reciben los demas presos.

Emigdio Medina, contendiente de Cutting, se desordenó ayer bajo la influencia del licor; se cruzó algunas palabras con el Cónsul americano y fué puesto en la cárcel en Paso del Norte. Nota y periódicos por correo.—J. Escobar y Armendáriz, Cónsul.

Telegrama depositado en Chihuahua el 27 de Julio de 1886.—Recibido en México el mismo día, á las 8 horas 40 minutos de la noche.

SECRETARIO DE RELACIONES:

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia me dice de Paso del Norte lo siguiente:

“Me ocupo activamente en abreviar proceso Cutting. Hoy presentará Ministerio público su pedimento y se citará para debate. Sr. Rincon y yo visitamos al preso; las condiciones higiénicas de la prision han mejorado, y se ministran al reo buenos alimentos por cuenta del Ayuntamiento”.

Lo que comunico á vd. para su conocimiento.—Félix F. Maceyra.

Washington, Julio 27 de 1886.

SECRETARIO DE RELACIONES:

Ayer presentáronse proposiciones en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de los Estados-Unidos de América, pidiendo informes al Presidente de los Estados-Unidos sobre la cuestion de Cutting. El Se-

cretario de Estado preguntóme hoy en carta particular si podía anunciar su libertad realizada ó próxima; si esta es probable en un plazo corto, podría detener informe.—M. Romero.

México, Julio 28 de 1886.

MINISTRO MEXICANO. —Washington.

Tribunal Chihuahua activa procedimiento negocio Cutting. Resultado dependerá de su calificación legal.—Mariscal.

Washington, Julio de 1886.

SECRETARIO DE RELACIONES. —México.

Comuniqué hoy al Secretario de Estado mensaje de vd. de ayer. Manifestóse muy contrariado y dijome comunicaría asunto al Congreso de los Estados-Unidos.—M. Romero.

Washington, Agosto 4 de 1886.

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES. —MÉXICO.

Hoy cerró sesiones el Congreso de los Estados-Unidos sin que la Cámara de Diputados se ocupara de proposición sobre el asunto Cutting.—M. Romero.

Washington, Agosto 11 de 1886.

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES. —MÉXICO.

Recibido su telegrama de ayer. Vi hoy Secretario de Estado é hizo protesta de sentimientos amistosos para con México. Creo que no repetirá demanda libertad Cutting mientras se sentencie en segunda instancia.—M. Romero.

FRAGMENTO DEL INFORME DEL SECRETARIO BAYARD, ANEXO AL MENSAJE SOBRE EL CASO DE CUTTING

Traducción

Adjunta remito una copia del artículo 186 del Código mexicano, la cual fué entregada al que suscribe por el Sr. Romero en apoyo del derecho de México para conocer de delitos cometidos contra mexicanos en países extranjeros.

Este conflicto de leyes es más patente aún que la diferencia literal entre las instituciones correspondientes, porque él afecta los principios fundamentales de las garantías de libertad personal y libre discurso ó expresion, que se hallan entre los objetos principales que se ha querido lograr por medio de nuestro orden administrativo.

El presente caso puede establecer un precedente lleno de las consecuencias más graves.

El delito que se imputa podrá ser considerado en los Estados-Unidos, y sin duda lo es en el presente caso, como una falta de poca gravedad; pero en México puede tener por consecuencia castigos del carácter más grave. Una ley mexicana puede declarar delito de grado superior un hecho que en los Estados-Unidos no fuese castigado en manera alguna. La seguridad de nuestros ciudadanos y de todos los demas que legalmente se hallan dentro de nuestra jurisdiccion, seria grandemente perjudicada si no completamente destruida, si se permitiera que una potencia extranjera juzgase como delitos, aplicándoles penas, actos cometidos dentro de la jurisdiccion de los Estados-Unidos.

Los Estados-Unidos y los Estados que componen esta Union son los únicos en quienes reside la facultad de conocer de las infracciones á sus leyes; y conceder la jurisdiccion de México sobre el caso de Cutting, segun lo refiere el Cónsul Brigham en su informe, equivaldria á sustituir la jurisdiccion y leyes de México por las de los Estados-Unidos, sobre delitos cometidos únicamente dentro del territorio de dichos Estados por un ciudadano de los mismos.

El delito que se imputa es la publicacion hecha en Texas, por un ciudadano de los Estados-Unidos, de un artículo considerado infamante y criminal en México. No se hace el cargo de que Mr. Cutting lo circulara en México, y ciertamente no era practicable ni aun posible esa circulacion, porque el arresto se hizo sumariamente el mismo dia de la publicacion inglesa en Texas y á la llegada del pretendido escritor ó publicador á México.

La correspondencia que acompaña á la negativa del Sr. Mariscal de poner en libertad á Cutting, y que aparece en los anexos al despacho del Ministro Jackson, número 272, de 22 de Julio de 1886, hace ver que el artículo 186 del Código mexicano es el fundamento de la pretension jurisdiccional.

Conforme á esta pretension es obvio que cualquier editor ó redactor de cualquier artículo de periódico, dentro de los límites y jurisdiccion de los Estados-Unidos, podria ser arrestado y castigado en México, si tal artículo se considerase censurable por las autoridades de ese país, segun la manera mexicana de administrar justicia, y si tal redactor se encontrase dentro de los límites de México.

Aparte de la pretension del poder extraterritorial, así planteado por las leyes de México, que extienden su jurisdiccion á pretendidos delitos reconocidamente cometidos dentro de los límites de los Estados-Unidos, hay que considerar los procedimientos arbitrarios y opresivos que, contrastados con la medida constitucional que sirve de base en nuestro país, destruyen la base del juicio y procedimientos á que ha sido sujetado Mr. Cutting.

Respetuosamente presento la correspondencia y el caso segun aparece de los procedimientos mexicanos.—J. F. Bayard.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Washington, Agosto 2 de 1886.

SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES

México, Agosto 12 1886.

Me he enterado cuidadosamente de la nota de vd. número 885, fecha 24 del próximo pasado, en la que me da cuenta de la conferencia que tuvo ese dia con el Sr. Secretario Bayard sobre el caso de A. K. Cutting. Dijo vd. en ella que sólo conocia dicho caso por lo publicado en los periódicos de los Estados-Unidos y por algunos telegramas mios que no contenian detalles. Así era en efecto, pues no habia habido tiempo de comunicar á vd. la correspondencia cambiada sobre este asunto con la Legacion americana, ni era posible darle pormenores acerca de lo ocurrido ante el Juez de Paso del Norte, no habiéndose tenido completa noticia de ello en esta Secretaría (á la cual tampoco incumbía tenerla), sino hasta ahora que se ha pronunciado la sentencia, la

que, junto con las notas y demás datos sobre la materia, verá vd. publicada en el *Diario Oficial* de esta fecha.

Ha parecido conveniente hacer esta publicacion, para satisfacer la justa ansiedad del pueblo mexicano, una vez que la correspondencia de que se trata ha visto ya la luz en los periódicos de esa República. Por el contenido de la sentencia, principalmente, verá vd. que eran inexactas algunas afirmaciones del Sr. Bayard, debidas, sin duda alguna, á informes contrarios á la verdad que habria recibido de personas apasionadas. De este número son la de que el proceso se habia seguido de oficio y no á petición de parte, siendo así que comenzó y siguióse por acusacion formal del ofendido; y la de que no se le dejó nombrar abogado ó defensor, cuando nombró á los que le pareció bien, y llegando á faltarle dos por renuncia, sin que él quisiera nombrar otro, se le proveyó de un defensor de oficio. Sobre las quejas de que se le trataba mal en la prision, verá vd. en los telegramas publicados que el trato que en ella ha recibido, ha sido tan bueno como era posible y mucho mejor que el dado á los demas presos.

Con respecto á la cuestion jurisdiccional, ó sobre competencia del juez mexicano de Paso del Norte para juzgar á Cutting, que, al menos en su segundo acto de difamacion, delinquirió en Texas, es decir, en el extranjero, considero necesario hacer detenidamente algunas reflexiones. En este punto se fijó, segun parece, el cónsul Brigham, residente en la mencionada villa, y en él se ha fijado á no dudarle el señor Secretario Bayard, para considerar ilegal la prision de Cutting. De paso haré la observacion de que, aun cuando el cónsul opinara por la incompetencia del Tribunal, aun cuando á él le pareciese clara, no debió aconsejar al preso que se resistiera á declarar y á defenderse, segun se ha dicho que lo hizo; eso era aconsejarle la falta de respeto, la resistencia á la justicia. Tampoco tuvo razon para quejarse inmediatamente á su gobierno, ocasionando la excitacion y alarma que esto ha producido. Debíó en tal caso inspirar á Cutting que declinara la jurisdicción y facilitarle los medios de que probara la incompetencia del Tribunal, el que por lo ménos era competente para conocer de ese artículo; pues ya se sabe que lo es todo el que ejerce alguna autoridad judicial, para resolver sobre su propia jurisdicción cuando álguien la desconoce. La resolución sobre el punto de competencia hubiera sido apelable; y solo cuando, agotados los recursos legales, subsistiera una decision contraria á las convicciones profundas del Cónsul, podria este funcionario haberse imaginado que existia una injusticia notoria.

Volviendo á la cuestion apuntada sobre jurisdicción de un país para conocer, en ciertos casos determinados por la ley, de delitos cometidos en el extranjero, no debe extrañarse que haya oposicion entre el modo de ver de

legistas y personas ilustradas de ese país y el que prevaleció en la formación del Código Penal del Distrito Federal, vigente también en Chihuahua. Nuestro modo de resolver esa cuestión, que, antes de estar resuelta por una ley positiva, es simplemente de derecho internacional privado, se halla conforme con los principios adoptados en la mayoría, y con la legislación que rige en gran número de naciones civilizadas; en casi todas las que han adoptado el sistema de la jurisprudencia romana, en contraposición al llamado derecho común (*common law*) de Inglaterra. Así lo reconoce una autoridad americana, Wheaton, con estas palabras: “By the common law of England, which has been adopted in this point in the United States, criminal offences are considered altogether local, and are justiciable only by the courts of that country where the offence is committed. But this principle is peculiar to the jurisprudence of Great Britain and the United States, and even in these two countries it has frequently been disregarded by the positive legislation of each” (Dana’s Wheaton, § 113).¹

Se ve, pues, que el principio absoluto de que los delitos nunca pueden castigarse sino en el país en que fueron cometidos, no está admitido por la generalidad de las naciones y pertenece solamente a la jurisprudencia de los países anglo-sajones, donde, no obstante su adopción, suele prescindirse de él en la legislación positiva. Todo esto enseña también un tratadista inglés, Phillimore, quien además observa que está sujeta a inconvenientes muy visibles (*conspicuous*) la doctrina del *common law*, especialmente en el caso de poblaciones fronterizas. (Phill. *International Law* vol. IV, § 985). El inconveniente que desde luego ocurre para las cercanías de una frontera, consiste en la facilidad de atravesarla para ir a ofender en otro territorio a la nación que momentáneamente se deja, o a sus súbditos, y volver a ella al instante burlándose del ofendido y de la justicia nacional. Tal sería para nosotros el resultado de declarar incompetentes a nuestros tribunales para conocer de los delitos cometidos en la nación vecina contra la nuestra o sus ciudadanos.

Los dos escritores antes citados confirman la preponderancia que existe en las opiniones de derecho público favorables a la jurisdicción extraterritorial para el castigo, en ciertos casos, de determinados delitos; y si bien se contraen a los que cometan fuera del país sus propios ciudadanos, Phillimore refiere que por la legislación francesa (luego veremos que

¹ Por el derecho común (*common law*) de Inglaterra, que ha sido adoptado en este punto en los Estados Unidos, los crímenes y delitos se consideran enteramente locales y son justiciables solamente por los tribunales del país donde se cometan. Pero este principio es peculiar de la jurisprudencia de la Gran Bretaña y los Estados Unidos, y aun en estos dos países con frecuencia se ha infringido por la legislación positiva de ambos.

tambien por la de otros varios países) es justiciable el extranjero que se encuentra en la nacion despues de haber delinquido fuera de ella contra la misma considerada en conjunto. El castigar al extranjero en ese caso depende del principio que se haya adoptado sobre competencia en general para ciertos delitos perpetrados en el exterior; pues no parece justo imponer pena al nacional por ellos y dejar impune al extranjero en iguales circunstancias. Tal es el juicio de Dana, el anotador de Wheaton, quien así se expresa: “The question whether a State shall punish a foreigner found within its limits for a crime previously committed abroad against that State or its subjects, also depends upon its system respecting punishing generally for crimes committed abroad. Great Britain and the United States, respecting strictly the principle of the territoriality of crime, leave them unpunished. France follows the analogy of its treatment of its own subjects under like circumstances” (Dana’s Wheaton, 8th. edit., note 77, § 120).²

Habiendo, pues, nosotros adoptado el sistema de castigar á nuestros propios nacionales por los delitos que cometan en el exterior, aun cuando sean contra extranjeros, natural era que dispusiésemos tambien el castigo del extranjero que en el exterior delinquiera contra nuestra República, ó contra un mexicano. Así, en efecto, lo dispuso el Código Penal, vigente en este punto en todo el país, por sus artículos desde el 184 al 187. En la edicion de ese Código hecha por el Lic. A. Medina y Ormaechea se lee en una nota lo siguiente: “La Comision hizo un serio estudio de esta materia y se resolvió á adoptar los principios generalmente admitidos, que son los que consignó en los artículos citados (del 184 al 189). No se le ocultó que Inglaterra y los Estados-Unidos solo castigan los delitos cometidos en su territorio; pero le pareció más conveniente y justo que se castiguen los cometidos en el extranjero contra la República y los que allí cometan los mexicanos contra mexicanos ó extranjeros, ó éstos contra mexicanos; porque en tales casos obra de lleno el principio en que se funda el derecho de castigar; esto es, la justicia unida á la utilidad”.

En los mismos Estados-Unidos no es tan constante y uniforme, como pudiera creerse, el no considerar punibles los delitos cometidos en el exterior. Ya hemos visto que, segun Wheaton, se olvida con frecuencia este principio en la legislacion positiva. El sabio jurisconsulto Edward Livingston

² La cuestion sobre si un Estado ha de castigar á un extranjero á quien se encuentre dentro de sus límites, por un delito cometido previamente en el exterior contra ese Estado ó sus súbditos, depende tambien de su sistema respecto al castigo en general por delitos cometidos fuera del país. La Gran Bretaña y los Estados-Unidos, respetando estrictamente el principio de la territorialidad de los delitos, los dejan impunes; Francia, por el contrario, sigue la analogía del tratamiento que da a sus propios subditos en iguales circunstancias.

propuso para el Código Penal de la Luisiana esta disposición: “Citizens or inhabitants of the State may be punished for acts committed out of the limits thereof, in those cases in which there is a special provision of law declaring that the act forbidden shall be an offence, although out of the State”. (*Obras de Livingston*, vol. II, § 18).³ Consta, asimismo, que en 1794 un tribunal de Pennsylvania encausó al gobernador francés de La Guadalupe, que se encontraba accidentalmente en los Estados-Unidos, por haber capturado un buque, sin facultades, fuera de los mares del último país, y esto sin que hubiera ley expresa (como la tenemos nosotros) que lo autorizase para juzgar á un extranjero por algunos hechos ocurridos en el exterior. A la verdad, no aparece que se discutiera entonces la competencia del tribunal, no obstante que hubo queja del Ministro de Francia; pero como ese tribunal debió examinar ante todo si tenía jurisdicción para tales procedimientos, y como el Procurador general Bradford no hizo observacion alguna sobre el particular (*Opinions of Attorneys General*, vol. I, pág. 45), esto prueba cuando menos que es muy natural la creencia en la justicia con que se castiga un hecho ocurrido en el extranjero, sea cual fuere la nacionalidad de su autor, siempre que ataca los intereses del país ó de los ciudadanos del país, donde luego se encuentra el que lo haya ejecutado. Tan claro así es el fundamento en que descansa nuestra legislación criminal sobre este asunto.

Por ella no se castigan los delitos cometidos en el exterior por un extranjero, sino cuando ofenden á México ó á un mexicano. “No society takes concern in any crime but what is hurtful to itself”, como ha dicho Lord Kames (*Kames on Equity*, B. 3, ch. 8, § 19).⁴ Una circunstancia más exige nuestro Código, y en ella hay que admirar la prudencia del legislador, que de esa manera concilia el respeto á estos dos principios: “No hay delito donde no hay infracción de una ley”, y “La ley que expide un soberano no obliga á los que no son sus súbditos, sino en su territorio”. Redujese nuestra legislación, de ese modo, á uno de los temperamentos que han adoptado las naciones modernas, segun observa Fiore (*Droit Internat. Privé*, cap. 59), evitando en la cuestion los dos extremos opuestos. La circunstancia á que aludo, es la que así expresa dicho Código: “Que la infracción de que se le acusa (al mexicano ó extranjero) tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República” (art. 186, frac. IV).

A las autoridades americanas que he citado para probar que aun en los Estados-Unidos (no obstante decirse que han adoptado el principio del

³ Los ciudadanos ó habitantes del Estado pueden ser castigados por actos ejecutados fuera de los límites del mismo, en aquellos casos en que, por disposición especial de la ley, se declare que el acto prohibido constituye delito aunque se ejecute fuera del Estado.

⁴ Ninguna sociedad se interesa en un delito sino cuando es perjudicial á ella misma.

common law este punto, como doctrina de derecho público ó internacional, es algunas veces controvertible, debo agregar todo lo que enseña Story en su *Conflicto de Leyes*, cap. XVI, y especialmente lo que dice su adicionador Redfield (6a. edicion de dicha obra, § 625, b) refiriéndose á una decision pronunciada en el Estado de Nueva-York. Así se expresa terminantemente: “Although the penal laws of every country are in their nature local, yet an offence may be committed in one sovereignty in violation of the laws of another, and if the offender be afterwards found in the latter state, he may be punished according to the laws thereof, and the fact that he owes allegiance to another sovereignty, is no bar to the indictment”.⁵

Ahora bien; nuestra legislacion, y singularmente el artículo 186 de nuestro Código Penal, en cuanto á castigar algunos delitos de extranjeros, cometidos fuera del país, están de acuerdo no solo con las más respetables doctrinas de derecho internacional privado (de Foelix, Voet, Boehmer, Martens, Saalfeld y Pinheiro Ferreira, á quienes se agrega Fiore por sus tesis generales), sino tambien con la legislacion positiva de varias naciones que merecen profundo respeto en semejante materia, como son Francia y Austria, donde se castigan esos delitos si han sido contra la nacion; Prusia, donde se castigan todos ellos, conforme á la ley del país en que fueron cometidos; Baviera y Noruega, sin esa especialidad y sin los requisitos y circunstancias exigidos por nuestro Código. Encontrará vd. esto demostrado en el estudio del caso de Cutting, dado á luz por un inteligente juez de esta capital en el número de *El Foro* que le remito por separado.

Es claro, pues, que nuestros legisladores no solo ejercieron la libertad que tenian para definir el punto de derecho internacional á que me refiero, en un sentido ó en otro, por ser materia discutible, sino que adoptaron el extremo que cuenta con mayor número de votos entre las naciones civilizadas, y el que, además, correspondia al sistema de jurisprudencia observado en nuestra República.

Tomo este empeño en defender el art. 186 de nuestro Código Penal, hácia el cual llamé á vd. la atencion en un telegrama, como aplicable al caso de Cutting, no porque lo juzgue indispensable para probar la competencia de los tribunales mexicanos en este caso, pues, segun advertirá vd. en la sentencia que va como anexo de esta nota, el delito cometido en Texas por Cutting puede tambien tomarse, y

⁵ Aunque las leyes penales de todo país son por su naturaleza locales, sin embargo, puede cometerse un delito en una soberanía en violacion de las leyes de otra, y si el delincuente fuere encontrado despues en el territorio de la última, se le puede castigar conforme á las leyes de ésta, y la circunstancia de que él dependa de otra soberanía no es un impedimento para que sea procesado.

se toma fundamentalmente, como una continuacion del que habia cometido en Paso del Norte, donde luego vino á ponerle término circulando lo que publicó en El Paso. No ha sido ahora mi principal deseo sostener la justicia con que se ha reputado competente el tribunal, sino dar una contestacion á ciertas observaciones, muy respetables por venir del señor Secretario Bayard, en contra de nuestra legislacion penal, y defender el buen nombre de México, interesado en que no se crean sus leyes singulares y contrarias á los principios del derecho de gentes.

Con tal de que se hallen ajustadas á esos principios, como los entienden otras muchas naciones, claro está que los inconvenientes que de su aplicacion en nuestro país pudieran resultar á nuestros vecinos, no fundarian jamas un cargo contra nosotros. Si en México el modo de enjuiciar es diferente, si los procedimientos en el órden criminal son diversos de los que se observan en los Estados-Unidos, y si es posible que alguna vez la ley reprima en nuestra República lo que sea permitido en la otra, males son estos (suponiendo que merezcan este nombre), que no han de experimentarse únicamente por el americano que venga á México despues de haber ofendido (en el sentido de nuestras leyes) á este país ó á uno de sus ciudadanos; los resentirá asimismo el que llegue á nuestro territorio sin ese antecedente, siempre que no cuide, como debe cuidar todo extranjero, de averiguar cuáles son las principales diferencias entre la legislacion de su patria, que él conoce, y la nueva á que viene á sujetarse.

No son, por otra parte, tan graves los inconvenientes de esa natural diferencia entre ambas legislaciones; porque siempre ha de haber, en lo principal, semejanza entre las garantías concedidas á un acusado en México y las que se le otorgan en los Estados Unidos; semejanza que en ese punto se advierte entre las naciones civilizadas, y es mayor si se gobiernan con las mismas instituciones. En cuanto á la calificacion de algunos hechos como delitos, no parece que haya gran diversidad ú oposicion entre los dos países; y aun cuando la hubiese en lo futuro, nunca podrá ocasionar inconveniente alguno para los americanos, porque el artículo 186 de nuestro Código Penal, que ha provocado la observacion, no declara (segun ya se ha visto) punible el acto ejecutado por un extranjero en el exterior, sino cuando ese acto “tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República”. Tampoco hay notables diferencias entre las penas con que en una y otra nacion son castigados los delitos. La prueba de ello es que, en el caso de Cutting, por ejemplo, el máximo de la pena que pudo aplicársele conforme al artículo 646 de nuestro Código, es el mismo (con una leve diferencia en la multa) que se le hubiera podido aplicar conforme al artículo 617 del Código de Texas.

Creo, por lo mismo, que las observaciones hechas por el Sr. Bayard, en su mensaje al Congreso de los Estados-Unidos, apoyadas en los supuestos inconvenientes que he apuntado y que dicho señor teme resulten de nuestra legislación, han sido efecto de informes equivocados que habrá recibido con respecto á nuestro país.

Por lo demas, estoy convencido de su alta ilustracion y completa rectitud, manifiestas en la prudente conducta que ha observado despues de enterarse, por mi nota al señor Jackson, de que era imposible para nuestro Gobierno disponer el inmediato excarcelamiento de Cutting. Juzgo tambien muy sinceras las protestas que ha hecho á vd., con tal motivo, de su amistosa consideracion hacia México. Sincera y profunda es á su vez la que nosotros tenemos por el Gobierno de los Estados-Unidos, en cuya sabiduría y justificacion abrigamos plena confianza para esperar que, si en algun evento, mal informado, no percibe de pronto la razon que nos asista, no ha de negarse nunca á escucharla, y siempre que conozca toda la verdad sabrá hacernos justicia, reconociendo la disposicion en que nos hallamos, por sentimiento y conviccion acerca de nuestra mutua conveniencia, de consolidar las más cordiales relaciones entre los dos países.

Queda vd. autorizado para usar de esta nota en los términos que su prudencia le dictare y segun las circunstancias.

Reitero á vd. mi atenta consideracion.—Mariscal.—Señor Ministro de México en Washington.

ANEXO

Telegrama depositado en Chihuahua el 7 de Agosto de 1886.—Recibido en México el mismo dia, á las 7 horas 30 minutos de la noche.

SR. MARISCAL, SECRETARIO DE RELACIONES:

El Juez Zubia, en Paso del Norte, me dice lo siguiente: Tengo la honra de comunicar á vd. la sentencia pronunciada en el asunto Cutting, para conocimiento del Supremo Gobierno:

“Paso del Norte, Agosto seis de mil ochocientos ochenta y seis.

Vista la presente causa instruida contra A. K. Cutting, quien declaró ser soltero, de 40 años de edad, originario del Estado de Nueva-York, residente en esta villa y editor del periódico *El Centinela*, por delito de difamacion.

Vista la preparatoria del inculpado, el pedimento del representante del Ministerio público, lo expuesto por la parte civil C. Emigdio Medina, la exposicion del defensor C. Jesus E. Islas, y todo lo demas que del proceso consta y ver convino.

Resultando, 1o.: Que en el número 14 del periódico intitulado *El Centinela* que se publica en este lugar, correspondiente al 6 de Junio próximo pasado, apareció un párrafo de gaceta en inglés, en el que se critica de fraudulento un prospecto publicado en El Paso, Texas, anunciando la aparicion de un periódico intitulado *Revista Internacional*.

Resultando, 2o.: Que el C. Emigdio Medina considerándose aludido é injuriado en ese párrafo se presentó al alcalde segundo en turno de lo criminal en esta villa, promoviendo juicio de conciliacion en contra de A. K. Cutting, como editor responsable de *El Centinela*.

Resultando, 3o.: Que presentes las partes ante el Juez conciliador convinieron en publicar en el mismo periódico *El Centinela* una retractacion que fué redactada por Medina y corregida por Cutting, cuya publicacion debia hacerse por cuatro veces en inglés, y si lo permitia el Sr. A. N. Daguerre, editor tambien del periódico, seria publicada en español.

Resultando, 4o.: Que Cutting, léjos de cumplir lo estipulado en la conciliacion, publicó el veinte del mismo mes de Junio la retractacion solamente en inglés en *El Centinela*, en letra diminuta y con faltas sustanciales que la hacen casi ininteligible, publicando en la misma fecha un aviso ó remitido en el *The El Paso Sunday Herald*, en el que ratifica y amplia los conceptos difamatorios que publicó contra Medina y califica de indigno el acto de conciliacion que se verificó ante el alcalde segundo de esta villa.

Resultando, 5o.: Que el ofendido se presentó en forma acusando á Cutting por el delito de difamacion conforme á los artículos 643 y 646, fraccion segunda, del Código Penal, por cuyo motivo se libró la orden correspondiente de detencion.

Resultando, 6o.: Que en 22 del mismo mes la parte ofendida amplió la acusacion manifestando: que aunque el periódico *The El Paso Sunday Herald* se publica en Texas, Cutting lo hizo circular en gran número en esta poblacion y en el interior de la República, habiéndolo leído más de tres personas, por cuyo motivo se mandaron recoger los ejemplares que se encontraban en la oficina ó despacho del mismo Cutting.

Resultando, 7o.: Que dentro de los términos legales se tomó al inculpado su declaracion preparatoria en la que declinó la jurisdiccion del juzgado, por tratarse de un acto consumado en Texas, poniéndose bajo la proteccion del Cónsul de los Estados Unidos, y se decretó el auto de formal prision, habiéndose comunicado á quienes corresponde.

Resultando, 8o.: Que seguida la averiguacion por todos sus trámites, el inculpado insistió en su anterior respuesta, y al prevenirle nombrara defensor por haber renunciado el C. Lic. José María Barajas, se negó á hacerlo, nombrándose de oficio al C. A. N. Daguerre, socio del mismo Cutting en la redaccion de *El Centinela*; pero habiendo renunciado á su vez, recayó el nombramiento en el C. Jesus E. Islas, quien ha desempeñado el cargo hasta presentar su alegato de defensa.

Resultando, 9o.: Que en virtud de la conclusion del Ministerio público relativa á haber lugar á la acusacion, se puso de manifiesto el proceso en la secretaría por el término que señala el artículo 409 reformado del Código de Procedimientos penales, y vencido el término sin haberse opuesto excepcion alguna, se citó á las partes para el debate que se verificó el dia 5 del actual en la forma y términos prescritos por el mismo Código, terminando el acto con la citacion para sentencia.

Considerando, 1o.: Que conforme al artículo 121 del Código de Procedimientos penales, la base del procedimiento criminal es la comprobacion del hecho que la ley reputa delito; y en el presente caso, está plenamente comprobada la existencia de este hecho, puesto que lo constituye la publicacion que apareció en *El Centinela*, correspondiente al 6 de Junio próximo pasado, en la que se calificó de fraudulento el prospecto que se dió á luz para anunciar la publicacion de la *Revista Internacional*.

Considerando, 2o.: Que si bien es cierto que respecto de este hecho hubo un acto conciliatorio, que habria dejado satisfecha á la parte ofendida si se hubiere cumplido, tambien lo es que ese acto no llegó á cumplirse y, por lo mismo, quedó en pié la responsabilidad del delito.

Considerando, 3o.: Que la prueba de la falta de cumplimiento, del compromiso contraido en el juicio de conciliacion está precisamente en el remitido publicado por Cutting en el *The El Paso Sunday Herald*, en el que ratifica la original asercion de que Emigdio Medina es un defraudador y estafador, y á la vez en la publicacion hecha en *El Centinela* de la misma fecha, suprimiendo todas las mayúsculas y poniendo el nombre de Medina con letra microscópica, á fin de dificultar su lectura.

Considerando, 4o.: Que la ratificacion conforme al Diccionario de Escriche, es la confirmacion y aprobacion de la que hemos dicho ó hecho: Tiene retroactivo y por consiguiente no constituye un acto diverso de aquel á que se refiere: *ratihabitio retrotrahitur ad initium* ni nace de ella una nueva responsabilidad distinta de la que surgió al principio.

Considerando, 5o.: Que siendo esto así, la responsabilidad criminal de Cutting surgió de la publicacion hecha en *El Centinela* que ve la luz pública en esta villa, la cual fué ratificada en el periódico de Texas sin que esta

ratificacion constituyera un nuevo delito que deba ser castigado con una pena diversa de la que corresponde por la primera publicacion.

Considerando, 6o.: Que aun en el supuesto no concedido de que la difamacion procediera del remitido publicado con fecha 20 de Junio en el *The El Paso Sunday Herald*, el artículo 186 del Código penal mexicano previene “que los delitos cometidos en territorios extranjeros por un mexicano contra mexicanos ó contra extranjeros, ó por un extranjero contra mexicanos”, podrian ser castigados en la República y con arreglo á sus leyes si concurrieren los requisitos siguientes: 1o., que el acusado esté en la República ya sea porque haya venido espontáneamente ó ya porque se haya obtenido su extradicion: 2o., que si el ofendido fuere extranjero, haya queja de parte legítima: 3o., que el reo no haya sido juzgado definitivamente en el país en que delinquirió, ó que si lo fué no haya sido absuelto, amnistiado ó indultado: 4o., que la infraccion de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República: 5o., que con arreglo á las leyes de ésta, merezca una pena más grave que la de arresto mayor; requisitos que se han perfectamente llenado en el presente caso, supuesto que Cutting fue aprehendido en territorio de la República; hay queja de parte legítima ó sea del C. Medina, quien presentó su querrela en la forma prescrita por la ley; el reo no ha sido juzgado definitivamente, ni absuelto, amnistiado, ni indultado en el país en que delinquirió; el delito de que se acusa á Cutting tiene ese carácter en el país en que lo ejecutó y en la República, segun es de verse en el Código penal vigente en el Estado de Texas, artículos 616, 617, 618 y 619, y en el Código penal del Estado de Chihuahua, artículos 642 y 646; y segun este ultimo artículo en su fraccion segunda, la infraccion de que se trata merece pena más grave que la de arresto mayor.

Considerando, 7o.: Que segun la regla de derecho *Judex non de legibus, sed secundum leges debet judicare*, no corresponde al juez que decreta examinar el principio asentado en el referido artículo 186, sino aplicarlo en toda su plenitud, por ser la ley vigente en el Estado.

Considerando, 8o.: Que esta regla general no tiene más limitacion que la expresada en el artículo 126 de la Constitucion general, que dice: “Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella, y todos los tratados hechos ó que se hicieren por el Presidente de la República con la aprobacion del Congreso, serán la ley suprema de toda la Union. Los jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion, leyes y tratados, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados”.

Considerando, 9o.: Que el repetido artículo 186 del Código penal, léjos de ser contrario á la ley suprema ó á los tratados hechos por el Presidente de

la República, ha tenido por objeto, segun es de verse en la parte expositiva del mismo Código, página 38, “que obre de lleno el principio en que se funda el derecho de castigar, esto es, la justicia unida á la utilidad”.

Considerando, 10o.: Que aun suponiendo sin conceder que el delito de difamacion se hubiere ejecutado en territorio de Texas, la circunstancia en que tuvo en esta villa el periódico *The El Paso Sunday Herald*, de la que se quejó el C. Medina, motivando el decreto en que se mandaron recoger los ejemplares existentes en la oficina de Cutting, situada en esta misma villa, constituye propiamente la consumacion del delito, conforme al art. 644 del Código penal.

Considerando, 11o.: Que segun el artículo 79 reformado de la Constitucion general, los delitos que se cometen por medio de la imprenta deben ser juzgados por los tribunales competentes de la Federacion ó de los Estados, conforme á su legislacion penal.

Considerando, 12o.: Que la publicacion hecha por Cutting en El Centinela, ratificada despues en el *The El Paso Sunday Herald* y en el *The Evening Tribune*, que obran en el proceso, ataca la vida privada del C. Emigdio Medina al atribuirle el delito de fraude y estafa, y por lo mismo está comprendida en la taxativa puesta á la libertad de imprenta por el artículo constitucional citado.

Considerando, 13o.: Que tratándose de hechos consumados en el territorio del Cantón Bravos, perteneciente al Estado de Chihuahua, corresponde al Juez que suscribe juzgarlos conforme á la legislacion vigente en el mismo Estado, particularmente si se tiene en consideracion que el inculpado reside en esta villa, donde tiene su domicilio hace más de dos años, segun consta de las declaraciones visibles á fojas 20, 21 y 22 del proceso, afirmacion que no ha sido contradicha por Cutting, quien declara á fojas 19 que reside en ambos lados, esto es, en Paso del Norte, México, y en El Paso, Texas, sin residencia fija en ninguno de los dos lados.

Considerando, 14o.: Que á mayor ablandamiento, Cutting reconoció expresamente la jurisdiccion de las autoridades de esta villa, compareciendo ante el Alcalde de 29 turno de lo criminal y contestando la demanda conciliatoria que por difamacion interpuso en su contra el C. Medina.

Considerando, 15o.: Que la responsabilidad de Cutting está plenamente probada, puesto que aparece consignada en documentos fehacientes que de ninguna manera han sido contradichos por su autor; y si alguna duda hubiere respecto de la intencion dolosa con que se hizo la primera publicacion, desaparecería en vista de las ratificaciones posteriores hechas en el *The El Paso Sunday Herald* y en el *The Evening Tribune*, en las que Cutting expresa textualmente que Emigdio Medina es un defraudador, estafador,

cobarde y ladrón; quedando así llenados los requisitos que señala el artículo 391 del Código de Procedimientos penales.

Considerando, 16o.: Que para graduar la pena que deba aplicarse, hay que tener presente, que aunque el hecho que se imputa al ofendido le causa deshonra y perjuicio grave y no existen circunstancias atenuantes, se trata de un delito de carácter privado entre dos editores, en el que solo han concurrido las circunstancias agravantes á que se refieren las fracciones séptima y undécima del artículo 44 y los artículos 656 y 657, fracción cuarta, del Código Penal: no apareciendo plenamente justificadas las demás que menciona el Ministerio público, pues si bien es cierto que el presente caso ha producido grande alarma á la sociedad, esto no ha provenido del delito que se imputa á Cutting, sino de las medidas inadecuadas que se han tomado para su defensa: siendo en consecuencia de perfecta aplicacion la parte final del artículo 66 del Código citado; y,

Considerando, finalmente, 17o: Que el responsable de un delito, lo es de sus consecuencias, quedando obligado á la indemnizacion civil en los términos que se disponen en los artículos 326 y 327 del Código Penal.

Con apoyo de las disposiciones citadas y de los artículos 646, fracción segunda, 661, 119 y 218 del mismo Código, se resuelve con las proposiciones siguientes:

Primera: por el delito de difamacion cometido en la persona del C. Emigdio Medina, se condena á A. K. Cutting á sufrir un año de servicios públicos y á pagar la multa de 600 pesos, ó en su defecto á cien días más de arresto.

Segunda: se le condena igualmente á la indemnizacion civil, que se fijará como lo dispone el artículo 313 del Código Penal.

Tercera: amonéstese al reo, para que no reincida en el delito por el cual se le condena, advirtiéndole las penas á que se expone.

Cuarta: esta sentencia se publicará en los términos que previene el artículo 661 del propio Código.

Quinta: remítase esta causa al Supremo Tribunal de Justicia, para los efectos á que se contrae la parte final del pedimento del agente del Ministerio público, relativa á la intervencion que ha tenido el Cónsul americano en este proceso.

Sexta: notifíquese á las partes y adviértase al reo el término que tiene para apelar de esta sentencia.

El C. Lic. Miguel Zubia, Juez letrado del Distrito Bravos, fallando en definitiva, así lo proveyó con testigos.—Miguel Zubia.—A., L. Flores.—A., S. Vargas.

Lo comunico á vd. para su conocimiento.—Félix Francisco Maceyra.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

SECCIÓN PRIMERA

México, Agosto 13 de 1886.

En mi nota número 977, fecha de ayer, anuncié á vd. que le enviaria un estudio publicado por el Juez de esta capital, Lic. D. José M. Gamboa, sobre el caso de Cutting. Hoy lo remito en el ejemplar adjunto (anexo número 2) de *El Foro*, periódico destinado á las materias jurídicas. Al hacerlo así, y reconociendo el mérito de ese estudio, no puedo ménos de agregar por mi parte algunas explicaciones á lo que en él se asienta con respecto á legislaciones de otros países, como más ó ménos semejante á lo prevenido en el artículo 186 de nuestro Código Penal.

La legislacion de Francia, en el punto de castigar á extranjeros encontrados en el país despues de cometer un delito fuera de su territorio, es aun casi la misma contenida en el Código de instruccion criminal de 1808. La ley de 3 de Julio de 1866 introdujo algunas modificaciones solamente en lo relativo á crímenes y delitos cometidos en el exterior por franceses.

Ahora debo hacer objeto de una mencion detenida un hecho importantísimo para comprender el mérito de nuestro citado artículo 186. El hecho á que aludo consiste en que ese artículo concuerda, en todos sus puntos esenciales, con lo que previene el último Código Penal formado en Italia: lo cual es en alto grado honroso para los jurisconsultos que seis años antes habian redactado el nuestro. Esa honra se funda, no solo en que Italia es una nacion sobremanera adelantada en la ciencia jurídica, cuna del derecho romano y donde siempre han descollado juristas de gran mérito; se funda, además, en circunstancias especiales que relataré en seguida. El Código á que me refiero, fué presentado á la Cámara de Diputados de aquel Reino por el eminente profesor de derecho y estadista Sr. P. S. Mancini, Ministro entonces de Justicia y presidente de la comision que dió su última forma al proyecto. En la exposicion de sus fundamentos, el Sr. Mancini, despues de referir las numerosas comisiones y cuerpos científicos, ó del Estado, que lo revisaron sucesivamente, se expresa de este modo:

En adelante no habrá en Italia quien pueda aspirar al mérito de llamarse autor del Código Penal. Fruto de tres lustros de meditaciones y estudios incansantes, es obra colectiva de los más fieles y autorizados depositarios de las

tradiciones de la escuela italiana, de los más competentes representantes de la ciencia jurídica y de las ciencias médico-legales, de la experiencia práctica de la Magistratura y del Foro de Italia, de las más selectas inteligencias del país. Bien puede llamarse una obra nacional.

Ahora bien; este código, cuyo libro I, hasta el artículo 119, fué aprobado por la referida Cámara en 1877, contiene las siguientes disposiciones, que literalmente traduzco:

Art. 5o. Será juzgado y sentenciado segun las leyes del Reino, el ciudadano ó extranjero que cometa en territorio extranjero un crimen contra la seguridad del Estado; ó el crimen de falsificar moneda que tenga curso legal en el Reino, ó de falsificacion del sello ó de los títulos de la deuda pública del Estado, ó de documentos de crédito público.

Art. 6o. (Se refiere á otros crímenes y delitos de italianos en el exterior).

Art. 7o. Los crímenes ó delitos cometidos en territorio extranjero, fuera de los casos expresados en el artículo 59, por un extranjero en perjuicio de un ciudadano ó del Estado italiano, y castigados tanto por las leyes del Reino como por las del Estado donde se cometan, cuando el culpable haya venido de cualquier modo al Estado, y tratándose de delitos en que haya queja de la parte agraviada, podrán ser juzgados por los tribunales del Reino con aplicacion de la ley más suave.

Art. 8o. Las disposiciones de los artículos 69 y 79 no se aplican:

1o. Cuando segun una ú otra ley la accion penal se ha extinguido.

2o. Cuando se trate de delitos por los cuales, segun el párrafo 29 del artículo 99, no sea permitida la extradicion (delitos políticos ó relacionados con ellos).

3o. Cuando el prevenido, acusado en país extranjero, haya sido absuelto, ó si fué condenado, haya sufrido la pena, ó ésta se haya extinguido; si no ha sufrido enteramente la pena, podrá renovarse el juicio por los tribunales del Reino, teniéndose en cuenta la parte de pena ya sufrida.

Basta con estas citas para comprender que, salva la disposicion de aplicar la pena menor entre las prescritas por ambas legislaciones, y la excepcion de los delitos meramente políticos, el artículo 59 del Código italiano es sustancialmente el 185 del nuestro, y el 79 es el 186 de que tanto se ha hablado con motivo del caso de Cutting. Hay otra diferencia, y se reduce á que el Código mexicano exige, en su fraccion 5a., que la infraccion de que se acuse al extranjero, merezca una pena más grave que el arresto mayor, mientras que el de Italia no limita su prevencion de esa manera. La disposicion general de nuestro artículo y cuatro de sus cinco requisitos se encuentran reproducidos en el que dejo citado: coincidencia muy notable

en materia como esta, en que una nacion puede escoger libremente, sin merecer por ello censura, uno ú otro temperamento entre doctrinas rivales, atendiendo á la territorialidad, la personalidad ó la accion extraterritorial de las penas.

Veamos ahora, aunque sea muy brevemente, los fundamentos que el Sr. Mancini alega en favor de lo prevenido en el artículo 7o. del Código Penal italiano:

Examiné (dice) la materia con la guía de los sanos y generalmente admitidos principios del Derecho Internacional. El primero y fundamental entre ellos, es el de la recíproca independencia de las naciones y de las soberanías políticas que en ellas imperan. Este principio confía la tutela del orden público en todo país, exclusivamente á la accion del Gobierno nacional, excluyendo con celoso cuidado toda ingerencia de Gobierno extranjero. Es difícil conciliar con este concepto, el que atribuye á otra soberanía, sin especial título jurídico, una jurisdiccion promiscua para reprimir las infracciones del orden público, ocurridas en país extranjero, cuando los infractores no son ciudadanos del país que castiga.

Es, sin embargo, necesario buscar un título especial, que ponga en movimiento en determinados casos la jurisdiccion penal en un Estado por delitos cometidos en el exterior, y este título no podrá ser el mismo por delitos que cometan nuestros nacionales y los que cometa un extranjero.

Además, en todos estos casos no se deben confundir la autoridad del legislador y la competencia jurisdiccional del juez.

Demuestra en seguida el Sr. Mancini, que el origen de la jurisdiccion de un país para castigar á uno de sus nacionales, cuando delinca en el exterior y vuelva á su territorio, no es solamente el estatuto personal, sino tambien la conveniencia ó utilidad pública, y despues de diversas consideraciones agrega:

En la otra hipótesis, la de que el delincuente en el exterior sea un extranjero, siempre que su infraccion perjudique á uno de nuestros connacionales, ó en general al Estado y á la Administracion italiana, y que además el hecho sea delito en ambas naciones, se comprende igualmente que el interes del castigo, por la incolumidad del orden social, pertenezca á entrambas sociedades, y de aquí se deriva en ellas una legítima promiscuidad, tanto en el ejercicio de la autoridad legislativa como en la jurisdiccion de los tribunales, aunque con el mismo orden de prevencion y preferencia.

No prolongaré mis citas, siendo mi objeto únicamente llamar la atencion de vd. á lo expuesto por el Sr. Mancini, pues con su autoridad

y razones se demuestra que nuestro artículo 186 no es contrario á los buenos principios de legislacion. Que tiene semejanza principalmente con lo dispuesto en el último Código Penal de Italia, como vd. lo ha dicho acertadamente al Sr. Bayard, lo demuestran las acotaciones hechas en la presente nota; y si bien es cierto que aun no está vigente dicho Código, eso ha sido por dificultades relativas á su segunda parte, que aun no se revisa por la Cámara de Diputados de aquel país, no por lo tocante al libro primero, el cual fué aprobado definitivamente en 1877, segun antes he referido. Nuestro artículo tiene tambien analogía con la legislacion de otras varias naciones europeas, en el punto general de castigar delitos cometidos en el exterior por extranjeros, cuando estos vienen en seguida al país, sujetándose de este modo á sus leyes. Así se ve en las citas de códigos extranjeros contenidas en el estudio del Sr. Gamboa. No es, por lo mismo, de creerse que pugne con el derecho internacional, por más que haya querido hacerse esta objecion en su contra.

Debo, por último, advertir, que aunque la legislacion de algunos Estados alemanes referidos por el Sr. Gamboa y á que aludo en mi citada nota, no es la que en ellos rige actualmente, por haberse sancionado en 1872 un Código Penal para todo el Imperio; ese nuevo Código tambien adoptó el sistema de extender la jurisdiccion criminal á infracciones de ley cometidas fuera del país, en ciertos casos, aun por extranjeros. Adjunto remito á vd. (anexo número 1) un apunte de las principales legislaciones que en diversas épocas han impuesto castigo á súbditos del Estado por delitos y crímenes perpetrados en el exterior, y de otras que los han declarado punibles aun siendo cometidos por extranjeros.

Reitero á vd. mi atenta consideracion.—Mariscal.—Señor Ministro de México.—Washington.

ANEXO NÚMERO 1

LEGISLACIONES QUE HAN IMPUESTO CASTIGO A LOS SUBDITOS DEL ESTADO POR DELITOS COMETIDOS EN EL EXTERIOR

Francia. Cód. inst. crim. y ley de 3 de Julio de 1866.

Austria. Cód. Pen. de 1872.

Italia. Cód. Pen. Sardo de 1859.

Bélgica. Ley de 30 de Octubre de 1836.

Portugal. Cód. Pen. de 1852.

Grecia. Cód. Pen. 1834.
Tslas Jónicas. Cód. Pen. de 1841.
Holanda. Cód. inst. crim.
Noruega, Cód. Pen. de 1842.
Rusia. Cód. Pen.
Baviera. Cód. Pen. de 1861.
Prusia. Cód. Pen. de 1851.
Wurtemberg. Cód. Pen. de 1839.
Sajonia. Cód. Pen. de 1838.
Baden. Cód. Pen. de 1845.
Oldemburgo. Cód. Pen. de 1814.
Brunswick. Cód. Pen. de 1840.
Hesse. Cód. Pen. de 1841.
Imperio Aleman. Cód. Pen. puesto en vigor por la ley de 15 de Mayo de 1872.

LEGISLACIONES QUE HAN DECLARADO PUNIBLES TODOS Ó ALGUNOS
DELITOS COMETIDOS EN EL EXTERIOR POR EXTRANJEROS
CUANDO ESTOS VAN Á SU TERRITORIO

Francia. Cód. inst. crim. y ley de 3 de Julio de 1866.
Austria. Cód. Pen.
Portugal. Cód. Pen.
Italia. Cód. Pen. de 1859 y libro 19, aprobado en 1877, del Código iniciado por el Sr. Mancini.
Bélgica. Cód. Pen.
Noruega. Cód. Pen.
Baviera. Cód. Pen.
Prusia. Cód. Pen.
Wurtemberg. Cód. Pen.
Sajonia. Cód. Pen.
Baden. Cód. Pen.
Oldemburgo. Cód. Pen.
Brunswick. Constitución, art. 205.
Hannover. Cód. Pen.
Imperio Aleman. Código Penal mandado observar por ley de 15 de Mayo de 1872.

ANEXO NÚMERO 2

El FORO

México 6 de agosto de 1886.

En el concierto con que la prensa toda ha expresado su unánime opinion sobre la justicia que en este asunto asiste á México, *El Foro* no ha dejado oír su voz porque quería hablar con perfecto conocimiento del caso, á fin de tratarlo como á la índole de nuestra publicación corresponde, desde un punto de vista netamente científico. Hoy que ha llegado á adquirir los mejores datos sobre el particular, tercia en la cuestion y tercia con positivo gusto, que mal papel haríamos como periodistas mexicanos, si no levantáramos la voz en favor de la Patria, tanto más cuanto que el caso cae dentro de las naturales fronteras de nuestro diario: se trata de una cuestion de derecho internacional privado.

Los hechos acaecidos, descartados de los que carecen de importancia en la cuestion, son bien sencillos.

El Sr. Medina fué ofendido por Mr. Cutting, en una publicacion que este dió á luz en Paso del Norte, y acudió ante el Juez local con su respectiva querrela. Tuvo lugar una conciliacion en que el asunto quedaba terminado mediante el formal ofrecimiento de Cutting de satisfacer á Medina en la misma publicacion que habia servido de órgano para difamarlo.

Así lo hizo en efecto, aunque empleando letra microscópica en la retractacion; pero á poco andar, pasó Cutting al Bravo y en El Paso (Texas) hizo insertar en el periódico *El Centinela* los mismos agravios y los mismos insultos de que se retractara ante el Juez de Paso del Norte, cuando tuvo verificativo el acto de la conciliacion.

Amantes de la claridad en las cuestiones, omitimos de intento engolfarnos en el difícil campo de la metafísica, y en consecuencia, no ligamos en manera alguna la conciliacion de que acaba de hablarse, originada por un delito cometido en México, con los agravios inferidos por medio de *El Centinela*; y para abordar la cuestion con todas sus aparentes dificultades, damos por concedido que ni la relacion más remota existe entre los dos apuntados hechos.

Partimos pues de los que pasaron en territorio americano y en los términos siguientes para dejar completamente clara y sencilla la cuestion: Un señor Cutting que no conocía siquiera á un señor Medina, atacó á éste por medio de *El Centinela*, periódico que se publica en El Paso (Texas) llevando sus ataques al grado de llamarle estafador, ó en otros términos, difamándole supuesto que segun el art. 642 del Código Penal mexicano,

“la difamacion consiste: en comunicar dolosamente á una ó más personas, la imputacion que se hace á otro de un hecho cierto ó falso, determinado ó indeterminado, que pueda causarle deshonra ó descrédito, ó exponerlo al desprecio de alguno”.

El Sr. Medina, que es mexicano y está radicado en Paso del Norte, ocurre al Juez de este lugar acusando á Mr. Cutting de difamacion; y como quiera que Cutting llega á Paso del Norte, el Juez mexicano le aprehende y encarcela.

Cutting, sin defenderse de ninguna manera ante el Juez que instruye el proceso, acude á Mr. Brigham, Cónsul americano en Paso del Norte, el cual Cónsul á su vez se dirige al Ministro de Estado en Washington, Mr. Bayard, quien dando oídos á la queja, inicia una reclamacion por la vía diplomática por medio del Ministro americano en México, Mr. Jackson.

Sentados estos hechos, vamos á dar respuesta á las cuestiones de derecho que de ellos surgen y son las siguientes:

¿Ha sido legal y conveniente la conducta de las autoridades del Estado de Chihuahua?

¿Está justificada la vía diplomática en el caso?



En los Estados-Unidos del Norte, como en México y como en toda nacion culta, entiéndese por juicio la legítima contienda de actor y reo ante juez competente; y de esta definicion resulta que es uno de los esenciales requisitos para que el juicio exista, la competencia del juez ante quien el debate se verifica. Por eso los juristas califican de cuestion previa ó prejudicial la que se refiere á la competencia del juez.

Para el caso que nos ocupa se confunde el significado de esa palabra competencia con el de la voz jurisdiccion. Verdades, que hay entre ellas radicales y profundas diferencias. “Es necesario —dicen unos famosos comentadores—⁶ no confundir la jurisdiccion con la competencia. Aquella es la potestad de que se hallan revestidos los jueces para administrar justicia: y la segunda es la facultad que tienen para conocer de ciertos negocios, ya sea por la naturaleza misma de las cosas ó bien por razon de las personas; la primera es el género y la segunda la especie”.

Pero esas mismas diferencias, cuyo matiz expresa admirablemente la trascrita doctrina, no reflejan su importancia en casos como el presente, en

⁶ Manresa, Miguel y Reus, *Comentarios á la ley de enjuiciamiento española*, Edicion mexicana, tomo I, p. 4.

el que lo mismo da hablar del género que de la especie: así es que usaremos indistintamente en este trabajo de las voces competencia y jurisdicción.

Que la tuvo el Juez local de Paso del Norte para decretar y llevar á efecto la detención preventiva de Mr. Cutting, es indudable. ¿Por qué? Por lo que dispone el artículo 186 del Código Penal del Distrito, vigente en el Estado de Chihuahua.

Hé aquí la letra de ese precepto:

Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos ó contra extranjeros, ó *por un extranjero contra mexicanos*; podrán ser castigados en la República y con arreglo á sus leyes, si concurren los requisitos siguientes:

I. Que el acusado esté en la República, ya sea porque haya venido espontáneamente ó ya porque se haya obtenido su extradición:

II. Que si el ofendido fuera extranjero, haya queja de parte legítima:

III. Que el reo no haya sido juzgado definitivamente en el país en que delinquirió, ó que si lo fué no haya sido absuelto, amnistiado ó indultado:

IV. Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República:

V. Que con arreglo á las leyes de ésta merezca una pena más grave que la de arresto mayor.

Basta la lectura atenta de ese precepto expreso de la ley y el conocimiento de los hechos que, en el caso, han pasado, para que el simple buen sentido dicte una respuesta aprobatoria de la conducta observada por la autoridad judicial de Chihuahua. En efecto, la concurrencia de los cinco requisitos exigidos por el copiado artículo 186, está fuera de duda.

Mr. Cutting vino á la República espontáneamente.

El Sr. Medina, no obstante ser mexicano, interpuso querrela en forma.⁷

Mr. Cutting no solo no fué juzgado, sino ni siquiera acusado en los Estados-Unidos.

La difamación de que se quejó el Sr. Medina se reputa delito, tanto en México como en los Estados-Unidos del Norte. El Código Penal del Estado de Texas promulgado en 24 de Julio de 1879 castiga (tít. XVI, art. 617) la difamación en libelo impreso con multa hasta de dos mil pesos y prisión hasta por dos años en la cárcel del Condado. Y el art. 644 del citado Código Penal mexicano, dice á la letra: “La injuria, la difamación y la calumnia

⁷ Para que nunca se dude siquiera de nuestra buena fé, nos apresuramos á decir que la querrela era necesaria, pero no porque el ofensor fuese extranjero, sino porque el delito era difamación.

son punibles sea cual fuere el medio que se emplee, para cometer esos delitos, como la palabra, la escritura manuscrita ó impresa, los telegramas, el grabado, la litografía, fotografía, dibujo ó pintura, la escultura, las representaciones dramáticas y las señas”.

Finalmente, la pena señalada al difamador que imputa un delito al difamado⁸ pasa con mucho⁹ de arresto mayor, pues el artículo 646 de nuestro Código Penal enseña que: “La difamacion se castigará con la pena de seis meses de arresto á dos años de prision¹⁰ y multa de 300 á 2,000 pesos, cuando se impute un delito ó algun hecho ó vicio, que causen al ofendido deshonra ó perjuicio graves”.

Despues de esto ¿habrá quien racionalmente pueda dudar de la justicia que tuvo para proceder la autoridad judicial de Chihuahua?

El precepto del artículo 186 de nuestro Código Penal, no es una nota discorde con los principios del derecho de gentes. Calcado ese artículo 186 en los artículos 5 y 7 del Código de instruccion criminal frances, oigamos lo que dice á ese respecto uno de los más distinguidos expositores de derecho penal en esa Nacion.¹¹ “Los más evidentes de estos casos (los en que se castiga al extranjero que delinque en país extranjero) son: primero, aquellos en que el crimen, aunque cometido fuera de las fronteras del Estado, es contra el Estado mismo, atacándolo en su existencia, en su seguridad interior ó exterior, ó en su fortuna publica: segundo, aquellos en que tratándose de crímenes comunes contra particulares, el culpable, viniendo al territorio nacional, trae con su persona el riesgo de la reincidencia, el amago á la seguridad, el escándalo y el peligro del mal ejemplo. El interés social es aún más vivo para el Estado, si el culpable es uno de sus nacionales, ó si el delito se ha perpetrado contra uno de ellos”.

⁸ Cutting llamó á Medina estafador y la estafa está considerada como delito en el art. 414 de nuestro Código Penal y castigada con la pena de robo en el siguiente art. 415.

⁹ “El arresto mayor —dice el art. 124 de nuestro Código Penal— durará de uno a once meses; y cuando por la acumulacion de dos penas exceda de ese tiempo, se convertirá en prision”.

¹⁰ El artículo 66 de nuestro Código Penal dice: “Toda pena temporal tiene tres términos, á saber: mínimo, medio y máximo, a no ser que la ley fije el primero y el último. En este caso podrá el Juez aplicar la pena que estime justa dentro de esos dos términos”.

¹¹ Ortolan, *Eléments de droit pénal*, núm. 377.

El autorizado publicista Mr. Foelix, al aprobar la disposicion de los arts. 5o. y 7o. del Código frances de instruccion, y al opinar como hemos visto que lo hace Mr. Ortolan, cita cinco notables autores que pertenecen á la misma comunion de ideas á este respecto: Voet, Boehmer, Martens, Saalfeld y Pinheiro Ferreira;¹² y cuando se ocupa de las leyes positivas que se han dictado sobre el particular, nos enseña que el art. 186 de nuestro Código Penal no solo concierta con el frances, sino con las de los países italianos, con los de los Estados alemanes y con el de Noruega.¹³

Demostradas como quedan tanto la conformidad de la ley mexicana con los principios de derecho internacional, como la justificacion con que procedieran las autoridades en Chihuahua, cuyos procedimientos se sujetan estrictamente al texto legal; es oportuno analizar, siquiera sea brevemente, la conducta de Mr. Cutting y de su Cónsul Mr. Brigham.

Todas las naciones civilizadas, segun el decir autorizado del publicista que hemos venido citando, están de acuerdo en que en materia de procedimientos de los tribunales, ó sea de enjuiciamiento, la única ley aplicable es la del lugar en que el proceso se sigue.

¹² Foelix, *Traité du droit international privé*, núm. 574.

¹³ Foelix, *Op. cit.*, núm. 578 á 596. Hé aquí el texto da algunos de esos códigos:

“Si un extranjero comete un crimen ó delito, fuera de nuestros Estados, contra la constitucion de la monarquía ó que redunde en daño de los efectos públicos ó de la moneda nacional, será tratado como súbdito y se le castigará conforme á esta ley. Si el crimen ó delito no fuere alguno de los especificados, el delincuente extranjero será arrestado y se tratará brevemente de su extradicion con el Estado en cuyo territorio haya cometido el crimen ó delito. Si ese Estado rehusa recibirle ó procede de manera distinta á la prescrita en la presente ley, se procederá conforme á ella en contra del delincuente” (§§ 32, 33 y 34 del Código penal de Austria).

“Los extranjeros perseguidos por crímenes ó delitos cometidos fuera del reino, serán castigados conforme á la ley del lugar de la perpetración del crimen ó delito” (§ 14, part. II, tít. 29 del Código penal de Prusia).

“Los extranjeros serán juzgados conforme á las disposiciones del presente Código, por cualquier crimen ó delito que cometan dentro del territorio del reino; no lo serán por las infracciones cometidas en país extranjero, á ménos que con esas infracciones se ofenda á nuestra persona, al Estado de Baviera ó á uno de nuestros súbditos” (art. 4o. del Código penal de Baviera).

“Los extranjeros serán juzgados segun las leyes del reino y por sus tribunales, con motivo de los crímenes ó delitos que cometan en el reino afuera de él, si ofenden á la Noruega ó á los súbditos noruegos, ó finalmente á extranjeros que se hallen en navios (bâtiments) noruegos” (§ 2 del Código penal del reino de Noruega).

La ley del país en que la demanda se entabla es la que rige la competencia de las autoridades y la forma de proceder ante ellas, cualesquiera que sea la ley bajo cuyo imperio han pasado los hechos que motivan tal demanda. En efecto, resulta del principio de la independencia de los Estados, que la organización y la competencia de las autoridades en cada uno de ellos no pueden depender de las leyes de otro Estado, y de la misma manera, las formalidades que tienen que observar las partes para introducir y sustanciar una acción ante las autoridades, así como las reglas á que éstas están sujetas para pronunciar un fallo, no pueden descansar sino en la ley del mismo territorio si han de tener sanción eficaz; de otra manera, las autoridades dependerían, de hecho, del Estado que dictara las leyes trazando la norma y la regla de conducta de los funcionarios. No se encuentra ejemplo de que una nación haya concedido efecto alguno en su territorio á las leyes extranjeras referentes á la competencia de las autoridades y á la forma de proceder ante ellas.

Las formalidades de que acabamos de hablar se comprenden en la clase llamada *ordinatorioe litis*, á diferencia de las que se relacionan con el fondo mismo del proceso y que se llaman *decisoria litis*.

Los autores opinan unánimemente acerca de la regla que acabamos de asentar. Citarémos á Fabre, á Paul Voet, á Sande, á Burgundo, á Rodenburg, á Boullenois, á Bouhier, á Mevio, á Hammel, á Hert, á Weber, á Glück, á Danz, á Tittman, á Meier, á Merlin, á Linde, á Mühlenbruch, á Mittermaier, á Wening-Ingenhem, á Pardessus, á Henry, á Kent, á Wheaton, á Rocco y á Burge.¹⁴

Ahora bien, la ley de enjuiciamiento criminal de Chihuahua, provee y reglamenta la manera de sustanciarse una cuestión de competencia.

Los arts. 286 y 410 á 413 del Código de Procedimientos Penales vigente en Chihuahua, son como sigue:

Art. 286. Si el inculpado tuviere que oponer la excepción de incompetencia ó alguna de las que extinguen la acción penal, conforme al tít. VI, lib. I del Código Penal, se formará por cuerda separada incidente que se sustanciará conforme á los arts. 410 á 413.

Art. 410. Propuesta alguna de las excepciones mencionadas en el artículo anterior, el juez designará día para la audiencia sobre ella, mandando citar á las partes. La audiencia tendrá lugar dentro de los ocho días siguientes.

Art. 411. El día de la audiencia, estando presente el acusado, si quisiere concurrir á ella, el defensor fundará sus excepciones, la parte civil expondrá lo que conduzca á su derecho y el Ministerio público presentará y desarrollará sus conclusiones.

¹⁴ Foelix, *Op. cit.*, núm. 126.

Si se promoviere prueba y el juez la estimare procedente, se recibirá en esta audiencia.

Art. 412. El juez fallará sobre las excepciones á más tardar dentro de tres dias.

Art. 413. La sentencia á que el artículo anterior se refiere es apelable en ambos efectos. La apelacion se interpondrá en el acto de la notificacion del fallo, ó á más tardar dentro de los tres dias siguientes, y se sustanciará en el Tribunal Superior, siguiéndose los mismos procedimientos que señalan los tres artículos anteriores. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria.

Fácil y sencilla era, en consecuencia, la tarea de Mr. Cutting y de su Cónsul: en vez de ocupar la atencion de Mr. Bayard, les bastaba haber promovido la cuestion de competencia (si creian que no la tenia el juez de Paso del Norte) declinando su jurisdiccion. El auto que pronunciara ese juez, si lo estimaban contrario á su derecho, era apelable en ambos afectos, y por lo mismo la causa habria pasado en revision al Tribunal de Chihuahua, en donde contaban con toda la ilustracion de Magistrados entendidos y peritos en la ciencia del derecho.

Nuestras leyes han previsto sabiamente cuándo es lícita la intervencion diplomática. La novísima de extranjería, del 28 de Mayo del corriente año, ha dicho que:

Art. 35. Los extranjeros tienen la obligacion de contribuir para los gastos públicos de la manera que lo dispongan las leyes, y de obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose á los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que los que las leyes concedan á los mexicanos. Solo pueden apelar á la vía diplomática en el caso de denegacion de justicia ó retardo voluntario en su administracion, después de agotar inútilmente los recursos comunes creados por las leyes, y de la manera que lo determine el Derecho internacional.

En el mismo espíritu se inspiró la ley de 26 de Noviembre de 1859;¹⁵ y aún es más explícita en sus declaraciones.

¹⁵ Cuando por queja de un agente comercial, ó sin la intervencion de éste, se eleve al Gobierno general una reclamacion sobre negocios que segun las leyes del país deben ser decididos por los tribunales de la Federacion ó de los Estados, deberá tenerse presente para su resolucio:

1o. Que por los principios generales del derecho de gentes, por expresas estipulaciones de los tratados que ligan á la Nacion, y por lo dispuesto en la Constitucion general, tienen los extranjeros en todo lo concerniente á la administracion de justicia, las mismas garantías y derechos que los mexicanos.

2o. Que el Gobierno, por todos los medios que la Constitucion y leyes le faciliten, ha de procurar que sea real para ellos este principio de igualdad y de justicia.

Y el derecho internacional enseña doctrinas de las que no son sino copia las leyes que acabamos de citar.¹⁶

¿Cuando no podia haber ni denegacion de justicia ni retardo en su administracion, puesto que la justicia empezaba á dar los primeros pasos, á escribir los primeros pliegos de la instruccion; estaba autorizado el uso de la vía diplomática?

Hemos concluido por hoy, y aunque —lo decimos con sinceridad— ninguna pretension abrigamos de nuestro propio valer, tanta y tan grande es la justicia de la causa de México, que esperamos haber engendrado en quien nos lea, estas profundas convicciones:

Las autoridades de Chihuahua han procedido legalmente.

3o. Que por tanto, ni para perjudicar, ni para favorecer á los extranjeros, podrá tomarse providencia por la cual se impida ó retarde la incoacion ó prosecucion del juicio legal en que el negocio deba ser decidido, ó se nombren jueces extraordinarios de informacion, ó se designen tribunales diversos de los competentes conforme á las leyes del país.

4o. Que por una regla elemental del derecho comun y del internacional privado, la última sentencia pronunciada en juicio legal, se considera justa y digna de llevarse á efecto en el país donde fuere dictada.

5o. Que cuando en los casos fijados por el derecho de gentes, se formalice una reclamacion por denegarse la justicia ó retardarse voluntariamente su administracion, ha de probarse plenamente que estos agravios son reales y manifiestos con notoria violacion de las leyes del país, y que para obtener justicia se han opuesto y sostenido en el tiempo y forma que las mismas leyes prescriben las alegaciones, peticiones y recursos adecuados y bastantes, conforme á sus prevenciones, para obtener en el orden jurídico la enmienda de estos agravios, ó la legítima reparacion del perjuicio que en su virtud se hubiere causado; sin que estas gestiones hayan producido sus efectos legales por culpa ó falta manifiesta de la autoridad judicial que entendía en el negocio.

6o. Que exhibiéndose la misma prueba, el Gobierno influirá por los medios que le franquean la Constitucion y las leyes, en que sean obsequiadas las reclamaciones relativas al cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas. Pero las que determinen un pago de que el Gobierno sea responsable, no podrán alterar el exacto cumplimiento de las convenciones relativas á la deuda pública, ni las leyes concernientes á la ejecucion de sentencias de pago contra la hacienda federal (artículo 13 de la ley de 26 de Noviembre de 1859).

¹⁶ Extractamos del famoso Repertorio de Dalloz los siguientes conceptos (v.o. Déni de justice). Hay denegacion de justicia siempre que la autoridad judicial rehusa pronunciar un fallo formal sobre lo principal del negocio ó sobre cualquiera de los incidentes, del proceso de que está conociendo; pero por solo el hecho de fallar, ya en lo principal, ya en los incidentes, en cualquier sentido que sea, no podrá alegarse denegacion de justicia, aunque se diga que la resolucion es inicua ó dada contra ley expresa. En cuanto al retardo en la administracion de justicia deja de ser voluntario, si el juez lo motiva en alguna razon de derecho ó en impedimento físico que no le sea dable evitar.

Los Sres. Brigham y Cutting, equivocaron el camino que debían haber seguido, pues en vez de sujetarse á la ley ordinatoria; *litis*, declinando la jurisdicción del juez, ocurrieron á Mr. Bayard.

Ni remotamente puede decirse que llegó el caso de servirse de la vía diplomática.

Lo decimos sin jactancia: toda nación que de culta se precie —y en el número de ellas nos complacemos en contar á los Estados-Unidos del Norte— tienen que pronunciar este fallo: En el caso de Cutting á México le asiste la razón.—José M. Gamboa.

LEGACION MEXICANA EN LOS ESTADOS-UNIDOS DE AMERICA

Washington, Agosto 7 de 1886.

Creendo conveniente Rectificar varias afirmaciones inexactas que han circulado en este país con motivo del caso de Cutting, y especialmente las que se hallan consignadas en el informe que Mr. Bayard rindió al Presidente de los Estados-Unidos, el 2 del actual, y el cual fue transmitido al Congreso, dirijo con esta fecha al Secretario de Estado, una carta en que le presento nuestra manera de ver esa cuestión.

Siento mucho que la falta de datos suficientes por una parte, y por otra, la del tiempo necesario para preparar un trabajo más meditado y completo, me hayan impedido referir todas las consideraciones que existen en favor de nuestra causa; pero he procurado consignar las principales, según verá vd. por la copia que adjunta le remito de la carta mencionada.

Reitero á vd. las seguridades de mi muy distinguida consideración.—M. Romero.—Al Secretario de Relaciones Exteriores.—México.

ANEXO

LEGACION MEXICANA

Washington, Agosto 7 de 1886.

MI ESTIMADO MR. BAYARD:

Con objeto de evitar que la mala inteligencia entre nuestros dos países, haga más difícil la pronta solución de las dificultades ahora pendientes, motivadas

por la prision en Paso del Norte, México, del ciudadano de los Estados-Unidos, Augustus K. Cutting, con perjuicio de las buenas relaciones que ambos han cultivado y desean cultivar, me tomo la libertad en gracia de la importancia y trascendencia de este asunto, de hacer á vd. algunas observaciones que espero podrán servir para rectificar hechos que temo no sean debidamente apreciados aquí.

Creo conveniente, ante todo, decir á vd., que no habiendo recibido autorizacion de mi Gobierno para tratar esta cuestion con el de los Estados-Unidos, pues la gravedad de ella hace, naturalmente, que el Gobierno mexicano prefiera tratarla directamente, lo que paso á manifestar á vd., son simplemente mis impresiones personales fundadas en el conocimiento que tengo de este asunto, de las intenciones del pueblo y del Gobierno de México, respecto de los Estados-Unidos, y del alcance y tendencias de la legislacion de mi país.

Mr. A. K. Cutting ha vivido por diez y ocho meses en Paso del Norte, México, de cuyo lugar es por lo mismo vecino. Allí tiene parte en la publicacion de un periódico semanal que se imprime en inglés y en español, llamado *El Centinela*.

En el número de ese periódico correspondiente al 6 de Junio de este año, atacó á un ciudadano mexicano Emigdio Medina, quien habia anunciado la publicacion de un periódico rival en la misma poblacion de Paso del Norte, México.

Medina se consideró difamado por ese artículo, y antes de entablar un juicio por difamacion, conforme al art. 642 del Código Penal mexicano de 7 de Diciembre de 1871, que ha sido adoptado por el Estado de Chihuahua, promovió el 14 del mismo Junio, conforme á una ley antigua española, vigente tambien en Chihuahua, la conciliacion ante el Juez 29 municipal en turno del ramo criminal, Regino Castañeda, contra D. Alejandro N. Daguerre, responsable del periódico *El Centinela*. El Sr. Daguerre manifestó que no era él, sino Mr. Cutting, el responsable del artículo, por cuyo motivo el Juez citó á Cutting, quien compareció y manifestó que publicaria en su periódico una satisfaccion en favor de Medina, firmando el acta respectiva de conciliacion.

No fué Cutting condenado por el Juez á retractarse de lo que habia publicado contra Medina, ni obligado en manera alguna á retirar sus palabras ofensivas, como lo asegura en un artículo que publicó despues en El Paso, Texas, sino que firmó su retractacion espontáneamente y quizás por evitarse las consecuencias de un juicio criminal promovido por Medina.

Cutting publicó su rectificacion en *El Centinela*, solamente en inglés y eligiendo el carácter de letra más pequeño, para que fuese leida con

dificultad; y en el mismo día, 20 de Junio, publicó en inglés y en español en un periódico de El Paso, Texas, intitulado *Sunday Herald*, un artículo en que reiteraba las inculpaciones hechas á Medina en *El Centinela*.

En seguida distribuyó Cutting en Paso del Norte, México, varios ejemplares del *Sunday Herald*, que contenía su artículo contra Medina. Con este motivo, el día siguiente, 21 de Junio, fué demandado de nuevo por Medina, por difamacion, fundándose en los arts. 642 y 186 del Código Penal mexicano. El día siguiente, 22, fue arrestado Cutting por orden del Juez, pero á solicitud suya se le permitió fuera á dormir á su casa en esa noche. El 23 compareció Cutting ante el Juzgado, pero se negó á contestar las preguntas que se le hicieron, diciendo que este negocio seria ventilado por el Gobierno de los Estados-Unidos, y se le llevó á la cárcel como detenido el día 23, y el 25 en la mañana se decretó por el Juez el auto de bien preso, de conformidad con la prescripcion del art. 19 de la Constitucion mexicana.

Me parece que esta es la relacion exacta y detallada de los hechos que he tomado, en parte, de informes que he recibido de Paso del Norte, que aunque de carácter privado estimo fidedignos, y en parte, de otras fuentes tambien privadas. Me ocuparé ahora de examinar las cuestiones que estos hechos entrañan.

El Gobierno de los Estados-Unidos cree que se juzga á Cutting en Paso del Norte solamente por un artículo publicado en El Paso, Texas, en cumplimiento del art. 186 del Código Penal mexicano, y considera á ese artículo incompatible con los principios del derecho internacional.

Creo conveniente manifestar con referencia al primer punto, que entiendo que se juzga á Cutting, por la publicacion en *El Centinela*, periódico que se publica en Paso del Norte, México, de un artículo contra Medina que éste considera difamatorio, y aunque puede haberse presentado como circunstancia agravante la publicacion de otro artículo en El Paso, Texas, no creo que sea éste el delito principal de Cutting.

Se ha querido sostener que la conciliacion celebrada entre Medina y Cutting ante el Juez de Paso del Norte, México, el 4 de Junio, terminó la accion de Medina en contra de Cutting, con motivo de la publicacion hecha en *El Centinela*; pero conviene hacer presente, que la conciliacion no es juicio, ni hay en ella sentencia judicial, ni termina nada, sino en cuanto los interesados quieran someterse á sus condiciones.

La conciliacion es un esfuerzo que hace la ley por evitar litigios, y su objeto es avenir á las partes interesadas en un juicio futuro. Si estas se avienen y cada una cumple con las condiciones del avenimiento ó conciliacion, se evita el juicio. Si no se avienen, comienza el juicio formal, y lo mismo sucede, si avenidas, faltan á lo que habian convenido en la conciliacion.

Este último es precisamente el caso entre Cutting y Medina. Tuvieron un avenimiento que hacia ya innecesario el juicio criminal por difamacion que el primero hizo al segundo; pero este avenimiento no impedia que uno ó ambos interesados dejaran de cumplir con sus condiciones, y que en ese caso se pudiera abrir el juicio criminal por difamacion, que creo es lo que pasó.

Al dar á vd. en la entrevista que tuvimos en el Departamento de Estado, el 24 de Julio próximo pasado, una traduccion del artículo 186 del Código Penal mexicano, no tuve el objeto de manifestarle que el Juez de Paso del Norte procedia contra Cutting exclusivamente en virtud de dicho artículo, sino de hacerle presente tambien que no era arbitraria, como parecia considerarse aquí, la conducta de un juez mexicano, que en ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones, abriese juicio por un delito cometido en país extranjero, pues conforme á la legislacion mexicana, este caso estaba previsto en el expresado artículo. Como él contiene una disposicion general que no está restringida á los Estados-Unidos, sino que es igual respecto de los delitos cometidos en todo país extranjero, me pareció que podia tomarse como una prueba de que al expedir esa ley, México habia querido obrar conforme á los preceptos del derecho internacional.

Suplico á vd. me permita manifestarle, que el Código Penal que aprobó el Congreso Mexicano el 7 de Diciembre de 1871, fué formado por una Comision de distinguidos abogados mexicanos, que hicieron un estudio especial de la legislacion penal de los países más civilizados, y que adoptaron de los Códigos europeos lo que les pareció más avanzado y adaptable á las circunstancias de México. El artículo 186 contiene prevenciones que con más ó menos limitacion están adoptadas en los Códigos penales de Bélgica y de Italia, segun aparece del artículo 49, cap. 19, lib. 19 del Código Penal de Bélgica, 5a. edicion de Bruselas, y de los artículos 69, 79, 89 y 99 del Código Penal italiano, de 20 de Noviembre de 1857, edicion de Milan de 1880, y estaban adoptadas en el de Francia hasta hace poco, que fueron restringidas, segun aparece de los apuntes sobre legislacion francesa, que se sirvió vd. mostrarme en nuestra entrevista de ayer; pero subsistiendo todavía el principio de que un país puede juzgar, en ciertos casos, delitos cometidos en el extranjero.

A primera vista, parece un contraprinipio, la prevencion del Código Penal mexicano; pero cuando se tiene en cuenta que la tendencia de la civilizacion moderna es no dejar impunes los delitos, y que el primer paso que se ha dado en este camino, es consentir en la extradicion de los criminales, cuya práctica es ya universal entre las naciones civilizadas, no parece extraño que el segundo paso fuera dar competencia á los tribunales

nacionales para conocer delitos cometidos en el extranjero, con ciertas restricciones y calificaciones, como las comprendidas en las cinco fracciones del artículo 186 del Código Penal mexicano.

Antes de pasar á otro asunto, creo conveniente manifestar á vd., que la traduccion que puse en sus manos, del expresado artículo, en nuestra entrevista de 24 de Julio, no es enteramente correcta, pues no admitia traduccion fácil al inglés la frase arresto mayor, que aparece en la fraccion V del expresado artículo, por lo cual acompaño ahora una nueva traduccion del mismo y además la del artículo 124, que define el arresto mayor.

El sistema de castigar delitos cometidos en el extranjero, especialmente cuando éstos, aunque perpetrados en el extranjero, tienen su complemento ó realizacion, ó producen sus efectos en el país que los castiga, está en práctica en varias naciones, no solamente en las disposiciones de sus Códigos penales, sino en los juicios seguidos diariamente, y en las doctrinas de varios criminalistas modernos.

Es cierto que conforme á las leyes (*common law*) de los Estados-Unidos y de Inglaterra, no hay jurisdiccion para conocer de los delitos cometidos en el extranjero; y á pesar de esto, acaba de tener lugar un juicio por difamacion, en Lóndres, entablado por Mr. Cyrus Field, contra Mr. James Gordon Bennett, editor del *Herald* de Nueva-York, por artículos publicados en Nueva-York, en el periódico de Mr. Bennett, que Mr. Field consideró como difamatorios para él, en el cual fué condenado Mr. Bennett por los Tribunales ingleses á pagar \$25,000, por los daños y perjuicios ocasionados á Mr. Field, por los expresados artículos, sin embargo de que ellos habian sido publicados en Nueva-York y no en Lóndres. Debe tenerse presente, además, que Mr. Bennett no es vecino de Lóndres como Cutting lo es de Paso del Norte.

Es cierto que el fundamento de la sentencia de los tribunales ingleses parece ser, que aunque el delito se cometió en Nueva-York, sus efectos se produjeron en Lóndres, en donde circula el *Herald* de Nueva-York; pero exactamente la misma razon existe en el caso de Cutting, supuesto que, aunque el artículo se haya publicado en El Paso (Texas), circuló en Paso del Norte (México), donde Medina era conocido, y en donde puede decirse que produjo su efecto.

Algunos tratadistas del derecho penal norte-americano é inglés, sostienen doctrinas semejantes á las consignadas en el artículo 186 del Código Penal mexicano. Joel Prentiss Bishop, en sus comentarios sobre derecho criminal (*Commentaries on the Law*, 7th edition, 1882, vol. II, Cap. VI, Section 110, pag. 59, Boston, Little, Brown & Co.), dice lo que sigue:

One who is personally out of the country may put in motion a force which takes effect on it, and in such a case he is answerable where the evil is done, though his presence is elsewhere. Thus, murder, libel, false pretences, etc. If a man “standing beyond the outer line of our territory, by discharging a ball over the lines, kills another within it, or himself being abroad circulates through an agent libels here or does any other crime in our own locality, against our laws, he is punishable, through absent, the same as if he were present.

En comprobacion de esta doctrina, cita varias autoridades americanas é inglesas que sostienen los principios enumerados por él.

Esta misma doctrina sostiene Bishop en su obra intitulada: *Criminal procedure or Commentaries on the law of Pleading and Evidence, and the Practice in criminal cases* (Third edition, 1880, vol. I, Book II, Chapter IV, Section 53, page 27, Boston, Little Brown & Co.) en donde dice lo que sigue:

Personal presence. The law deems that a crime is committed in the place where the criminal act takes effect. Hence, in many circumstances, one becomes liable to punishment in a particular jurisdiction, while his personal presence is elsewhere.

Even, in this way, he may commit an offense against a State or country upon whose soil he never set his foot, as explained in criminal law.

A continuacion menciona Bishop la difamacion (*libel*) entre los crímenes que se castigan en el lugar donde producen sus efectos, aún cuando el responsable no resida en él, y cita varias autoridades para sostener su teoría.

Antes de pasar á otro asunto, suplico á vd. me permita manifestarle, que en la correspondencia diplomática anexa al mensaje del Presidente de los Estados-Unidos de 6 de Diciembre 1880 —páginas de 707 á 719— aparece que desde el año de 1879 tuvo conocimiento el Gobierno de los Estados-Unidos de la disposicion del Código Penal mexicano, contenida en su artículo 186, pues habiéndose quejado el General Ord al Sr. Zamacona de que un soldado mexicano llamado Zeferino Avalos, habia cometido un asesinato en Texas, y refugiándose en México, se le juzgó por ese delito cometido en el extranjero, fué condenado á la pena capital y ejecutado. Mr. Foster manifestó entonces hasta satisfaccion por la eficacia de la ley mexicana, y el Gobierno de México, de poder demostrar que perseguia á los criminales. Es cierto que entonces se aplicó dicha ley á un mexicano, y que el caso cambia de aspecto cuando se hace efectiva respecto de un extranjero: pero menciono este incidente porque él demuestra que se ha aplicado la ley hace tiempo con conocimiento, y puede decirse que hasta

con satisfacción del Gobierno de los Estados-Unidos, ó por lo menos, de su representante en México.

El Señor Mariscal, Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados-Unidos Mexicanos, manifestó á Mr. Jackson en la comunicacion que le dirigió el 21 de Julio próximo pasado, que las instituciones políticas de México, semejantes á las de los Estados-Unidos, de donde realmente han sido tomadas, no permitían al Poder Ejecutivo de la Federacion, ingerirse en la administracion de justicia de los Estados, y que por este motivo no podia dar orden al Juez de Paso del Norte de que pusiese en libertad á Cutting. La fuerza de esta consideracion aparece con más claridad teniendo en cuenta el caso de Alexander Mac Leod (*sic*) de que tuvo vd. la bondad de hablarme en nuestra entrevista de ayer. He examinado con atencion este caso, y encuentro que Mac Leod, súbdito británico domiciliado en el Canadá, fué arrestado en el Estado de Nueva-York en el año de 1841, porque se dijo que habia tenido participacion en la captura del vapor “Carolina”, verificada en el lado americano del rio Niágara, acontecida en el año de 1837, y fué sometido á juicio por homicidio. El Ministro británico en Washington, Mr. Fox, demandó la libertad inmediata de Mac Leod, fundándose en que la captura del vapor “Carolina” habia sido un acto público de personas al servicio del Gobierno británico, quienes habian obedecido las órdenes de sus oficiales superiores, y que conforme á los principios del derecho internacional Mac Leod no podia ser detenido en virtud de actos cometidos en cumplimiento de dichas órdenes. El Secretario de Estado, Mr. Webster, en su respuesta á Mr. Fox, reconoció lo fundado de las observaciones del Ministro británico, por lo que hacia al derecho internacional, y en una comunicacion que dirigió á Mr. Crittenden, Procurador general de los Estados-Unidos, el 15 de Marzo de 1841, dijo que, si el caso estuviera pendiente en alguno de los tribunales federales de los Estados-Unidos, el Presidente ordenaria inmediatamente el recurso de *nolle prosequi*, satisfaciendo así la demanda del Ministro británico; pero agregó que el Presidente no tenia facultad de mezclarse en los procedimientos de las Cortes civiles ó criminales del Estado de Nueva-York. Este punto fué claramente establecido por Mr. Webster en su nota al Ministro británico, de 24 de Abril de 1841, en la que usó el siguiente lenguaje: “En los Estados-Unidos, como en Inglaterra, las personas presas en virtud de procedimientos judiciales, solamente pueden ser puestas en libertad por procedimientos judiciales. En ninguno de los dos países puede el brazo del Poder Ejecutivo intervenir directamente, por la fuerza, para poner en libertad al arrestado”.

“Su libertad debe buscarse de una manera conforme con “los principios de la ley y con los procedimientos de los tribunales”.

Aparece, además, que sin embargo de que el Gobierno federal de los Estados-Unidos reconoció que Mac Leod estaba preso en contravención de los principios del derecho internacional, y de que se interpuso el recurso de *habeas corpus* por consejo del Gobierno federal ante la Suprema Corte del Estado de Nueva York, este tribunal rehusó la libertad de Mac Leod y continuó su juicio en virtud de la acusación de homicidio.

En el caso de Cutting se cometió una ofensa que se castiga con igual severidad por las leyes de ambos países, supuesto que el de Texas impone una multa hasta de \$2,000 y prisión que no exceda de dos años, y la ley mexicana una multa de \$200 á \$2,000, y arresto de seis meses á dos años (artículo 646 del Código Penal mexicano).

Si Cutting ha sido arrestado por autoridades del Estado de Chihuahua, por un acto reconocido como ofensa criminal por las leyes de ambos países, es decir, las leyes mexicanas y las del Estado de Texas, y si la persona arrestada puede ser juzgada conforme al derecho internacional, el caso de Mac Leod presenta un precedente importante que justifica la conducta del Gobierno federal de México, al no ingerirse en los procedimientos de los tribunales del Estado de Chihuahua.

Es cierto que á consecuencia del incidente de Mac Leod, el Congreso de los Estados-Unidos expidió la ley de 29 de Agosto de 1842, conforme á la cual los jueces federales tienen autorización para conocer de casos semejantes al de Cutting, y aun para procurar la inmediata libertad de un ciudadano ó súbdito extranjero que se está juzgando por tribunales locales; pero además de que en México no existe una ley semejante á la de 29 de Agosto de 1842, aun cuando existiera, no creo que se pudiera aplicar al caso de Cutting por dos razones: la primera, porque la expresada ley requiere que el extranjero arrestado esté domiciliado en un país extranjero, mientras que Cutting estaba domiciliado en México; y la segunda, porque la excepción que se alega, debe estar sostenida por el derecho de gentes, y no parece estar comprendido en esta excepción el caso de Cutting.

Es patente el interés con que el Gobierno de México ha visto este asunto, tan pronto como el Gobierno de los Estados-Unidos llamó su atención hacia él, por conducto de Mr. Jackson, su Ministro en México, es decir, desde el 6 de Julio citado.

Luego que el Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos tuvo noticia de este incidente por la nota que Mr. Jackson dirigió al Sr. Mariscal en esa fecha, se dirigió al Gobernador del Estado de Chihuahua, recomendándole que se administrase pronta y cumplida justicia en el caso de Cutting, y que se mejorase la condición que guardaba, que según las

manifestaciones hechas por Cutting y por Mr. Brigham, Cónsul de los Estados- Unidos en Paso del Norte, eran muy duras.

Al dirigirse de nuevo Mr. Jackson al Sr. Mariscal sobre este asunto en nota de 19 del mismo Julio, se reiteraron esas recomendaciones, y como resultado de ellas, el Gobernador del Estado de Chihuahua envió primero á su secretario de Gobierno, Sr. D. Manuel E. Rincon, de la ciudad de Chihuahua á la de Paso del Norte, para que se informara de las condiciones de la cárcel de esta última poblacion é hiciera todo lo posible en favor de Cutting; y dió desde luego cuenta de la recomendacion del Presidente al Tribunal Supremo del Estado, el cual pidió informe al Juez que conocia de la causa; y no satisfecho con esto, comisionó á su presidente, para que en persona se trasladase á Paso del Norte, con objeto de ver que se activase, en cuanto fuere posible, la conclusion del proceso, y para satisfacerse de que se procedia conforme á la ley.

Aunque de las declaraciones de Cutting ante el Cónsul de los Estados- Unidos en Paso del Norte, y de los informes de éste, aparece pintada con los colores más terribles la condicion de Cutting en su prision, creo conveniente informar á vd., que en vez de tenérsele en un calabozo inmundo y asqueroso, como Cutting lo indica, ha tenido toda la prision por cárcel, con libertad de estar durante el dia en la parte de ella que quisiera, y de noche dormir en la pieza del alcaide, que es la mejor que hay en la prision. Al llegar á Paso del Norte el Sr. D. Francisco N. Ramos, presidente del Tribunal Supremo de Chihuahua, y ver que tenia poca ventilacion la expresada pieza, mandó abrirle una ventana, con objeto de mejorar la condicion del preso.

Seria de desear que todas las poblaciones mexicanas tuvieran prisiones cómodas como las que hay en muchas ciudades y pueblos de los Estados- Unidos; pero desgraciadamente la condicion pecuniaria de aquel país no ha permitido construir prisiones que reunan las condiciones ventajosas que tienen algunas de los Estados- Unidos; y si la de Paso del Norte es de las más desagradables, no puede considerarse, en manera alguna, esta circunstancia como destinada á molestar indebidamente á los ciudadanos de los Estados- Unidos que tengan que ser detenidos en ellas.

Como otra prueba del empeño de las autoridades mexicanas por mejorar la condicion de Cutting, mencionaré el hecho de que, conforme al reglamento de la prision de Paso del Norte, solamente se abonan diez centavos diarios para su subsistencia á los presos, y que en beneficio de Cutting el presidente del Tribunal Supremo del Estado, ordenó, se le abonasen cincuenta centavos, cuya cantidad, segun estoy informado, es el precio de dos comidas en las fondas de aquel lugar.

Se ha dicho, que el Juez de Paso del Norte intentaba juzgar á Cutting aplicándole las leyes de Texas; y creo conveniente rectificar esta asercion haciendo presente, que si se ha hablado de las leyes de Texas, en el juzgado de Paso del Norte, habrá sido probablemente, porque conforme á la fraccion IV del artículo 186 del Código Penal mexicano, se necesita, para que un delito cometido en el extranjero sea punible en México, que tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó, y en México. Por este motivo, probablemente habrá sido necesario recurrir á las leyes de Texas, para examinar si la falta de Cutting tiene carácter de delito en aquel Estado.

Creo conveniente manifestar á vd. antes de terminar esta carta, que si ha sufrido alguna dilacion la causa de Cutting en Paso del Norte, probablemente se ha debido en gran parte á la conducta seguida por él, de desconocer la autoridad del Juez que conoce de su causa.

Abrigo la esperanza que he comunicado á vd. en las varias conferencias que hemos tenido sobre este asunto, de que él terminará, antes de mucho, de una manera decorosa para los dos países, é igualmente satisfactoria para ambos, y que léjos de interrumpir las buenas relaciones que los unen, les servirá para comprenderse mejor y para evitarse escollos en lo futuro.

Soy de vd., mi estimado Sr. Bayard, su afectísimo.—(Firmado).—M. Romero.—Hon. Thomas F. Bayard, &c., &c., &c.

Es copia. Washington, 7 de Agosto de 1886.—Cayetano Romero, Secretario.

TELEGRAMAS

Washington, Agosto 8 de 1886.

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES.—MÉXICO.

¿Es definitiva sentencia pronunciada ayer contra Cutting? El Secretario de Estado me ha hablado hoy con mucho interes sobre cuestion de indulto.—M. Romero.

México, Agosto 10 de 1886.

MINISTRO MEXICANO.—WASHINGTON.

Negocio Cutting pendiente ante Tribunal Superior. Consideraciones indulto se examinarán á su tiempo.—Mariscal.

Telegrama depositado en Chihuahua el 21 de Agosto de 1886.—
Recibido en México el mismo dia, á las diez de la noche.

AL SECRETARIO DE RELACIONES:

Tribunal de Justicia del Estado comunica al Gobierno la sentencia que sigue:—Un sello.—República Mexicana.—Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.—Secretaría.—2a. Sala.—Chihuahua, agosto 21 de 1886.—El alcalde 29 del Cantón Bravos, en turno del ramo penal, comenzó á instruir la presente causa seguida á petición de parte legítima contra A. K. Cutting, soltero, de cuarenta años de edad, originario del Estado de Nueva-York, vecino de Paso del Norte y editor del semanario *El Centinela*, que se publica en aquella poblacion, por delito de difamacion cometido en la persona del C. Emigdio Medina. En virtud de la querrela presentada por el ofendido, quedó incoado el procedimiento criminal y se siguió despues por el Juez letrado de aquel distrito, en la forma prescrita por el Código Penal, hasta pronunciar sentencia definitiva, condenando al inculpado á sufrir un año de servicios públicos y pagar seiscientos pesos de multa, quedando además obligado á la indemnizacion civil en los términos que fija la ley. La defensa no se conformó con esta resolucion, y habiendo interpuesto el recurso de apelacion, vinieron los autos á esta 2a. Sala, por haberse admitido dicho recurso en ambos efectos. Para sustanciar la apelacion, se previno al reo nombrara defensor que lo representara en esta segunda instancia, y se citó á la parte civil con término de cinco dias, á fin de que se presentara á deducir sus derechos en el juicio apelatorio. A. K. Cutting se rehusó á hacer el nombramiento de defensor, por lo que se encomendó la defensa de sus derechos al defensor oficial C. Lic. Joaquin Villalva; y Emigdio Medina que ofreció comparecer, no lo hizo, y remitió escrito en diez y seis del presente mes desistiéndose de la accion que habia deducido. A pesar de este desistimiento que desde luego fué admitido por la Sala, creyó esta de su deber llevar adelante el auto de citación para la vista, dictado con anterioridad, á fin de resolver el presente negocio con plena justificacion.

En la audiencia pública que tuvo lugar la mañana de ayer, el señor Procurador general de Justicia pidió que se declarase culpable al procesado,

y que se diera por compurgado su delito con la prision sufrida, peticion que fué secundada por el defensor, concluyendo el acto con la citacion que se hizo á las partes para definitiva.

Considerando, 1o.: Que el artículo 658 del Código Penal expresamente manda que no se proceda contra el autor de una injuria, difamacion ó calumnia, sino por queja de la persona ofendida, cuya disposicion se funda en que el principal interesado en el castigo de estos delitos es el ofendido, y al no presentar su queja ó desistirse de ella, renuncia el derecho que le da la ley, y hace remision de la ofensa.

Considerando, 2o.: Que supuesto el desistimiento de la parte ofendida en los delitos que segun el Código Penal no puedan perseguirse de oficio, el derecho de la sociedad para castigarlos, no es tan perfecto ni tan lato como en aquellos que no es necesaria la querella; pues hay casos en los cuales el procedimiento puede ser injustificado é inconveniente, en razon de que se podria confundir el derecho de castigar con la venganza.

Considerando, 3o.: Que los razonamientos expresados en los dos considerandos anteriores, están robustecidos con los artículos 54 y 55 del Código de Procedimientos penales, que al reconocer el derecho de la parte ofendida para desistirse de la accion intentada, no impone la obligacion precisa de continuar la acusacion, quedando este punto á la resolucion de los jueces y tribunales en los casos de su competencia.

Considerando, 4o.: Que segun se ha dicho, el ofendido, C. Emigdio Medina, se desistió de la accion que tuvo derecho á deducir contra Cutting, y por consiguiente, ha cesado el principal motivo del proceso, no habiendo por esto, en concepto de la Sala, fundamentos bastantes para continuarlo.

Considerando, 5o.: Finalmente, que el desistimiento del ofendido se concibe que tuvo ó ha tenido por objeto principal acallar la alarma suscitada por su queja, pues así lo dan claramente á entender sus conceptos (fojas 8 del segundo cuaderno), y al continuar los procedimientos sobre un punto resuelto legal y acertadamente en primera instancia, seria no solo desvirtuar ese loable propósito, sino ir más allá de lo que reclaman los fueros de la ley y el decoro nacional.

Con apoyo de las disposiciones citadas, la Sala falla á nombre de la Justicia del Estado con las siguientes proposiciones:

Primera: Se da por desistido á su perjuicio al C. Emigdio Medina, de la accion que dedujo contra A. K. Cutting, á quien se pondrá inmediatamente en absoluta libertad.

Segunda: Notifíquese al Procurador general de Justicia, Lic. José M. Gándara, y al defensor de oficio, Lic. Joaquin Villalva; y con revision del primer cuaderno, líbrese la ejecutoria correspondiente al Juez 29 menor de

Bravos para su exacto cumplimiento, testimonio al gobierno del Estado y archívese el Toca.

El C. Lic. Cipriano Piña, Magistrado de la 2a. Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por este auto, definitivamente juzgando en grado de apelación, así lo sentenció, mandó y firmó por ante mí, la secretaría.—Doy fé: Lic. Cipriano Piña.—Rúbrica.—Jesus O. Nájera, secretario.—Rúbrica.

Comunicolo á vd. para su conocimiento.—Ignacio Armendáriz, oficial 19 de la secretaría de Gobierno.

ANEXO

P A P E R S

RELATING TO THE

FOREIGN RELATIONS

OF

THE UNITED STATES,

FOR THE YEAR 1887,

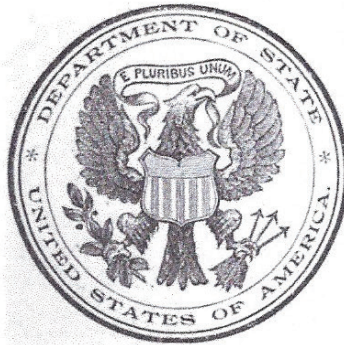
TRANSMITTED TO CONGRESS,

WITH A MESSAGE OF THE PRESIDENT,

JUNE 26, 1888,

PRECEDED BY A

**LIST OF PAPERS, WITH AN ANALYSIS OF THEIR CONTENTS, AND
FOLLOWED BY AN ALPHABETICAL INDEX OF SUBJECTS.**



WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1888.

9256 F R 87—I

SEGUNDA PARTE

NUEVA CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA

CASO DEL AMERICANO A. K. CUTTING.

NUEVAS NOTAS

CAMBIADAS

ENTRE LA LEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Y EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DE LA

REPÚBLICA MEXICANA



MÉXICO

IMPRESA DE FRANCISCO DIAZ DE LEON

Calle de Lerdo número 3

—
1888

TRADUCCIÓN

LEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS,
México, Noviembre 15 de 1887.

SEÑOR:

Apenas sorprenderá á Vuestra Excelencia saber que en esta comunicación me propongo abrir de nuevo, por orden de mi Gobierno, la discusión de las importantes cuestiones suscitadas por el arresto, prisión y sentencia de Mr. A. K. Cutting, ciudadano americano, por un delito que se dice cometió fuera de la jurisdicción mexicana. La libertad dada á Mr. Cutting por el Tribunal Superior, en virtud de un punto secundario, decidió solamente la cuestión de su libertad personal. Los razonamientos esenciales quedan en pie; y hoy que ha desaparecido la excitación que primeramente produjo la discusión del caso, es de esperar que sean estudiados con la calma prudente y la moderación que su importancia exige.

Mi Gobierno tiene doble objeto para tratar ahora de nuevo este caso:

Primero. Manifiestar á Vuestra Excelencia que, en opinión de mi Gobierno, debe darse á Mr. Cutting una indemnización por su arresto y detención en México, fundados en el cargo de haber publicado un libelo en los Estados Unidos contra un mexicano, y

Segundo. Sugerir al Gobierno de Vuestra Excelencia que se derogue la disposición legal que confiere esa jurisdicción extraterritorial, en obsequio de la buena vecindad y amistosas relaciones futuras, y porque invade la soberanía independiente de una nación colindante y amiga.

Por mandato de mi Gobierno he puesto ya en manos de Vuestra Excelencia la copia de un informe muy hábil, y realmente puede decirse, muy completo, sobre “El Crimen Extraterritorial”, el cual fué preparado á petición del Departamento de Estado con referencia especial al caso de Cutting. Ruego á Vuestra Excelencia lo examine muy cuidadosamente y lo considere como parte de los documentos presentados por mi Gobierno en este caso. Después de estudiar con calma ese informe, estoy seguro de que Vuestra Excelencia encontrará poderosas razones para modificar las

opiniones expuestas por el Gobierno mexicano en los primeros pasos de la discusión de este importante caso, si realmente vd. no deja de abrigar duda con respecto á que no puede sostenerse la suposición del Gobierno mexicano de que sus propias obligaciones, conforme al Derecho de gentes, pueden ser nulificadas por sus propias leyes locales.

Antes de proceder á manifestar por qué, en opinión de mi Gobierno, debe pedirse una indemnización á México, permita Vuestra Excelencia que exponga algunas razones por las cuales su Gobierno debería cambiar sus leyes de manera que le permitan cumplir con sus obligaciones internacionales. Con este fin, tengo orden de decir á Vuestra Excelencia que sería altamente honroso para el Gobierno de México seguir en este respecto el ejemplo del Gobierno de Francia que en 1852 retiró una medida censurable semejante al art. 186 del Código Penal Mexicano, con tal de mantener relaciones amistosas con la Gran Bretaña. En 10 de Junio de 1852 el Cuerpo Legislativo francés aprobó, por 191 votos contra 5, un proyecto de ley confiriendo jurisdicción á los tribunales de Francia sobre delitos cometidos por extranjeros contra franceses fuera de aquel país. A consecuencia de representaciones hechas por el Gobierno de la Gran Bretaña, ese proyecto fué retirado. El Marqués de Normanby, anteriormente Embajador Británico en París, declaró en seguida en la Cámara de los Lores, que durante todo el período en que había trabajado por mantener relaciones amistosas entre la Gran Bretaña y Francia, pocas veces había escuchado manifestación alguna con mayor placer que la de la manera con que el Gobierno francés había retirado este censurable proyecto de ley. Mr. Bayard, en las instrucciones que me dirige, se refiere al caso citado, y observa lo siguiente:

Sinceramente deseoso de mantener con el Gobierno de México las relaciones más cordiales y amistosas, no creo que ese fin pueda lograrse de una manera más señalada que siguiendo ese Gobierno el ejemplo altamente honroso de Francia, de remover de las relaciones amistosas de los dos países una ley que permanece como amenaza constante para su continuación.

Recomendando á México la adopción de dicha política en este oportuno momento, en que la cuestión puede ser estudiada desapasionadamente, mi Gobierno sólo indica lo que él mismo ha puesto en práctica en circunstancias algo parecidas. Así se observa por la acción del Congreso en el caso de Mc. Leod, que ocurrió en 1842, al cual ruego á Vuestra Excelencia me permita llamar su atención. Cuando en ese caso, respondiendo á la demanda del Gobierno inglés de libertar al preso que estaba bajo la custodia de las autoridades del Estado de Nueva York, el Gobierno de los Estados

Unidos se vió obligado á negarse á ello en razón de que las autoridades federales no tenían derecho para intervenir; el Congreso reformó la ley que reglamenta la expedición de mandamientos de *habeas corpus*, con el propósito de facilitar al Gobierno de los Estados Unidos el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En ese caso la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos á la demanda de libertad no fué diferente de la que dió el Gobierno de Vuestra Excelencia á la petición de libertar á Cutting. Pero los Estados Unidos se apresuraron á poner de acuerdo sus leyes locales con sus obligaciones internacionales.

Permítame Vuestra Excelencia que, al terminar esta parte de mi nota, haga otra cita de las instrucciones que he recibido sobre este asunto del Honorable Secretario de Estado. Mr. Bayard escribe lo siguiente:

La importancia de la armonía en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales por los Gobiernos de los Estados Unidos y México, y el deseo de este Gobierno de mantener las más estrechas y amistosas relaciones entre estos dos países vecinos, fue ron tan vivamente manifestados por el Presidente en su último Mensaje anual al Congreso, que es conveniente citar el siguiente pasaje relativo:

En el caso de México hay razones especialmente poderosas para la armonía perfecta en el ejercicio mutuo de la jurisdicción. La naturaleza nos ha hecho irrevocablemente vecinos, y la prudencia y los buenos sentimientos deberían hacernos amigos.

La afluencia de capital y empresas de los Estados Unidos es un factor evidente para ayudar al desarrollo de los recursos de México y fomentar la prosperidad de ambos países.

Para cooperar á esta importante obra, debe removerse todo motivo de temor para la seguridad de las personas y propiedades, y espero que, en obsequio de la buena vecindad, se modificará la ley antes citada, de manera que desaparezcan las posibilidades de peligro que hoy existen para la paz de los dos países.

A fin de exponer con claridad las razones por las cuales debería pagarse una indemnización, se hace necesario recordar los hechos esenciales que se relacionan con el arresto ilegal, detención, enjuiciamiento y sentencia de Cutting, por conocidos que sean de Vuestra Excelencia.

A. K. Cutting fué arrestado el 23 de Junio de 1886 á petición de Emigdio Medina, ciudadano de Paso del Norte, por haber publicado un supuesto libelo en Texas. Fué llevado ante el tribunal mexicano; no se le dejó tomar consultor ni intérprete cuando los solicitó; no se le permitió dar fianza aunque á ello estaba dispuesto; se le llevó á la cárcel y fué sujetado á mucha crueldad

estando allí. Todo ésto porque cometió un acto inconveniente, en concepto de un ciudadano mexicano, y porque un Juez mexicano se consideró competente para castigar así á un ciudadano americano, conforme á un artículo del Código Penal Mexicano, el 186, que traducido es como sigue:

Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos ó contra extranjeros, ó por un extranjero contra mexicanos, podrán ser castigados en la República (México) y con arreglo á sus leyes, si concurren los requisitos siguientes:

I. Que el acusado esté en la República, ya sea porque haya venido espontáneamente, ó ya porque se haya obtenido su extradición.

II. Que si el ofendido fuere extranjero, haya presentado la correspondiente queja legal.

III. Que el acusado no haya sido juzgado definitivamente en el país en que el delito fué cometido, ó que si lo fué, no haya sido absuelto, amnistiado ó indultado.

IV. Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República.

V. Que con arreglo á las leyes de la República merezca el delito una pena más grave que la de arresto mayor (detención de uno á once meses).

Mi Gobierno negó al de Vuestra Excelencia el derecho de arrogarse la jurisdicción en el caso, simplemente en virtud de una ley local, que está en pugna con los principios reconocidos del Derecho Internacional. Mr. Bayard exigió la libertad de Cutting, fundándose:

Primero. En que los tribunales de justicia de México no eran competentes, según las reglas del Derecho Internacional, para juzgar á un ciudadano de los Estados Unidos por un delito cometido y consumado en su propio país, por la sola razón de que sucedió que el ofendido era mexicano, y

Segundo. En que los principios de justicia, sancionados en común por todas las naciones civilizadas, habían sido violados con su tratamiento.

Entre estos principios sancionados, se decía, están el derecho de exigir que se examinen por un tribunal imparcial los hechos en virtud de los cuales se presentó la acusación; la explicación de estos hechos al acusado; la oportunidad que se le da de tomar defensor; el término necesario para preparar su defensa; el permiso, en todos los casos que no sean graves, de quedar en libertad, bajo fianza, hasta ser juzgado; la debida exhibición, bajo juramento, de todas las pruebas contra el acusado, dándole el derecho de hacer repreguntas; el derecho de presentar sus propias pruebas en descargo; y la libertad, aun de prisión temporal, en todos los casos en que la acusación es

simplemente de haber amenazado alterar la paz, y donde se ofrece la debida seguridad por la conservación de la paz.

Tengo orden de manifestar á Vuestra Excelencia que la importancia de esta segunda razón para exigir la libertad de Mr. Cutting, no debe desestimarse, aunque en el curso del tiempo fué ofuscada por la cuestión jurisdiccional, que se suscitó por la pretensión del Gobierno mexicano, de que tenía el derecho de juzgar y castigar á un ciudadano de los Estados Unidos por un delito cometido por él en su propio país contra un mexicano.

Esta pretensión, dice Mr. Bayard, que está definida en el art. 186 del Código Penal Mexicano, no sólo fué defendida y hecha efectiva por el Juez Zubía, que conoció del caso de Mr. Cutting, y cuya decisión fué confirmada por la Suprema Corte de Chihuahua, sino que fué defendida y justificada por el Gobierno de México, en comunicaciones á este Departamento, emanando ambas del Ministro Mexicano en esta capital y del Departamento de Relaciones Exteriores en la ciudad de México.

La declaración del cónsul en Paso del Norte de que Mr. Cutting fué arrestado por el cargo de publicar en Texas un supuesto libelo contra un mexicano, está plenamente apoyada por la opinión del Juez Zubía. Se dice en esa decisión, bajo el encabezado de Resultando 6o.: Que el 22 de Junio de 1886, el demandante amplió la acusación, manifestando que aunque el periódico *El Paso Sunday Herald* se publica en Texas, Mr. Cutting había hecho circular un gran número de ejemplares en esta ciudad y en el interior de la República, habiendo sido leído por más de tres personas, por cuya razón se había expedido una orden para recoger los ejemplares que aun había en el despacho de dicho Cutting. De esta declaración se infiere concluyentemente, que el cargo por el cual se expidió con anterioridad la orden de arresto, fué la publicación del supuesto libelo en Texas. No importa que esa publicación haya sido considerada desde un principio por el tribunal como la ruptura de una conciliación en que con anterioridad entraran Cutting y el demandante mexicano Medina, ó que se reputara como un delito distinto y original. En uno y otro caso, la facultad que se arrogó el tribunal mexicano, de conformidad con la ley de México, de castigar á un ciudadano de los Estados Unidos por un delito exclusivamente cometido y consumado en su propio país contra las leyes del mismo, fué un ataque á la independencia de este Gobierno. Decir que una conciliación en México, que obra allí como una suspensión de procedimientos criminales, obliga á un ciudadano de los Estados Unidos en su propio país, es simplemente asegurar que la ley penal mexicana es obligatoria para los ciudadanos de los Estados Unidos en su propio país. Aparece, sin embargo, del considerando 6o. del fallo del Juez Zubía, que la pretensión ex-

presada en el art. 186 del Código Penal Mexicano, se hizo, efectiva realmente en el caso de que se trata, como un fundamento distinto y original para la formación de causa. La decisión del Juez Zubía fué construida alternativamente, y se sostuvo que, aun suponiendo que la difamación proviniese solamente de la publicación del supuesto libelo en *El Paso* (Texas) *Sunday Herald*, el art. 186 del Código Penal Mexicano señalaba pena en ese caso, diciendo el Juez Zubía que no incumbía al juez examinar el principio asentado en aquel artículo, sino aplicarlo íntegro, por ser la ley vigente en el Estado de Chihuahua. En ninguna parte aparece que la publicación fuese circulada alguna vez en México para constituir el crimen de difamación conforme á la ley mexicana. Según se ha visto, ésto no formó parte del cargo primitivo por el cual se expidió la orden de arresto de Mr. Cutting, y al paso que se dice en la decisión del Juez Zubía que fué expedida una orden para recoger los ejemplares del periódico de Texas que pudieran encontrarse en el despacho de Mr. Cutting, en Paso del Norte, en ninguna parte de esa decisión aparece que se encontrasen verdaderamente algunos ejemplares en ese ú otro punto de México.

Pero sea ésto como fuere, este Gobierno se ve todavía obligado á negar lo que negó el 19 de Julio de 1886 y lo que el Gobierno mexicano ha sostenido desde entonces ejecutiva y jurisdiccionalmente: esto es, que puede hacerse responder en México á un ciudadano de los Estados Unidos, conforme á las reglas del Derecho Internacional, por un delito cometido en los Estados Unidos, simplemente porque la persona ofendida resultó ser un ciudadano mexicano. El Gobierno de México se ha esforzado por sostener esta pretensión, fundándose en dos razones: primera, que tal pretensión está justificada por las reglas del Derecho Internacional y la Legislación positiva de ambos países; y segunda, que sosteniéndose esa pretensión en la Legislación de México, el asunto es solamente para ser decidido por los tribunales mexicanos. Con respecto al último de estos fundamentos, sólo es necesario decir que, si un Gobierno pudiera establecer sus propias leyes locales como última prueba de sus derechos y obligaciones internacionales, las reglas del Derecho Internacional no serían sino la sombra de un nombre, y no ofrecerían protección alguna para los Estados ó individuos. Se ha sostenido constantemente, y se ha admitido también por el Gobierno de los Estados Unidos, que un Gobierno no puede apelar á sus leyes locales como respuesta á demandas del cumplimiento de sus deberes internacionales. Tales disposiciones podrán ó sobrepajar ó no llenar los requisitos del derecho internacional, y en uno y otro caso este derecho es la piedra de toque de las obligaciones de la nación, y no lo son sus propias leyes locales. Esta teoría parece hoy estar tan bien comprendida y tan generalmente aceptada, que no se considera necesario hacer citas ó aducir precedentes en su apoyo.

Al pasar al examen de la pretensión de México de tener jurisdicción, de conformidad con los principios del Derecho Internacional, me encarga Mr.

Bayard que manifieste que no ha pretendido, como parece haberse supuesto, que si Mr. Cutting hubiera de hecho circulado en México un libelo impreso en Texas, de tal modo que esa circulación constituyese una publicación de ese libelo en México, según los preceptos del Derecho Mexicano, no pudiese haber sido juzgado y castigado en México por ese delito.

En cuanto á la cuestión de derecho internacional, Mr. Bayard no puede descubrir principio alguno que justifique la pretensión contenida en el art. 186 del Código Penal mexicano de arrogarse la jurisdicción.

No hay principio más firmemente establecido, observa Mr. Bayard, que el de que las leyes penales de un país no tienen fuerza extraterritorial. Es verdad que cada Estado puede disponer que sus propios ciudadanos sean castigados por acciones que cometan fuera de su territorio; pero en este caso la ley penal es disposición propia del estatuto personal, y si bien puede ser en muchos casos causa de actos inconvenientes é injustos, éste es asunto en que ningún otro gobierno tiene el derecho de intervenir; pero decir que las leyes penales de un país pueden ser obligatorias para extranjeros y regular su conducta en su propio país ó algún otro extranjero, equivale á afirmar que se tiene jurisdicción sobre esos países y á menospreciar su independencia. Esta es actualmente la opinión uniforme de las principales autoridades en Derecho Internacional. Por consiguiente, no existiendo principio alguno de Derecho Internacional que justifique tal pretensión, toda afirmación á este respecto tiene que descansar, como excepción á la regla, en la general aprobación de las naciones ó en convenios expresos. Semejante aprobación no puede encontrarse, con respecto á la pretensión contenida en el art. 186 del Código Penal Mexicano, en la legislación de la época presente; aunque ella ha sido dada anteriormente por muchos de los Estados menores, está generalmente abandonada en la actualidad y puede ser considerada como fuera de uso.

De todas las naciones europeas, las de Grecia y Rusia son las únicas en cuya legislación he encontrado sostenida una jurisdicción general del Estado sobre delitos cometidos en el exterior por extranjeros contra sus subditos. Las leyes de esos países confieren á sus tribunales de justicia jurisdicción general sobre tales delitos. En Suecia y Noruega su castigo es discrecional y depende de que el Rey ordene que se siga causa. En Austria se castigan los delitos graves cometidos por extranjeros en el exterior, pero no las infracciones leves (la difamación de que se acusó á Mr. Cutting es únicamente una infracción leve, tanto conforme á la ley mexicana como según la de Texas), y tan sólo (exceptuándose los delitos contra la seguridad del Estado, los sellos y monedas nacionales, etc.) después de haberse ofrecido la entrega del acusado al Estado en cuyo territorio se cometió el delito y de no haber sido aceptada por el mismo. En Hungría é Italia la ley es sustancialmente igual á este respecto; pero Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, La Gran Bretaña, el Luxemburgo,

los Países Bajos, Portugal, España y Suiza, no castigan en ningún caso ó circunstancia delitos cometidos contra sus ciudadanos ó súbditos por extranjeros fuera de sus respectivos territorios.

Así se ve que Rusia y Grecia son las únicas naciones europeas que pretenden de una manera tan extensa y absoluta como México tener el derecho de ejercer la jurisdicción extraterritorial; porque el Juez Zubía, cuyo fallo fué confirmado por la Suprema Corte de Chihuahua, declaró que no correspondía á los tribunales de México examinar el principio asentado en el artículo 186, sino aplicarlo en toda su plenitud, por ser la ley vigente en el Estado de Chihuahua; y el Sr. Mariscal manifestó que el Ejecutivo de México no tenía facultad para intervenir en la aplicación de la ley por los tribunales de justicia; así es que la pretensión de México es absoluta y sobrepuja á la de Suecia y Noruega, en cuyos países la formación de causa puede tener lugar solamente por mandato del Rey.

Las leyes de Francia no sostienen tampoco el principio manifestado en el art. 186. Un examen cuidadoso de esas leyes demuestra que el Código francés autoriza la formación de causa á extranjeros por delitos cometidos fuera del territorio de Francia, únicamente en los casos excepcionales de delitos contra la seguridad del Estado y de falsificación del sello nacional, de monedas del país que tienen circulación y de documentos nacionales ó billetes de banco autorizados por la ley. El Tribunal de Casación de Francia falló en 1873, en el caso de Raymond Fornage, que Vuestra Excelencia encontrará detallado en el informe sobre "Crimen Extraterritorial", que, con excepción de los delitos mencionados, los tribunales franceses no tienen facultad para juzgar á extranjeros por actos que cometan en un país extranjero; que su incompetencia á este respecto es absoluta y permanente, y no puede ser remediada por el silencio ó consentimiento del acusado; que el derecho de castigar emana del derecho de soberanía, el cual no se extiende más allá de los límites del territorio; y que esa incompetencia de los tribunales franceses es siempre igual en cada uno de los períodos de los procesos.

Lo mismo puede decirse en cuanto á la legislación de las repúblicas hispano-americanas; no apoya la idea consignada en el art. 186. Mr. Bayard observa: Ni en la República Argentina, ni en Chile, ni en el Perú, ni en Colombia, ni en Costa Rica existe ley alguna que autorice el castigo de extranjeros por delitos perpetrados en el exterior contra ciudadanos de esos países.

En conclusión me permito hacer otra cita larga de las muy comprensivas instrucciones que Mr. Bayard me tiene dadas sobre este importante asunto. Después de examinar la legislación de otros países, dice el Honorable Secretario lo que sigue:

Constantemente se ha sostenido en los Estados Unidos como regla de conducta, que ciudadanos de los Estados Unidos no pueden ser considerados

responsables en países extranjeros por delitos que solamente hayan sido cometidos y consumados en su propio país ó en otros que no están sujetos á la jurisdicción del Estado que castiga. Cuando un ciudadano de los Estados Unidos comete en su propio país una violación de sus leyes, tiene el derecho de ser juzgado conformé á ellas y á las garantías fundamentales que la Constitución Federal otorga para juicios criminales en cualquiera parte de los Estados Unidos. Decir que por su delito puede ser juzgado en otro país, simplemente por la circunstancia de que el ofendido es ciudadano del mismo, sería afirmar que los extranjeros, al llegar á los Estados Unidos, traen consigo las leyes penales del país de su procedencia y así sujetan á los ciudadanos de los Estados Unidos en su propio país á una responsabilidad criminal indefinida. Tal pretensión no puede nunca ser admitida por este Gobierno.

Se ha visto que el art. 186 del Código Penal Mexicano requiere que los delitos comprendidos en él sean también castigables en el lugar de su comisión; y los procedimientos del Juez Zubía, según se refieren en su fallo, muestran que el Código Penal de Texas fué tomado en cuenta (*introduced*) en el juicio para probar que Mr. Cutting había cometido el delito de difamación (*libel*) en Texas. Con este código á la vista, el Juez Zubía sostuvo que sus disposiciones habían sido violadas. Así, obrando como magistrado mexicano, hizo lo que ningún juez de Texas podía haber hecho si se hubiera encausado á Mr. Cutting en aquel Estado por la supuesta infracción de sus leyes.

Por el Código de Texas (sección 2,291) *no es delito el publicar manifestaciones veraces de hechos respecto á la competencia de cualquiera persona para cualquiera ocupación, profesión ú oficio.*

Pero ésto no es todo. En virtud de la ley fundamental del Estado ningún juez puede declarar culpable á una persona por difamación, porque la sección 6a. del art. 1 de la Constitución de Texas, declara: *que en todas las demandas judiciales por difamación, el Jurado tiene la facultad de fijar el derecho y los hechos bajo la dirección del tribunal respectivo, como en otros casos.*

Esta prevención hace que sea del todo indisculpable en un juez, ora nacional ó extranjero, el que falle por sí mismo que alguien ha cometido una difamación según la ley de Texas. ~So se muestra tampoco que el Juez Zubía haya intentado siquiera averiguar si era verdad lo que se decía en la supuesta manifestación difamatoria de Mr. Cutting.

He hecho estas citas profusas de las instrucciones de Mr. Bayard, porque me parece que sus poderosísimos razonamientos son muy convincentes, y porque no podía discernir una manera más breve de presentar á Vuestra Excelencia, con fuerza, toda esta cuestión.

Antes de terminar, me permito llamar su atención especialmente sobre las págs. 86, 87 y 88 del Informe sobre “Crimen Extraterritorial”; por ellas verá Vuestra Excelencia que la lista de códigos adjunta á la comunicación

del Departamento de Relaciones Exteriores de México, fechada el 13 de Agosto de 1886, no puede servir de fundamento para sostener la pretensión contenida en el art. 186, de que una nación tiene el derecho de castigar á un extranjero por un delito cometido contra uno de sus ciudadanos fuera de su territorio.

Me permito igualmente llamar su atención sobre lo que el autor de dicho informe observa con respecto á las opiniones de publicistas como Fiore, Phillimore, Wheaton, Hall, Story, Bar, Field, Wharton, Sir G. C. Lewis, Heffter, M. Faustin Hélie, Pradier Fodéré y hasta el Presidente Woolsey, así como otros á que se refieren las págs. 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98 del Informe sobre “Crimen Extraterritorial”.

Por último, deseo hacer saber á Vuestra Excelencia que por todas las razones expuestas mi Gobierno cree que con el arresto, prisión, juicio y sentencia de Cutting, como también con habérsele denegado los procedimientos de justicia sancionados por todas las naciones civilizadas, se violaron las reglas del Derecho Internacional, que son obligatorias para México á pesar de cualesquiera de sus disposiciones legales que estén en conflicto con él, y que, por consiguiente, México debería estar pronto y bien dispuesto para dar toda la compensación que pueda, ofreciendo pagar á la parte agraviada una indemnización proporcionada al perjuicio sufrido.

Renuevo á Vuestra Excelencia la seguridad de mi más alta estimación.

Thomas B. CONNERY.

A Su Excelencia Ignacio Mariscal, etc., etc., etc.

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

México, 10 de Febrero de 1888.

SEÑOR ENCARGADO DE NEGOCIOS:

He tenido la honra de recibir la nota de vd. fechada el 15 de Noviembre último, en la cual, por instrucciones de su Gobierno, vuelve á tratarse del caso del ciudadano de los Estados Unidos A. K. Cutting, materia de discusión en ambos países hace más de año y medio. Comienza vd. diciendo que apenas ha de sorprenderme el que vuelva á tocarse este asunto. En efecto, me

había llegado la noticia de que, por orden del Departamento de Estado en Washington, se estaban estudiando muy detenidamente las cuestiones sobre jurisdicción ex-territorial relacionadas con dicho caso. Bien cabía, por lo mismo, esperar alguna propuesta para el arreglo convencional de esa materia, por medio de un tratado con que ambas partes modificaran las legislaciones vigentes en su territorio. Eso no me habría sorprendido, cualquiera que fuese la contestación que, en nombre del Gobierno mexicano, hubiese tenido que dar á una proposición semejante; mas confieso ingenuamente mi sorpresa al ver que la discusión se renueva con el doble objeto de pedir (ó preparar tal pedido) una indemnización á favor del mencionado Cutting, y de hacer que México solamente sea quien reforme su legislación, mejor dicho, la de varios Estados de la Unión mexicana, por la razón, que se alega, de ser opuesta al derecho internacional.

No haré por ahora mérito del notorio carácter del reclamante, á quien llamo así porque es sabido que Cutting fué quien presentó la reclamación que hoy se hace valer sin fijarle aún su cuantía; ni hablaré de los proyectos de filibusterismo con que no ha cesado ese hombre de amenazar á México; porque se me contestaría que en una cuestión de principios debe hacerse abstracción de las personas. Sin embargo, no puedo menos de observar que cuando un gobierno, como el de los Estados Unidos, se resuelve á impartir su protección á un individuo en las circunstancias que hoy caracterizan á Cutting, ha de estar profundamente convencido de la justicia que le asiste; y entonces me es preciso lamentar que se haya llegado á esa convicción, puesto que, á juicio del Gobierno mexicano, ella carece de sólidos fundamentos. Debe, con todo, esperarse que pasada, como vd. lo advierte, la excitación que (por causas accidentales) produjo la prisión de Cutting, el Honorable Sr. Bayard, escuchando las razones que aleguemos, y examinando de nuevo la cuestión, se convenza de que las dos peticiones implícitamente contenidas en la nota de vd., no podrían llevarse adelante sin violar la justicia y equidad obligatorias para todas las naciones.

Ambas tienen un fundamento en común; á saber, la pretendida oposición del art. 186 del Código Penal de Chihuahua á los principios del derecho de gentes; mas como la petición relativa á que Cutting sea indemnizado, se apoya también en otros fundamentos, y puede demostrarse que no la favorece el argumento alegado con relación á dicho artículo, aun suponiendo que éste fuera opuesto á la ley de las naciones, voy primero á tratar de lo que concierne á la reclamación de Cutting, para ocuparme después en vindicar aquella parte de la legislación mexicana del injusto reproche que se le ha dirigido. No lo haré con la mucha erudición acopiada en el informe ó libro preparado para impugnar ese artículo, y que vd. se

sirvió entregarme por orden de su gobierno, declarando ahora que forma parte de sus alegatos; no lo haré así ciertamente, porque, considerando oportuno dar á vd. una contestación sin gran retardo, no cuento con el tiempo de que se ha dispuesto para formar esa memoria. Por fortuna no es necesario entrar en los detalles de tan apreciable estudio, y aun aceptando casi todas sus proposiciones, todavía puede ponerse en relieve la falta de razón para acusar al legislador mexicano de infractor de las reglas á que, sin disputa, deben someterse todos los países civilizados.

Volviendo á la petición de que sea indemnizado Cutting, su principal fundamento consiste en alegar que los tribunales de México no tenían jurisdicción para juzgarlo por el libelo de que fué autor en territorio de los Estados Unidos. Más adelante veremos que sí la tenían, en virtud de una disposición legislativa del país, la cual no contraría los principios incuestionables aceptados por todas las naciones, no estando por lo mismo sujeta á fundada objeción de parte de un gobierno extranjero. Admitamos, sin embargo, por un momento, que no existía esa jurisdicción para el delito cometido en el exterior; la había indudablemente para juzgar al responsable por la circulación que tuvo el libelo en territorio mexicano, y también por ese otro motivo fué juzgado Cutting, como aparece de la sentencia del Juez Zubía. Existiendo pues, competencia en el tribunal por una ó por otra causa, viene á tierra el fundamento de la reclamación relativo á falta de ella, que es el principal de los alegados.

Verdad es que, en las instrucciones dadas á vd., se asienta que en ninguna parte consta que el libelo fuese circulado en Paso del Norte, ni aparece que se recogieran ejemplares de él en cumplimiento de la orden de que habla la sentencia; pero con razón no se insiste mucho en ésto, pues negar un hecho que se afirma en una sentencia y que además fué público en aquel lugar, sólo porque no se encuentra, ó se presume no hallarse consignado en determinada forma, es llevar demasiado lejos el celo en la argumentación.

Si, por otra parte, en la orden de prisión contra Cutting no se consignó más que el delito cometido en Texas y no su continuación en México, ésto se halla explicado en la sentencia y nada tiene de extraño en la manera de proceder judicialmente en el país. No creo que deba yo insistir en contestar esas alegaciones hechas como de paso, y que no podrían apurarse en una discusión como la presente. Lo innegable es que el tribunal fundó su jurisdicción no sólo en la formación del libelo, en Texas, sino en su circulación en Chihuahua; y si se pretende que el primer fundamento no podía existir, no sucede lo mismo con el segundo, cuya existencia se reconoce, salva la duda, del todo inadmisibles, sobre el hecho de que comenzara á circular el impreso en territorio mexicano.

Para comprender que necesariamente ha debido circularse desde luego el libelo en Paso del Norte, basta saber que esa población y El Paso, Texas, se hallan en íntimo contacto, formando casi una sola, y que Cutting no escribía sus insultos á Medina para el público especial de la segunda, que no conocía al insultado, sino para el de la primera, donde éste era bien conocido entre sus paisanos.

Los otros fundamentos de la reclamación de perjuicios consisten en una serie de cargos respecto al tratamiento que recibió Cutting en su prisión y al tiempo de ser juzgado, cargos que sólo en parte habían sido formulados antes de ahora, y de que no tuvo conocimiento el Gobierno de esta República. No puedo menos de insertar aquí, porque me llama la atención, lo que sobre el particular contiene la nota de vd.:

El Sr. Bayard (se dice en ella) pidió que Cutting fuese puesto en libertad por las siguientes razones:

Primera, porque los tribunales de México no eran competentes, etc. (lo relativo á jurisdicción que trataremos después);

Segunda, porque los principios de justicia, sancionados en común por todas las naciones civilizadas, habían sido violados en su tratamiento (el dado á Cutting).

Entre estos principios, se decía (así lo copia vd.), están el derecho de exigir que se examinen por un tribunal imparcial los hechos en virtud de los cuales se presentó la acusación, la explicación de estos hechos al acusado, la oportunidad que se le da de tomar defensor, el término necesario para preparar su defensa, el permiso en todos los casos que no sean graves de quedar en libertad bajo fianza hasta ser juzgado, la debida exhibición, bajo juramento, de todas las pruebas contra el acusado, dándole el derecho de hacer repreguntas, el derecho de presentar sus propias pruebas en descargo, y la libertad, aun de prisión temporal, en todos los casos en que la acusación es simplemente de haber amenazado alterar la paz y cuando se ofrece la debida seguridad por la conservación de la paz.

Este pasaje de la nota de vd., que parece haberse tomado de otra dirigida por el Sr. Bayard al Sr. Jackson, entonces Ministro de los Estados Unidos en México, y publicada con posterioridad á los sucesos, encierra conceptos cuya aplicación al caso no se comprende, y varios cargos sobre violación de derechos de que no se dió noticia al Gobierno mexicano para pedirle que pusiese el remedio, ó para insistir en la liberación de Cutting. Sobre este último punto, si bien asienta vd. que el Honorable Secretario de Estado pidió la libertad del preso por las razones que asienta, debo entender que esas son las que lo indujeron á dar el paso, no las que se alegaron á este

Gobierno al formular tal pretensión; pues sabido es que no se le alegaron ningunas, sino que simplemente se le trascibió por el Sr. Jackson el lacónico telegrama en que su superior le previno exigiera la inmediata liberación de aquel ciudadano de los Estados Unidos, preso ilegalmente, según lo decía el mensaje. Los fundamentos que entonces pudiera tener semejante petición, los hemos comprendido después, infiriéndolos de conversaciones que se tuvieron con nuestro representante en Washington, ó de publicaciones hechas allá para informar al Congreso de los Estados Unidos.

Volviendo á los cargos que en su totalidad se nos hacen hasta ahora, por el supuesto maltratamiento dado á Cutting, recordaré que nada se nos dijo acerca de él sino en una nota que me dirigió el citado Sr. Jackson el 6 de Julio de 1886. En ella se exponía que Cutting estaba preso en un lugar sucio y malsano, donde había ocho ó diez criminales; que no se le admitía fianza carcelera; y no se había escuchado al Cónsul en su favor; por lo que, y en atención á que corría peligro la salud del preso, suplicaba el Sr. Jackson que se aliviara su situación sin demora.

A ésto se contestó avisando que ya se recomendaba al Gobierno de Chihuahua (como en efecto se hizo) que se administrara pronta y cumplida justicia, aliviando la situación material del preso y concediéndole todo lo que permitieran las leyes. Entre lo que expuso entonces el Ministro de los Estados Unidos y lo que ahora se dice, hay alguna diferencia; pues no habló el Sr. Jackson de que se hubieran estorbado á Cutting los medios de defensa, negándole un defensor cuando lo solicitó, no informándolo de las pruebas que había en su contra, rehusando admitirle fianza, etc., según ahora se alega para reclamar los perjuicios. Esta omisión tiene importancia trascendental, puesto que si no se apuraron los recursos que pudo haber entonces, ni aun hubo queja al Gobierno de la Nación, no podría hacerse responsable del abuso cometido, en términos de pedirle indemnización por faltas atribuidas á autoridades locales.

No será, sin embargo, necesario hacer valer esta consideración; porque la principal á que debe atenderse, es que todos los cargos expresados sobre maltratamiento al preso y oposición á que usara los medios legales para defenderse, son enteramente gratuitos y calumniosos, obra de la imaginación y la malicia de Cutting, quien, alentado desde un principio por la actitud del Cónsul Brigham, rehusó toda especie de defensa alegando que él solamente dependía de su Cónsul y su Gobierno. Negaba el citado Cónsul la posibilidad de que se procediese judicialmente en México por un acto cualquiera y de cualquiera especie cometido en los Estados Unidos; es decir, todo linaje de jurisdicción ex-territorial; y de esa creencia absoluta, de ese error, que va más lejos de lo que ahora infiere de su estudio el Sr. Moore, de

esa confianza en su saber jurídico, sin el necesario examen de la legislación del país, infririó Mr. Brigham que debía oponerse á todo procedimiento. En consecuencia, se opuso en nombre del Gobierno de los Estados Unidos, á quien dijo representaba en Paso del Norte, olvidando que los buenos oficios permisibles á un Cónsul distan mucho de ser funciones representativas y diplomáticas.

Cutting, por su parte, al verse apoyado de tal manera, comprendió seguramente desde entonces la ventaja que podría sacar, en una futura reclamación, de sus supuestos sufrimientos y de su voluntaria ó aparente falta de defensa. Así es que, habiendo de pronto nombrado defensor al Lic. D. José M. Barajas, en seguida, y ya de acuerdo con el Cónsul, no quiso valerse de ese abogado, ni se prestó á nombrar otro alguno, por lo que tuvo el Juez que designarle uno de oficio. Tampoco pidió libertad bajo de fianza, y aun la rehusó expresamente cuando le fué ofrecida por orden del Tribunal Superior de Chihuahua; encerrándose siempre en la misma respuesta á toda notificación “que él no dependía más que de su Cónsul y sólo aceptaba libertad completa”. Él y su Cónsul, por diferentes motivos, no querían, al parecer, ni que se discutiese la falta de jurisdicción que alegaban, como si, hasta para declinar la de un tribunal cualquiera, no fuese necesario usar de los medios legales, exponer sus razones el acusado y esperar la decisión judicial en la forma establecida.

Que la conducta de ambos fué la indicada, y que la falta de defensa alegada por Cutting fué obra de su malicioso capricho, lo demuestra el informe que acompaño á esta nota, rendido por el Juez ó Alcalde Castañeda y que no se ha enviado anteriormente al Gobierno de vd. porque, según ya he dicho, no se conocían debidamente las acusaciones que ahora se puntualizan contra los procedimientos de dicho alcalde; habiendo, además, tomado en aquellos dias la discusión del caso un giro muy diferente.

Ese informe, rendido con arreglo á las constancias de autos, contiene un extracto de todo lo ocurrido, y en él se advierten las razones más ó menos mal expuestas, pero verdaderas en el fondo, por las cuales el Juez no informó oficialmente al Cónsul acerca del proceso, según él lo pretendía, cual si se tratase de un funcionario que por derecho internacional, ó por alguna convención, tuviese facultad para intervenir en asuntos judiciales. En el mismo documento se ve que desde el principio se informó á Cutting de la acusación, de quién era la parte acusadora, y de que podía nombrar defensor, lo cual hizo según referí anteriormente. Se ve asimismo que el Juez procuró colocarlo y lo puso en el departamento más cómodo (ó, si se quiere, menos incómodo), así como en el más higiénico de los que había en la cárcel, previendo que, por tratarse de aquel extranjero, habría quejas sobre

el particular. Allí también consta que el preso, una vez habiendo ocurrido á su Cónsul, é inspirado por él, no quería responder nada, ó si algo contestaba no quería firmarlo, reputándose bajo la exclusiva jurisdicción consular y de su Gobierno en Washington, prácticamente ex-territorializado. Allí, por último, aparece que ni pidió libertad bajo de fianza, ni quiso aceptarla cuando se le ofrecía.

En cuanto á las pretendidas crueldades ejercidas con Cutting en su prisión, debo añadir que fueron desde entonces contradichas satisfactoriamente, no sólo en el informe que acabo de examinar, sino también en otras constancias. Entre ellas figura el telegrama, ya publicado, que el 23 de Julio me dirigió el Cónsul Escobar y Armendáriz, y en el cual, después de referir que Cutting había rehusado la libertad bajo de fianza decretada por el Tribunal Superior, dice lo siguiente: “Se ha mandado abrir una ventana en la sala en que está el preso, y que se le den cincuenta centavos diarios para su subsistencia, en lugar de diez que reciben los demás presos”. Estos hechos, presenciados por el referido Cónsul, que reside igualmente en Paso del Norte y El Paso, prueban que si alguna distinción se hizo entre Cutting y los demás encarcelados, fué en favor, no en contra del primero. Ahora bien: lo único que puede exigirse de una nación, es que no sujete en tales casos á los extranjeros á mayores incomodidades que á los naturales del país, no que tenga prisiones especiales para los extraños, mejores que las destinadas á los suyos.

Suponiendo que hubiera cárceles mejores para los extranjeros, muchos de ellos, especialmente los hombres como Cutting, las encontrarían demasiado incómodas y aun peligrosas para su salud. Hace poco que un ex-oficial del ejército mexicano llamado Rafael Piñal estuvo preso en Laredo, Texas, y se quejó á esta Secretaría de que se le tenía encerrado en una especie de jaula de hierro, fria y malsana, y se le daban malos alimentos. Averiguados los hechos, se supo que estaba en la misma cárcel usada para todos los presos y se le daban los mismos alimentos que á los demás. En consecuencia, el Gobierno mexicano ya no insistió en la queja que sobre esos puntos había transmitido en Washington al Gobierno de vd., comprendiendo que no hay derecho alguno para exigir sobre el particular distinciones en favor de los extranjeros.

No puedo pasar adelante sin referirme á dos objeciones especiales que el Honorable Sr. Bayard hace contra la sentencia del Juez Zubía que resolvió el caso. Para ello traduciré las palabras conducentes de las instrucciones que vd. se sirve copiarme, á fin de que se vea si les doy su verdadero sentido. “Se ha visto (dice el Secretario de Estado) que el art. 186 del Código Penal mexicano requiere que los delitos comprendidos en él sean también castiga-

bles en el lugar de su comisión, y los procedimientos del Juez Zubía, según se refieren en su fallo, muestran que el Código Penal de Texas fué tomado en cuenta (*introduced*) en el juicio para probar que Mr. Cutting había cometido el delito de difamación (*libel*) en Texas. Con este código á la vista, el Juez Zubía sostuvo que sus disposiciones habían sido violadas. Así, obrando como magistrado mexicano, hizo lo que ningún juez de Texas podía haber hecho si se hubiera encausado á Mr. Cutting en aquel Estado por la supuesta infracción de sus leyes”.

“Por el código de Texas (sec. 2291) no es delito publicar manifestaciones veraces de hechos respecto á la competencia de cualquiera persona para cualquiera ocupación, profesión ú oficio (*as to the qualification of any person for any occupation, profession or trade*)...”.

“No se muestra tampoco que el Juez Zubía haya intentado siquiera averiguar si era verdad lo que se decía en la supuesta manifestación difamatoria de Mr. Cutting”.

Tal es la primera objeción á que me refiero. Desde luego advertiré que la disposición del código texano en que se funda, se encuentra con alguna modificación en el código de Chihuahua y México (art. 613, § 2), no menos que en otros varios códigos penales. En efecto, la calificación, aun siendo muy desfavorable, que se haga de la competencia de una persona para una ocupación ú oficio, no es delito cuando se apoya en hechos, al menos en caso de hacerse por deber, ó en beneficio del público, según la legislación mexicana. Por lo mismo, si se hubiera tratado de eso, el Juez Zubía habría tenido que averiguar si existían ó no tales circunstancias en la manifestación publicada por Cutting contra Medina. Pero no se trataba de eso; y á la verdad, al formular la objeción parece haberse olvidado cuáles fueron las palabras injuriosas del primero contra el segundo. Hélas aquí literalmente, como su autor las dió á la estampa:

El Paso, Texas, June 18th, 1886.—In a late issue of *El Centinela* published in Paso del Norte, Mexico (dijo Cutting), I made the assertion that Emigdio Medina was a “fraud” and that the Spanish newspaper he proposed to issue in Paso del Norte was a scheme to *swindle* advertisers etc. ...Now I do hereby reiterate my original assertion that said Medina is a “fraud” and add “dead beat” to the same. Also that his taking advantage of the Mexican law and forcing me to a “reconciliation” was contemptible and cowardly, and in keeping with the *odorous* reputation of said Medina (*Congressional Record*, página 8401).¹

¹ El Paso, Texas, Junio 18 de 1886.— En un número reciente de *El Centinela* que se publica en Paso del Norte, México, afirmé que Emigdio Medina era un “trapacero” y que su ofrecimiento de publicar en Paso del Norte un periódico en español, era un plan para estafar

Ni las expresiones vulgares ó de *slang* “a fraud” y “a dead beat” aplicadas á un hombre, la segunda de las cuales se halla claramente definida en el diccionario de Webster, ni el llamarlo autor de un proyecto para *estafar* (a scheme to swindle), y á su reputación *odorous* en el sentido de *mal oliente*, ha sido calificarlo de inepto ó falto de competencia para alguna ocupación, sino herirlo en su reputación moral, independiente de cualquiera profesión ú oficio. Falta, por lo mismo, la base del argumento con que se ataca al Juez Zubía.

La otra objeción que se hace contra su conducta, está concebida en estos términos:

En virtud de la ley fundamental del Estado (Texas) ningún juez puede declarar culpable á una persona por difamación, porque la sección 6a. del art. 1o. de la Constitución de Texas declara *que en todas las demandas judiciales por difamación, el jurado tiene la facultad de fijar el derecho y los hechos bajo la dirección del tribunal respectivo, como en otros casos*. Esta prevención hace que sea del todo indisculpable en un juez, ora nacional ó extranjero, el que falle por sí mismo que alguien ha cometido una difamación según la ley de Texas.

También esta objeción descansa, al parecer, en un [...]. El art. 186 del código de Chihuahua no dispone que se aplique la ley del lugar en donde se cometió el acto criminoso, en cuanto al procedimiento, ó en cuanto á la especie de tribunal que haya de declarar el hecho ó el derecho, sino sólo que se consulte esa ley para ver si señala ó no alguna pena á dicho acto; y una vez que se ejerce la jurisdicción del país, la legislación extranjera no puede atenderse sino exclusivamente para aquello en que la ley nacional así lo determina. Excusado parece insistir en este punto, de por sí bastante claro.

Paso á contestar lo relativo á la segunda petición contenida en la nota de vd., y encaminada á que México reforme el art. 186 del Código Penal de Chihuahua y otros de sus Estados, porque es contrario, según se alega, al derecho internacional, y, además, para remover dificultades que puedan perturbar las buenas relaciones entre los dos países. Pero antes de entrar en esta cuestión, debo recordar cuál ha sido la tesis que he sostenido hasta ahora y sigo sosteniendo en nombre del Gobierno mexicano. Esa tesis consiste en afirmar que la jurisdicción ex-territorial establecida en dicho

á los que hacen anuncios, etc. ...Por el presente reitero mi afirmación original de que dicho Medina es un “trapacero” y añado á ésto “*dead-beat*” (hombre sin recursos ó inútil, holgazán, parásito); como también que aprovechando la ley de México para obligarme á una “reconciliación” obró de un modo vil y cobarde, que está en armonía con la *mal oliente* reputación de dicho Medina (*Congressional Record*, p. 8401).

artículo, para juzgar á los extranjeros por delitos cometidos fuera de esta República en perjuicio de mexicanos, con las limitaciones en él especificadas, no es en manera alguna contraria al derecho de gentes. No he tenido empeño en probar, porque no se trata de ello ni hay motivo para tanto, que la solución dada en ese artículo á las cuestiones sobre jurisdicción ex-territorial sea precisamente la más acertada de todas las que se han ideado, ni tampoco que convenga en todas sus partes con la adoptada hasta hoy por la mayoría de las naciones civilizadas. Basta para mi objeto que ese artículo no contradiga principios incontestables y universalmente reconocidos por dichas naciones; basta con eso para que no pueda pretenderse que México está obligado á reformar su legislación en el punto controvertido.

Cuando en Julio de 1886 se trató del caso de Cutting, me pareció que la teoría sostenida por el Departamento de Estado en Washington era la que estrictamente pertenece al *common law*, la que enseña que toda jurisdicción es puramente territorial, y en ningún caso personal, ni por la persona del ofensor ni por la del ofendido. Así debí inferirlo de varios informes que tuve y de la generalidad con que se explicaba el Sr. Bayard, de acuerdo en esto con el Cónsul Brigham, en los documentos entonces publicados (Informe del Secretario de Estado. Congress. Rec. pág. 8400 y anexo núm. 1 pág. 8401). Para demostrar que aquella doctrina, por muy respetable que fuese, no era la que había servido de base á multitud, á la mayoría de las legislaciones conocidas, y que aun se prescindía de ella algunas veces tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, naciones donde impera el *common law*, hice varias citas que me parecieron conducentes, y remití al Sr. Homero una lista de códigos, casi todos vigentes en varios países, que habían establecido jurisdicción ex-territorial para juzgar en ciertos casos á los nacionales, y en otros aun á los extranjeros, cuando después del delito se encontraba el delincuente en la nación cuyas leyes había infringido.

Hoy, sin embargo, en las palabras del Secretario de Estado transcritas por vd., no menos que en el informe del Sr. Moore que me ha entregado, veo que ya se admite, como es natural, la jurisdicción sobre los nacionales que delinquen en el exterior, mas no sobre los extranjeros que están en el mismo caso; á no ser que cometan ciertos delitos públicos en contra de la nación, como si atacaren su seguridad, ó bien que falsifiquen su moneda ó los billetes de sus bancos. Esto es, en efecto, lo que se encuentra en la mayoría de las legislaciones vigentes; y como sólo la minoría extiende esa jurisdicción al castigo de delitos cometidos en el exterior por un extranjero contra individuos privados del país, á la manera en que lo hace nuestro art. 186, se llega á la conclusión de que ese artículo pugna con el derecho internacional, y, por tanto, se dice, México está obligado á reformarlo.

Apenas será necesario recordar que el derecho de gentes, obligatorio para todas las naciones, sólo cuenta un reducido número de principios en que ellas sin excepción están de acuerdo, habiendo infinidad de doctrinas discutibles y discutidas sin cesar, en espera de la sanción final que puedan darles los pueblos civilizados. Entre tanto cada uno es libre para adoptar un extremo ú otro de los que ofrecen esas doctrinas, ó un temperamento que á su juicio pueda conciliarlas. Nadie ignora que la legislación particular de cada Estado no establece obligaciones internacionales, y que si bien su acuerdo con la de otras naciones muestra la existencia de un derecho consuetudinario, ese derecho no obliga, salvo cuando los gobiernos de algún modo reconozcan tal obligación, sino á los pueblos que se hayan comprometido á observarlo. Desde Grocio (*De Jure Belli et Pacis*, lib. 2o., cap. 8o., § 2), estas ideas se admiten sin contradicción; y en el curso de la presente nota, veremos que aun lo declarado por convenio expreso de casi todos los países civilizados carece de fuerza obligatoria para aquellos que no aceptaren el convenio, según lo tiene sancionado con sus hechos el Gobierno de los Estados Unidos.

Lo que importa en nuestro caso es saber que la gran mayoría de las naciones ha reconocido la jurisdicción ex-territorial; siendo materia de libre apreciación en cada país el determinar hasta dónde le conviene llevarla, con tal que la extensión que le fijare no haya sido reprobada expresamente, por la generalidad de los demás Estados, como contraria á los principios que deben normar sus mutuas relaciones. Hablo de una reprobación expresa, y no simplemente de la adopción de otras soluciones ó temperamentos distintos, porque se les haya considerado preferibles.

Ahora bien, la especial jurisdicción á que me contraigo, es decir, la que establece el art. 186 á que aludo, con las limitaciones en él contenidas, no ha sufrido hasta ahora esa reprobación general; no ha sido estigmatizada de esa suerte por ninguna autoridad respetable, por ninguna de las mismas que cita el Sr. Moore y á que vd. me llama la atención en su nota.

Para demostrarlo, de esas autoridades citadas por vd., solamente examinaré unas seis ó siete, aludiendo en breves palabras á las otras, por evitar la difusión y ser eso lo bastante para mi objeto.

Heffter es una de las primeras, y dice lo siguiente: “La ley penal es *territorial* y *personal* á la vez”. Explica cuando tiene uno ú otro carácter, y agrega que los autores están lejos de concordar sobre lo que expone respecto al segundo carácter. En seguida añade: “La mayor parte de las legislaciones criminales van todavía más lejos, autorizando el procedimiento contra los extranjeros que se han hecho culpables, fuera del territorio, de crímenes atentatorios á la seguridad del Estado y á sus instituciones fundamentales.

En otro tiempo se admitía aun la competencia de los tribunales del país para la represión de todos los crímenes reputados punibles por el interés de la humanidad, en cualquier lugar que se hubiesen cometido, con tal que no hubieran sido juzgados. No puede menos de aprobarse el espíritu que ha presidido á la redacción de estas disposiciones; á saber, que cada Estado está en la obligación de prestar su concurso para la represión de los crímenes, sea cual fuere el lugar donde se hayan cometido. Sin embargo, en tanto que las leyes penales continúen presentando divergencias fundamentales entre sí, su aplicación á especies que no han nacido bajo su imperio, ofrecerá siempre graves inconvenientes” (*Derecho Internacional Público*, § 30). Si el Sr. Moore cita un texto algo diverso, tomado de la 4a. edición alemana, yo cito la 4a. edición francesa, de acuerdo con la 7a. alemana, ambas de 1883, hechas y anotadas por Geffeken.

Lo que he copiado no condena la ex-territorialidad de que se trata, como contraria al derecho de gentes, sino que alude á inconvenientes que puede ofrecer en la práctica, tomándola en su mayor extensión para todos los delitos, aun los de extranjeros contra extranjeros, y sin los correctivos que contiene el artículo que defiende, de los cuales haré mérito más adelante. La cuestión especial sobre delitos de extranjeros en el exterior contra regnícolas, no la toca allí Heffter. Por otra parte, el mismo autor en la nota núm. 4 del pasaje copiado, dice así: “Reina siempre entre los autores una gran divergencia en esta espinosa materia *sur cette matière épincuse*.”

Fiore, como veremos después, no considera la cuestión resuelta de un modo autoritativo por el derecho de gentes; la llama cuestión muy controvertida y dice que envuelve graves problemas. En el largo pasaje de su *Derecho Internacional Privado*, que inserta el Sr. Moore, se limita á combatir una doctrina de Pinheiro Ferreira que exagera la facultad de un país de castigar al extranjero delincuente en el exterior. De su *Derecho Penal Internacional* en que trata la cuestión por extenso, solamente cita estas palabras: “No podemos admitir esa doctrina (la de ex-territorialidad fundada sólo en el derecho de protección) porque no nos parece que la extra-territorialidad de la ley penal depende de la calidad de la persona en cuyo daño se cometió el delito”.

Largo sería explicar el sistema de este autor; mas para que se comprenda que no reprueba el castigo al extranjero cuando delinque en el exterior contra un nacional, bastará este pasaje de la misma obra, § 66: “Concluimos diciendo que, á nuestro juicio, no se debe en materia de jurisdicción ni de ley penal, establecer ninguna diferencia entre el nacional y el extranjero. Admitimos, pues, el derecho de castigar á todo individuo indistintamente, sea nacional ó extranjero, cuando por actos ejecutados en el exterior ha infringido las

leyes que protegen nuestras instituciones *ó violado los derechos*, ora sea del Estado *ó de las personas que son protegidas por nuestras leyes*". Ciertamente que, por obviar algunos inconvenientes, limita después ese derecho de castigo á determinados casos; pero es porque pretende que se extienda la extradición, haciéndola obligatoria para todos los demás casos posibles, de tal manera que el Gobierno del delincuente se vea obligado á pedir ó aceptar que se lo entreguen para castigarlo; sistema todavía casi desconocido en la práctica. Así lo explica al fin del capítulo III (núm. 84) y en la segunda parte de su obra.

Respecto á otros publicistas citados por el Sr. Moore, puede asegurarse, ateniéndose únicamente á lo que de ellos copia este señor, que ninguno se pronuncia de una manera notable en la cuestión, excepto Bar, cuyos principales argumentos veremos contestados más adelante, y exceptuando también á los americanos Woolsey y Wharton, á cuyas luminosas doctrinas aludiré con más detenimiento.

Phillimore se refiere á Foelix sobre lo que disponen generalmente las legislaciones conocidas, y cita una opinión de Bártolo acerca de la ley que debe aplicarse al extranjero delincuente en el exterior. Wheaton explica también, con la extensión necesaria, lo que generalmente se observa, y lo aprueba lacónicamente sin ventilar la cuestión que se debate.

Hall, según se copia en el citado informe, dice que "la doctrina de la no-territorialidad del delito, incuestionablemente no se halla en la actualidad aceptada, ni universalmente ni tan generalmente, que en cierto sentido sea autoritativa"; en lo cual, lejos de declararla condenada sin más disputa, reconoce que tiene muchos secuaces y respetables fundamentos; pues, de otra manera, el asentar que no es autoritativa, en cualquier sentido, vendría á ser una verdad evidente de sobra, lo que en inglés se llama *truism*.

Story, en lo que de él se cita, sin dar opinión determinada, expone la teoría del *common law* y concluye aludiendo á la diferente doctrina de Hertius y de Voet: "Éste, dice, con algunos otros juristas extranjeros, entra en detenidas discusiones sobre si un criminal fugitivo extranjero, que es aprehendido en otro país, deberá ser juzgado por la ley de su domicilio ó por la del lugar donde se cometió el delito. If any nation (añade) should suffer its own courts to entertain jurisdiction of offences committed by foreigners in foreign countries, the rule of Bartolus would seem to furnish the true answer: *Delicta puniuntur juxta mores loci commissi delicti, et non loci ubi de crimine cognoscitur*".² Con esto, bien lejos de declarar contraria al derecho público

² Si alguna nación permitiere á sus tribunales ejercer jurisdicción sobre delitos cometidos por extranjeros en el exterior, la regla de Bártolo parece que nos daría la verdadera solu-

la jurisdicción ex-territorial, supone la posibilidad de aplicarla á todos los delitos cometidos en el exterior por extranjeros, aun á los que no ataquen los intereses del país ó de sus subditos; y solamente opina, que en tales casos se aplique la ley *loci commissi delicti*, según la regla de Bártolo; es decir, lo que ordenaba el Código Penal de Prusia.

Mr. Field, según él mismo lo dice, se limita á consignar en el art. 643 de su proyectado Código Internacional, lo que previene el código criminal francés.

En cuanto á Pradier Fodéré, en el pasaje que inserta el Señor Moore, no hace más que dar algunas razones en favor de la jurisdicción ex-territorial de que hablamos, y antes de exponer otras en contra, decir lo que sigue: “*Estas observaciones son ciertamente de peso; mas no pueden prevalecer en contra de otras consideraciones de no menos peso*”. Claro está que la doctrina en cuya defensa encuentra ese escritor observaciones *ciertamente de peso*, no ha sido calificada por él de contraria al derecho internacional establecido.

En lo que concierne al distinguido profesor americano Theodore Woolsey, no puede el Sr. Moore, no obstante sus hábiles esfuerzos, alterar el sentido de este pasaje: “From this exposition it is evident (1) that states are far from universally admitting the territoriality of crime: (2) That those who go farthest in carrying out this principle depart from it in some cases, and are inconsistent with themselves: (3) To this we may add that the principle, is not founded on reason, and (4) That, as intercourse grows closer in the world, nations will the more readily aid general justice”³ (*Introduction to the Study of Intern. Law*. 4th. edition § 78).

Si el Presidente Woolsey en otra parte (§ 20a) critica la tendencia á castigar todo delito cometido en el exterior, sin distinción de ninguna especie (punishing in any case), aun cuando no afecte los intereses del país, como sucede cuando la víctima es un extranjero, ésto no equivale á reformar lo que dijo en el lugar citado anteriormente, ni menos, por supuesto, ha sido declarar contrario al derecho de gentes el que se castigue, bajo ciertas

ción del caso: “Los delitos se castigan conforme & las costumbres del lugar de su comisión, y no de aquel donde se conoce del hecho criminal en cuya defensa encuentra ese escritor observaciones *ciertamente de peso*, no ha sido calificada por él de contraria al derecho internacional establecido”.

³ En vista de lo expuesto, es evidente:

- 1o. Que los Estados están lejos de admitir universalmente la territorialidad de los delitos;
- 2o. Que aquellos que más lejos van en el sostenimiento de este principio, se apartan de él en algunos casos y son inconsecuentes con ellos mismos;
- 3o. A ésto podemos añadir, que dicho principio no está fundado en la razón; y
- 4o. Que al estrecharse más las relaciones entre los habitantes de la tierra, las naciones estarán más dispuestas á favorecer los intereses de la justicia universal.

condiciones, al extranjero que ofende en el exterior á un subdito del país y es aprehendido luego en su territorio.

Con respecto al Dr. Francis Wharton, no puedo comprender cómo ha podido citarlo el Sr. Moore en apoyo de su pretensión, á no ser por el deseo de que aparezca defendiendo en este caso al Departamento de Estado el jurisperito que usa el título y ha ejercido, ó ejerce, el cargo de su abogado ó consultor jurídico. De tan distinguido escritor cita el Sr. Moore cierto pasaje tomado de la obra titulada *Conflict of Laws*, 2a. edición, de 1881. Allí el autor, sin negar su exactitud, refiere algunos inconvenientes que pueden oponerse á la teoría de que un soberano, por el derecho que le asiste de proteger á sus subditos, deba ejercer jurisdicción para castigar á todo aquel que los ofenda en el extranjero. Nadie niega que esa jurisdicción, cuando es ilimitada (por ejemplo, caso de no ser punible el acto en el lugar de su comisión), ofrece varios inconvenientes, á la manera que también los tiene la doctrina que proclama la territorialidad absoluta de la pena. Sea de ello lo que fuere, el citado pasaje no impide que el Dr. Wharton haya manifestado, antes y después de 1881, las opiniones más terminantes y resueltas en favor de la jurisdicción ex-territorial para castigar extranjeros delincuentes contra nacionales.

La prueba se halla en su libro *Treatise on Criminal Law*, 9a. edición, de 1885, donde en una larga nota al § 284, se expresa en los términos siguientes:

The several theories of criminal jurisdiction may be classified as follows:

I. *Subjective*, or those based on the conditions of the offender.

1st. *Universality of Jurisdiction*, which assumes that every State has jurisdiction of all crimes against either itself or other States by all persons at all places. This theory has few advocates in England or the United States. It has, however, the high authority of Taney, C. J. who said in *Holmes vs. Jennison* (14 Peters 540, 568, 596), that *the States of the Union may, if they think proper, in order to deter offenders from other countries from coming among them, make crimes committed elsewhere punishable in their courts, if the guilty party shall be found within their jurisdiction.*⁴

⁴ Las diversas teorías de jurisdicción criminal pueden clasificarse como sigue:

I. *Subjetivas*, ó sea las que se fundan en las circunstancias del delincuente.

1o *Universalidad de jurisdicción*, la cual sostiene que todo Estado tiene jurisdicción sobre todo delito que cualquiera persona cometa en cualquier lugar contra ese Estado ú otros. Esta teoría tiene pocos defensores en Inglaterra ó los Estados Unidos; tiene, sin embargo, en su favor la respetable autoridad del Presidente de la Suprema Corte Taney, quien, en el caso de *Holmes contra Jennison* (14 Peters 540, 568, 596), dijo que *los Estados de la Unión, á fin de impedir que vayan á su territorio criminales procedentes de otros países, pueden, si lo juzgan conveniente,*

Antes de seguir con la cita del Dr. Wharton, debo advertir que esa teoría que él llama *universalidad de jurisdicción*, y que tiene en su apoyo el dictamen de tan respetable autoridad como la del *Chief Justice* Taney, avanza mucho más que la que sirve de base al art. 186 de la disputa, el cual no castiga universalmente los delitos cometidos en el exterior, sino solamente, y con ciertas limitaciones, los que hayan ofendido á mexicanos.

Continúa el Dr. Wharton explicando las teorías sobre jurisdicción que él nombra subjetivas:

2nd. *Territorial Jurisdiction*, which assumes that each State has cognizance of all offences when the offender at the time of the offence was on its territory; but that it has jurisdiction of no other offences. This has been the prevalent English and American theory.

II. *Objective* (jurisdiction), which assumes that each State has jurisdiction of all offences which assail its rights, *or the rights of its subjects*, no matter where the offender was at the time of the commission of the offence. This view, which appears to be the one best calculated to reconcile our adjudications *on the vexed question* before us, I have discussed at some length in the *Southern Law Review* for December, 1878 (vol. IV, p. 676). From this article I condense the following:

The *real* theory of jurisdiction, as it is called by its advocates, rests, as has been seen, on the *objective*, rather than on the subjective, side of crime. *Jurisdiction is acquired, not because the criminal was, at the time of the crime, within the territory of the offended sovereign, nor because he was at the time a subject of such sovereign, but because his offence was against the rights of that sovereign or of his subjects. We punish all who offend on our own soil because our duty is to attach to crime committed within our borders its retribution. But, in addition to this, we must punish, when we obtain control over the person of the offender, offences committed abroad, by either subject or foreigner, against our own rights.*⁵

declarar punibles por sus tribunales delitos cometidos en otra parte, cuando el culpable fuere encontrado dentro de su jurisdicción.

⁵ 2o. *Jurisdicción territorial*, la que sostiene que cada Estado tiene derecho para conocer de todo delito cuando el delincuente lo hubiere cometido bailándose en su territorio; pero que de otro modo no tiene jurisdicción. Esta ha sido la teoría predominante inglesa y americana.

II. *Jurisdicción objetiva*, la que pretende que cada Estado tiene jurisdicción sobre todo delito que ataca sus derechos, *ó los de sus súbditos*, cualquiera que sea el lugar donde haya estado el delincuente al tiempo de cometer el delito. En la *Revista de Derecho del Sur*, Diciembre de 1878 (tomo IV, p. 676), hablé con alguna extensión de este modo de ver el asunto, el cual parece ser el que mejor puede cohonestar nuestras decisiones judiciales en la tan *debatida cuestión* que nos ocupa. De ese artículo extracto lo que sigue:

La teoría *real* de la jurisdicción, como la llaman sus defensores, descausa, según hemos visto, más bien en el carácter *objetivo* del delito que no en el *subjetivo*. *La jurisdicción se adquiere, no porque el criminal se hallaba, al tiempo de cometer el delito, en el territorio del soberano ofendido, ni por-*

Basta con esto por ahora; pues en adelante volveré á usar la autoridad del Dr. Wharton para defender la teoría *real* ú *objetiva* de la jurisdicción, cuando directamente me ocupe en la defensa del artículo atacado, mostrando que se funda en una respetable teoría científica. Por de pronto, lo que deseaba probar es que ese ilustrado jurista no reprueba la teoría de que hablo, por contraria al derecho de gentes. ¿Cómo había de reprobala de esa manera, ni de otra alguna, cuando la defiende con tanta maestría, según se ve en su obra citada?

Esa reprobación no la hace ninguno de los autores que vd. cita, ni ningún otro de los conocidos, ni aun de los que adoptan, en tan grave cuestión, una doctrina opuesta á la que sostiene el Dr. Wharton y á la más avanzada aun del *Chief Justice* Taney. El único entre los citados por el Sr. Moore, que se aventura á tanto, es Mr. Requier, relator de la Corte de Casación de Francia, quien en el caso de Raymond Fornage, llegó en efecto á decir: “La ley no puede dar á los tribunales franceses facultad para juzgar á extranjeros por crímenes ó delitos cometidos fuera del territorio de Francia; esa exorbitante jurisdicción constituiría una violación del derecho internacional”, etc. Opinión tan singular no fué, sin embargo, adoptada por dicha Corte, por más que así lo indique el Sr. Moore. La Corte de Casación declaró incompetentes á los tribunales franceses, dando por razón que la ley del país no los autorizaba para conocer del asunto; con lo cual hubiera bastado para fundar su decisión. Mas cuando, á mayor abundamiento, dijo que el derecho de castigar emanaba de la soberanía, la que no se extendía fuera del territorio, pareciendo así confirmar las teorías de su relator, esos últimos conceptos, como innecesarios para la resolución del caso, bien pueden calificarse de *obiter dicta* y, por tanto, sin la autoridad que pueda corresponder á la sentencia. Sea como fuere, ni aun entre esos conceptos, ni menos entre los fundamentos esenciales, ó en la parte dispositiva del mismo fallo, se declaró que una opinión más favorable á la jurisdicción extraterritorial que la de Mr. Réquier, fuese contraria al derecho de gentes (véase el texto de la sentencia en el apéndice al informe del Sr. Moore).

No podía haber declarado semejante cosa ese Tribunal de Casación cuando él mismo, consultado por el Gobierno sobre la propia cuestión jurisdiccional, no para aplicarle la ley vigente, sino los principios del derecho público, á efecto de modificar la legislación francesa, emitió en 1845 un

que entonces era subdito de ese soberano, sino porque cometió el delito contra los derechos del mismo ó de sus subditos. Castigamos á todos los que delinquen en nuestro territorio, por ser nuestro deber aplicar la debida pena al crimen que se comete dentro de nuestros límites; pero es preciso que castigemos también, cuando la persona del delincuente llegue á nuestro poder, los delitos cometidos en el exterior, ya sea por nacionales ó por extranjeros, en contra de nuestros derechos.

dictamen en el cual terminantemente dijo: “Lo que es verdad es que el derecho de castigar en nombre de la ley francesa no puede ejercerse más que en Francia; lo que es un error es que el acto punible no pueda en ningún caso ser regido por esta ley”. Esto fué reprobado de un modo terminante la territorialidad absoluta de la jurisdicción criminal, distinguiendo entre el derecho que tiene una nación de castigar delitos cometidos fuera de ella, y la posibilidad física ó moral de aplicar el castigo mientras el delincuente se halla en territorio de otra; distinción importantísima, porque, según lo observa un criminalista notable, la confusión de esas dos ideas origina en gran parte el apego exagerado de algunos á la territorialidad de la pena.

A propósito de esto y para que se vea que la extensión del poder de castigar hasta donde lo lleva la legislación mexicana, ha sido en Francia la que ha tenido en su apoyo más autoridad científica, antes de que acontecimientos políticos, ó de un orden ajeno al carácter jurídico de la cuestión, hayan venido á sofocar la opinión de los jurisconsultos, copiaré algunos conceptos del eminente profesor suizo Mr. Charles Brocher. Después de insertar las palabras antes trascritas de la Corte de Casación, dice así: “Como veinticuatro cortes de apelación y seis facultades de derecho dictaminaron (en Francia) en un sentido análogo. Encargóse á una comisión en 1849 el preparar un nuevo proyecto, que aprobó el Cuerpo legislativo en 1852. Ese proyecto investía de una manera general á la soberanía francesa con la facultad de castigar los delitos cometidos en el extranjero contra un nacional, siempre que el culpable viniera á buscar abrigo al territorio. Como esta disposición provocó reclamaciones por parte de Inglaterra, el Gobierno retiró la ley antes de que el Senado la hubiese aprobado.” (*Étude sur les conflits de législation en matière pénale. Revue de Droit International*, tom. 7mo).

Ahí se ve, pues, con claridad, que en esa vez la opinión en Francia era del todo favorable á una extensión mayor que la autorizada por sus leyes, en la jurisdicción llamada ex-territorial, y que el Gobierno, sólo por razones ajenas á la cuestión jurídica (según lo confirman otros datos históricos), sólo por consideraciones de actualidad en su política exterior, retiró el proyecto, que por tal motivo dejó de ser sancionado como ley.

Todo ésto evidencía que esa cuestión no está resuelta finalmente en la nación francesa, aun cuando su legislación por el momento se limite á castigar, en el caso á que me refiero, nada más que ciertos y determinados delitos. Por otra parte, difícil sería convencerse de que tantos juristas y magistrados de ilustración y experiencia, no solamente se equivocaran en la ocasión á que aludo (lo cual era posible), sino que adoptaran opiniones contrarias á los principios bien establecidos del derecho internacional.

Hablemos ya de otras naciones. En el informe del Sr. Moore se hace gran mérito del Código Penal del Imperio alemán, código que vino á restringir la legislación de varios Estados germánicos en su parte favorable á la jurisdicción ex-territorial. Esto me induce á exponer dos breves observaciones. En primer lugar, apenas sancionado ese código, puesto en vigor en todo el Imperio por ley de 15 de Mayo de 1872, ya fué objeto de varias controversias y se trató de reformarlo, habiendo sido parcialmente modificado en 1876. Entre las reformas propuestas en el proyecto de ley respectivo, se hallaba la de someter á los tribunales del Imperio á los extranjeros que en el exterior hubiesen cometido crímenes y delitos contra subditos alemanes. “El Reichstag, se dice, no creyó llegado el momento de refundir toda la difícil teoría de la aplicación de la ley penal, y adoptó solamente las nuevas disposiciones cuya necesidad le pareció establecida por las circunstancias” (*Annuaire de Législation étrangère*, 1877, p. 139).

Quiere decir que tampoco en Alemania se fijó definitivamente, con el actual código, la opinión en ese particular, y han seguido las tendencias en sentido de ampliar la jurisdicción criminal exterior aun más allá, tal vez, de lo que hace la legislación mexicana, que contiene algunas importantes limitaciones. Quiere decir, que la doctrina que da más extensión á la jurisdicción ex-territorial y que pertenecía á los varios códigos alemanes sustituidos por el del Imperio, aun no ha sido extirpada en esa nación como opuesta al derecho internacional, el cual se funda principalmente en la razón y no en la ley escrita.

A propósito del código alemán, no será inoportuno transcribir algunos conceptos de un hábil estudio acerca de él publicado en una revista francesa. Después de referir que dicho código declara competentes á los tribunales del Imperio para juzgar multitud de crímenes cometidos por alemanes fuera de su patria, se sigue diciendo:

Los extranjeros, por el contrario, no pueden ser perseguidos á causa de hechos criminosos que cometan en el exterior, sino cuando constituyan crimen de alta traición contra el Imperio alemán ó contra uno de sus Estados, ó el crimen de moneda falsa... Hay á este respecto, en el Código Penal que estudiamos, una omisión, que da por resultado que los intereses de los regnícolas en el extranjero no están suficientemente protegidos por la ley alemana, y que el autor del crimen ó delito cometido en el exterior en contra de esos mismos intereses podrá, con tal que no sea alemán, refugiarse en Alemania, donde no podrá ser perseguido... La protección que el Estado debe á todos los miembros de la Nación, ya sea en su territorio ó en el extranjero, será incompleta si las leyes del país son impotentes para herir, en el territorio del mismo, al extranjero que haya cometido en otro país un delito contra el na-

cional. La circunstancia de que ese individuo no esté sujeto á la ley penal del Estado, producirá turbación é inquietud en la sociedad (*Étude sur le Code Pénal d'Allemagne. Revue de Droit Pratique*, 1874).

Estos fragmentos dan una idea de las objeciones que en el punto de la dificultad se han opuesto al Código Penal de Alemania.

En cuanto á Italia, conviene notar, primero, que el Sr. Moore, en la lista de códigos que inserta (página 87), supone que hay uno sólo, del año 1859, vigente para todo aquel reino y sustancialmente igual al de Austria. En realidad hay dos códigos vigentes en aquella nación: el de Cerdeña, del año referido, y el de Toscana, que se observa en lo que fué Gran Ducado de ese nombre. Por este último se castiga igualmente á todo nacional ó *extranjero* que delinque en el exterior contra un regnícola (artículos IV y V § 2), suavizando un tanto las penas por el delito cometido fuera de Toscana, y exigiendo en esos casos que el hecho sea también punible por la ley del lugar de su comisión (artículo IV § 2 y artículo VI). Pueden verse los textos en la citada obra de Fiore, núms. 210 y 211, y así se advertirá la coincidencia de ese código europeo con el mexicano. No es extraño que en la materia se equivocara el Sr. Moore, pues el mismo Fiore, en su reseña general de legislaciones, dice (núm. 193) que, habiendo consultado entre otros códigos americanos el mexicano de 1872, no encontró en él disposición alguna relativa á delitos cometidos en el extranjero; es decir, no la encontró en el de Chihuahua que contiene el art. 186, hoy tan combatido á causa de esas disposiciones.

Por lo que hace al nuevo Código Penal italiano, aun no vigente, cuyo primer libro se aprobó por la Cámara de Diputados en 1876, ya en otra ocasión advertí que contiene prevenciones muy semejantes á las del artículo 186 del nuestro; y si no está en vigor todavía, no parece que haya sido, como se da á entender, por objeciones contra lo aprobado, sino por las que suscita lo restante, con especialidad lo relativo á la pena de muerte, que es combatida en Toscana.

La jurisdicción ultra-territorial de que hablamos, no en ese proyecto únicamente, sino en tres distintos y muy estudiados que lo habían precedido, habiendo comenzado á formarse desde 1868, quedó establecida para los extranjeros delincuentes en el exterior contra italianos. Fiore lo relata de este modo: “Por lo que hace al extranjero que hubiere cometido, más allá de nuestras fronteras, un delito contra uno de nuestros conciudadanos, *en los cuatro proyectos* se admitió el derecho de castigar al culpable, en el caso de que sea encontrado en nuestro territorio” (*Ibidem*, núm. 176). Esta uniformidad en cuatro distintos proyectos, fruto de grandes estudios, muestra claramente

cuál ha sido la opinión dominante en Italia sobre la materia de que trato, aun cuando esa opinión no haya logrado hasta hoy convertirse en ley vigente.

Sin la pretensión de pasar en revista todos, ni aun muchos, de los países europeos cuyos escritores y jurisconsultos, cuando no su actual legislación, llevan la jurisdicción territorial fuera de los límites arbitrarios que se le señalan, hablaré brevemente de España, á cuya ley positiva se refiere el Sr. Moore como restringente, según el uso más general, de esa especie de jurisdicción. Entre las autoridades que marcan cuál ha sido allí el dictamen científico sobre el asunto, citaré primero á Riquelme, el más conocido de los tratadistas españoles sobre derecho internacional.

En el segundo caso (de este modo se explica), es decir, cuando un extranjero viene á residir en un país después de haber delinquido contra él, ó contra alguno de sus naturales. ...la situación es diferente, porque el extranjero no ha infringido las leyes del país estando en él: ha hecho mal al Estado ó á sus regnicolas, pero no después de haber contraído la obligación de respetarle, pues que este deber comienza cuando el extranjero entra en el territorio y no antes.

Mas á pesar de la diferencia que existe entre este caso y el anterior, la opinión de los mejores jurisconsultos está de acuerdo en que no sólo es justiciable el extranjero, sino que hay derecho para pedir la extradición del reo en algunas circunstancias. Esta doctrina se funda en el deber indeclinable que tiene toda sociedad de defenderse y perseguir á los que atacan su existencia, y en la obligación imprescindible en que se encuentra de proteger á sus subditos. De estos deberes y obligaciones, que son la esencia de las leyes, se deriva el derecho de imponer penas á los que atentan contra la seguridad del Estado ó de sus individuos; y esta garantía de las sociedades sería ineficaz en muchos casos, si el principio de la limitación territorial de la jurisdicción se llevase con tanto rigor que no fuese justiciable, sino el que infringe las leyes dentro del país en que rigen (*Elementos de derecho público internacional* por D. Antonio Riquelme, libro 2o., título 2o., capítulo 2o.).

El Sr. D. Alejandro Groizard, legista y diplomático distinguido, en su discurso de recepción en la Academia de Ciencias morales y políticas de Madrid, el año 1885, usó de este lenguaje:

Si fuente de extra-territorialidad puede y debe ser la naturaleza del reo, también la del ofendido puede y debe serlo. Lo que cambia es el motivo. En el caso anterior la sanción alcanza al que se hace culpable... En el segundo (la naturaleza del ofendido) la ley hace sentir la fuerza sobre el criminal como consecuencia de la protección que presta en todas partes á los que viven al amparo de su pabellón. El principio es extensivo aun á los extranjeros; porque no se concibe que habiéndose hecho culpables de delito contra un natural, su

ley protectora consienta penetren aquellos dentro de su círculo de acción á ofenderle nuevamente con su presencia y su impunidad.

Hé aquí lo bastante para probar que la opinión de ilustrados especialistas en España es más avanzada, en punto á ex-territorialidad de jurisdicción criminal, que la legislación allí vigente, y que por tanto no puede considerarse la cuestión resuelta de un modo definitivo en la nación española.

Todo ésto demuestra, á mi juicio, que el problema sobre los límites que debe tener la jurisdicción llamada por algunos cuasiterritorial, la que se establece en el citado art. 186, ni aun en los países cuya legislación no la admite, ó la admite solamente para ciertos casos, se puede decir que esté resuelto de un modo final y seguro, de modo tal, que la solución constituya un axioma en el derecho de gentes. Ahora bien: si no es axioma universalmente reconocido, que todo paso más allá del límite á que ha llegado en esta materia el mayor número de legislaciones, viola los derechos de los demás pueblos, no puedo concebir por qué el Estado que diere ese paso, sobre todo si con él lo dan algunos otros, esté obligado á retroceder, confesando, contra sus convicciones, que se ha equivocado en su marcha. Si fuera preciso para cada ley, en materia debatida de derecho internacional, conformarse con la mayoría de las legislaciones de los demás países, sería impracticable aun el menor progreso, hasta que hubiera un convenio con la mayor parte de las naciones, procedimiento poco menos que imposible.

Para acabar de convencer que la cuestión sobre los límites jurisdiccionales de un país está bien lejos de hallarse resuelta definitivamente por el solo hecho de que la mayoría de los Estados no le da la extensión que México, me contentaré con transcribir algunas frases del mismo Fiore, autor que he citado tantas veces porque parece tener la preferencia del Sr. Moore, á causa de que, en su monografía sobre el asunto, opina por los límites usuales de la jurisdicción expresada, si bien ampliando la esfera de la extradición por otra parte.

La divergencia de opiniones, dice ese notable escritor, comienza á aparecer cuando se trata de decidir en qué sentido la ley penal debe ser considerada como exclusivamente territorial. ¿Débese admitir que todo hecho criminoso cometido más allá de las fronteras, escapa de pleno derecho á esta ley, ó bien que ella es aplicable á los individuos que han venido á residir en el territorio, habiendo antes cometido un delito en el extranjero? *En la solución de este grave problema no hay solamente grandes divergencias entre los autores, sino que difieren los sistemas consagrados en las leyes positivas.*

El mayor número de los autores opina que no se puede, en principio, restringir de una manera absoluta el imperio de la ley penal á los límites terri-

toriales del Estado... Pero cuando se trata de los casos en que se debe admitir la autoridad extraterritorial de la legislación penal, las condiciones de la aplicación de la ley nacional á los delitos cometidos en el extranjero, entonces el acuerdo se hace difícil.

Nos proponemos, sigue diciendo, *discutir esta cuestión controvertida*, y procurar establecer los principios generales que sirven para fijar los límites en que debe restringirse la autoridad extra-territorial de la ley penal” (*Tratado de derecho internacional penal*, núms. 3 y 4).

Ésto que dice Fiore en la obra misma en que hace constar lo que la mayoría de las legislaciones vigentes tiene establecido por ahora, muestra que el autor se propuso tratar de una cuestión abierta y pendiente, y que la materia sobre que escribió no está, según se pretende, definida como ley para todas las naciones.

Eso se infiere aun de la misma relación, que inserta el Señor Moore, de lo ocurrido en el “Instituto de derecho internacional”, cuando discutió lo relativo á jurisdicción ex-territorial en la ciudad de Bruselas en 1879; pues la especial de que se trata, que Mr. Brocher llamó cuasi-territorial, fué muy debatida, habiendo sido entonces desechada, según se dice, por diez y siete votos contra nueve. Mas á pesar de esta votación, la cuestión quedó aplazada para futuros debates. Las siguientes sesiones del Instituto se verificaron en Munich en 1883, y aunque volvió á discutirse y votarse acerca de ella, las votaciones de que hace mérito el Sr. Moore, y que no fueron directas sobre la complexa doctrina en que descansa el consabido artículo 186, tampoco se consideraron decisivas para poner fin á esa controversia gravísima, que divide á los jurisconsultos desde la Edad Media, como lo dice Paul Bernard en su moderno *Tratado sobre la extradición*. Parece claro que el Instituto no ha considerado decisivas y finales sus resoluciones en esa difícil materia, toda la vez que enumera entre las cuestiones que mantiene en estudio las de *conflicto de leyes penales* (*Revue de Droit Intern.*, tomo XII, pág. 616), y que la subcomisión que dictaminó en Munich sobre el asunto, continúa establecida como un comité permanente sobre esa materia y la de extradición (*Idem*, tomo XVIII, pág. 514).

Ahora bien: si la cuestión jurisdiccional de que hablamos se considera universalmente muy controvertida; si se dice por las mejores autoridades que encierra graves problemas en materia muy árdua y espinosa, ¿cómo es posible que el adoptar una de las varias soluciones que se le han dado, aun cuando no sea la sancionada en el mayor número de legislaciones, constituya una violación del derecho de gentes?

Ese derecho, por otra parte, no reconoce por fuente las legislaciones de pocos ó de muchos países. Ningún publicista notable menciona la ley positiva entre los orígenes del derecho internacional. Wheaton sólo cuenta entre

ellos, hablando de legislaciones positivas, las leyes de Estados particulares que dan reglas á sus cruceros y á sus tribunales de presas; y Ortolan, no el criminalista, sino el autor de la *Diplomacia del Mar*, se expresa de este modo:

Finalmente, á más de los tratados públicos y las costumbres de las naciones, hay otra fuente á la cual se debe recurrir para completar el conocimiento del derecho internacional. Son las leyes y ordenanzas expedidas por el gobierno de cada Estado para arreglar la conducta que deben observar sus nacionales en ciertos casos particulares en que los intereses de ese gobierno pueden hallarse en conflicto con los de las otras naciones. *El derecho de gentes no se deriva de estas ordenanzas y leyes*; por el contrario, ellas emanan esencialmente del derecho de gentes, y no deben ser más que su aplicación; pero por sólo eso es indispensable conocerlas” (Libro 1o., capítulo IV).

La legislación de los diferentes países podrá ser un dato para apreciar el derecho de gentes; pero no es ella quien lo fija y determina su carácter obligatorio en las relaciones internacionales.

La mejor prueba de que no obliga á una nación independiente la solución que la mayoría de ellas adopta, en materia discutida, nos la da el mismo Gobierno de los Estados Unidos. Sabido es que la declaración de París, hecha en 1856, de quedar enteramente abolido el corso, ha sido ya suscrita, á más de las siete potencias que la concluyeron originalmente, por otras cuyo número llega á cuarenta, ó sea por casi todas las de Europa (siendo quizá la única excepción España), y además por todas las de América, exceptuando los Estados Unidos y México. Hé aquí una mayoría de países civilizados más considerable que la que hoy se alega en nuestra discusión; y hé aquí también una materia mucho más grave; siendo, por otra parte, uniforme la reprobación del corso por los escritores y filántropos, entre los cuales se distinguió Franklin, negociador, en nombre del país de vd., del primer tratado en que se condenó esa práctica, celebrado con Prusia en 1785 y que se renovó á los pocos años suprimiendo la estipulación á que me refiero. Sin embargo, no por tales consideraciones se ha creído el Gobierno de vd., ni se cree el de México, obligado en virtud del derecho de gentes, á suscribir lo acordado por aquella mayoría. Es que se trata de un asunto en el cual, aunque ha recaído cierta resolución, acordada para su uso particular, de un gran número de Estados, ni las naciones que lo forman, ni todos los publicistas han declarado que otra solución en diverso sentido sea contraria al derecho internacional, como lo observa implícitamente Dana (nota al *Derecho internacional* de Wheaton, § 358); no estando por lo mismo convertida la declaración de París en regla de derecho obligatoria para todo país civilizado. Por el contrario, cualquiera de los no comprometidos

en la declaración mencionada, es libre para resolver la cuestión según las nociones que abrigue acerca de su propia conveniencia.

No importa, pues, cuál sea el número de los códigos penales vigentes en otras naciones y que han restringido la jurisdicción ex-territorial más que México, ni cuál el de aquellos que van en ese punto por lo menos tan lejos como esta República. No importa eso, en verdad; mas no puedo menos de advertir que el Sr. Moore exagera la cortedad de este último número, diciendo que sólo dos países, Rusia y Grecia, coinciden en la materia con la República Mexicana.

Los códigos de esos dos Estados van todavía más allá, porque, en el particular, no exigen los requisitos que el de Chihuahua. Otro tanto sucede con el de Hungría, que es distinto del de Austria. El código austríaco, con solo que se ofrezca la extradición y sea rehusada, castiga á todo extranjero delincuente en el exterior. Suecia y Noruega, en sus dos distintos códigos, van también más allá del mexicano en el reconocimiento de ese derecho, aunque hagan depender su ejercicio en cada caso de la voluntad del Rey; pues no pretenden seguramente que el derecho nazca de esa voluntad, sino que suponen su existencia, reservándose á usarlo según la conveniencia calificada por el soberano.

Existen, además, en Europa otros códigos en este punto más avanzados que el de Chihuahua. Uno de ellos es el de Toscana, de 1843, de cuyas disposiciones y vigencia en parte de Italia hablamos antes, notando que exige, para castigar el acto cometido en el exterior, el mismo requisito que el código de Chihuahua; á saber, que el acto sea también punible por la ley del lugar en que se cometiere. Aun sin esa condición se castigan tales hechos conforme á los respectivos códigos de los cantones suizos de Friburgo (art. III, § C) y del Tessino (art. V). Contando los códigos que he mencionado, resulta que son nueve los vigentes en Europa que van hasta donde ha ido la legislación mexicana, si no más lejos, en punto á jurisdicción sobre extranjeros por actos cometidos fuera del territorio. No hablamos por ahora de América, para referirnos á sus leyes un poco adelante.

Demostrado, como entiendo lo está, que el art. 186 del Código Penal de Chihuahua no contraría el derecho internacional obligatorio para todos los Estados, inútil parecerá entrar en consideraciones especulativas sobre los fundamentos en que se apoya. Sin embargo, como en las instrucciones del Sr. Bayard que vd. me copia y en la memoria impresa que me acompaña, hay varios conceptos de esa especie para combatirlo, no ha de parecer extraño que yo lo defienda en un terreno semejante. Lo haré con la brevedad posible, y al menos para vindicar el nombre de los jurisconsultos que formaron ese código y cuya memoria, lejos de perder, ganaría con el examen del asunto.

Mucho se repite que la jurisdicción de un país es una emanación de su soberanía, y que ésta no excede nunca de sus fronteras. Debe concederse que la jurisdicción de un Estado, ya sea la civil ó la criminal, no tiene otro origen que la soberanía del mismo, y que la última es territorial en el sentido de que no puede traducirse en hechos materiales sino dentro del territorio; pero eso no significa en manera alguna que falte el derecho de ejercerla en la persona que desde el exterior ofende á la nación ó á uno de los regnícolas. El derecho que un Estado tiene de defender y vindicar á los suyos, no cesa porque ellos se encuentren temporalmente bajo otra jurisdicción; entonces sólo falta la posibilidad ó conveniencia de ejercerlo, la cual nace desde el momento en que el ofensor viene á someterse al poder de la nación que ha sido atacada, bien colectivamente ó bien en la persona de uno de sus individuos.

El distinguido criminalista Ortolan, que trata esta cuestión detenidamente, así se expresa en sus *Elementos de Derecho Penal*: “En vano se objetará que el ejercicio de la soberanía interna de cada país se detiene en los límites del territorio; no se trata, como ya acabamos de explicarlo, de ir á ejecutar en casa de otro un acto de soberanía; se trata de ejercer en nuestra propia casa, en nuestro mismo territorio, el derecho de castigar de que estamos investidos (núm. 885)”. “Basta (dice Carrara, otro escritor muy respetable en la materia) con extender la vista sin alargar la mano sobre el país vecino”.

No parece lógico que se admita el derecho, establecido en la mayoría de las legislaciones, de castigar al extranjero que ha atacado en el exterior la seguridad de la nación ó sus intereses colectivos, reconociéndose la jurisdicción ex-territorial, en ese caso, como fundada en el derecho de defenderse que á todo Estado corresponde, y que se niegue la misma jurisdicción, en el propio caso, cuando se funda en el derecho que también asiste á una nación cualquiera de proteger á sus ciudadanos. Menos lógico es todavía reconocer la facultad de imponer castigo, en iguales circunstancias, al extranjero que falsifica la moneda de un país ó contrahace fuera de él los billetes de sus bancos, supuesto que en estos casos no ha sido atacada la nación como entidad colectiva, sino más bien perjudicados un gran número de sus individuos. La jurisdicción del país no puede depender de que sea grande, en vez de corto, el número de los perjudicados; nace indudablemente de su derecho á defender y vindicar, ya sea á muchos ó á uno solo de los individuos que le pertenecen. Los legisladores que limitan el ejercicio de la jurisdicción cuasiterritorial ú objetiva, prescinden, por razones de conveniencia que cada nación es libre para apreciar, del derecho inconcuso que existe para establecerla más extensamente; pero esa limitación nada prueba contra la existencia de la mencionada jurisdicción con toda la amplitud que la razón le concede.

Materia ha sido de diferentes opiniones el origen que tenga el derecho de castigar, y para explicarlo se han inventado multitud de teorías. El Dr. Wharton, siguiendo á los autores alemanes, las divide en dos categorías: por un lado las *relativas*, que comprenden las de venganza, las utilitarias y las de convención ó contrato social; por el otro, las *absolutas* ó abstractas, fundadas en la noción innata de la justicia. Con gran profundidad y claridad inimitable demuestra Ortolan que unas y otras son incompletas, y que, atendiendo á nuestra doble naturaleza, espiritual y material al mismo tiempo, necesitada de dar satisfacción al sentimiento moral, inherente á todo sér humano, y además á su deseo de procurar en sus acciones la utilidad práctica, la verdadera teoría, la que se apoya en el sentido común, es la que asigna por base al derecho de castigar que toda sociedad reclama, la justicia intrínseca en combinación con la utilidad social. Esta opinión, aunque explicada en diferentes términos, es también la del citado criminalista americano y la del no menos estimable profesor Woolsey.

Esa fué también la que adoptó la comisión encargada de formar el Código Penal mexicano en 1871, la que le sirvió de guía en sus múltiples é importantes apreciaciones. Así lo declaró en la exposición de motivos de su proyecto; é invocando esa teoría fundó, aunque sin analizar su aplicación al asunto, las disposiciones contenidas en el disputado artículo 186, según se advierte en el pasaje de ella que inserté en mi nota del 12 de Agosto de 1886 al Sr. Romero. Muy brevemente pudiera aplicarse dicha teoría al caso, observando que si el acto ejecutado por un extranjero en el exterior es una violación de la ley moral, *malum per se*, como regularmente ha de serlo si está penado por la legislación, tanto del país donde se comete como de la nación donde el delincuente se refugia, hay justicia intrínseca para castigarlo en el uno ó en el otro; y si dicho acto perjudica á un natural del país de refugio, hay además en éste la conveniencia de juzgarlo y condenarlo para todos los fines utilitarios de la pena, existiendo, por lo mismo, en el último país los dos elementos requeridos para que el derecho de castigar no pueda cuestionarse.

El mayor escrúpulo que puede quedar en el fondo de los espíritus, cuando se agitan estos problemas (dice el criminalista Ortolan) contra la aplicación de las leyes penales de un país á hechos cometidos en el exterior, sobre todo si el delincuente es un extranjero, consiste en que á menudo podrá suceder que éste sea castigado en virtud de leyes que no conozca, en su texto ó aun en su existencia, y que el axioma de que “ninguno se supone ignorar la ley”, no pueda racionalmente aplicarse en tales hipótesis. Pero... (refiérese el autor á otras explicaciones que ha dado) el extranjero culpable, cuando comete un crimen contra persona de otra nación, puede ignorar las disposiciones precisas de la ley penal de esa nación; pero sabe indudablemente, según su

conciencia, que comete un acto criminal y que merece un castigo. En la duda podría, antes de obrar, informarse acerca de las disposiciones de la ley á que aludo, lo mismo que, si celebrase un contrato privado, alguna compra de inmuebles situados en el país de aquella persona, tendría cuidado de informarse de la ley del país del otro contratante sobre capacidad de obligarse y sobre la trasmisión de aquellos bienes. Hay más: puesto que no ha de caer bajo la acción de la ley y de las jurisdicciones represivas de aquel país, sino cuando vaya á él y en él sea capturado, puede, antes de venir á alarmar aquella sociedad y exponerse con su presencia en el territorio del país á que pertenece su víctima, informarse sobre las penas que se le podrán aplicar por el acto que ha cometido contra uno de los nacionales de aquel Estado (*Elementos de Derecho Penal* por Ortolan, 5a. edición por Desjardins, profesor de legislación penal de la Facultad de París, año 1886, § 903).

He hecho esta larga cita porque la considero conducente á la defensa general del art. 186 del código de Chihuahua. Por lo demás, no debe olvidarse que ese artículo contiene una disposición que hace todavía más clara la justicia con que autoriza el castigo de un extranjero que ha delinquido contra un mexicano en el exterior; á saber, el requisito de que el acto por el cual se le juzgue, tenga también una pena señalada en el país donde lo haya cometido. Esto añade otra garantía de que no se castigará un hecho ejecutado bajo la creencia de ser inocente. Digo que la añade, porque, tratándose de delitos contra particulares, la legislación de los países civilizados está generalmente de acuerdo en los hechos que los constituyen, á diferencia de lo que sucede con los delitos que podríamos llamar contra la cosa pública, como el ataque á las instituciones de un Estado, respecto al cual, sin embargo, se admite comunmente la jurisdicción ex-territorial, no obstante que no hay el mismo interés universal de reprimirlo.

Ideas semejantes á las de Ortolan, ó al menos con fin idéntico, expresa el Dr. Wharton (*ubi supra*), cuando dice:

Two objections, however, may be made to the *real* theory of jurisdiction: The first is that it renders foreigners liable for disobedience to a law with which they are unfamiliar. But if this objection is valid, it would relieve foreigners intra-territorially as well as extra-territorially. If a foreigner can set up the defence of ignorance of our laws abroad, he can set up the same defence on our shores... But in point of fact no such defence can be set up in other words, the presumption of knowledge of the unlawfulness of crimes *mala per se* is not limited by State boundaries. The unlawfulness of such crimes is assumed wherever civilization exists.⁶

⁶ Pueden, sin embargo, hacerse dos objeciones á la teoría *real* de la jurisdicción; siendo la primera, que esa teoría hace responsables á los extranjeros por desobedecer una ley que

En seguida el Dr. Wharton expone la segunda objeción de que habla; y voy á copiar lo que sobre ella dice, porque es la contestación á una de las observaciones del Sr. Bayard:

Another and more serious objection (son sus palabras) is that the *real* theory assails the prerogatives of foreign sovereignties. To this may be replied that the objection proves too much. If a foreign sovereign has exclusive jurisdiction over his own subjects, then we cannot, under any circumstances, punish the subjects of a foreign sovereign. But this, no one, even among the sturdiest advocates of the personal theory, pretends. It is conceded on all sides that the moment a foreigner sets foot on our shores, we hold him liable to our penal system in all its details. Nor is this all. There is no civilized State that has not passed statutes making it a criminal offence, punishable in its courts, for foreigners, even in their own countries, to forge its securities...⁷

En esto último el Dr. Wharton hace notar la inconsecuencia, que yo he llamado antilógica, de castigar ciertos delitos cometidos en el exterior por extranjeros contra el Estado ó contra muchos de sus nacionales y negar la facultad de hacerlo cuando los perjudicados son pocos ó uno solo, como si el derecho pudiese variar por el número de aquellos en quienes ha sido atacado.

We do not, it is true, attempt to arrest them in their own land (agrega el hábil consultor del Departamento de Estado); we are restrained from making unconditional arrests by the countervailing principle of the inviolability of the soil of foreign States. But when such offenders come, voluntarily or involuntarily, within our borders, we try them as justly subject to our laws on the ground that they have criminally assailed our rights.⁸

no conocen; pero si esa objeción tuviera fuerza, eximiría á los extranjeros de sus responsabilidades tanto por actos que cometan dentro del territorio como fuera de él. Si un extranjero puede alegar en su defensa la ignorancia de nuestras leyes en el exterior, puede hacer lo mismo hallándose en nuestro territorio. Pero, en realidad, no es posible alegar tal cosa. En otras palabras, la presunción de que se conoce la ilegalidad de hechos criminosos por su esencia (*mala per se*) no está limitada por las fronteras del Estado. La ilegalidad de tales hechos se sostiene donde quiera que haya civilización.

⁷ Otra objeción más seria (son sus palabras) es que la teoría *real* ataca las prerrogativas de soberanías extranjeras. A esto puede contestarse que el argumento prueba demasiado. Si un soberano extranjero tiene exclusivamente jurisdicción sobre sus propios súbditos, entonces no podemos, en ningún caso, castigar á los súbditos de un soberano extranjero; mas esto no lo pretende ninguno, aun entre los defensores más tenaces de la teoría personal. Se admite por todos que sujetemos al extranjero á nuestro sistema penal en todos sus detalles desde que pisa nuestro territorio. Hay más todavía: No existe Estado alguno civilizado que no haya dictado leyes que declaren hecho criminal, punible por sus tribunales, la falsificación de sus títulos por extranjeros, aun la hecha en sus propios países...

⁸ Es verdad que no pretendemos arrestarlos en su propio país (agrega el hábil consultor del Departamento de Estado), pues los principios que á ello opone la inviolabilidad del

Finalmente, el Dr. Wharton, en el lugar citado, contesta otra dificultad que se hace valer en su país contra la jurisdicción objetiva, dificultad que origina en apariencia la VI enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sobre ese punto nada tengo que decir, pues aun cuando la objeción no estuviera, como parece, bien contestada, aun cuando fuera incontestable, es claro que lo prevenido en esa Constitución, como lo prevenido en la Constitución de México, si hablara del asunto, no podría servir de norma para resolver una cuestión internacional, ó sea sobre los principios del derecho de gentes. La ley fundamental de un país, que decide soberanamente sus cuestiones domésticas, carece de autoridad para definir las exteriores.

Añadiré, por último, una razón muy obvia para fundar el derecho de castigar al extranjero que viene á nuestro territorio después de ofender á uno de nuestros nacionales en el exterior.

“It is a received maxim of international law (dice Phillimore) that the Government of a State may prohibit the entrance of strangers into the country, and may therefore regulate the conditions under which they shall be allowed to remain in it” (*Intern. Law*, vol. I, p. 233).⁹ Si, pues, tiene el Estado facultad para imponer condiciones á la admisión de los extranjeros, una de ellas podrá ser que, al entrar en los dominios nacionales, queden obligados á responder, en los términos de la legislación del país, por los delitos que hayan cometido fuera de él contra sus ciudadanos.

Mas debo repetir que si expongo estas consideraciones en favor de la solución que el Código Penal mexicano da al difícil problema de la jurisdicción ex-territorial, no es porque me vea necesitado de hacerlo en la discusión presente. Todo lo que ahora importa averiguar es si aquella solución, por no estar conforme con la adoptada en la mayoría de las legislaciones conocidas, constituye un ataque al derecho internacional. Bastante he dicho ya para probar que semejante cuestión no puede resolverse por la afirmativa.

Alégase, además, otro motivo para solicitar que México altere su legislación en el punto cuestionado, conformándola, según lo expuesto, con la que rige en otras naciones. Ese motivo es el de promover la buena vecindad y amistosas relaciones con los Estados Unidos, removiendo, se dice, una constante amenaza para la buena inteligencia con aquella República. En

territorio de otros Estados, nos impiden hacer allí aprehensiones sin ciertos requisitos; pero, cuando tales delinquentes llegan á nuestro territorio, los juzgamos como debidamente sujetos á nuestras leyes, por haber atacado criminalmente nuestros derechos.

⁹ Es una máxima aceptada del derecho internacional (dice Phillimore) que el gobierno de un Estado puede prohibir á los extraños la entrada al país, y por consiguiente, puede establecer las condiciones bajo las cuales les permita residir en él (*Intern. Law*, tomo I, p. 233).

verdad que si así fuera, y no interviniesen circunstancias que harían ese paso (suponiéndolo desde luego practicable), sobre inútil para el fin que se alega, indecoroso para un Estado independiente, el Gobierno Mexicano se apresuraría á obsequiar la pretensión indicada, porque estima en gran manera la importancia de conservar y estrechar esas relaciones amistosas. Pero no es creíble que, con una condescendencia semejante, desapareciese la verdadera y tal vez única amenaza para la armonía entre los dos pueblos; á saber, el espíritu de especulación y aventura característico de ciertos hombres como Cutting, que no faltan en el país de vd., á la manera que en el nuestro no escasean algunos malos elementos fáciles de explotar por los americanos que, felizmente en corto número, sueñan en adquisiciones, de un modo ú otro, á expensas de una nación vecina y relativamente débil.

Lejos de que un triunfo obtenido después de la grita levantada por esa gente, la satisfaga y contenga en lo porvenir, serviría para animarla estimulando su apetito de notoriedad y ventajas, conseguidas por medio de reclamaciones, ya que no sea con proyectos de filibusterismo. Estoy aludiendo á las dos peticiones de la nota de vd. unidas; pues lo están de facto, y desde su origen, las de que se indemnice á Cutting y se prescinda en lo futuro de la legislación que le impidió difamar impunemente á un mexicano en los límites de ambos territorios.

Otro de los efectos que produciría la indemnización á Cutting, ó la derogación de las leyes que con ocasión de él se han tildado de contrarias al derecho internacional, sería lastimar profundamente el sentimiento patriótico de los mexicanos, que, en lo general, no podrían hacerse cargo de las razones técnicas para ello alegadas, mientras que sí han comprendido y sentido las injuriosas manifestaciones hechas contra su país á propósito de ese desgraciado incidente.

No es, á nuestro juicio, una amenaza para las buenas relaciones entre las dos Repúblicas, el que nuestra legislación, ó sea la de Chihuahua, castigue verdaderos delincuentes que hayan ofendido á mexicanos en los Estados Unidos, lo mismo que si lo hubieran hecho en otra nación extranjera. La generalidad del pueblo, en uno y otro país, no entiende de cuestiones técnicas sobre jurisdicción, y aun parece desdeñar esas polémicas suscitadas más bien por personas presumidas de saber ó poco prudentes, como el Cónsul Brigham. Él fué quien, tal vez sin advertirlo, sublevó entre los texanos los elementos de desorden y perturbación que al momento asomaron la cabeza tomando por pretexto á Cutting. Me refiero principalmente al escandaloso *meeting* contra México celebrado entonces en El Paso, y á las provocaciones con tal motivo lanzadas á esta República por una pequeña parte de la prensa americana.

Si esa reunión popular mostró el peligro que para la amistad entre los dos países envuelve una conducta como la del referido Cónsul, el otro *meeting* celebrado á continuación y allí mismo con la mejor clase de la población, no menos que la actitud general de la prensa de los Estados Unidos en ocasión tan notable, probó que el buen sentido del pueblo americano no se preocupa (así al menos lo hemos entendido) por cuestiones jurisdiccionales que tienden en la práctica á dejar impunes ciertos delitos, ó á servir de pretexto á reclamaciones de los que se dan por injustamente perjudicados.

La mejor indicación, á nuestro entender, de que el pueblo de los Estados Unidos no se descontentará porque subsista el artículo 186 del Código Penal de Chihuahua, ni aun porque vuelva á aplicarse á un hecho ocurrido en aquel país, ya que una sola vez en tantos años ha tenido aplicación á un americano; la mejor indicación de que no hay tal peligro, es algo ocurrido pocos meses después de la prisión de Cutting. Sucedió entonces, también en El Paso, Texas, que un individuo difamó por la prensa á un mexicano, igualmente de Paso del Norte, donde fué reducido á prisión lo mismo que Cutting; no habiendo más diferencia entre uno y otro caso, sino que en el segundo el libelista era español en lugar de ser americano: circunstancia que no debió impedir el que se protestara contra la jurisdicción ejercida, supuesto que el difamador, según la teoría territorial de la pena, debió ser sometido á los tribunales de El Paso. Sin embargo, en aquella población no hubo una sola voz que se levantase para pedirlo, y la Cámara de Comercio, compuesta de las personas más honorables, celebró una reunión extraordinaria, en la que cortesmente admitió al Cónsul mexicano, para excogitar algún medio, poniéndose de acuerdo ambas poblaciones, con que reprimir la audacia de los libelistas que se prevalían de la facilidad de cruzar la frontera, en aquellas ciudades contiguas, á fin de insultar á mansalva aun á sus individuos más respetables. El informe que acompañó á esta nota, con el adjunto recorte de *The El Paso Times*, remitidos ambos por el Cónsul Escobar y Armendáriz, muestra cuál fué el espíritu de aquella reunión, nada hostil contra México por la nueva aplicación del art. 186, sino antes bien favorable á sus disposiciones.

Con el objeto de persuadir á este Gobierno á que cambie, en materia de jurisdicción ex-territorial, la legislación que rige en Chihuahua y en la mayor parte de la República, se sirve vd. en su citada nota, obedeciendo las instrucciones del Sr. Bayard, recomendar que siga México dos ejemplos que allí se citan como muy oportunos.

El primero es el que ofreció el caso de Mc. Leod, ocurrido en 1842, en el cual, según vd. lo expone, el Gobierno de los Estados Unidos, respondiendo á la petición del Gobierno inglés sobre libertad del preso, que estaba

bajo la custodia de las autoridades de Nueva York, se vió precisado á reconocer que la autoridad federal no tenía derecho de intervenir en ese caso, y entonces el Congreso reformó la ley que reglamenta los mandamientos de *habeas corpus*, con intención de facilitar al Ejecutivo el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En esa ocasión la respuesta del Gobierno americano, dice vd., no fué diferente de la que dió el Gobierno de México á la petición de libertar á Cutting, “pero los Estados Unidos se apresuraron (añade vd. en seguida) á poner de acuerdo sus leyes locales con sus obligaciones internacionales”.

Como se deduce de lo expuesto, lo que entonces hicieron los Estados Unidos no fué cambiar sus disposiciones legales sobre jurisdicción, “ni poner sus leyes locales de acuerdo con sus obligaciones internacionales” (séame permitido observarlo), sino modificar su legislación para que la autoridad federal pueda intervenir en los casos ocurridos en los Estados y que pudieran dar materia, con fundamento ó sin él, á una cuestión internacional. En ese particular la recomendación de vd. es muy atendible; no hay cosa más natural sino que, habiendo nosotros imitado la forma de gobierno establecida en el país de vd., nos valgamos de medios análogos para obviar el inconveniente de que funcionarios de un Estado lleguen á comprometer, por medio de sus actos, la responsabilidad de la Nación en punto á relaciones exteriores, encomendadas al gobierno general, y que en tal emergencia éste no tenga modo alguno de evitarlo. Afortunadamente, para nada comprometieron esa responsabilidad las autoridades de Chihuahua en lo relativo á Cutting, porque en todo fué legal y prudente su conducta. Mas como es posible que no suceda lo mismo en otros casos ó en otros Estados de la Unión, y el Gobierno Federal de México debe tener facultad de intervenir en ellos oportunamente, desde hace tiempo ha fijado su atención en esa necesidad, y procurará satisfacerla hasta donde lo permita la Constitución de esta República.

El segundo ejemplo que vd. me cita, es el de Francia, en el caso á que ya tuve ocasión de aludir en la presente nota y en el cual el Gobierno de aquella nación obsequió los deseos de la Inglaterra, retirando del Senado, en 1852, un proyecto de ley que establecía la jurisdicción para juzgar á extranjeros que delinquieren en el exterior contra franceses. Siguiendo, se nos dice, este notable ejemplo, daríamos un paso “altamente honroso”.

Prescindiendo de la dificultad que habría para hacer cambiar sus leyes á Estados independientes en su régimen interior, al momento se perciben grandes diferencias entre los casos de Francia y México. La Inglaterra solicitó de la primera que no se aprobase un proyecto de ley, votado hasta entonces por sólo una cámara del cuerpo legislativo. En México se nece-

sitaría derogar una legislación; mejor dicho, varias legislaciones vigentes desde hace algunos años. Por otra parte, las razones de política internacional, que en Francia, según parece, se relacionaban con una importante convención sobre extradición de criminales que se estaba negociando, no existen ciertamente entre nosotros; ni tampoco los precedentes de la solicitud que hizo el Gobierno británico han podido ser los mismos del presente caso.

Pero hay, sobre todo, una diferencia marcadísima entre las circunstancias de la Gran Bretaña y las que guardan los Estados Unidos. La primera pedía á la nación francesa que no adoptase en sus leyes un principio que ella misma no tiene, al menos declaradamente, en ninguna de las que rigen sus diversas posesiones; de consiguiente, le ofrecía la reciprocidad y le daba ya el ejemplo. No sucede lo mismo cuando los Estados Unidos piden á México que reforme sus códigos rechazando el principio de que se trata; porque ese principio se halla consignado en la legislación vigente de una parte de la Unión Americana. A la verdad no es fácil comprender cómo el Sr. Moore, en el detenido examen que hizo de todas ó casi todas las legislaciones del mundo, sin omitir en América ni la de pequeños Estados como Costa Rica, haya olvidado la de uno que es tan visible y de tamaño importancia en su propio país: el Estado de Nueva York, que con legítimo orgullo suele llamarse en la vecina república *el Estado-imperio (the Empire-State)*.

Pues bien, en el Código Penal vigente en Nueva York, sancionado desde 1881, y obra, según he sabido, de muy acreditados jurisconsultos, se encuentra lo que en seguida copio: “§ 676. A person who commits an act without this State which affects persons or property within this State, or the public health, morals or decency of this State, and which, if committed within this State would be a crime, is punishable as if the act were committed within this State”.¹⁰ Hay otros artículos ó párrafos del mismo código de acuerdo con lo anterior; pero es inútil citarlos, como sería inútil también averiguar si hay algún otro Estado ó territorio de esa república, cuya legislación reconozca de un modo tan explícito la jurisdicción ex-territorial sobre actos de personas, sin distinción alguna, es decir, naturales ó extranjeros, contra personas ó intereses del Estado. Basta para mi objeto con el código de una sola de aquellas entidades políticas, sobre todo, siendo de las más importantes por su ilustración, población y riqueza.

¹⁰ Una persona que fuera de este Estado comete un acto que afecta personas ó propiedades dentro de él, ó la salud pública, la moral ó el decoro del Estado, y que sería considerado delito si fuera cometido en el mismo, está sujeto á castigo como si el delito hubiera sido cometido dentro de este Estado.

Ese código, en la disposición transcrita, establece la jurisdicción penal de Nueva York para hechos ocurridos fuera de su territorio y ejecutados por cualquiera, aunque sea extranjero, con más extensión que el de Chihuahua; pues sólo requiere que el hecho constituya un delito (*crime*), el cual comprende, según el mismo código, todo acto ilegal y punible, aun la simple falta ó *misdeemeanor* (§ 3 y 4); mientras que el de Chihuahua previene que el acto del extranjero merezca arresto mayor; y no exige el neo-yorkino, como el otro, que la legislación del país donde se comete el delito le señale también una pena. Por el contrario, en el § 678 da á entender que ese no es ni requisito ni obstáculo para que se castigue el hecho: “An actor omission (dice) declared punishable by this Code, is not less so because it is also punishable under the laws of another State, Government or country, unless the contrary is expressly declared in this Code”.¹¹ Tampoco toma en cuenta, para dejar de castigar el acto, la circunstancia de que haya sido perdonado ó castigado en el lugar donde se cometiera.

Ni podrá decirse que la disposición antes copiada limita el castigo del extranjero á los casos en que delinquire contra un neoyorkino que se halle dentro de su Estado, fundándose en que habla de actos que afecten á persona ó propiedad de dentro del Estado; porque aun cuando el directamente ofendido estuviese *fuera* al tiempo del delito, su familia ó conocidos estarían *dentro* y ellos se afectarían por el escándalo ó las consecuencias del delito. Como quiera que sea, y aun suponiendo que hubiera en Nueva York esa limitación, no podría argüirse con ella en el *caso de Cutting*, en el cual el ofendido, Medina, se hallaba en territorio mexicano al cometerse el delito.

En el Código Penal de Texas hay asimismo la prevención siguiente: “Article 454. Persons out of this State may commit, and be liable to indictment and conviction for committing any of the offences hereinbefore enumerated (forgery of land titles and other documents), which do not in their commission necessarily require a personal presence in this State, *the object of this act being to reach and punish all persons offending against its provisions, whether within or without the State*”.¹² Esta disposición claramente establece el derecho de cas-

¹¹ Un acto ú omisión declarada punible por este código no lo es menos por serlo también conforme á las leyes de otro Estado, gobierno ó país, á no ser que en este mismo código se declare expresamente lo contrario.

¹² Artículo 454. Personas que se hallen fuera de este Estado podrán cometer cualquiera de los delitos antes mencionados (falsificación de títulos de terrenos y otros documentos) y ser sujetados por ello á demanda y juicio, no requiriendo esos delitos necesariamente la presencia personal en este Estado al tiempo de su comisión, *y siendo el objeto de esta ley alcanzar y castigar á todas las personas que la infrinjan, ya sea dentro ó fuera del Estado.*

tigar á toda persona, aunque sea extranjero, que comete en el exterior ciertos delitos, si bien no toda clase de delitos, contra el Estado ó sus naturales, como lo hace el código de Nueva York. Llama la atención que el Sr. Moore olvidara también la legislación de Texas, cuando éste fué el Estado en que ocurrió el incidente Cutting, ocasión y objeto de su estudio.

En presencia de esas disposiciones, no podemos reconocer el derecho de los Estados Unidos de América para declarar el artículo 186 del Código Penal de Chihuahua contrario al derecho de gentes, fundando en ello una reclamación de perjuicios á favor de un americano, ni tampoco el de pedirnos que se reforme ese artículo, cuando contiene otros análogos, si no es que más avanzados en el punto de la dificultad, el código de una ó más partes integrantes de aquella República. ¿Por qué razón se habían de reformar los códigos mexicanos y no el de Nueva York, verbigracia, teniendo el mismo defecto que se alega contra los de este país? La primera condición para que un arreglo entre dos naciones independientes sea honroso á las dos partes, es que haya en él perfecta reciprocidad. Sin ese requisito, ni insistirá un gobierno amigo en la proposición que hiciere, ni la admitirá tampoco el otro, á menos que se resigne á aceptar su mengua.

Voy ya á poner fin á esta larga nota, cuyas proporciones han aumentado insensiblemente por mi deseo de tocar, aunque fuese de manera sucinta, varios puntos del informe impreso á que vd. se refiere. En ella considero haber demostrado:

- 1o. Que Cutting no sufrió malos tratamientos ni fué víctima de ilegalidades, y que aun su aparente falta de defensa consistió en su resistencia á usar de un defensor, á pedir libertad bajo de fianza, á entablar cualquier recurso legal, pues se contentó siempre con decir que dependía sólo de su cónsul y su gobierno.
- 2o. Que en tal virtud no hay razón alguna de ese género por la cual deba Cutting ser indemnizado.
- 3o. Que tampoco hay la que se alega de habersele aplicado una ley contraria al derecho de gentes:
 - A. Porque no se le juzgó tan sólo por el delito cometido en el exterior, sino también por la continuación ó reproducción de este en el territorio mexicano; y
 - B. Porque el art. 186 del Código Penal de Chihuahua no tiene el defecto que se le supone.

- 4o. El simple hecho de que el citado artículo lleve la jurisdicción ex-territorial, respecto de extranjeros, más allá de lo que hace la mayoría de las legislaciones de otros países, no prueba que sea contrario al derecho de gentes reconocido.
- 5o. Ese derecho se limita á establecer principios generales, y cuando sobre alguna de sus aplicaciones hay controversia, cualquiera solución, aunque sea la adoptada por la minoría de los Estados, es una legítima emanación de su soberanía.
- 6o. Esto sucede con la cuestión sobre la llamada jurisdicción objetiva ó cuasi-territorial, ó sea la que se aplica al extranjero delincuente en el exterior contra un regnícola; cuestión que, según todas las autoridades científicas, lejos de hallarse resuelta, constituye uno de los problemas insolutos de mayor dificultad para la ciencia jurídica y los legisladores.
- 7o. Entretanto esa jurisdicción, que hoy se admite, en la mayoría de las legislaciones conocidas, para los casos en que el extranjero ha atacado la seguridad de la Nación, ó perjudicado á muchos de sus individuos falsificando la moneda del país ó los billetes de sus bancos, puede con igual derecho establecerse para los casos en que el perjuicio recayere sobre pocos ó uno solo de los regnícolas.
- 8o. La libertad que tiene toda nación para imponer condiciones racionales á la entrada de los extranjeros en su territorio, la autoriza para sujetarlos, en los términos de su legislación, á responder por los actos que hayan cometido en el exterior contra ella misma ó contra alguno de sus súbditos.
- 9o. Los Estados Unidos no pueden pedir á México que reforme su legislación sobre el particular, aun suponiéndola con el defecto alegado, porque tienen sustancialmente la misma en una ó más porciones integrantes de su territorio.

Antes de concluir, me complazco en manifestar que juzgo sinceras las protestas de amistad y consideración hacia México en que abunda la nota de vd. Sinceras son también y fundadas, á todas luces, en la convicción de su mutua utilidad, las amistosas muestras de simpatía de nuestra parte hacia el Gobierno y país que vd. representa. Muy significativo es el fragmento que vd. inserta de un mensaje en que aludió á este país el Sr. Presidente Cleveland: “La naturaleza (dijo) nos ha hecho irrevocablemente vecinos; la prudencia y los buenos sentimientos deberán hacernos amigos”. Nada más cierto ni más felizmente expresado. Nada, por otra parte, de más clara aplicación á toda polémica en que, por intereses de orden secundario, se

corra el peligro de sacrificar la buena inteligencia, la armonía reinante entre los dos pueblos; ese amistoso sentimiento que día por día se desarrolla con la facilidad de las comunicaciones, con el aumento del tráfico y el mayor contacto entre los habitantes de uno y otro país, proporcionando agradables visitas que disipan arraigadas preocupaciones y fortifican un mutuo aprecio. Todas estas provechosas influencias se ven en grave riesgo de desaparecer por cuestiones jurídicas, á nuestro juicio de más interés teórico que práctico, á no ser el de un individuo que parece haberse empeñado en hacer su nombre odioso al pueblo de México, sin ganar por ello reputación en el seno de su patria. Sea de ésto lo que fuere, el Gobierno mexicano en la presente cuestión, lo mismo que en cualquiera otra, está resuelto á prescindir de todo por conservar su amistad con el de los Estados Unidos; de todo, menos de aquello que pueda ligarse con la honra nacional ó con los serios intereses que le están encomendados.

Reitero á vd. las protestas de mi atenta y distinguida consideración.

Ignacio MARISCAL

SR. THOMAS B. CONNERY,

Encargado de Negocios *ad-interim* de los Estados Unidos de América.

ANEXOS

COPIA

República Mexicana.—Gobierno del Estado de Chihuahua.—Sección 2a.—Ramo de Justicia.—Número 1383.—El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, en oficio núm. 741 de esta fecha, dice á este Gobierno:

Impuesto el Supremo Tribunal de Justicia que tengo el honor de presidir, del informe y demás recados producidos por el Alcalde 2o. de Bravos, con motivo de la prisión del Sr. A. K. Cutting, con esta fecha acordó lo que copio:

A reserva de resolver lo conveniente, remítase en el acto copia del informe rendido por el Alcalde 2o. de Paso del Norte al Ejecutivo del Estado, para

que, si lo tiene á bien, se sirva trasmitirla á la Secretaría del Despacho de Relaciones Exteriores.

Y me honro en comunicarlo á vd. para su conocimiento y efectos que indica el referido acuerdo, acompañándole en cinco fojas útiles la copia mencionada.

Lo que me honro en insertar á vd. para su conocimiento, acompañándole la copia de que se hace mérito.

Libertad y Constitución. Chihuahua, Julio 23 de 1886.—*Félix Francisco Maceyra*.

Al Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores,
MÉXICO.



República Mexicana.—Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.—Un sello que dice: “Juzgado 2o. del Cantón Bravos”.

Ciudadanos Ministros del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

El Juez 2o. menor de esta Villa, que suscribe, cumpliendo con lo dispuesto por esa superioridad en el superior decreto que recayó á la comunicación del Gobierno del Estado, fecha 12 del corriente, en la que viene inserta una nota del Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, vierto el siguiente informe:

El Sr. A. K. Cutting, persona de quien se ocupa la citada comunicación, ha sido acusado ante este Juzgado por el Sr. Emigdio Medina, del delito de difamación, el día 21 de Junio último, presentándose el Sr. Medina con el certificado correspondiente de haber intentado la conciliación ante el mismo Juzgado sobre el mismo asunto, acompañando dicho Sr. Medina el cuerpo del delito, que se ha agregado á la causa, siendo un párrafo publicado en el periódico *The El Paso Sunday Herald*, cuyo artículo está publicado en el idioma español y en inglés, y dice:

A Emigdio Medina, de Paso del Norte.—El Paso, Texas, Junio 18 de 1886.—En uno de los últimos números de *El Centinela*, que se publica en Paso del Norte, he hecho referencia á que dicho Emigdio Medina era un defraudador, y que el periódico en español que anunció publicar en Paso del Norte,

era una maquinación para engañar á los que dieran anuncios; por cuyo motivo fui llevado ante un juez mexicano para conciliación, consintiendo en una reconciliación por desconocer las leyes de aquel país.

Ahora por este artículo ratifico la original aserción que dicho Emigdio Medina es un defraudador y estafador.

El hecho de ser llevado ante un Juzgado para un acto de conciliación, es un hecho despreciable y de cobardía, y muy digno de la pestilente reputación de dicho Emigdio Medina.

Y si dicho Medina desease por estas líneas una satisfacción americana, que me cite en donde quiera, que á toda hora y en todo tiempo sabré qué contestarle.—*A. K. Cutting*.

En virtud de la acusación y con vista del artículo aludido, se decretó orden de detención contra A. K. Cutting el mismo día 21, y el 23 del mismo mes lo hice comparecer ante mi presencia. Después de las formalidades legales se le puso de manifiesto y se le leyó por el intérprete oficial el párrafo difamatorio en contra de Medina y posterior á la fecha en que tuvo lugar la conciliación. Se le preguntó si era el autor de aquel párrafo y si fué su intención ofender la reputación de Medina; por toda contestación obtuve la siguiente: “No estoy obligado á contestar las preguntas que se me hacen sobre este asunto, porque ésto se efectuó en El Paso, Texas, y para cualquier procedimiento me pongo bajo la bandera del Cónsul Americano”.

Se le preguntó si tiene en su poder, para repartirlos, algunos números del citado periódico; contestó á ésto lo mismo que á la pregunta primera.

Se le volvió á preguntar: ¿por qué había quebrantado la conciliación habida ante este mismo Juzgado entre él y el Sr. Medina? contestó: que se le permita no contestar. Se le leyó su declaración por el intérprete oficial, se ratificó en ella y firmó con el Juez, el intérprete oficial y testigos Pedro Téllez y Pedro I. García.

En la misma fecha fué declarado bien preso, haciéndosele saber que puede nombrar defensor desde luego, y quién es la parte acusadora; nombró defensor al C. Lic. José María Barajas, y añadió que en el acto va á dar conocimiento á su Cónsul, firmando esta diligencia con el intérprete, el Juez y los testigos referidos.

Al tratarse de un extranjero procuró este Juzgado se le pusiese en un departamento de los más cómodos que hay en la cárcel, aseado y de las mejores condiciones higiénicas, para que no se diga que por su calidad se le condena á sufrir su detención en una prisión, al peor de los calabozos.

El 26 del mismo mes se me presentó el Canciller del Cónsul de los Estados Unidos, residente en esta Villa, manifestando que venía por

mandato del Cónsul á suplicarme de parte de éste, que le diese informes sobre la causa del Sr. A. K. Cutting, y me entregó una comunicación del Cónsul. Le contesté que no podía darle ningunos informes, puesto que la ley me lo prohíbe expresamente, y se lo repetí al contestarle su comunicación en la que me dice:

Señor: Tengo el honor de comunicar á vd. oficialmente, respecto del arresto y encarcelación de A. K. Cutting, ciudadano americano, efectuados por orden de vd.

He sido informado de que A. K. Cutting fué arrestado, examinado y encarcelado por un delito (si es delito) cometido en el Estado de Texas, Estados Unidos de América, y que fué la publicación de un artículo en el *Herald* del Paso, Texas.

Es apenas necesario que llame la atención de su Señoría al hecho de que por un delito cometido en los Estados Unidos su Tribunal no puede, en manera alguna, tener jurisdicción.

De consiguiente, el arresto y detención del Sr. Cutting en la cárcel, están completamente fuera de la ley y opresivos, y una violación de uno de los sagrados principios de libertad americana.

Esta comunicación es con el fin de hacer un formal pedido á su Señoría para la libertad inmediata del Sr. A. K. Cutting, lo que hago en nombre de los Estados Unidos que tengo el honor de representar en este punto.

Confiado en que vd. acatará mi pedido y solicitud en obsequio de él y ordenará su inmediata libertad, soy de vd., etc. —*Harvey Brigham*, Cónsul de los Estados Unidos de América.”

El 30 del mismo mes le contesté en estos términos:

En contestación á la nota de vd. fecha 26 del corriente, tengo el honor de manifestarle: que á todo funcionario en el ramo criminal le es prohibido, por ley expresa, dar ningunos informes en causas criminales que se tramitan en el juzgado, á personas que no tienen intervención legal en ellas, pues según las doctrinas de Peña y Peña en su obra titulada *Lecciones de práctica forense mexicana*, tomo 1o., frac. 97, pág. 507: Los cónsules no tienen ninguna jurisdicción, civil ni criminal, sobre sus nacionales, refiriéndome al asunto del Sr. Cutting.

En tal concepto, no puedo decretar su libertad, sino en la forma prescrita por las leyes de este país.

Quedo de vd., etc., su atento S. S.

El día 5 del corriente lo he mandado sacar de la cárcel al repetido Sr. Cutting para notificarle un auto; leído que le fué por el intérprete oficial, contestó que lo oía y reproduce que para este asunto se ha puesto bajo la protección del Cónsul americano: se negó á firmar aun lo que había dicho.

El Juez lo hace constar por diligencia, haciendo que presencien y firmen cuatro testigos, que lo fueron los ciudadanos Santos Bermúdez, Pablo López, Martín Gómez y Antonio Alvarez.

Estando la causa en estado de correrse el traslado al Agente del Ministerio Público, hice comparecer al Sr. Cutting el 19 de este mes para notificarle esa providencia; se le notificó; en seguida se le preguntó si era producción suya el artículo á que se refería el Agente fiscal y si se ratificaba.

Estando leyéndosele por el intérprete, suspendió la lectura, manifestando que ya lo tenía leído y que no quería contestar. Se le preguntó si firmaba la notificación y dijo: que no firmaba ningún papel. Lo hice constar por diligencia en presencia de cuatro testigos, quienes firmaron conmigo y el intérprete oficial. Estos son los hechos tales como han pasado; y en cuanto á la veracidad de lo que digo, de que el Sr. Cutting no ha solicitado su libertad bajo de fianza, lo compruebo con el justificante del Agente del Ministerio Público, que en una foja útil tengo el honor de acompañar, suplicando muy atenta y respetuosamente á ese Supremo Tribunal, me queden mis derechos á salvo contra el autor de los cargos calumniosos, así como lo que asienta Cutting relativo á la entrevista que tuvo con el repórter americano, pues como coincide con los hechos de él demostrados en la causa, no tengo la menor duda, aunque Cutting no haya querido contestar, de que él es el autor de esa maquinación falsa.

Libertad y Constitución. Paso del Norte, Julio 21 de 1886.—*K. Castañeda*.—
Rúbrica.

Es copia de su original, que autorizo y firmo por disposición superior. Chihuahua, Julio veintitrés de mil ochocientos ochenta y seis.—*José M. Márquez*, secretario.

TERCERA PARTE

REPORTE SOBRE EL DELITO EXTRATERRITORIAL

REPORT

ON

EXTRATERRITORIAL CRIME

AND

THE CUTTING CASE.



WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1887.

DEPARTMENT OF STATE,
Washington.

SIR:

In accordance with your request, I have the honor to report to you the results of an examination of the jurisdictional claim made by the Mexican Government in the case of A. K. Cutting, a citizen of the United States, arrested at Paso del Norte, Mexico, on the 23d of June, 1886, on a charge of having published in El Paso, in the State of Texas, a libel against a Mexican.

On the 19th of July, 1886, there was sent to Mr. Jackson, Minister of the United States at the City of Mexico, the following telegram:

You are instructed to demand of the Mexican Government the instant release of A. K. Cutting, a citizen of the United States, now unlawfully imprisoned at Paso del Norte.

BAYARD.

The facts upon which this demand was based may briefly be summarized:

On the 1st of July, 1886, Mr. Brigham, Consul of the United States at Paso del Norte, Mexico, wrote to the Department of State at Washington that A. K. Cutting, a citizen of the United States, had been arrested in Paso del Norte on the 23d of the preceding month by the direction of the judge of a local court for the publication in Texas of a libel against a Mexican citizen. When arrested Mr. Cutting had, it was stated, been about eighteen months a resident of Paso del Norte, engaged in editing a newspaper called *El Centinela*, in a recent number of which he had reflected upon the character and questioned the good faith of one Emigdio Medina, a Mexican, who proposed to start a rival newspaper in the same town. For this publication Mr. Cutting was, at the instance of Medina, arrested, brought before a local court, and required to sign a "reconciliation," which is in the nature of a compromise or settlement between the parties, in consideration of which the party who feels himself aggrieved abandons penal proceedings.

What occurred after the “reconciliation” may be related in Mr. Brigham’s own words:

Under the law here, when the parties agree to and sign a “reconciliation,” the case is dismissed, which was done in this instance, Mr. Cutting being required by the court to publish it [the “reconciliation”] in his paper, which he did.

On the 18th day of June Mr. Cutting proceeded across the Rio Grande River to the United States, to El Paso, Texas, and published a card in the *El Paso Herald*, in which he reiterated his former charges, and made some others, branding Medina’s conduct as contemptible and cowardly, &c. * * *

When Mr. Cutting returned to Paso del Norte he was again arrested, presumably at the instance of Medina, and taken before the judge of the second court. Before this court Mr. Cutting was refused counsel and an interpreter, both of which he requested, and with closed doors, no one being present but the judge, the court interpreter and the accused, the so-called examination of the case was proceeded with, which resulted in the committing of Mr. Cutting to jail. (Mr. Brigham to Mr. Porter, July 1, 1886; Ex. Doc. (H. R.) 371, 49th Congress, 1st Sess).

Mr. Cutting at once appealed to the United States Consul for protection, stating that he had been cast into jail

...for an alleged offense committed in Texas.” On the receipt on this communication, continued Mr. Brigham, I proceeded to the office of the official interpreter of the court to ascertain the exact charges against Mr. Cutting, and was informed that he was arrested for the publication in the *El Paso (Texas) Herald*; that he was examined upon this charge alone, and committed to jail on the same. * * *

Mr. Cutting still (July 1) languishes in jail, having been thus confined for more than one week. Hail was refused him, which he was prepared to give in any reasonable amount.

Accompanying this despatch of Consul Brigham, which was received at the Department of State on the 17th of July, were affidavits of the consul and other persons substantiating his statements. Among these affidavits is one of A. N. Daguerre, a Mexican, who accompanied Mr. Brigham’s clerk to the court-room on the 24th of June, the day following the arrest, in order to inquire as to the progress of the case, and who deposed that the judge stated, in reply to a question of the clerk, that Mr. Cutting was held for the publication in Texas.

In addition to showing that Mr. Cutting was held for the publication in Texas, the affidavits accompanying Mr. Brigham’s despatch alleged great

cruelty in the manner of the prisoner's confinement; that the place of his incarceration was "loathsome and filthy;" that he was "locked up with eight or ten other prisoners * * in jail for various offenses * * in one room, 18 by 40 feet, with only one door, which is locked at night, making it a close room in every respect, there being no other means of ventilation," and compelled to endure other grievous hardships.

On the 16th of July a despatch was received at this Department from Mr. Jackson enclosing correspondence with Mr. Mariscal, the Mexican Minister for Foreign Affairs. This correspondence disclosed the fact that Mr. Jackson had, on the 6th of July, called Mr. Mariscal's attention to the circumstances of Mr. Cutting's imprisonment, the nature of the charge—"an offense committed upon the soil of Texas,"—the manner of his confinement, and the fact that he had offered ample bail, which was refused. Mr. Jackson stated, however, that his purpose was not to discuss the question of jurisdiction, which had been referred to the Department of State at Washington, but to direct the attention of the Minister for Foreign Affairs

...to the fact that an American citizen, of respectable character, charged with no serious crime, but with acts which, even if he be guilty, constitute the simplest of misdemeanors, is now undergoing a very severe punishment before conviction, and after offering the best of security for his appearance to stand his trial; and that his health, and even his life, are placed and held in jeopardy, despite of the efforts of an official representative of his country in his behalf. But for this serious aspect of the case, said Mr. Jackson, I should have awaited 'instructions from my own Government before approaching your excellency on the subject, and do so now only for the purpose of praying that proper relief may be extended to Mr. Cutting at the earliest moment and through the speediest practicable channel. (H. Ex. Doc., 371, 49th Cong. 1st Sess., p. 12).

To this note Mr. Mariscal replied, on the 7th of July, saying:

By advice of the President I to-day address the Governor of the State of Chihuahua, recommending him to see that prompt and due justice be administered to the alleviation of the rude situation in which Mr. Cutting is found, as well as all else permitted by the laws. (*Ibid*, p. 12).

On the 17th of July, when all the facts above detailed were before the Department of State, a telegram was received from Mr. Brigham, saying that Mr. Cutting was still in prison, and that nothing had been done by the local authorities for his relief. (*Ibid*, p. 13).

The release of Mr. Cutting was then demanded, as appears by the telegram of July 19, above quoted.

On the 20th of July, the day after the date of the demand, Mr. Bayard sent to Mr. Jackson a full statement of the grounds thereof. After summarizing the facts, Mr. Bayard declared that

...the proposition that Mexico can take jurisdiction of its author on account of its publication in Texas is wholly inadmissible, and is peremptorily denied by this Government. It is equivalent to asserting that Mexico can take jurisdiction over the authors of the various criticisms of Mexican business operations which appear in the newspapers of the United States. If Mr. Cutting can be tried and imprisoned in Mexico for publishing in the United States a criticism on a Mexican business transaction in which he was concerned, there is not an editor or publisher of a newspaper in the United States who could not, were he found in Mexico, be subjected to like indignities and injuries on the same ground. To an assumption of such jurisdiction by Mexico neither the Government of the United States nor the governments of our several States will submit. They will each mete out due justice to all offenses committed in their respective jurisdictions. They will not permit that this prerogative shall in any degree be usurped by Mexico, nor, aside from the fact of the exclusiveness of their jurisdiction over acts done within their own boundaries, will they permit a citizen of the United States to be called to account by Mexico for acts done by him within the boundaries of the United States. On this ground, therefore, you will demand Mr. Cutting's release.

But there is another ground on which this demand may with equal positiveness be based. By the law of nations no punishment can be inflicted by a sovereign on citizens of other countries unless in conformity with those sanctions of justice which all civilized nations hold in common.

Among these sanctions are the right of having the facts on which the charge of guilt was made examined by an impartial court, the explanation to the accused of these facts, the opportunity granted to him of counsel, such delay as is necessary to prepare his case, permission in all cases not capital to go at large on bail till trial, the due production under oath of all evidence prejudicing the accused, giving him the right to cross-examination, the right to produce his own evidence in exculpation, release even from temporary imprisonment in all cases where the charge is simply one of threatened breach of the peace, and where due security to keep the peace is tendered. All these sanctions were violated in the present case. Mr. Cutting was summarily imprisoned by a tribunal whose partiality and incompetency were alike shown by its proceedings. He was refused counsel;

he was refused an interpreter to explain to him the nature of the charges brought against him; if there was evidence against him it was not produced under oath, with an opportunity given him for cross-examination; bail was refused to him; and after trial, if it can be called such, violating, in its way, the fundamental sanctions of civilized justice, he was cast into a “loathsome and filthy cell,” where, according to one of the affidavits attached to Mr. Brigham’s report, “there are from six to eight other prisoners, and when the door is locked there are no other means of ventilation, “an adobe house, almost air-tight, with a dirt floor;” he was allowed about “81/2 cents American money for his subsistence;” he was “not furnished with any bedding, not even a blanket.” In this wretched cell, subjected to pains and deprivations which no civilized government should permit to be inflicted on those detained in its prisons, he still languishes, and this for an act committed in the United States, and in itself not subject to prosecution in any humane system of jurisprudence, and after a trial violating the chief sanctions of criminal procedure. (*Ibid*, p. 13).

Under date of the 27th of July Mr. Bayard sent to Mr. Jackson another communication, from which may be quoted the following pertinent passages:

On Saturday last, the 24th instant, I was called upon by Mr. Romero, the minister from Mexico at this capital, in relation to the case referred to.

Mr. Romero produced to me the Mexican laws, article 186, whereby jurisdiction is assumed by Mexico over crimes committed against Mexicans within the United States or any other foreign country; and under this he maintained the publication of a libel in Texas was made cognizable and punishable in Mexico. And thus Mr. Cutting was assumed to be properly held.

This claim of jurisdiction and lawful control by Mexico was peremptorily and positively denied by me, and the statement enunciated that the United States would not assent to or permit the existence of such extraterritorial force to be given to Mexican law, nor their own jurisdiction to be so usurped, nor their own local justice to be so vicariously executed by a foreign government.

In the absence of any treaty of amity between the United States and Mexico providing for the trial of the citizens of the two countries respectively, the rules of international law would forbid the assumption of such power by Mexico as is contained in the Penal Code, article 186, above cited. The existence of such power was and is denied by the United States.

Mr. Romero informed me that the local or state jurisdiction over Cutting’s case did not allow interference by the national Government of Mexico in the matter, and that it was this conflict that had induced delay in responding to the demand of this Government for Mr. Cutting’s release. (*Ibid*, p. 17).

On the 2d of August the President of the United States, in response to a resolution of the Senate, transmitted to that body a report from the Secretary of State, in which the jurisdictional issue was again defined, as follows:

A copy of article 186 of the Mexican code, which was handed to the undersigned by Mr. Romero in support of the claim of Mexico to take cognizance of crimes of which Mexicans were the subject in foreign countries, is herewith appended.

This conflict of laws is even more profound than the literal difference of corresponding statutes, for it affects the underlying principles of security to personal liberty and freedom of speech or expression, which are among the main objects sought to be secured by our framework of Government.

The present case may constitute a precedent fraught with the most serious results.

The alleged offense may be—and undoubtedly in the present case is—within the United States held to be a misdemeanor, not of high grade; but in Mexico may be associated with penal results of the gravest character. An act may be created by a Mexican statute an offense of high grade, which in the United States would not be punishable in any degree. The safety of our citizens and all others lawfully within our jurisdiction would be greatly impaired, if not wholly destroyed, by admitting the power of a foreign state to define offenses and apply penalties to acts committed within the jurisdiction of the United States.

The United States and the States composing this Union contain the only forum for the trial of offenses against their laws, and to concede the jurisdiction of Mexico over Cutting's case, as it is stated in Consul Brigham's report, would be to substitute the jurisdiction and laws of Mexico for those of the United States over offenses committed solely within the United States by a citizen of the United States.

The offense alleged is the publication in Texas, by a citizen of the United States, of an article deemed libelous and criminal in Mexico.

* * * * *

Under this pretention, it is obvious that any editor or publisher of any newspaper article within the limits and jurisdiction of the United States could be arrested and punished in Mexico if the same were deemed objectionable to the officials of that country, after the Mexican methods of administering justice, should he be found within those borders.

Aside from the claim of extraterritorial power thus put forth for the laws of Mexico and extending their jurisdiction over alleged offenses admittedly charged to have been committed within the borders of the United States, are to be considered the arbitrary and oppressive proceedings which, as measured by the constitutional standard of the United States, destroy the sub-

stance of judicial trial and procedure, and to which Mr. Cutting has been subjected. (*Ibid*, p. 3.)

Article 186 of the Mexican Penal Code, translated, is as follows:

Penal offenses¹ committed in a foreign country by a Mexican against Mexicans or foreigners, or by a foreigner against Mexicans, may be punished in the Republic (Mexico) and according to its laws, subject to the following conditions:

I. That the accused be in the Republic, whether he has come voluntarily or has been brought by extradition proceedings.

II. That, if the offended party be a foreigner, he shall have made proper legal complaint.

III. That the accused shall not have been definitively tried in the country where the offense was committed, or, if tried, that he shall not have been admitted, included in an amnesty, or pardoned.

IV. That the breach of law of which he is accused shall have the character of a penal offense, both in the country in which it was committed and in the Republic.

V. That by the laws of the Republic the offense shall be subject to a severer penalty than that of *arresto mayor*.²

Such are the provisions of article 186, which expressly asserts the jurisdictional claim of Mexico against which the Government of the United States protested and in denial of which Mr. Cutting's release was demanded.

It will now be seen that this jurisdictional claim was actually enforced by the Mexican court by which Mr. Cutting was tried.

On the 21st of July Mr. Jackson telegraphed to Mr. Bayard that Mr. Cutting's instant release was refused, and that reasons therefor were given. These reasons, communicated to Mr. Jackson by Mr. Mariscal on the 21st of July, were received at the Department of State on the 31st of the same month. They alleged the impossibility of compliance with Mr. Bayard's demand, owing to the inability of the Federal Executive to interfere with the authorities of the State of Chihuahua. The question of jurisdiction was not touched; but, as will hereafter be seen, Mr. Mariscal subsequently defended the claim asserted in article 186 (H. Ex. Doc. 371, 49 Cong., 1st Sess., pp. 19, 20).

Immediately after the demand for Mr. Cutting's release, and pending the correspondence that ensued, the authorities of Chihuahua hastened

¹ *Delito*, defined by Escriche as *la infracción de la ley penal*.

² *Arresto mayor* is detention for from 1 to 11 months, as distinguished from *arresto menor*, which lasts from 3 to 30 days.

to bring the case to trial; and, on the 6th of August, Judge Zubia, of the Bravos District, before whom the case had been brought for trial, rendered a decision sustaining the jurisdiction of Mexico, and sentenced the prisoner to a year's imprisonment at hard labor, to pay a fine of \$600, or, in default thereof, endure one hundred days' additional imprisonment, and to pay a civil indemnity to Medina.

The complete official text³ of Judge Zubia's decision is given in Exhibit A. Translated, it reads as follows:

In view of the present suit instituted against A. K. Cutting, who declares himself to be unmarried, 40 years of age, a native of the State of New York, a resident of this town, and editor of the newspaper *El Centinela*, for the offense of defamation:

In view of the preliminary statement of the accused, the petition of the district attorney, the statement made by the complainant, Emigdio Medina (the civil party to the suit), the defense of the prisoner's attorney, Jesus E. Islas, and all else which appears from the proceedings and was proper to be seen:

It appears, 1. That in No. 14 of the newspaper called *El Centinela*, published in this place, under date of the 6th of June last, there appeared a local item in English, in which there was criticised as fraudulent a prospectus published in El Paso, Texas, announcing the appearance of a newspaper called *Revista International*.

It appears, 2. That Emigdio Medina, considering himself alluded to and aggrieved by that paragraph, appeared before the second *alcalde*, acting in turn as criminal judge in this town, and asked for a judgment of conciliation against A. K. Cutting, as responsible editor of *El Centinela*.

It appears, 3. That the parties being present before the mediating judge, agreed on the publication in the same newspaper, *El Centinela*, of a retraction which was written by Medina and corrected by Cutting, the publication to be made four times in English, and, if Mr. A. N. Daguerre, an associate editor of the paper, would allow it, also in Spanish.

It appears, 4. That Cutting, instead of complying with the agreement as stipulated in the conciliation, published on the 20th of the same month of June a retraction only in English in *El Cantilena*, in small type and with material errors that rendered it almost unintelligible, and published on the same day a notice or communication in the *El Paso Sunday Herald*, in which he ratified and enlarged the defamatory statements which were published against Medina, and denounced as contemptible the agreement of conciliation which had taken place before the second *alcalde* of this town.

³ Correspondencia diplomática sobre el caso del ciudadano de los Estados-Unidos de America A. K. Cutting, published by the Mexican Government.

It appears, 5. That the plaintiff then appeared and in due form accused Cutting of the penal offense of defamation, in conformity with articles 643 and 646,⁴ section 2 of the Penal Code, for which cause the corresponding order of arrest was issued.

It appears, 6. That on the 22d of the same month the plaintiff enlarged the accusation, stating that although the newspaper, the *El Paso Sunday Herald*, is published in Texas, Cutting had had circulated a great number in this town and in the interior of the Republic, it having been read by more than three persons, for which reason an order had been issued to seize the copies that were still in the office of the said Cutting.

It appears, 7. That according to law the preliminary statement of the accused was taken, in which he denied the jurisdiction of the court, on the ground that the act had been committed in Texas, placing himself under the protection of the consul of the United States, and the warrant for his arrest in due form was ordered to be issued and communicated to the proper parties.

It appears, 8. That, having followed the examination through all its details, the accused insisted on his former answer, and when notified to appoint a person to defend him, as the citizen licentiate,⁵ Jose Maria Barajas, had declined to serve, he refused to do so, whereupon the citizen, A. N. Daguerre, a partner of the said Cutting in the editing of *El Centinela*, was officially appointed; but, as he also resigned, the appointment fell upon the citizen, Jesus E. Islas, who conducted the case up to the presentation of his brief of defense.

It appears, 9. That, in virtue of the opinion of the district attorney that the charge was well founded, the suit was duly advertised in the office of the clerk of the court for the term provided in article 409,⁶ as amended, of the Code of Criminal Procedure, and that time having elapsed without any exception being filed, the parties to the controversy were summoned for the discussion which took place on the 5th instant in the form and terms prescribed by the same code, the proceedings closing with the summons for sentence.

Considering, therefore, 1. That, in conformity with article 121 of the Code of Criminal Procedure, the foundation of the criminal proceeding is the proof of the act which the law accounts a penal offense, and that in the present case the existence of this fact is fully proved, as it consists of the publication appearing in *El Centinela* on the 6th of June last, characterizing as fraudulent

⁴ Article 646 provides that “defamation” shall be “punished with a penalty of from six months detention to two years’ imprisonment and a fine of from \$300 to \$2,000, when there is imputed a crime, act, or vice, which may occasion to the offended party dishonor or serious prejudice”.

⁵ May here be translated as attorney-at-law.

⁶ Article 409 (amended) provides that, after the preliminary examination and the formulation of the charge by the district attorney, the proceedings shall be placed in the office of the clerk of the court for three days, in order that exceptions may be taken by the defense.

the prospectus which was issued to announce the publication of the *Revista internacional*.

Considering, 2. That although it is true that there was in regard to this matter an act of conciliation, which would have satisfied the plaintiff if it had been carried out, it is also true that the terms of this act were not complied with, and that, for this reason, the responsibility of the penal offense remains the same.

Considering, 3. That the proof of the lack of fulfillment of the compromise entered into in the judgment of conciliation is actually in the communication published by Cutting in the *El Paso Sunday Herald*, in which he ratified the original assertion that Emigdio Medina was a fraud and a swindler, and at the same time in the article published in *El Centinela* of the same date, leaving out all the capital letters and putting the name of Medina in microscopic type in order to make the reading of it difficult.

Considering, 4. That ratification, according to the dictionary of Escriche, is the confirmation and sanction of what has been said or done, it is retroactive and by consequence does not constitute an act different from that to which it refers: *Ratihabitio retrotrahitur ad initium*, nor does new responsibility, distinct from that which originally existed, arise therefrom.

Considering, 5. That this being so, the criminal responsibility of Cutting arose from the article published in *El Centinela*, issued in this town, which article was ratified in the Texas newspaper, which ratification, however, did not constitute a new penal offense to be punished with a different penalty from that which was applicable to the first publication.

Considering, 6. That even on the supposition, not admitted, that the defamation arose from the communication published on the 20th of June in the *El Paso Sunday Herald*, article 186 of the Mexican Penal Code provides that—

“Penal offenses committed in a foreign country by a Mexican against Mexicans or foreigners, or by a foreigner against Mexicans,” may be punished in the Republic and according to its laws, subject to the following conditions:

1. That the accused be in the Republic, whether he came voluntarily or has been brought by extradition proceedings;
2. That if the offended party be a foreigner, he shall have made proper legal complaint;
3. That the accused shall not have been definitively tried in the country where the offense was committed, or, if tried, that he shall not have been acquitted, included in an amnesty, or pardoned;
4. That the breach of law of which he is accused shall have the character of a penal offense both in the country in which it was committed and in the Republic;
5. That by the laws of the Republic the offense shall be subject to a severer penalty than that of *arresto mayor*—requisites which have been fully met in the present case: for Cutting was arrested in the territory of the Republic; there is complaint from a proper legal source—that of Medina, who presented his complaint in the form prescribed by law; the accused has not been definitively tried, nor acquitted, nor included in an

amnesty, nor pardoned in the country in which he committed the offense; the penal offense of which Cutting is accused has that character in the country in which it was committed and in the Republic, as can be seen in the penal code in force in the State of Texas, articles 616, 617, 618, and 619, and in the Penal Code of the State of Chihuahua, articles 642 and 646; and according to this latter article, section 2, the breach of law in question is subject to a heavier penalty than that of *arresto mayor*.

Considering, 7. That according to the rule of law, *Judex non de legibus, sed secundum leges debet judicare*, it does not belong to the judge who decides to examine the principle laid down in said article 186, but to apply it fully, it being the law in force in the State.

Considering, 8. That this general rule has no other limitation than that expressed in article 126 of the General Constitution, which says: "This Constitution, the laws of the Congress of the Union passed in pursuance thereof, and all the treaties made or to be made by the President of the Republic with the approval of the Congress, shall be the supreme law of the whole Union. The judges of each State shall act according to said Constitution, laws, and treaties, notwithstanding the existence of contrary provisions in the constitutions or laws of the States."

Considering, 9. That the said article 186 of the Penal Code, far from being contrary to the supreme law or to the treaties made by the President of the Republic, has for its object, as is seen in the expository part of the same code, page 38, "the free operation of the principle on which the right to punish is founded, to wit, justice united to utility."

Considering, 10. That even supposing, without conceding it, that the penal offense of defamation was committed in the territory of Texas, the circumstance that the newspaper, *El Paso Sunday Herald*, was circulated in this town, of which circumstance Medina complained, and which was the ground of ordering the seizure of the copies which might be found in the office of Cutting, in this same town, properly constituted the consummation of the crime, conformably to article 644 of the Penal Code.⁷

Considering, 11. That, according to the amended article 7 of the General Constitution, penal offenses committed by means of printing are to be tried by the competent Federal or State courts, in conformity with their penal laws.

Considering, 12. That the publication by Cutting in *El Centinela*, ratified subsequently in the *El Paso Sunday Herald* and in the *Evening Tribune*, on file in the case, attacks the private life of Emigdio Medina by attributing to him the penal offense of fraud and of swindling, and is therefore comprised in the restriction placed on the liberty of the press by the said article of the constitution.

⁷ This article provides that defamation is punishable when committed by writing, printing, &.

Considering, 13. That as acts consummated in the territory of the Canton of Bravos, State of Chihuahua, are in question, it is incumbent on the judge, whose name is hereto subscribed, to pass upon them conformably to the laws in force in the said State, especially in view of the fact that the accused resides in this town, where he has had his domicil for more than two years, as appears from the declarations made on folios 20, 21, and 22 of this case, a statement not contradicted by Cutting, who on folio 19 declares that he resides on both sides, that is, in Paso del Norte, Mexico, and in El Paso, Texas, without a fixed residence on either of the two sides.

Considering, 14. That to show this more fully, Cutting expressly recognized the jurisdiction of the authorities of this town by appearing before the second *alcalde*, acting in turn as criminal judge, and answering the demand for conciliation, which was made against him by Medina for defamation.

Considering, 15. That the responsibility of Cutting is fully proved, since it appears in credible documents which have in nowise been contradicted by their author; and, if any doubt should exist respecting the malicious intent with which the first publication was made, it would disappear in view of the subsequent ratifications made in the *El Paso Sunday Herald* and in the *Evening Tribune*, in which Cutting expressly says that Emigdio Medina is a fraud, swindler, coward and thief;⁸ the requisites specified in article 391 of the Code of Criminal Proceedings being thus fully met.⁹

Considering, 16. That in order to fix the penalty which ought to be enforced, it must be borne in mind that, although the change imputed to the offended party causes him dishonor and serious prejudice, and there are no extenuating circumstances, the crime under consideration is of a private character between two editors, in which the only aggravating circumstances that exist are those referred to in the 7th¹⁰ and 11th¹¹ sections of article 44 and articles 656¹² and 657,¹³ section 4 of the Penal Code, it does not appear that the other aggravating circumstances mentioned by the district attorney are fully proved; for, although it is true that the present case has caused great

⁸ The epithets applied by Cutting to Medina in the card published in Texas, as appears from a copy of the card now before the writer, were "fraud" and "dead beat".

⁹ Article 391 relates to proof of malicious intent.

¹⁰ Circumstances: that the delinquent is an educated person; 4. That he has violated more than one provision of the penal code; 5. That publicity is an aggravation in defamation; "that defamation is public when printed, etc., and distributed or exposed to the public, or shown to six or more persons.

¹¹ NOTA DEL EDITOR: en el original aparece una llamada a nota al pie de página, pero la nota no aparece.

¹² NOTA DEL EDITOR: en el original aparece una llamada a nota al pie de página, pero la nota no aparece.

¹³ NOTA DEL EDITOR: en el original aparece una llamada a nota al pie de página, pero la nota no aparece.

alarm in the community, this is not attributable to the penal offense imputed to Cutting, but to the inadequate means which have been taken for his defense; this being exactly the case provided for in the final part of article 66 of the said code;¹⁴ and

Considering, finally, 17. That the person responsible for a penal offense is also responsible for its consequences, being likewise bound to make civil indemnity in the terms provided in articles 326¹⁵ and 327¹⁶ of the Penal Code.

THE SENTENCE

In view of the foregoing article 646, section 2, and articles 661,¹⁷ 119¹⁸ and 218,¹⁹ the said code, it is ordered and adjudged as follows:

First. For the penal offense of defamation committed against the person of Emigdio Medina, A. K. Cutting is sentenced to serve a year at hard labor and pay a fine of \$600, or, in default thereof, endure additional imprisonment of a hundred days.

Second. He is also sentenced to pay the civil indemnity, to be fixed according to the provisions of article 313²⁰ of the Penal Code.

Third. Let the defendant be admonished not to repeat the offense for which he is sentenced, and advised of the penalties to be incurred in that event.

Fourth. This sentence shall be published in the manner specified in article 661 of the said code.

Fifth. The case shall be sent to the supreme court of justice, for the purposes to which the final part of the petition of the district attorney refers, relative to the intervention of the American consul in this suit.

Sixth. Let the interested parties be notified, and the prisoner be advised of the length of time he has to appeal from this sentence.

Lic. Miguel Zubia, judge of the Bravos District, has so decreed definitively, in the presence of witnesses.

Miguel ZUBIA

Witnesses: L. Flores and S. Vargas.

¹⁴ Giving certain discretion to the judge as to severity of penalty.

¹⁵ The defendant is bound to make civil indemnity, if his act caused damage; 3. And for this indemnity he shall be held liable, whether criminally absolved or not.

¹⁶ NOTA DEL EDITOR: en el original aparece una llamada a nota al pie de página, pero la nota no aparece.

¹⁷ Requiring publication of sentence, at defendant's cost.

¹⁸ As to penalty of additional imprisonment, in default of payment of the fine imposed.

¹⁹ Defendant must be admonished not to repeat the offense, and informed of the penalty imposed for such repetition.

²⁰ By agreement between the parties.

From this decision the following facts appear: 1. Premise 6 discloses that the original ground on which Mr. Cutting was held to answer the charge of defamation was the publication of the card in the *El Paso* (Texas) *Herald*.

2. Consideration 3 discloses that the publication of the card in the Texas newspaper was treated as a breach of the “conciliation,” which, having once been entered into, must have been violated by Cutting before Medina could have maintained a criminal suit for the defamation in *El Centinela* of June 6. It thus appears that the “conciliation” was held to be binding on Cutting in Texas, and consequently to have extraterritorial effect.

3. Consideration 6 discloses that Mr. Cutting was also held on the ground that the publication in Texas constituted of itself a distinct and complete offense, punishable under article 186 of the Penal Code.

4. Consideration 6 also discloses that in order to bring the case within the provisions of article 186, the Texas Code was introduced to show that the publication in the Texas newspaper constituted a penal offense in that State. Thus Judge Zubia became the vicarious interpreter of the Texas criminal law, and substituting himself, by authority of article 186, for the judge and jury required for the trial in that State of the alleged violation of its laws, decided that such violation had been committed.

The importance of this observation can be appreciated only when we take into account that under section 229²¹ of the Texas Code, “*it is no offense to publish true statements of fact as to the qualification of any person for any occupation, profession, or trade;*” and that, under the Constitution of Texas (Art. 1, Sec. 6), “*in all indictments for libels, the jury shall have the right to determine the law and the facts, under the direction of the court, as in other cases.*” Under these legislative and constitutional provisions it would be impossible for any judge, domestic or foreign, to say, or for any expert to prove before a foreign tribunal, that the publication of the statement in question was a criminal libel in Texas. Yet, notwithstanding the rule that no penal law is extraterritorial, and in spite of the consideration that for a foreign tribunal to undertake to execute penally a law of the United States against a citizen of the United States, may justly be, and in the case in question actually was, regarded as an offense against the United States, the Mexican judge not only undertook to interpret and apply the Texas law of criminal libel against a citizen of the United States, but interpreted and applied it in a manner flagrantly at variance with the methods and guarantees of the fundamental law of the State that enacted it.

²¹ NOTE. Premise 6 refers to “It appears, 6,” in decision; Consideration 3 & 6 refers to “Considering 3 & 6.”

It has sometimes been argued that the publication in the Texas newspaper of the card in relation to Medina gave the Mexican court unquestionable jurisdiction in the premises, because it was a violation of the “conciliation,” which, being in the nature of a contract, was binding on the parties everywhere; and that, had the court proceeded on this ground alone, the United States would have had no cause for complaint. The fallacy of this argument should seem apparent.

It is true that the proceeding defined in Mexican law as a “conciliation” imports an agreement between parties, and thus bears some formal analogy to a private contract; but it also imports a compromise of a preexisting criminal liability, which revives if the defendant violate the terms of the “conciliation.” To argue, therefore, that the fact of publication in the Texas newspaper was properly held to be a violation of the “conciliation,” and to be attended with all the consequences of such violation, is merely to concede, in another form, but to the full extent, the claim asserted in article 186, and enforced in the present case, that foreigners may incur liability to criminal prosecution in Mexico for acts wholly committed and consummated in a foreign country.

This conclusion is not affected by the fact, stated in Judge Zubia’s decision, that, where the terms of a conciliation have been violated, the prosecution relates back to the original offense; nor mitigated by the argument sometimes advanced, that the “act of conciliation” is purely voluntary. To the first suggestion it is sufficient to reply that the question whether the breach of a “conciliation” revives or creates liability to criminal prosecution is not material. It is enough that the breach restores that liability, which the “conciliation” had removed. As to the second point, it is only necessary to advert to the fact that, while a defendant is not legally compelled to sign a “conciliation,” it may afford the means, and the only means, of escape from the uncertainties and tribulations of criminal prosecution and its possibly grave consequences.

To concede that a “conciliation” may have extraterritorial force would be to permit Mexico to impose upon citizens of the United States, while in Mexico, the burden of continued obedience to Mexican penal law even after their return to their own country. From this burden their only escape would be to renounce the benefits of the provisions of Mexican law relating to the “act of conciliation” and undergo criminal prosecution.

The only incident of the trial of Mr. Cutting that now remains to be considered is the decision of the Supreme Court of Chihuahua, pronounced on the 21st of August, 1886, releasing the prisoner. Translated, this decision reads as follows:

The second *alcalde* of the Canton of Bravos, acting in turn in the penal branch, began the trial of the present cause at the instance of the proper party against A. K. Cutting, who is unmarried, forty years of age, a native of the State of New York, a resident of Paso del Norte, and the editor of a weekly paper, *El Centinela*, which is published in that town, for the penal offense of defamation committed against the citizen Emigdio Medina. By virtue of the corn plaint presented by the offended party, criminal proceedings were instituted and were afterwards continued by the law judge of that district in the manner prescribed by the Penal Code, until definitive sentence was pronounced, the accused being condemned to suffer a year of imprisonment at hard labor and to pay a fine of \$600, and being obliged in addition to pay a civil indemnity upon the terms prescribed by law. The defense was not satisfied with this decision, and having interposed its right to an appeal, the records in the case came to this second chamber, the appeal having been duly admitted.

In order that the appeal might have due course, the prisoner was notified to name a person to defend him in this second case; and the civil party was given a term of five days, at the end of which he should appear to assert his rights in the appellate court.

A. K. Cutting refused to appoint a person to defend him, for which reason the defense of his rights was placed in charge of the official defender, the citizen Licentiate Joaquin Villalva; and Emigdio Medina, who had promised to appear, did not do so, but transmitted a document on the 16th of this month withdrawing from the action which he had brought.

Notwithstanding this withdrawal, which was at once admitted by the court, the court deemed it its duty to maintain in force the summons previously issued, in order that the present case might be decided in accordance with the requirements of justice.

In the public session which took place yesterday morning the state prosecuting attorney asked that the prisoner be declared guilty, and that his offense be considered as purged by the imprisonment already suffered, which petition was seconded by defendant's attorney; and the proceeding was concluded with a citation to the parties for the final trial.

Considering, 1, that article 658 of the Penal Code expressly provides that no proceedings shall take place against the author of a libel, defamation or calumny, unless on complaint of the person aggrieved, which provision is founded upon the fact that the principal party interested in the punishment of these offenses is the party aggrieved, and that by not presenting his complaint, or withdrawing therefrom, he renounces the right which the law gives him, and condones the offense.

2. Considering that on the supposition of the withdrawal of the party aggrieved, in the case of offenses which according to the Penal Code cannot be officially prosecuted, the right of society to punish such offenses is not so perfect nor so comprehensive as in those offenses in which a complaint is not

necessary; for there are cases in which the proceeding may be unjustifiable and improper, because the right of punishment might be confounded with revenge.

3. Considering that the reasons expressed in the two preceding considerations are made stronger by article 54 and 55 of the code of penal procedure, which code, in recognizing the right of the offended party to withdraw from the action brought, does not impose the actual obligation of continuing the accusation, this point remaining for the decision of the judges and the tribunals in the cases within their jurisdiction.

4. Considering that, as has been said before, the offended party, Emigdio Medina, has withdrawn from the action to which he had a right, as against A. K. Cutting, and therefore the principal motive of the suit does not exist; and as there is not, therefore, in the judgment of this court, sufficient ground to continue the case.

5. Considering, finally, that the withdrawal of the party offended is conceived to have had for its principal object the quieting of the alarm consequent upon his complaint, as the statements made on folio 8 of the second book give it clearly to be understood, and the continuation of the proceedings *on a point legally and accurately decided in the first instance*, would be not only to divest that laudable purpose of its effect, but would also be given beyond the requirements of the law and of the national dignity.

In view of the foregoing provisions, the court decides, in the name of the justice of the State, as follows:

1. The citizen Emigdio Medina is considered to have withdrawn to his own prejudice from the action brought by him against A. K. Cutting, who shall immediately be released.

2. Let the state prosecuting attorney, Licentiate Jose Maria Gandara, and the defendant's attorney, Licentiae Joaquin Villalva, be notified, and, after an examination of the first book of minutes, let the proper order be issued to the second minor judge of Bravos for its exact fulfillment. Let a certified copy be sent to the Governor of the State and let all the papers be filed.

From the decision of the Supreme Court of Chihuahua appear the following facts:

1. The decision of Judge Zubia was fully approved; but—

2. The prisoner was released on the ground that the plaintiff having withdrawn from the prosecution of the suit, the principal motive of its continuance had ceased to exist; it appearing, moreover, that the withdrawal had “for its principal object the quieting of the alarm consequent upon his complaint.”

The circumstances of the case of Mr. Cutting; the demand for his release; the jurisdictional claim of Mexico in denial of which the demand was made; the proof of that claim by Mr. Brigham; the implied avowal of it by the Mexican Government, and its enforcement by the Mexican courts, have been fully shown. Its express avowal and defense by that Government in the present case will be disclosed when we reach the consideration of the question whether the assertion by Mexico of a right to try a citizen of the United States, for an alleged offense against a Mexican, committed in the United States, was justly resisted by the Government of the United States.

It is proposed to discuss this question upon the principles of international law, and not as a matter of expediency, depending for its determination upon the answer to be given to the inquiry whether there may not be reasons for denying the jurisdictional claim of Mexico, which would not be so cogent if the same claim were to be put forward by some other countries. This is an important consideration, and not necessarily disrespectful to the administration of justice in Mexico. For it is patent that there are, as between the criminal laws of different states, fundamental differences which it is impossible to disregard, and of which a comparison of the trial of Mr. Cutting, from its inception to its end, with a criminal trial for the same offense in the United States affords an apt illustration.

But, before entering upon the discussion of the purely legal aspects of the case, it may not be out of place to advert to the fact that it has sometimes been urged that in not insisting upon Mexico's immediate compliance with its demand, the Government of the United States abandoned the position therein assumed. Such a contention is not sustained, either by the facts or by the reason of the case.

In the note to Mr. Jackson, dated July 21, and stating that Mr. Cutting could not be released, Mr. Mariscal alleged the following reasons:

Mr. Minister, these are delays that are inevitable in a country governed by institutions like ours, where the Federal Executive is unable to communicate directly with the local authorities of the States. Much less could it give them orders. To do thus would imply a positive offense, especially in the case of judges independent even of the administrative power of the State to which they belong, and that offense would be even more aggravated if designed to trample out and peremptorily stop a legal process, instituted by an interested party, as I understand the case of Mr. Cutting to be. (H. Ex. Doc. 371, 49th Cong., 1st Sess., p. 20.)

It thus appears that, although Mr. Mariscal has subsequently defended the validity of the jurisdictional claim of his Government, he did not then put its non-compliance with the demand of the United States on that ground.

It happened that the difficulty alleged by Mr. Mariscal was not without parallel in the history of the United States. Reference is made to the case of Alexander McLeod, arrested by the authorities of the State of New York in November, 1840, and held for trial on a charge of murder committed at the destruction of the steamer "Caroline," within the territorial jurisdiction of that State. On the 13th December, 1840, the British Government asked for his immediate release, on the ground that the destruction of the "Caroline" was "a public act of persons in Her Majesty's service, obeying the order of their superior authorities"; that it could, therefore, "only be the subject of discussion between the two national governments," and could "not justly be made the ground of legal proceedings in the United States against the persons concerned."

Mr. Forsyth, Secretary of State, replied on the 28th of December, with the declaration that no warrant for the interposition called for could be found in the powers with which the Federal Executive was invested, but at the same time denying that the demand was well founded. On the 4th of March, 1841, Mr. Webster succeeded Mr. Forsyth as Secretary of State, and on the 12th of the same month the demand for McLeod's immediate release was repeated. Mr. Webster's answer bore date the 24th of April, and, while admitting the grounds of the demand, declared that the Federal Government could not comply. In May McLeod was taken down to the city of New York, and was there brought before the Supreme Court of the State on a writ of *habeas corpus*. After a full argument, that tribunal, in July, refused to discharge him; and in the ensuing October, ten months after the first demand and seven months after the second, he was tried at Utica, and acquitted on proof of an *alibi*. This case led to the adoption by Congress in August, 1842, of an act to provide for the removal of cases involving international relations from the State to the Federal courts.

The course of the President of the United States in awaiting for one month the completion of judicial proceedings in the case of Mr. Cutting, instead of insisting on their abandonment, far from indicating a withdrawal of his demand, was a just and proper action, not only in the light of our former predicament, but as an exhibition of the friendly disposition of this Government toward Mexico.

It is not proposed to discuss the extent of the control of the Federal Executive of Mexico over the authorities of the States which compose

that Republic. This is a question of municipal law, which, in accordance with the rule that the authorities of a nation are the proper interpreters of its municipal regulations, may be left to the Mexican Government. But it should not be forgotten that, while a domestic difficulty may be accepted as a plea for delay, it cannot be set up as a bar to the ultimate performance of international obligations, and cannot, therefore, be held to prevent a demand upon a Government for the fulfillment of those obligations. To hold otherwise would be to assert the supremacy of municipal regulations, and permit each nation to prescribe the measure of its international duty.

The municipal law of every well regulated community, said Pinkney, in his great opinion in the case of the *Betsey*,²²

...in which the ends of social union, and the moral duties arising out of it, are understood, will furnish us with the axiom—*sic utere tuo ut alienum non laedas*. This axiom, although incorporated into the local code of many countries, belongs to and forms a part of the law of nature; and if such is the rule which natural as well as civil law prescribes to individuals in their social relations, it is not to be conceived that the law of nations, which considers States as so many individuals upon a footing of relative equality, communicates jurisdiction to any, without annexing a condition to the grant, that in its exercise it shall not trench upon the rights of any other member of the great society of nations.

Again, in the same opinion, he says:

It is obvious that between independent States, none of which can have authority over the others, one cannot assume to itself an exclusive power of interpreting the law of nations to the prejudice of the rest. So long as the interpretation put upon that law is a proper one, *and woks no injury to any other State or its citizens*, all are under a moral obligation to acquiesce in it, because all are bound by the rule itself; but surely if the rule is misconceived, *or if rules unknown to the law of nations are attempted to be introduced by one nation to the detriment of another*, the independence of nations is a term without a meaning, if this is to be submitted to.

It has constantly been held that neither the defective provisions nor the exaggerated pretensions of municipal legislation can be set up by a nation either to excuse the non-performance of its international duties, or to justify

²² This opinion was delivered by Mr. Pinkney as a member of the mixed commission under the seventh article of the treaty between the United States and Great Britain of 1794. See Wheaton's life of William Pinkney, p. 207.

its invasion of the rights and jurisdiction of other nations. Such was the position taken by the British Government and admitted by Mr. Webster in the case of McLeod. And such has constantly been the position taken by this Government in respect to claims against other Governments. To say that a nation may enforce upon foreigners within its territories whatever laws it may see fit to adopt, would exempt it from all the rules of international intercourse.

It is proper to state here, what may fairly be termed an incident of the Cutting case, that on the 14th of August, while the appeal was pending before the Supreme Court of Chihuahua, Mr. Mariscal, by direction of the President of Mexico, addressed to the Governors of the States of that Republic a circular enjoining that in future, in case of the arrest of a foreigner for any cause, especial care should be taken and a detailed report of the causes of action and the proceedings thereon sent to the Federal Government.

The argument has not infrequently been made that, although the original charge against Mr. Cutting was the publication of a libel in Texas, the demand for his release was invalidated by the addition to the original complaint of the charge that he had circulated the alleged libel in Mexico. The answer to this argument is, that it can be regarded as sound only in so far as it sustains the position heretofore taken as to the propriety of the President's course in not insisting upon the Mexican Government's putting an end to judicial proceedings in the State of Chihuahua. The charge of circulation in Mexico having been combined with that of publication in Texas, it could not be known until those proceedings were completed whether the latter ground would be maintained. But this question was settled by the judgment of the Supreme Court of Chihuahua, which, in affirming Judge Zubia's decision, fully sustained the enforcement of article 186.

We have seen that the sentence of Judge Zubia rested on the two-fold ground of the circulation of a libel in Mexico (as to the proof of which the sentence is not clear) and the violation of article 186 by the publication in Texas of a libel against a Mexican.

It has been much debated, both in the United States and in England, whether a general verdict on an indictment containing good and bad counts *charging the same offense* ought not to be reversed on error. The preponderance of authority in this country has been that a court of error will presume that the verdict was rendered on the good counts, and will so apply it; and such was the prevailing practice in England, until it was shaken by the case of O'Connell.²³

²³ Wharton's Crim. Pl. and Prac., S. 771, 8th Ed.; v. O'Connell, II Cl. Anf Fin. 15.

But this rule could not have been admitted to apply to the sentence of Mr. Cutting, because, in the first place, it continued expressly to rest, after appeal and final judgment, on what this Government held to be an inadmissible complaint. In the second place, the sentence was so framed, in the alternative, as to make it possible and even probable that it rested *wholly* on that charge.

We must, therefore, hold that the judgment of the Supreme Court of Chihuahua, in finally closing the door to judicial reversal or correction of Judge Zubia's sentence, consummated the wrong of which the United States complained, and, had Mr. Cutting not been released, would have left to this Government the alternative of either insisting upon or abandoning its original demand.

Viewing the matter generally, it would be strange, indeed, if the demand of a Government for the release of one of its citizens, held in a foreign country on an inadmissible charge, might be rendered nugatory by the answer that the invalid charge, however clear and unmistakable its enforcement, was accompanied by a valid complaint.

THEORIES OF CRIMINAL JURISDICTION

The various theories of criminal jurisdiction discussed in the books may conveniently be arranged as follows:

I. TERRITORIAL

1. Actual—

- a. Subjective: As to offenses committed by persons on the territory, except diplomatic officers.
- b. Objective: As to offenses committed within the territory by persons outside; *e. g.*, a shot fired on one side of the boundary and taking effect on the other; infernal machine, swindling letter, poisonous food, counterfeit money, &c., sent into country by person outside.

2. *Constructive*— Over offenses committed on vessels of country.

II. NON-TERRITORIAL.

1. Personal, over citizens:

- a. generally;
- b. in particular places, *e. g.* barbarous lands,
- c. as to particular acts.

2. *As to particular offenses*, whether by citizens or foreigners.

- a. Piracy.
- b. Where two countries by convention agree to punish the citizens of each other, *e. g.*, conventions for suppression of slave trade. c. Against safety of state; counterfeiting or forging national seals, papers, moneys, bank bills authorized by law.

3. Offenses committed abroad by foreigners against citizens.

4. All offenses, wherever and by whomsoever committed.

It is unnecessary for our present purpose to discuss in detail all the theories of criminal jurisdiction which are stated in the foregoing synopsis. The right of every nation, in the exercise of its sovereignty, to punish acts committed on its soil and in violation of its laws by persons within its territory, may be conceded. The right of a nation to punish offenses committed on its vessels, national or private, which for most purposes are considered as part of the national territory, is also admitted. Such offenses, it has been held, may be punished by the vessel's sovereign even when they were committed on a merchant vessel in the ports of another sovereign, provided the latter did not take jurisdiction. And it may also be granted that a nation may, under proper limitations, punish offenses committed within its territory by persons corporeally outside.

It is true that in the case of an offense committed within the territory of one state by a person corporeally within the territory of another state, there may sometimes be concurrent jurisdiction—the former state having jurisdiction by reason of the locality of the act, the latter by reason of the locality of the actor. In such case the latter state may punish the perpetrator, or may give him up to the other state; or, if it see fit, may decline to do either. But the fact that a state may be unable to obtain jurisdiction of the offender is not a test of its jurisdiction over the offense, for such inability may exist where the person who committed the offense was, at the time of

its commission, within the territory, but subsequently fled to the jurisdiction of another country.

The principle that a man who outside of a country willfully puts in motion a force to take effect in it is answerable at the place where the evil is done, is recognized in the criminal jurisprudence of all countries. And the methods which modern invention has furnished for the performance of criminal acts in that manner has made this principle one of constantly growing importance and of increasing frequency of application.

Its logical soundness and necessity received early recognition in the common law. Thus it was held that a man who erected a nuisance in one county which took effect in another was criminally liable in the county in which the injury was done. (*Bulwer's case*, 7 co., 2 b., 3 b.; *Com. Dig. Action*, N. 3, 11.) So, if a man, being in one place, circulates a libel in another, he is answerable at the latter place. (*Seven Bishops Case*, 12 State Trials, p. 331; *Rex v. Johnson*, 7 East, 65.) The same rule applies to obtaining money or goods by false pretences; but it must appear that the false pretences were actually made at the place where the prisoner is held, and not merely that the pretences, which were made elsewhere, resulted in defrauding some one at the place of trial. (*Reg. v. Garrett*, 6 Cox C. C., 260.) So, if persons outside of a country procure therein the making and engraving of a plate for purposes of forgery, they are indictable there. (*Queen v. Bull & Schmidt*, 1 Cox C. C., 281.) Likewise, for cheating by false papers. (*King v. Brisac & Scott*, 4 East, 164.)

The same principle obtains in the United States. Thus a man may be convicted of subornation of perjury in the State in which, through the agency of a person there resident, the offense was committed, though he was himself in another State. (*Com. v. Smith*, 11 Allen, 243.) So, where a citizen and resident of Ohio obtained money in the State of New York by a fictitious receipt signed by him in Ohio, but sent to the city of New York to be fraudulently used, it was held that, being in that State, he was liable to trial and punishment; and the court observed—

It is not necessary to notice the peculiar relation which a citizen of one of the United States sustains to the other States; for if a subject of the British crown, while standing on British soil in Canada, should kill a man in this State, by shooting or other means, I entertain no doubt that he would be subject to punishment here whenever our courts could get jurisdiction over his person. * * * If our courts cannot get jurisdiction over his person they cannot try him. But that is no more than happens when a citizen, who has committed an offense within the State, escapes, and cannot be found. Jurisdiction of the

offense or subject matter and jurisdiction to try the offender are very different things. The first exists whenever the offense was committed within this State, and the second when the offender is brought into court, and not before. (Bronson, J., in *Adams v. The People*; Comstock's, R. (N. Y.), 173, 179.)

The same principle has also been held to apply as to nuisances. (*Stillman & Co. v. White Rock Mfg. Co. et al.*, 3 Woodbury & Minot, C. C. Rep., 538.) So if a person forge notes in one place and utter them in another, using for that purpose the mails, he is answerable in the latter place for the utterance of the forged papers. (*The People v. Rathbun*, 21 Wend, 509; Supreme Court of New York.) But where, under a statute providing that "every person who shall sell or in any manner transfer the services of any black, who shall have been forcibly taken, inveigled or kidnapped from this State (New York) to any other State, place, or country, shall, upon conviction, be punished," a person was indicted not only for inveigling a free negro from the State of New York with intent to sell him, but also for *the actual sale* of him in another State, it was held that the counts in the indictment relating to the latter charge were bad, the court saying: "It cannot be pretended or assumed that a State has jurisdiction over crimes committed beyond its territorial limits." (*People v. Merrill*, 2 Parker's Crim. Rep., 590.)

It has been held by the Supreme Court of Connecticut that where an inhabitant of Massachusetts sent some paupers into Connecticut in charge of his son, who, by direction of his father, left them there, in contravention of the statute of Connecticut forbidding the bringing of paupers into the State, under penalty of a fine, the father was answerable under the statute. (*Barkhamsted v. Parsons*, 3 Conn., 1.) The same principle was applied in the case of the *State v. Grady*, 34 Conn., 118, the court at the same time saying:

It is undoubtedly true, as claimed, that the courts of this State can take no cognizance of an offense *committed* in another State. Such was the decision in *Gilberts. Steadman*, 1 Root, 403. But it is true, and universally conceded, that if an offense is *committed* in this State by the procurement of a resident of another State, who does not himself personally come here to assist in the offense, * * * such non-resident offender can be punished for the offense by the courts if jurisdiction can be obtained of his person.

On the principle of causal connection it is provided in the Penal Code of New York of 1881, that if a person without the State commits an act which affects persons or property within the State, or the public health, morals, or decency of the State, he is punishable therefor in the State of New York. On this principle also rest the provisions of the Texas code for

the punishment of persons who, outside of that State, forge titles to land within the State.²⁴

The principle of the liability of persons outside of a State for acts caused by them within the State was early established in Pennsylvania by the decision of the Supreme Court in the case of the *Commonwealth v. Gillespie et al.*, 7 Sergeant and Rawle, 469, decided in 1822. The facts in this case, which came up on a motion for a new trial, were that a lottery office was kept in Philadelphia in a house rented by *Gillespie*, one of the defendants and a resident of New York; that a lad named *Gregory*, the other defendant, kept the office and sold lottery tickets there as the agent of *Gillespie*, who

²⁴ So it has been held by the Texas courts. In the case of *Hanks v. The State* (13 Tex. Appeal, 289, decided in 1882), the question was fully discussed, and I quote from the opinion of the court the following passages, which speak for themselves:

“Appellant and one P. F. Dillman were jointly indicted in the district court of Travis County (Texas) for the forgery of a transfer of a land certificate for a league and labor of land in the State of Texas. It is alleged in the indictment that the acts constituting the forgery were all committed in Caddo Parish, in the State of Louisiana. No act or thing connected with the execution of the forgery is charged to have been done in Texas; but the crime and injury, so far as this State is concerned, are averred to consist in the fact that the said forgery in Louisiana ‘did then and there relate to and affect an interest in land in the State of Texas, * * * and would, if the same were true and genuine, have transferred and affected certain property, to wit, a certain land certificate, number 222, for one league and labor of land in the State of Texas,’ &c.

“This indictment was brought under article 451 of the Penal Code.

“By article 454 of the code it is declared that ‘persons out of the State may commit and be liable to indictment and conviction for committing any of the offenses enumerated in this chapter *which do not in their commission necessarily require a personal presence in this State*, the object of this chapter being to reach and punish all persons offending against its provisions, whether within or without this State,’ &c.

“It was made a ground both in the motion to quash the indictment and in arrest of judgment, and is again urgently insisted upon in the able brief of counsel for appellant, that the facts alleged, if true, would constitute an offense against the sovereign State of Louisiana alone, and one of which the courts of this State would have no jurisdiction.

“If the position thus assumed in behalf of the appellant be correct, then the legislature had no authority to pass the act quoted, and the same is an absolute nullity. * * * We can see no valid reason why the Legislature of the State of Texas could not assert, as it has done in article 454 *supra* her jurisdiction over wrongs and crimes with regard to the land titles of the State, no matter whether the perpetrator of the crime was at the time of its consummation within or without her territorial limits. Such acts are offenses against the State of Texas and her citizens only, and can properly be tried only in her courts. It may in fact be no crime against the State in which it is perpetrated; and if it is, under such circumstances we are considering, that other State would have no interest in punishing it, and would rarely, if ever, do so. When this forgery was committed in Louisiana, *eo instanti* a crime was committed against, and injury done to the State of Texas, because it affected title to lands within her sovereignty.”

occasionally visited the place; and that, in this capacity, Gregory sold at the office a New York lottery ticket, endorsed in the name of Gillespie and not authorized by the laws of Pennsylvania. The prisoners being indicted jointly as participants or conspirators in the crime, the court at the trial did not instruct the jury that Gillespie was criminally answerable for the act of his agent or servant, but left it to them to say whether, from the whole of the evidence, he was concerned in the sale of the ticket. The jury found that he was, and the Supreme Court sustained the verdict. This court said:

It makes no difference where Gillespie resided; if he conspired to sell New York lottery tickets in Pennsylvania, with his agent, and his agent effected the act, the object of unlawful conspiracy, he is answerable criminally to our laws. * * * It must be recollected, the conspiracy is a matter of inference, deducible from the acts of the parties accused, done in pursuance of an apparent criminal purpose, in common between them, and which rarely are confined to one place; and if the parties are linked in one community of design, and of interest, there can be no good reason why both may not be tried, where one distinct overt act is committed.

This doctrine has, since Gillespie's case, been applied again in Pennsylvania to an indictment for a conspiracy to cheat and defraud, which was executed in that State, in the case of the *Commonwealth v. Corliss et al.*, 3 Brewster's Rep. 575, decided in 1869.

These Pennsylvania cases were decided in accordance with the rule of the common law that where two or more persons conspire to do an unlawful act, each conspirator is responsible in any place where any overt act by any of his co-conspirators is done, as well as in the place where the crime is concocted and started. (Wharton's *Crim. Law*, 9th ed., Book 1, § 287.) So careful, however, have courts been to keep within what they deemed proper jurisdictional limits, that where, in the case of a felony, a person was guilty only as an accessory *before the fact*, as, for example, where a person counseled a felony to be committed, but was not present at its commission, it was held that he could be tried only in the place where his guilty act of accessory ship took place. This limitation never applied to treason and misdemeanors, in which all participants before or at the commission of the offense were regarded as principals. By statute in several of the United States the accessory before the fact may be tried in the place having jurisdiction of the principal act, and by statutes still more recent, making all accessories before the fact principals, the accessory before the fact, or instigator, is triable in the place where the crime is perpetrated. But, where no statute on the subject exists, it is still held that an accessory before the fact can be tried only in the place

of his accessory ship. Thus it has been held in Indiana that a person who, in the State of Ohio, counseled with and encouraged two persons to come into Indiana and commit larceny, could not be held in that State, there being no statute abolishing the distinction in such case between principals and accessories. (*Johns v. The State*, 19 Ind., 421.) So, where several persons entered into a conspiracy in Ohio to burn a steamboat, and the crime was executed in Arkansas, it was held by the Supreme Court of the latter State that one of the confederates, who remained in Ohio, was, by the law of Arkansas, merely an accessory before the fact, and could not be tried in that State. (*State v. Chapin*, 17 Ark., 561.)

The same rule was held to exist in New Jersey, in the case of *The State v. Wyckoff* (2 Vroom's Rep., 65), decided by the Supreme Court of that State in 1864. The defendant made arrangements in New York with one Kelly to go into New Jersey and steal certain articles, which he did, afterwards delivering them to the defendant in New York. Wyckoff never came into New Jersey, and it was held that as his offense merely constituted the crime of accessory ship before the fact, and this in New York, he could not be tried in New Jersey. Nevertheless the court said that it was a firmly established rule—

...that where the crime is committed by a person absent from the country in which the act is done, through the means of a merely material agency or by a sentient agent who is innocent, in such cases the offender is punishable where the act is done. The law implies a constructive presence from the necessity of the case; otherwise the anomaly would exist of a crime but no responsible criminal.

The decision just quoted speaks of an *innocent agent*, and implies that if a person outside of a State commits an act within it, through an agent who is cognizant of the character of the act which, as such agent, he performed, the principal cannot be held. This opinion rests on the doctrine of accessoryship, which, as has been seen, the New Jersey court recognized; the theory being that if the agent had a guilty knowledge of the character of his performance he became the principal offender in the place where he committed the act, and that the person for whom he acted was merely an accessory before the fact, and as such punishable only in the place of his accessoryship. But, as has been shown, the doctrine of accessoryship has been abolished by statute in many jurisdictions in which it formerly prevailed, and is condemned by many writers as unnecessary and unsound. Referring to accessories before the fact, Mr. Bishop says:

The distinction between such accessory and a principal rests solely in authority, being without foundation either in natural reason or in the ordinary doctrines of the law. The general rule of the law is, that what one does through another's agency is to be regarded as done by himself.

And on this point he cites Broom's *Legal Maxims*, 2 ed., p. 643; Co. Lit. 258a; and the opinion of Hosmer, C. J., in *Barkhamsted v. Parsons*, 3 Conn., 1, that "the principle of common law, *Qui facit per alium, facit per se*, is of universal application, both in criminal and civil cases."

Another jurisdictional question worthy of notice is that of the offense of larceny, where goods are stolen in one State or country and brought into another. It was held in England, and the decision has been widely followed in the United States, that in such a case an indictment will not lie for larceny in the country into which the goods were brought. These decisions rest on the ground that a person committing a larceny in one country cannot be punished for it in another jurisdiction. This may be regarded as sound, so far as it goes. But in some of the United States it has been provided by statute, as well as decided by the courts, that a person bringing stolen goods from one State into another may be indicted for larceny in the latter. And by a recent statute the same rule is in force in Canada in respect to persons bringing stolen goods into Canada from foreign jurisdictions.

This rule appears to rest on solid jurisdictional grounds. It does not imply a right to punish the offender for the taking in the foreign state, but only for his felonious act of holding in his custody in the punishing state with an intent to convert to his own use goods which he knows to be the property of another. This completely constitutes the crime of larceny in the latter state. For a clear and forcible exposition of the jurisdiction in such a case I quote from Bishop on *Criminal Law*, § 140, vol. 1, 7th ed., the following passage:

Though our courts are not permitted to recognize a foreign larceny and punish it, they can take cognizance of a foreign civil trespass to personal goods; and, if they obtain jurisdiction over the parties, they will redress the wrong done in the foreign country. The method under the common law procedure is by the familiar transitory action of trespass. Now, in every larceny there is a civil trespass as well as a criminal one. This civil trespass, when committed abroad, our courts can recognize, and practically enforce rights growing out of it to the same extent as if done on our own soil. So much is settled doctrine, about which there is no dispute. It is equally settled doctrine in larceny, that if one has taken another's goods by a mere civil trespass, even though

it was unintended, then, if finding them in his possession, the intent to steal them comes over him, and with such intent he deals with them contrary to his duty, this is larceny. Applying these two plain doctrines to the present case we have the result, that where a thief brings goods from a foreign State into ours our courts are required to look upon him as a trespasser; and, when he commits any aspiration of them here, such as he necessarily did in bringing them across the territorial line, the intent to steal impelling him, they should regard him as a felon under our laws.

An interesting case of the constructive presence and consequent criminal liability of an absent confederate in the commission of a crime, is that of the *State of Nevada v. Hamilton et al.*, 13 Nevada, 386, decided by the Supreme Court of that State in 1878. The circumstances of the case were that a plan was concocted between certain persons to rob the treasure box of a stage on the road from Eureka, in Eureka County, Nevada, to Nye County in the same State; that one of the confederates was to ascertain when the stage left Eureka, and to make a signal to his confederates in Nye County, thirty or forty miles distant, by building a fire on the top of a mountain in Eureka County, all of which he did. The question being whether this confederate could be held in Nye County for an attempt to rob there, he having been corporeally in Eureka County when his confederates attacked the stage, it was decided that he was properly so held, the Court adopting from Bishop's *Criminal Law*, sec. 650, vol. 1, the declaration that—

...where several persons confederate together for the purpose of committing a crime which is to be accomplished in pursuance of a common plan, all who do any act which contributes to the accomplishment of their design are principals, whether actually present at its consummation or not. They are deemed to be constructively present though in fact they may be absent.

A question which has given rise to much contrariety of opinion is that of the proper jurisdiction of the offense of murder, where the injury is inflicted in one place or state, and the victim dies in another place or state. In England it was once held that where a blow was struck in one county and death ensued in another county, the criminal could be tried in neither. To remedy this defect, the statute of 2 and 3 Edw. VI, chap. 24, A. D. 1549, was passed, after which it was held that the criminal could be tried in either county. But as this statute was adopted merely to remedy a defect in the common law procedure, by enabling juries in one county of the realm to take cognizance to a certain extent of facts that occurred in another county of the kingdom, it has frequently been asserted in the United States,

and is definitively settled in England, that where a blow is struck outside of the boundaries and jurisdiction of an independent state by a foreigner, the mere death of the victim, who subsequently to his injury has come or been brought into the state, does not give it jurisdiction of the crime. The decision of this question depends upon the view the court may take of the relation of the death to the infliction of the injury. The question was settled in England in the case of the *Queen v. Lewis*, 7 Cox C. C., 277, decided by the Court of Criminal Appeal in 1857. The prisoner, who was a Frenchman by birth, and a naturalized citizen of the United States, shipped at New York in December, 1856, as a seaman on board of an American ship, on a voyage from thence to Liverpool. On board of the vessel, and shipped for the same voyage, was a seaman named George, towards whom the prisoner, soon after the commencement of the voyage, began to exercise acts of cruelty. The last act proved was committed four days before the vessel arrived at Liverpool, and when she was on the high seas west of Cape Clear, Ireland. The vessel arrived in the Mersey on the morning of January 12, 1857, and George died at a hospital in Liverpool on the afternoon of the same day, in consequence of the cruelty and violence committed upon him by the prisoner during the voyage. The indictment was for manslaughter.

It was conceded by the counsel for the prosecution that by the common law the English courts would have had no jurisdiction, but he contended that it was conferred on them by the statutes of 2 Geo. II, c. 21, and 9 Geo. IV, c. 31. The former act provided that where any person, at any time after the 24th June, 1729, should be feloniously stricken or poisoned upon the sea, or at any place out of England, and should die of the same stroke or poisoning within England, or where any person should be feloniously stricken or poisoned within England and should die of the same stroke or poisoning upon the sea, or at any place out of England—in either of the said cases an indictment thereof found by the jurors of the county in England in which such death, stroke, or poisoning should happen, respectively, should be as good and sufficient as if such felonious stroke or poisoning, death thereby ensuing, had happened in the same county where the indictment was found. The statute 9 Geo. IV, c. 31, § 8, provided—

That where any person, being feloniously stricken, poisoned, or otherwise hurt upon the sea, or at any place out of England, shall die of such stroke, etc., in England, etc., every offense committed in respect of any such case, etc., may be dealt with, inquired of, tried, determined, and punished in the county or place in England in which such death, etc., shall happen, in the same manner, in all respects, as if such offense had been wholly committed in that county or place.

Notwithstanding the general words, especially of the latter act, the Court of Appeal held that the British courts had no jurisdiction, and said that—

That section (§ 8, 9 Geo. IV, c. 31) ought not, therefore, to be construed as making homicide cognizable in the courts of this country by reason of the death occurring here, unless it would have been so cognizable at the place where the blow was given; and the homicide in this particular case would have been by the 7th section so cognizable if the offender had been a British subject, but not otherwise.²⁵

An opposite view of the relation of the death to the mortal injury has been taken in the United States in the case of the *Commonwealth v. Macloon et al.*, 101 Mass., 1, decided by the Supreme Judicial Court of the State of Massachusetts in 1869. The defendants, one a citizen of the State of Maine and the other a British subject, were convicted in the Superior Court of Suffolk County, Massachusetts, of the manslaughter of a man who died in that county, in consequence of injuries inflicted on him by the defendants in a British merchant-ship on the high seas.

The statute of Massachusetts under which the defendants were tried and convicted provides that—

If a mortal wound is given, or other violence or injury inflicted, or poison administered, on the high seas, or on land either within or without the limits of this State, by means whereof death ensues in any county thereof, such offense may be prosecuted and punished in the county where the death happens. (Gen. Stats., c. 171, par. 19).

The decision of the Supreme Court, which was delivered by Gray, J., stated that the principal question in the case was “that of jurisdiction, which touches the sovereign power of the commonwealth to bring to justice the murderers of those who die within its borders.” It was not pretended that a foreigner could be punished in Massachusetts for an act done by him elsewhere. But it was held that where a mortal blow was given outside and death ensued within the State the offender committed a murder there. The court said—

Criminal homicide consists in the unlawful taking by one human being of the life of another in such manner that he dies within a year and a day from the time of the giving of the mortal wound. If committed with malice, express or

²⁵ See also *Hoog v. The Queen*, 7 Cox C. C., 489.

implied by law, it is murder; if without malice, it is manslaughter. * * * The unlawful intent with which the wound is made or the poison administered attends and qualifies the act until its final result. No repentance or change of purpose, after inflicting the injury or setting in motion the force by means of which it is inflicted, will excuse the criminal. If his unlawful act is the efficient cause of the mortal injury, his personal presence at the time of its beginning, its continuance, or its result is not essential.

The same view of the crime of murder, and consequently of jurisdiction in a case where death occurs in an independent state from an injury committed outside, was taken by the Supreme Court of Michigan, in the case of *Tyler v. The People*, 8 Mich., 320, decided in 1860. Tyler was indicted under a statute of that State, which is substantially identical with the Massachusetts statute referred to in the case of *Macloon*; and it was held that although the mortal wound was given in Canada, the person inflicting the blow was indictable in Michigan, where the death occurred, notwithstanding that it did not appear by the evidence that he was a citizen of that State.²⁶ Manning, J., delivering the opinion of the majority of the court, said:

The shooting itself, and the wound which was its immediate consequence, did not constitute the offense of which the prisoner is convicted. Had death not ensued, he would have been guilty of an assault and battery, not murder; *and would have been criminally accountable to the laws of Canada only*. But the consequences of the shooting were not confined to Canada. They followed Jones [the victim] into Michigan, where they continued to operate until the crime was consummated in his death.

Campbell, J., delivered a dissenting opinion of much force, in which he argued that the coming into the State was the act not of the wrongdoer but of the injured person, and therefore should not subject the former to the jurisdiction of Michigan merely because the latter happened to die there. This argument was adverted to in the case of *Macloon*, and the answer made by the Massachusetts court was that—

...it is the nature and the right of every man to move about at his pleasure, except so far as restrained by law; and whoever gives him a mortal blow assumes the risk of this, and in the view of the law, as in that of morals,

²⁶ Tyler was, in fact, a U. S. Marshal. His extradition was demanded by the British Government under the Treaty of 1842, for murder committed within British jurisdiction. But after his trial and conviction, the demand was permitted to rest. See Clarke upon Extradition, p. 68 *et seq.*

takes his life wherever he happens to die of that wound. (See *Com. v. Ma-
cloon, ante*).

In New Jersey, however, the contrary view was taken by the Supreme Court in the case of *The State v. Carter* (3 Dutcher, 499), decided in 1859. The defendant, who was assumed to be a citizen of New York, was indicted for homicide, by inflicting on the deceased in that State mortal wounds of which he afterwards died in New Jersey. The statute under which the indictment was found provided that—

...where any person shall be feloniously stricken or poisoned upon the sea, or at any place out of the jurisdiction of this State, and shall die of the same stroke or poisoning within the jurisdiction of this State, * * * an indictment thereof found by jurors of the county within the jurisdiction of this State, in which such death, etc., shall happen, etc., shall be as good and effectual in the law, etc., as if such felonious stroke and death thereby ensuing, or poisoning and death thereby ensuing, etc., had happened in the same county where such indictment shall be found. (Nixon's Dig., N. J., p. 184).

Green, J., delivering the opinion of the court, said:

Nothing was *done* by the defendant in this State. When the blow was given *both* parties were out of its jurisdiction, and within the jurisdiction of the State of New York. The only fact connected with the offense alleged to have taken place within our jurisdiction is, that *after* the injury the deceased came into and died in this State. * * * Here no act is done in this State by the defendant. * * * The coming of the party injured into this State afterwards was his own voluntary act, and in no way the act of the defendant.

It was consequently held that the offender not being a citizen of New Jersey, the courts of that State were incompetent to try him, notwithstanding the general language of the act under which the indictment was found.

The preponderance of decisions of the American courts unquestionably sustains the doctrine that in murder the crime is committed where the blow is struck.²⁷ It is not, however, my purpose to discuss here the soundness or unsoundness of these opposing views. My object in the preceding discussion of the English and American cases has been, in the first place, to show that in no case has an English or an American court assumed jurisdiction, even under statutes couched in the most general language, to try and sentence a

²⁷ Wharton's *Crim. Law*, 292; Bishop's *Cr. Law*, 113, vol. I: *Riley v. State*, 9 Humph. (Tenn.), 646; *State v. Kelly*, 76 Maine, 331.

foreigner for acts done by him abroad, unless they were brought, either by an immediate effect or by direct and continuous causal relationship, within the territorial jurisdiction of the court. In the second place, I have sought to illustrate the various phases of this principle for the purpose of dissipating the notion that it in some way sustains the doctrine of article 186 of the Mexican Penal Code. The mere existence of the English and American cases negatives the claim made in that article. If a nation has jurisdiction of offenses committed and consummated by a foreigner outside of its actual or constructive territory, then all argument as to the place where his acts took effect is useless and irrelevant. It is only because such a pretension is denied and repudiated not only in England, but also in the United States, and as between the several States of the United States, united as they are by a supreme Federal Constitution, that the courts have inquired so constantly as to the locality of the crime.

Taking up the theories classified as non-territorial, we may first notice that which proposes the punishment by the state of its own citizens for acts done abroad.

This theory has been separated into three subdivisions, as follows:

(a) The punishment by the state of all acts of its citizens abroad, which, if committed within its territory, would constitute violations of its criminal law. This proposition makes the penal law of the state a personal statute binding upon its citizens everywhere.

(b) The punishment by the state of all acts of its citizens which may be committed in particular places, and which, if committed within its territory, would constitute violations of its criminal law.

(c) The punishment by the state of particular acts of its citizens abroad, which, if committed within its territory, would constitute violations of its criminal law, and which, by reason of their gravity, or the fact that, as is the case with political crimes, the foreign state may not punish them, it is the duty of the state, not only to mankind but to itself, to punish.

It is not to be doubted that each state may, in the exercise of its sovereignty, punish its own citizens for such acts and in such manner as it may deem proper.

For the exercise of this right each state is responsible to itself alone, no other state being competent to intervene. Nevertheless, the subject has presented to publicists and legislators so many grave doubts on the score of expediency and justice, that few countries have attempted to require of their citizens a general observance of their criminal law outside of the national territory, except in particular places.

These exceptions are barbarous lands, in which local law does not exist, and to which the doctrine of the sovereignty of each nation over all persons within its territory does not completely apply; and Mohammedan and other non-Christian countries, in which the citizens of many states enjoy a conventional immunity from the local law. In such places it is not only proper but necessary for each state to subject its citizens to its own regulations. The argument of expediency may also be applied to the punishment of citizens for offenses of a high grade, such as murder, wherever committed. But, to quote the language of Sir George Cornwall Lewis²⁸—

...the system of tying the entire criminal law of a country round the neck of a subject, and of making him liable to its operation, in whatever part of the world he may be, converts the criminal law into a personal statute, and puts it on the same footing as the law respecting civil *status*.

The objection to this, as he states it, is that

...the personal statute of one country, in civil matters, is recognized by another, so that there is no conflict of laws. But if the criminal law were a personal statute a foreigner would at the same time be subject to two criminal laws—the criminal law of his own State and that of the State of his domicile. No text-writer and no State disputes the rule that all foreigners in a country are subject to its criminal law.

It is no answer to this cogent reasoning to say that the punishment of a citizen by the country in which the crime was committed would be a bar to his punishment at home for the same offense; for it may be very differently regarded by the two countries. The law of the sovereign of allegiance might punish it much more severely than the law of the country in which the offense was committed; and, were the case reversed, the punishment of the criminal in his own country would either guarantee him immunity from a greater penalty justly incurred in the state where the offense was committed, should he return thereto, or, assuming that the former prosecution could not be set up as a bar in the latter country, would leave him liable on such return to a second punishment for the same offense. I am aware that it has been proposed by some writers, and adopted as a rule in some codes, to apply to offenses committed outside of the state either the penalty attached to the act by the law of the place where it was committed, or that imposed by the law of the place of trial, whichever may be the less severe. But the

²⁸ *Foreign Jurisdiction and the Extradition of Criminals*.

general and more consistent rule is to apply the penalty prescribed by the law of the punishing state; for, as it is a universal principle that one state will not enforce the penal laws and judgments of another state,²⁹ it seems to be illogical to apply to a criminal act, although committed abroad, the penalty prescribed by a foreign law.

In addition to the inharmonious and conflicting results already noticed of the proposition generally to extend the operation of criminal law to citizens when abroad, it is obvious that if such a rule were enforced the trial of persons at a place far away from the *locus delicti* would often be productive of great hardships and injustice; and, if the law were not enforced, its inutility and the capriciousness of its enforcement would render its existence inexpedient and improper.

The second subdivision of non-territorial jurisdiction in our synopsis includes, first, the single crime of piracy. This offense has been placed by itself, because it is *sui generis*. The scene of the pirate's operations being the high seas, which it is not the special duty or right of any nation to police, and his crime being treated as a renunciation of the protection of the flag which he may carry, he is regarded as a complete outlaw, and may be punished by any nation that captures him. Such an exercise of jurisdiction is both logical and necessary, and is recognized by all nations as a common duty and a common advantage. It scarcely need be said that the exercise, as in the case of conventions for the suppression of the slave trade (non-territorial, 2, *b*), of criminal jurisdiction by one country over the citizens of another, under a special treaty between the two countries, presents no conflict of jurisdictions, and is simply a question of expediency to be considered by the parties to the agreement. The punishment by a nation of extraterritorial offenses against the safety of the state, and the counterfeiting or forging of national seals, papers, moneys, and bank bills authorized by law (non-territorial, 2, *c*) is, as will hereafter be seen, regarded as an exception to the general principles of criminal jurisprudence, and is placed by those who maintain and defend it upon the high ground of necessity and self-defense.

Our fourth subdivision of non-territorial jurisdiction proposes the punishment by each state of all offenses, wherever and by whomsoever committed. It is unnecessary to discuss this theory specifically, because, in the first place, it is so rhapsodical and cosmopolitan in its character, and, while intended to be benevolent, is so impracticable and intrusive, that it has never assumed a legislative guise; and, in the second place, its character will necessarily be disclosed in the consideration, immediately to follow,

²⁹ Foelix, *Droit International Privé*, tom. II, tit. IX, chap. IV.

of our third subdivision of non territorial jurisdiction, which proposes the punishment, by the state, of offenses committed abroad by foreigners against citizens, and which is found in article 186 of the Mexican Penal Code.

It has been constantly asserted both in the United States and in Mexico that this article is modeled on articles 5 and 7 of the French Code of Criminal Procedure; and in an editorial in *El Foro* of the 6th of August last, a “journal of legislation and jurisprudence” published in the city of Mexico, the Mexican law is elaborately defended on that ground. How far such a statement is borne out by the facts may readily be ascertained.

POSITIVE LEGISLATION RESPECTING EXTRATERRITORIAL CRIMES

Articles 5 and 7 of the French Code of Criminal Procedure³⁰ may be translated as follows:

ARTICLE 5. Every Frenchman who, outside of the territory of France, commits a *crime* punishable by the French law, may be prosecuted and judged³¹ in France.

Every Frenchman who, outside of the territory of France, commits an act defined as a *délit* by the French law, may be prosecuted and judged in France, if the act is punishable by the legislation of the country where it was committed.

Nevertheless, in the case of a *crime* or of a *délit*, no prosecution shall take place if the accused prove that he has been definitively judged in the foreign country.

In case of a *délit* committed against an individual Frenchman or foreigner, the prosecution can be instituted only at the request of the public ministry; it must be preceded by a complaint of the offended party or by an official denunciation to the French authorities by the authorities of the country where the *délit* was committed. No prosecution shall take place before the return of the culprit to France, except for the crimes enumerated in article 7, below.

ARTICLE 7. Every foreigner who, outside of the territory of France, shall be guilty of a *crime* against the safety of the State, or of counterfeiting the seal of the State, national moneys having circulation, national papers or bank bills authorized by law, may be prosecuted and judged according to the provisions

³⁰ Code d’instruction criminelle, dispositions préliminaires; see Codes Français et Lois Usuelles, par H. F. Riviere, Paris, 1876.

³¹ *I. e.*, tried, and acquitted or convicted.

of the French laws, if he is arrested in France, or if the Government obtains his extradition.

Such being the provisions of articles 5 and 7 of the French Code of Criminal Procedure, argument is unnecessary to show that they do not contain a single provision that can be construed as a precedent for the Mexican statute. Article 5 applies solely to offenses committed abroad by Frenchmen, and even as to those there are important limitations. Article 7 applies to offenses committed abroad by foreigners; but the jurisdiction is strictly confined to *crimes* against the safety of the state, and what may be termed the analogous *crimes* of counterfeiting the seal of the state, national moneys in circulation, national papers, and bank bills authorized by law. There is no suggestion of a claim to try foreigners for offenses committed abroad against a private person.

It has been seen that in respect to offenses committed abroad by Frenchmen article 5 makes a distinction between *crimes* and *delits*. These terms mark a distinction which may be likened to that denoted by the English words “felony” and “misdemeanor.” But, as *crime* and felony, as well as *delit* and misdemeanor, are technical terms, their correspondence, though general, is not exact. *Crime* is defined in the French Code³² as an offense which the laws punish with an afflictive or infamous penalty. Afflictive and infamous punishments are death, solitary confinement, imprisonment, hard labor for life or for a certain period, and transportation for life; punishments simply infamous are banishment and loss of civil rights.

Délit is defined as an offense which the laws punish with correctional penalties.³³ Such are imprisonment for a time in a house of correction, deprivation for a time of certain civic rights, and fines.

There is still another class of offenses called *contraventions*, which are defined as infractions of law punishable with police penalties.³⁴ Such are imprisonment for not less than a day nor more than a fortnight, or a fine of one to fifteen francs, inclusive. *Contraventions* are not punishable by the Code, when they are committed outside of France. There is, however, a law of June 27, 1866, whose operation is conditional, which provides for the punishment of *contraventions* as well as *delits* of certain kinds, when committed by a Frenchman in certain places outside of France. This law provides that

³² Code Penal, Art. 1. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est une crime.

³³ Ib. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est tin délit.

³⁴ Code Penal, Art. 1, L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention.

every Frenchman who commits either a *delit* or a *contravention* in respect to the forests, the country, the fisheries, the customhouses, or indirect taxes, on the territory of one of the contiguous states, may be prosecuted and tried in France, according to the French law, if the state in which the offense was committed authorizes the prosecution of its inhabitants for the same acts, when committed in France; and it is further provided that reciprocity shall be legally established by international conventions, or by a decree published in the bulletin of the laws.

In the French Code offenses against the safety of the state are divided into two classes, viz.: those against its exterior, and those against its interior safety. Among the former are machinations and holding communications with foreign powers, or their agents, to induce them to commit hostilities or enter upon war against France; committing hostile actions, not approved by the Government, which expose it to a declaration of war. Offenses against the interior safety of the state are attempts or plots directed against the governing powers, *crimes* tending to trouble the state by civil war, the illegal employment of an armed force, devastation and public pillage.

Germany. The Penal Code of the Empire of May 15, 1871,³⁵ as modified by the law of February 26, 1876, contains the following provisions:³⁶

§ 4. *Crimes and dilits* committed in a foreign country are not, as a rule, subjected to any prosecution. There can, however, be prosecuted according to the penal laws of the German empire:

1. Every *German* or *foreigner* who, in a foreign country, is guilty of high treason against the Empire of Germany or one of the States of the Confederation, or of counterfeiting money; or who has committed, in the quality of a functionary of the Empire of Germany or of one of the States of the Confederation, an act that the laws of the Empire define as a *crime* or *délit* committed in the exercise of public functions;

2. Every *German* who, in a foreign country, is guilty of high treason against the Empire of Germany or one of the States of the Confederation, or of an offense against a sovereign of the Confederation;

3. Every *German* who is guilty, in a foreign country, of an act defined as a *crime* or *délit* by the laws of the German Empire and punishable according to the laws of the place where it was committed. Prosecution can also take place when the criminal has not acquired the quality of a German until after the *crime* or *délit* has been consummated, provided, in the latter case, that the prosecution has been preceded by a complaint of the competent authority of the

³⁵ This code went into operation over the Empire on January 1, 1872.

³⁶ See Drage's *C. Code of the German Empire*. In translating the crim. codes of the continental nations, I have used the terms *crime* and *dilit*.

place where the act was committed. If the law of the foreign country imposes a lighter penalty, that law ought to be applied.

§ 5. In the case expressed by No. 3, § 4, the prosecution cannot take place:

1. If the foreign tribunals have decided on the offense by a judgment having the force of a final judgment, and if it has resulted in an acquittal or if the person convicted has undergone his penalty;

2. If the public action or the penalty falls under prescription according to the foreign law, or if the penalty has been remitted;

3. If the person offended has not formulated a complaint, in the case where the foreign legislation subordinates the prosecution to the existence of the complaint.

§ 6. *Contraventions* committed abroad are not punishable, except in the cases determined by special provisions of the law or of treaties.

§ 7. A punishment suffered in a foreign country is to be reckoned in considering the punishment to be awarded if a fresh condemnation ensues in the territory of the German Empire for the same act.

Austria. Part 1, chap. 2, of the Penal Code of the 27th May, 1852, contains the following provisions:

§ 36. *The subject of the Empire of Austria* who has committed a *crime* in a foreign country cannot on his arrival in his own country be surrendered to that foreign country; but he shall be treated conformably to the present Penal Code without regard to the laws of the country where the *crime* was committed.

If, however, he has already been punished in the foreign country on the charge of that violation of law, the penalty undergone shall be taken as part of that which is imposed by the present Penal Code. In no case can the judgments of foreign criminal jurisdictions be executed in this country.

§ 38. If a *foreigner* is guilty in a foreign country, either of the *crime* of high treason against the Austrian State, * * * or of the *crime* of falsifying papers of credit, or Austrian money, he shall be treated the same as a native, according to the present Penal Code.

§ 39. If a foreigner in a foreign country is guilty of any other *crime* than those specified in the preceding paragraph, he shall always be arrested on his arrival in this country; nevertheless, communication shall immediately be established in relation to the subject of extradition with the government of the country where the *crime* was committed.

§ 40. In case the foreign government refuses to accept the extradition, it shall then be proper, as a general rule, to proceed against the foreign criminal according to the provisions of the present Penal Code.

If, however, the law of the territory where the *crime* was committed is milder, it shall be proper to treat the culprit according to the milder law. The

judgment of condemnation shall pronounce, in addition, banishment after the expiration of the penalty.

Part 2, chap. 1:

§ 235. The *native* who shall be guilty of *dilits* or *contraventions* in a foreign country can never, on his arrival in his own country, be extradited to that foreign country. Hut when he has not been punished or prosecuted in the foreign country he shall be treated conformably to the present Penal Code without regard to the laws of the country where the violations of law were committed.

This provision is equally applicable in the cases where a penalty has already been pronounced against a native Austrian in a foreign country on the charge of like *délits contraventions*, provided that the penalty has not been executed. In no case shall the judgments of foreign criminal jurisdictions be executed in this country.

Belgium. The law respecting the punishment of offenses committed in a foreign country is substantially identical with that of France, whose legislation on this subject Belgium has followed since 1794.³⁷

The law of 17th April, 1878, which is still in force, contains the following provisions:

ARTICLE 6. There may be punished in Belgium every *Belgian* who, outside of the territory of the kingdom, shall be guilty—

1. Of a *crime* against the safety of the state;
2. Of a *crime* or a *dilit* against the public credit * * *,³⁸ if the *crime* or the *dilit* has for its object moneys having circulation in Belgium, or bills, papers, seals, stamps, marks, or dies of the state or of the departments of government or public establishments of Belgium;
3. Of a *crime* or of a *dilit* against the public credit * * * if the *crime* or *dilit* has for its object moneys not having legal circulation in Belgium, or the bills, papers, seals, stamps, marks, or dies of a foreign country.

The prosecution in the latter case cannot take place, except on official notification given to the Belgian authorities by the authorities of the foreign country.

ARTICLE 7. Every *Belgian* who, outside of the territory of the kingdom, shall be guilty of a *crime* or of a *dilit* against a Belgian may be prosecuted in Belgium.

ARTICLE 8. [This article provides that the prosecution of Belgians who, outside of the realm, shall have committed certain *crimes* or *dilits* against a for-

³⁷ *Revue de Droit International*, vol. IX, p. 305.

³⁸ The omitted words relate to the definition, mode of proof, etc.

eigner, shall be based either on the complaint of the injured person or of his family, or on official notification of the foreign authorities to those of Belgium that the offense has been committed.]

ARTICLE 9. [This article relates to violations of forestry, rural, fishery laws, and is like the law of France noticed on p. 39.]

ARTICLE 10. There may be prosecuted in Belgium the *foreigner* who shall have committed, outside of the territory of the kingdom, a *crime* against the safety of the State; a *crime* or a *délit* against the public credit * * *,³⁹ if the *crime* or the *délit* has for its object moneys having legal circulation in Belgium, or national bills, papers, seals, stamps, marks, or dies.

ARTICLE 11. The foreign coadjutor or accomplice of a crime committed outside of the territory of the kingdom by a Belgian may be prosecuted in Belgium conjointly with the accused Belgian, or after his conviction.

ARTICLE 12. Save the cases specified in Nos. 1 and 2 of article 6 and in article 10, the prosecution of the violations of law of which the present chapter treats shall not take place unless the accused is found in Belgium.

ARTICLE 15. The preceding provisions shall not apply when the accused, having been judged in the foreign country on the charge of the same violation of law, shall have been acquitted.

He shall be in the same situation when, after having been condemned abroad, he shall have undergone or prescribed his punishment, or shall have been pardoned.

Every detention undergone abroad, in consequence of a violation of law which gives rise to a sentence of condemnation in Belgium, shall be deducted from the duration of the penalties carrying deprivation of liberty.

ARTICLE 14. In the cases defined in the present chapter, the accused shall be prosecuted and judged pursuant to the provisions of the Belgian laws.

Denmark. The Penal Code contains the following provisions:

§ 4. Every *Danish subject* who, for the purpose of avoiding a prohibitive law in force in Denmark, shall commit, outside of the frontiers of the kingdom, the act which that law penally forbids, shall be considered as having committed it in this country.

§ 5. Equally considered as having infringed the penal laws of the kingdom, is every *Danish subject* who, abroad, shall have been guilty of treason against the Danish State or of the crime of high treason, or who shall have counterfeited or altered Danish moneys, attacked or outraged, in the exercise of his functions, a Danish functionary located in a foreign country, or failed in any manner to perform any of the duties of loyalty and obedience to which he is held as a subject.

³⁹ The omitted words refer to other parts of code for definition, mode of proof, etc.

* * * * *

§ 6. When, outside of the cases mentioned, a Danish subject shall have committed a *dilit* in a foreign State, the minister of justice is authorized to prosecute him in the kingdom, and the accused shall be judged according to the present law.

Great Britain. British subjects are punishable who have committed, either as principals or accessories, in a foreign territory, or in the colonies, murder or manslaughter, whether against an Englishman or against a foreigner, or offenses against the enlistment act.

Provision is also made by the Merchant Shipping Act of 1854 for the punishment of the master, seaman, or apprentice of a British ship, who at any place out of her Majesty's dominions commit offenses against persons or property.

Special enactments also exist for the punishment of British subjects who commit crimes in uncivilized or uninhabited countries, or in countries where the British authorities exercise by treaty criminal jurisdiction. Laws have also been passed to execute the slave-trade treaties between Great Britain and certain powers, authorizing the creation of mixed courts for the adjudication of ships bearing the flag of either of the contracting parties. This, however, as is said by Sir G. C. Lewis,⁴¹ "is an arrangement which it is competent to independent states to make in common, with the assistance of their respective legislatures, and it does not affect the rights of any third power."

Hungary. Jurisdiction over offenses abroad is regulated by the Penal Code of 21 June, 1880, in force since 1 September of that year. Generally speaking, both Hungarians and foreigners are punishable for committing, outside of Hungary, high treason, violence against the king and members of the royal house, treason against the state, insurrection or disturbance, and falsification of metal or paper money accepted as a means of payment into the coffers of the Hungarian state, or of bills of public credit of Hungary. Trial and conviction abroad, even when the culprit has undergone the punishment there imposed, does not operate as a bar to trial and punishment in Hungary; nor does pardon, unless it was approved by a royal minister of Hungary. It is provided, however, that the punishment undergone abroad shall, as far as possible, be taken into consideration in applying the penalties of the Hungarian law.

⁴⁰ The omitted provisions relate to punishment of public functionaries of the kingdom for violations of official duty abroad.

⁴¹ *Foreign Jurisdiction*, p. 28.

Hungarians may be prosecuted for yet other crimes and offenses committed abroad; and it is provided that a foreigner, also, may be punished for a crime or offense committed abroad and not included in the category given above, when, according to treaties or actual usage, *there is no ground for extradition and the minister of justice orders the prosecution*. But it is further provided that such a crime or offense cannot be prosecuted in Hungary when the act is not punishable by the law in force at the place where it was committed, or by the law of Hungary, or when it has ceased to be punishable according to one of those laws, or even when the competent foreign authority undertakes to punish it. It is also provided that when the penalty applicable to the crime or offense by the law of the place where it was committed is less severe than that of the Hungarian law, the former penalty shall be applied; and if part of the penalty shall have been served abroad, such part shall be taken into account by the Hungarian tribunals.

A Hungarian subject can never be surrendered to the authorities of a foreign country.

A penal judgment rendered by the authority of a foreign country cannot be executed in the jurisdiction of Hungary.⁴²

Italy. Italian subjects may be punished who have committed on foreign territory *crimes* against the safety of the state, or counterfeited the seal, money, bills or obligations of the state, or its paper money (article 5), or who have committed on foreign territory a *crime* or a *delit* against an Italian or a foreigner (article 6). In the case, however, of a *delit*, complaint must be made by the injured party, and, if he is a foreigner, it must appear that the legislation of his country assures the same protection to Italians.

In respect to offenses committed abroad by foreigners, the Penal Code⁴³ contains the following provisions:

ARTICLE 7. There shall be judged and punished, according to the terms of the present code, the foreigner who, having committed on foreign territory either a *crime* against the safety of the State, or the *crime* of counterfeiting the seal, the moneys, bills or obligations of the State, or its paper money, shall be arrested in the kingdom or surrendered by another government.

ARTICLE 8. The foreigner who shall have committed on foreign territory, either against an Italian, or against another foreigner, one of the *crimes* indicated in articles 596 to 600, inclusive,⁴⁴ shall, if he happens to be arrested in the kingdom, or to be surrendered by another government, be judged and

⁴² Part I, chap. II, art. 7, Penal Code.

⁴³ Code of 20 November, 1859.

⁴⁴ Relating to highway robbery.

punished according to the provisions of article 6,⁴⁵ provided that the *crime* was committed at the distance of three miles at most from the Italian frontier, or, if the distance was greater, provided that the criminal has brought into the kingdom the money or the property obtained by his depredations.

ARTICLE 9. Besides the case indicated in the preceding article, the foreigner who shall have committed on foreign territory a *crime* to the prejudice of an Italian, shall be arrested if he comes into the kingdom. With the authorization of the king, his return shall be offered to the Government of the place where the *crime* was committed, in order that he may there be judged. If that Government refuses to receive him, the criminal shall be judged and punished in the kingdom, according to the provisions of article 6.

The same thing shall take place in the case of *delits* committed by a foreigner to the prejudice of an Italian on foreign territory, when, in the like case, the Italian would be punished in the country to which the foreigner belongs; except as to that which concerns the civil action.

Except in the case of offenses against the safety of the state, or counterfeiting the seal, money, bills or obligations of the state, or its paper money, persons guilty of offenses abroad cannot be tried in the kingdom, if they have been definitively judged in the country where the violation of law was committed, and, in case of condemnation, have undergone the penalty imposed.

Luxembourg. By the law of 18 January, 1879, it is provided that every subject of the Grand-Duke who, outside of the territory of the Grand-Duchy, commits a *crime* or a *delit* may be prosecuted and judged in Luxembourg, provided that, in case of a *delit*, the act is punished by the legislation of the country where it was committed. If the criminal has been tried in the foreign country for the offense of which he is accused, and has been either acquitted or condemned, and if the latter is the case, has either undergone or prescribed his penalty, or has been pardoned, he cannot be tried again.

Every detention abroad for the offense for which condemnation takes place in Luxembourg, is counted as part of the penalty there, so far as the deprivation of liberty is concerned.

In case of a *delit* committed against an individual subject of the Grand-Duke or a foreigner, the prosecution can be instituted only on the request of the public ministry, and should also be preceded by a complaint of the offended party, or by an official denunciation to the Luxembourg authorities by the authorities of the country where the *delit* was committed.

⁴⁵ Relative to punishment of Italians for offenses committed abroad against an Italian or, a foreigner. See *supra*.

The preceding provisions do not apply to political *crimes* or *delits* committed in a foreign country. Nevertheless, an attempt against the person of the head of a foreign Government or against that of the members of his family is not regarded as a political offense, nor as an act connected with such an offense, when that attempt constitutes the crime of murder, or of assassination, or of poisoning. The prosecution is instituted at the request of the public ministry of the place where the accused resides, or of the place where he may be found.

In respect to offenses committed abroad by foreigners, the law contains the following provisions:

ARTICLE 7. Every foreigner who, outside of the territory of the Grand-Duchy, shall be guilty, either as author or as accomplice, of a *crime* against the safety of the State, or of the counterfeiting of the seal of the State, of national moneys having circulation, of national papers, or of bank bills authorized by law, may be prosecuted and judged according to the provisions of the Luxembourg laws, if he is arrested in the Grand-Duchy or if the government obtains his extradition.

In respect to *delits* and *contraventions* by subjects of the Grand-Duke in matters relating to the forests, the country, the chase, the fisheries, custom-houses or indirect taxes, in the territory of contiguous states, the law of Luxembourg follows that of France and is founded on reciprocity and conventions.

Netherlands. By the Penal Code, as modified by the law of 15 January, 1886, foreigners, as well as subjects, may be punished who, outside of the territory of the kingdom, attempt to deprive the king of life, or to subvert the Government or the safety of the state, or who assault the king or queen, or the successor to the throne. Foreigners, as well as subjects, are also punished who, in another state, counterfeit the money and seals of the Netherlands, or bills of credit or certificates of debt of the Dutch Government or of the Dutch possessions, or of public institutions of the Netherlands.

Dutch subjects are punished for numerous other criminal offenses committed abroad.

Norway. Subjects are judged, according to the laws of Norway, for violations of law committed either within or outside of the kingdom.

Foreigners are likewise judged for offenses committed in the kingdom, and also for violations of law outside of the kingdom to the prejudice of Norway or of Norwegian subjects, *if the king orders the prosecution before the Norwegian tribunals.*

When an individual has been punished in a foreign country for a violation of law committed outside of the kingdom, dismissal from office or employment is the only penalty which can be pronounced against him for that same offense.

Portugal. Only Portuguese⁴⁶ are punishable for offenses committed outside of the state. They may be tried and punished for *crimes* committed abroad against the safety of the State, for falsification of the public seals, moneys, etc.; provided, however, that the criminals have not been judged in the country where they committed the offense. They may also be tried for *delits* committed abroad, provided the delinquent is found in Portugal; that the act of which he is accused is also defined as a *crime* or a *delit* by the legislation of the country where it was committed, and that the criminal has not been judged there.⁴⁷

Russia. The law of Russia in relation to criminal offenses committed outside of the national territory is fully set forth at p. 313 *et seq.* of vol. 11 (1879) of *Revue de droit international* in a communication of M. Tagantzeff, professor of penal law in the University of St. Petersburg, to Professor Fiore, of the University of Turin, published by the latter in that journal, and which may be translated as follows:

Articles 172, 173, and 174 of the code, edition of 1866, established the following system of penalties applicable to crimes committed outside of the limits of Russia, in case of the voluntary return of the culprits to their country or of their extradition:

1. *As regards Russian subjects:* The provisions differ here according as the crime committed has for its object Russia and Russian subjects, or else a foreign state and its subjects.

2. *Against Russia:* Article 173 applies in the case where the crime is directed against the sovereign power of the state, the integrity, the safety, and the prosperity of Russia, or where an attempt is made upon the life of one or more of its citizens.

According to the sense of the law and the explanations of the commentators, its application requires:

a. That the accused has done an injury to the rights of some individual—to his honor, his property, his liberty, his reputation, or his life; or else that he has committed an action directed against the government in force, or menacing the security and the tranquility of the state. Nevertheless, the Russian legislation does not admit the restrictions upon responsibility adopted by the

⁴⁶ Law of 1 July, 1869.

⁴⁷ See also, J. Domis de Semerpont on Extradition, etc.

French law of 1867 (the difference between *crimes*, *dilits* and *contraventions*) and the German code of 1872, but does not make subjects responsible for the infraction, in a foreign country, of the regulations of Russian police, guaranteeing the interests of individuals, of the church, etc.;

b. That the criminal has not been punished in the place of the crime, or that his offense has not been legally effaced by prescription, according to the laws of the country. This rule applies equally in the case where the said crime is punished more severely by our code than by that of the country where it was committed. The supplementary penalties of which the German code speaks are not admitted in ours;

c. The institution of proceedings takes place on the general bases of the Code of Criminal Procedure of 1867 (the French code).

3. To the prejudice of a foreign state: The application of article 174, in this case, requires:

a. That the criminal shall have been delivered up by the state where the crime was committed, or that he shall have taken refuge in Russia;

b. That he has done injury to the person or to the property of some foreign subject, or else against the interior safety of the state in which he lives;

c. That his action is forbidden by the laws of the country where he committed it and by the Russian code;

d. That the criminal has not been punished, and that his act has not been effaced by prescription;

e. In the case where he has made an attempt against the interior safety of a foreign state, the criminal is punished according to the rules of article 260, code of 1866, relating to political crimes against foreign powers;

f. In order that the penalty may be applied, it is absolutely necessary that complaint shall have been made against the criminal on the part of those offended, or on that of the power on whose territory the crime was committed;

g. In case the crime is punished less severely by the local legislation than by the Russian Code, the penalty is mitigated in proportion.

According to article 172 of the code *foreigners* having committed crimes outside of Russia are not called before the Russian tribunals except in case of an attempt against the supreme power of Russia; that is to say, if they have participated in a plot tending to the overthrow of the existing government, or to that of the Emperor and of the imperial family, or else if they have attacked the personal and property rights of Russian subjects. As for other crimes committed to the prejudice of Russia or of other states and foreign subjects, they are not included in the Russian Penal Code.

As to the conditions under which the application of penalties takes place, they are the same as for Russian subjects who have committed crimes to the prejudice of Russia.

Sweden. Subjects are punished for violations of law committed outside of the kingdom, if the king, acting through the council of state or on the report of the minister of justice, orders proceedings to be instituted.

Foreigners also are punished for offenses committed outside of the kingdom to the prejudice of Sweden or of a Swedish subject, *if the king orders the prosecution.*

No one can be punished in the kingdom for an act in a foreign country for which he has there been punished, unless the act entail dismissal from office or civil degradation in Sweden, in which case such dismissal or degradation may be imposed.

Greece. Foreigners are punishable for committing outside of the state high treason against Greece, for falsifying and counterfeiting national moneys having circulation in the kingdom, counterfeiting the seals of the state, and for *crimes* or *delits* against a Grecian subject. Prosecution can take place only if the culprit has been delivered up to the justice of the state, or seized within the limits of the kingdom.

Hellenic subjects are never extradited except in cases provided for by international conventions. The circumstances and manner of extraditing foreigners may be defined by law.

Brazil. Both Brazilians and foreigners may be tried and punished, who, on a foreign territory, have committed a *crime* against the independence, integrity and dignity of the nation, against the constitution of the empire and the form of government, or against the head of the state, or who have committed the crime of falsifying money or public titles, or bills of banks authorized by the government. In such cases, however, the delinquent can be definitively judged only when he is actually in the empire, either as the result of extradition or having come voluntarily.

There may also be prosecuted and definitively judged in the empire, when they have reentered it voluntarily, Brazilians who, on foreign territory, commit against Brazilians or foreigners the *crimes* of forgery, perjury, or swindling, or any other offense not warranting bail.

Foreigners who have committed any of the *crimes* enumerated in the preceding paragraph and subsequently have come into Brazil, are extradited, if demanded; if not, they may be expelled from Brazilian territory, or punished conformably to the Brazilian law. It is, however, necessary, in the last case, that there shall have been a complaint or denunciation authorized by the Government, and that the laws of the criminal's country punish foreigners in similar cases.

Spain. Foreigners, as well as subjects, may be tried and punished who, outside of the territory of Spain, have committed offenses against the exterior

safety of the state, or the offenses of high treason, rebellion, counterfeiting of the royal signature or stamp, counterfeiting of the signatures of public ministers or of the public seals, counterfeiting that is directly prejudicial to the credit or interests of the state, and the introduction and issuance of anything counterfeited, counterfeiting of bank notes authorized by law and the introduction or issuance of such counterfeit notes, and offenses committed by public officers in the discharge of their public functions.

Except in the cases of treason and high treason, if a person has been tried and acquitted or convicted in a foreign country of any of the offenses mentioned above, he cannot be tried again in Spain for the same offense, unless, in case of conviction, he has not served out his sentence and has not been pardoned. In such case, he may be tried again in Spain; but any punishment he has actually undergone abroad is taken into account in adjusting the penalty in Spain. In all the cases indicated above, foreigners can be prosecuted only when they have been arrested on Spanish territory or when possession of them has been obtained by extradition. Spaniards may be punished who, in a foreign country, have committed offenses against other Spaniards, or against a foreigner, provided that in the latter case the offense was grave in character and was punishable by the law of the foreigner's country, as well as by the law of Spain.

Switzerland. By the Federal Penal Code of February 4, 1853, foreigners may be punished who, outside of Switzerland, commit offenses against the safety of the state, or contribute to the prejudice of the Confederation by the embezzlement, destruction or counterfeiting of official records, or by the violent overthrow of the constitution of the Confederation, or the violent expulsion or dissolution of its authorities; or who recruit Swiss citizens for a prohibited military service.

In addition to the offenses specified above, Swiss citizens are punishable for a limited number of other offenses.

The importance in the present discussion of the preceding examination of the laws of different states touching offenses committed on foreign territory may best be apprehended in a tabular statement showing to what extent such jurisdiction over foreigners is actually claimed. It is unnecessary to tabulate the legislation respecting citizens, because that is merely a question of expediency which each state may determine for itself, and not a matter of international right, concerning which other nations may have to be consulted. It is, however, to be observed that while in some of the codes that have been quoted the provisions respecting offenses committed abroad by citizens are general and sweeping in their character, in no case is a claim put forth to punish a foreigner for such

offenses, save under exceptional circumstances and in exceptional cases, which are supposed to justify the pretension.

FOREIGNERS ARE PUNISHED WHO, OUTSIDE OF THE NATIONAL TERRITORY AND JURISDICTION, COMMIT OFFENSES

1. *Against the safety of the state:* (a) By France, Germany, Austria, Belgium, Hungary, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Russia, Sweden, Greece, Brazil, Spain, Switzerland; (b) *not punished* by Denmark, Great Britain, Portugal.

2. Counterfeiting seals of the state, national moneys having circulation, national papers, or bank bills authorized by law: (a) Punished by France, Germany, Austria, Belgium, Hungary, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Sweden, Greece, Brazil, Spain, Switzerland; (b) *not punished* by Denmark, Great Britain, Portugal.⁴⁸

3. *Other offenses:* (a) General jurisdiction of offenses committed abroad by foreigners against subjects is claimed by Greece and Russia; (b) such offenses are punished by Sweden and Norway, if the king orders the prosecution; (c) *crimes*, but not *delits*, committed by foreigners in another state are punished by Austria, provided that (except in the case of *crimes* specified under 1 and 2) an offer of surrender of the accused person has first been made to the state in which the *crime* has been committed, and has been refused by it; (d) criminal offenses committed abroad by foreigners are punished by Hungary, if the minister of justice orders the prosecution, provided that the act is punishable at the place of commission, that it has not ceased to be punishable there, and that the competent authority does not undertake to punish it; (e) criminal offenses committed by foreigners against Italians in another state are punished by Italy, but only when (except in the cases under 1 and 2) an offer of surrender of the person accused has been made to the state in which the *crime* was committed, and has been refused by it, unless the offense was committed within three miles of the frontier, or stolen property has been brought into the kingdom; (f) non-bailable offenses

⁴⁸ See, in this relation, *U. S. v. Arjona*, 120 U. S., 479, in which the Supreme Court, at its October term, 1886, held that the counterfeiting of foreign securities, whether national or corporate, which have been put out under the sanction of public authority at home, especially the counterfeiting of bank notes and bank bills, is an offense against the law of nations; and that, consequently, the Congress of the United States has authority, under its constitutional power to provide for the punishment of offenses against the law of nations, to enact laws to punish the counterfeiting of foreign securities in the United States.

committed abroad by foreigners are punished by Brazil, if the prosecution is authorized by the government, and the laws of the criminal's country punish foreigners in like cases; (g) criminal offenses committed outside of the state by foreigners against citizens or subjects are not punished under any conditions by France, Germany, Belgium, Denmark, Great Britain, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, or Switzerland.

It is thus seen that among all the countries whose legislation has been examined, Russia and Greece are the only ones whose assertion of extraterritorial jurisdiction is as extensive and absolute in form as that of Mexico. For the question we are now considering is not that of the punishment of extraterritorial crimes against the safety of the state, or of coinage felonies, but of offenses, both *crimes* and *delits* (or felonies and misdemeanors,) committed outside of a country by foreigners against a citizen. The only limitation imposed by article 186 upon the jurisdiction of the Mexican tribunals over offenses of this character, is that they must be punishable with a severer penalty than *arresto mayor* by the law of Mexico, and as penal offenses by the law of the country in which they were committed. Thus offenses which by the law of Mexico are merely *delits* and by the law of the United States merely *misdemeanors*, may be punished under article 186. Not only is this the language of the law, but such was its interpretation by the Mexican court in the case in question; and by the law of Texas libel is not a felony, but only a misdemeanor. (*Smith v. The State*, 32 Texas, 594.)

The claim of Mexico is not only thus extensive, but it is also absolute. We have seen that it was held by Judge Zubia, whose decision was affirmed by the Supreme Court of Chihuahua, that according to the rule, *Judex non de legibus sed secundum leges debet judicare*, it did not belong to the judge to examine the principle laid down in article 186, but to apply it in all force, it being the law of the State of Chihuahua. And we have further seen that Mr. Mariscal disclaimed any power to interfere with the execution of the law by the judicial tribunals. Thus the Mexican claim is absolute. In this respect it goes beyond the jurisdictional lines laid down by Sweden and Norway, whose claims of jurisdiction are, after those of Russia and Greece, the most extensive of any that have been examined. In Sweden and Norway the foreigner may be punished for an offense committed in a foreign country against a Swedish or Norwegian subject, *if the king orders the prosecution*. This makes the prosecution discretionary and enables the government to meet any diplomatic question that may be raised in relation to the international right involved. The same thing may be said of the law of Hungary, where, in the case supposed, the prosecution must be ordered by the minister of justice. Austria punishes only *crimes*, not *delits* or misdemeanors, and then,

except in the case of *crimes* against the safety of the state, or coinage felonies, only after an offer of surrender of the accused person has been made to the state in which the *crime* was committed, and has been refused by it. The same principle is found in the law of Italy, with almost the same definition of jurisdiction. Brazil makes the assertion of extraterritorial jurisdiction over foreigners in similar cases depend upon the assertion of a like jurisdiction by the criminal's country.

I have said that crimes committed outside of the national territory by foreigners against citizens or subjects are not punished under any circumstances or conditions by France, Germany, Belgium, Denmark, Great Britain, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, or Switzerland. Before showing this, I pronounced the Mexican contention, that the claim to punish foreigners for offenses committed against Mexicans outside of the national territory was sustained by the French Code, to be wholly unfounded. I shall now show that such a claim has been pronounced by the highest judicial tribunal in France to be unwarranted by the principles of international law.

I refer to the case of *Raymond Fornage*, decided by the Court of Cassation, or Supreme Court, of France, at Paris in 1873, and reported in the *Journal du Palais* (p. 299 *et seq.*) for that year. This court being the highest judicial tribunal in France, its decisions in respect to the French law are not to be questioned. The circumstances of the case of Fornage are as follows: The prisoner was indicted by the *Chambre des mises en accusation* (grand jury) of the Court of Appeal of Chambery for the crime of larceny, which was described in the indictment as having been committed in the Canton of Vaud, Switzerland; and the case was referred for trial before a jury to the Court of Assizes (composed, in departments where there are courts of appeal, of three judges of that court) sitting at Haute Savoie. The prisoner did not take an appeal, as he had a legal right to do, from the judgment of reference, but proposed before the Court of Assizes an exception to the competency of that court, based on the ground that, having the quality of a foreigner, the French tribunals could not try him for a crime committed in a foreign country. But the Court of Assizes, regarding itself as irrevocably clothed with jurisdiction by the judgment of reference from the Court of Appeal, which had not been attacked, declared that the exception of the accused was not receivable. Upon these facts the case was argued at length before the Court of Cassation by M. Requier, a counsellor and reporter of the court, and M. Bedarrides, advocate-general, both of whom, while admitting that the rule was settled that a Court of Assizes could not declare itself incompetent to take cognizance of a case of which it had

been possessed by a judgment of reference from which no appeal was taken within the periods established by law, nevertheless argued that there were considerations of a higher order in the case of Fornage, which ought to make it an exception to the general rule. In this relation I quote from the argument of M. Requier, the following passage:

The right to punish has no foundation except the right of sovereignty, which expires at the frontier. If the French law permits the prosecution of Frenchmen for crimes or misdemeanors committed abroad, it is because the criminal law has something of the character at the same time of a personal statute and of a territorial statute. A Frenchman, when he has reached a foreign country, does not remain the less a citizen of his own country; and, as such, subject to the French law, which holds him again when he reenters France. *But the law cannot give to the French tribunals the power to judge foreigners for crimes or misdemeanors committed outside of the territory of France; that exorbitant jurisdiction, which would be founded neither on the personal statute nor on the territorial statute, would constitute a violation of international law and an attempt against the sovereignty of neighboring nations.* There exists a single exception to that rule of the law of nations. When a foreigner has committed, even outside of the territory, a *crime* against the safety of the state, he can be prosecuted, judged and punished in France. But, save that exception, founded on the right of legitimate self-defense, foreigners are justiciable only by the tribunals of their own country for acts done by them outside of the territory. The French tribunals, in punishing an act of that nature, would commit a veritable usurpation of sovereignty, which might disturb the good relations of France with neighboring nations. * * * When a crime has been committed outside of the territory by a foreigner the culprit is not subjected by that act to the French law; the French tribunals have no jurisdiction over him; the incompetence is radical and absolute. The criminal court, in punishing the act, would commit an abuse of powers; it would usurp a right of sovereignty appertaining to a foreign power. Would it not be contrary to all the principles of justice to oblige the magistrates to render themselves guilty of an arbitrary act, of a violation of international law?

Not only did the Court of Cassation adopt this view, but in its judgment (the full text of which is given herewith as Exhibit B) the rule of international law, as laid down by the Government of the United States in the Cutting case, is expressed in terms which, for force, precision, and freedom from doubt or qualification, have not been surpassed. Translated, the material parts of the judgment are as follows:

Whereas, if, as a general principle, the Courts of Assizes, possessed of a case by a judgment of the chamber of indictments not attached within the times

fixed by article 296 of the Code of Criminal Procedure, cannot declare themselves incompetent, * * * this rule is founded on this, that the Courts of Assizes, being invested with full jurisdiction in criminal matters, can, without committing any excess of power and without transgressing the limits of their attributes, take cognizance of all acts punished by the French law; *but this jurisdiction, however general it may be, cannot extend to offenses committed outside of the territory by foreigners*, who, by reason of such acts, are not justiciable by the French tribunals; Seeing that, indeed, *the right to punish emanates from the right of sovereignty, which does not extend beyond the limits of the territory*; that, except in the cases specified by article 7 of the Code of Criminal Procedure, the provision of which is founded on the right of legitimate defense, *the French tribunals are without power to judge foreigners for acts committed by them in a foreign country; that their incompetence in this regard is absolute and permanent; that it can be waived, neither by the silence nor by the consent of the accused*; that it exists always the same, at every stage of the proceedings * * *; Whereas, indeed, Raymond Fornage was brought before the Court of Assizes of Haute Savoie, accused of larceny committed in the Canton of Vaud, Switzerland; * * * and, in ordering the trial to proceed, without passing upon the question of nationality raised by the accused, it (the court) violated article 408 of the code, and disregarded the rights of the defense. Annul, etc.

This judgment may be regarded as finally and conclusively answering the contention that a precedent for article 186 may be found in the French Code.

PRINCIPLES OF AMERICAN LAW

In the United States the territorial principle is the basis of criminal jurisprudence, and the place of the commission of an offense is generally recognized as the proper and only place for its punishment. Article 6 of the Amendments to the Federal Constitution provides that—

...in all criminal prosecutions the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense.

A similar though less elaborate provision for the punishment at the *locus delicti* of offenses committed in the United States exists in the Constitution itself, which provides (article 3, sec. 2), that—

...the trial of all crimes, except in cases of impeachment, shall be by jury; and such trial shall be held in the State where the said crimes shall have been committed; but when not committed within any State the trial shall be at such place or places as the Congress may by law have directed.

It is thus seen that notwithstanding the fact that the guarantees of the Federal Constitution to accused persons of a speedy and public trial; of trial by an impartial jury; of the right to know the nature and cause of the accusation; to be confronted with witnesses; to have compulsory process for obtaining witnesses for the defense, and to have assistance of counsel, operate over the whole territory of the United States, and are binding on all the courts, State as well as Federal, it was nevertheless regarded as essential to the administration of justice to provide for the trial of the person accused in the State or district where his offense should be alleged to have been committed. But, in order to insure the punishment of crime, there was embodied in section 2 of article 4 of the Constitution, the following provision:

A person charged in any State with treason, felony, or other crime, who shall flee from justice, and be found in another State, shall on demand of the executive authority of the State from which he fled, be delivered up to be removed to the State having jurisdiction of the crime.

These provisions of the Constitution apply to all offenses committed in the United States.

To the strict territorial principle, the laws of the United States furnish certain exceptions; but in no case is the exception of such a character as to involve or imply an assertion by the United State of jurisdiction over the territory of another nation.

The earliest bestowal by Congress upon the Federal courts of jurisdiction over offenses committed outside of the territory, actual or constructive, of the United States, was in the crimes act of 1790, which, as read in the text, has sometimes been supposed by writers to have conferred a far more extensive jurisdiction on the courts of the United States than the decisions of those tribunals have attributed to it. The eighth section of this act provides—

that if any person or persons shall commit, on the high seas, or in any river, haven, basin, or bay, out of the jurisdiction of any particular State, murder or robbery, or any other offense, which, if committed within the body of a county, would by the laws of the United States, be punishable with death; or if any captain or mariner of any ship or other vessel, shall piratically and feloniously run away with such ship or vessel, or any goods or merchandise, to the value of fifty dollars, or yield up such ship or vessel voluntarily to any pirate; or if any seaman shall lay violent hands upon his commander, thereby to hinder and prevent his fighting in defense of his ship, or goods committed to his trust, or shall make a revolt in the ship, every such offender shall be deemed, taken, and adjudged to be, a pirate and felon, and being thereof convicted, shall suffer death; and the trial of crimes committed on the high seas, or in any place out of the jurisdiction of any particular State, shall be in the district where the offender is apprehended, or into which he may first be brought.

Under the provisions of this section several cases have been adjudicated by the Supreme Court. The first was that of *U. S. v. Palmer et al.*, 3 Wheaton, 610, decided in 1818. This case was certified from the Circuit Court of the United States for the District of Massachusetts, on a division of opinion between Mr. Justice Story, of the Supreme Court, and Judge Davis, of the District Court. The defendants were charged in the indictment with having committed a robbery on the high seas on a vessel belonging to persons unknown. There was no allegation that the defendants were citizens of the United States, two of them being described merely as “late of Boston,” in the State of Massachusetts, and the other “as late of Newburyport,” in the same State; and the goods were alleged to have been, at the time the defendants boarded the vessel and seized them, in the custody of “certain persons, being mariners, subjects of the king of Spain.” One of the questions certified from the Circuit Court was as follows:

Whether the crime of robbery, committed by persons who are not citizens of the United States, on the high seas, or board of any ship or vessel belonging exclusively to the subjects of any foreign state or sovereignty, or upon the person of any subject of any foreign state or sovereignty, not on board of any ship or vessel belonging to any citizen or citizens of the United States, be a robbery or piracy, within the true intent and meaning of the said 8th section of the act of Congress aforesaid, and of which the Circuit Court of the United States hath cognizance, to hear, try, determine, and punish the same.

In response to this question, Chief-Justice Marshall, who delivered the opinion of the Supreme Court, said:

The question, whether this act extends further than to American citizens, or to persons on board American vessels, or to offenses committed against citizens of the United States, is not without difficulty. * * * The words of the

section are in terms of unlimited extent. The words ‘any person or persons’ are broad enough to comprehend every human being. But general words must not only be limited to cases within the jurisdiction of the state, but also to those objects to which the legislature intended to apply them. * * * The court is of opinion that the crime of robbery, committed by a person on the high seas, on board of any ship or vessel belonging exclusively to subjects of a foreign state, on persons within a vessel belonging exclusively to subjects of a foreign state, is not a piracy within the true intent and meaning of the act for the punishment of certain crimes against the United States.

Although the offense charged in *U. S. v. Palmer et al.* was robbery on the high seas, the Chief-Justice, to sustain the limitation placed in the opinion on the words “any person or persons,” as employed in the 8th section of the act of 1790, discussed the other provisions of the section as follows:

But these words (any person or persons) must be limited in some degree, and the intent of the legislature will determine the extent of this limitation. For this intent, we must examine the law. The succeeding member of the sentence commences with the words: “If any captain or mariner of any ship or other vessel shall practically run away with such ship or vessel, or any goods or merchandise to the value of fifty dollars, or yield up such ship or vessel voluntarily to any pirate.”

The words, “any captain or mariner of any ship or other vessel,” comprehend all captains and mariners as entirely as the words “any person or persons” comprehend the whole human race. Yet it would be difficult to believe that the legislature intended to punish the captain or mariner of a foreign ship who should run away with such ship and dispose of her in a foreign port, or who should steal any goods from such ship to the value of fifty dollars, or who should deliver her up to a pirate when he might have defended her, or even according to previous arrangement. The third member of the sentence also begins with the general words “any seaman.” But it cannot be supposed that the legislature intended to punish a seaman on board a ship sailing under a foreign flag, under the jurisdiction of a foreign government, who should lay violent hands upon his commander, or make a revolt in the ship. These are offenses against the nation, under whose flag the vessel sails, and within whose particular jurisdiction all on board the vessel are. Every nation provides for such offenses the punishment its own policy may dictate; and no general words of a statute ought to be construed to embrace them when committed by foreigners against a foreign government.

That the general words of the two latter members of this sentence are to be restricted to offenses committed on board the vessels of the United States, furnishes strong reason for believing that the legislature intended to impose the same restriction on the general words used in the first member of that sentence.

The question of robbery on the high seas, under the 8th section of the act of 1790, was again before the Supreme Court in the case of *U. S. v. Klinton*, 5 Wheaton, 144, decided in 1820. This case was certified from the Circuit Court of the United States for Virginia, before which the defendant, a citizen of the United States, was charged with piracy committed in April, 1818, on a vessel called the “Norberg,” belonging to persons unknown. The facts found on the trial were that the defendant sailed as first lieutenant on a vessel called “The Young Spartan,” which was owned without the United States, and cruised under a commission from Aury, styling himself Brigadier of the Mexican Republic, which had revolted from Spain but was not yet recognized by the United States, and Generalissimo of the Floridas, a province then in the possession of Spain. “The Norberg,” which was a Danish vessel, was fraudulently seized by “The Young Spartan,” one of whose officers secreted Spanish papers on board of “The Norberg” and then claimed her as a Spanish vessel; her company were left on an island off the coast of Cuba; and the vessel herself was taken to Savannah, in the State of Georgia, where the captors, personating the Danish captain and crew, entered her as a Danish vessel. The opinion of the Supreme Court was delivered by Chief-Justice Marshall; and it was held, in the first place, that the commission, under which the defendant professed to have been cruising, did not protect him, the seizure of “The Norberg” having been made—not *jure belli*, but *animo furandi*. On this point the Chief-Justice said:

So far as this court can take any cognizance of that fact, Aury can have no power, either as Brigadier of the Mexican Republic, a republic of whose existence we know nothing, or as Generalissimo of the Floridas, a province in the possession of Spain, to issue commissions to authorize private or public vessels to make captures at sea. Whether a person acting with good faith under such commission may or may not be guilty of piracy, we are all of opinion that the commission can be no justification of the fact slated in this case. The whole transaction taken together demonstrates that “The Norberg” was not captured *jure belli*, but seized and carried into Savannah *animo furandi*. It was not a belligerent capture, but a robbery on the high seas. And although the fraud practiced on the Dane may not of itself constitute piracy, yet it is an ingredient in the transaction which has no tendency to mitigate the character of the offense.

The Chief-Justice then reviewed the decision of the court in the case of *United States v. Palmer et al.*, as above quoted, which had been invoked by the counsel for defendant, to show that he was not guilty of piracy under section 8 of the act of 1790, which, it was contended, did not apply under the ruling

in Palmer's case to an American citizen entering on board of a foreign vessel exclusively owned by foreigners and committing piracy thereon.

On this point Chief-Justice Marshall said:

Upon the most deliberate reconsideration of that subject, the court is satisfied that general piracy, or murder, or robbery, committed in the places described in the 8th section, by persons on board of a vessel not at the time belonging to the subjects of any foreign power, but in possession of a crew acting in defiance of all law, and acknowledging obedience to no government whatever, is within the true meaning of this act, and is punishable in the courts of the United States. Persons of this description are proper objects for the Penal Code of all nations; and we think that the general words of the act of Congress applying to all persons whatsoever, though they ought not to be so construed as to extend to persons under the acknowledged authority of a foreign state, ought to be so construed as to comprehend those who acknowledge the authority of no state. Those general terms ought not to be applied to offenses committed against the particular sovereignty of a foreign power; but we think they ought to be applied to offenses committed against all nations, including the United States, by persons who, by common consent, are equally amenable to the laws of all nations.

The result of these two cases—*U. S. v. Palmer et al.* and *U. S. v. Klintock*—is that while general piracy was punishable under the 8th section of the act of 1790, and while in such case proof as to the nationality of the offender, or as to the origin of the vessel on which he sailed, was immaterial, a pirate being amenable to the jurisdiction of all nations alike, yet, where the offense charged under the section was not piratical in the general sense, but only by force of the statute, such averments must be made and such evidence produced as to the national character of the vessel on which the offense was committed, as would ordinarily give the courts of the United States jurisdiction. Such was the view announced by the Supreme Court in subsequent decisions. In *U. S. v. Pirates*, 5 Wheaton, 184, the court, while fully recognizing the decision in Palmer's case, said that—

...when embarked in a piratical cruise, every individual becomes equally punishable under the law of 1790, whatever may be his national character, or whatever may have been that of the vessel in which he sailed, or of the vessel attacked.

In the case of *U. S. v. Holmes*, 5 Wheaton, 412, decided, as was also that of the *Pirates*, in 1820, the Supreme Court, speaking through Mr. Justice Washington, laid down, as the result of the preceding cases, the following rules:

If it (the offense) be committed on board of a foreign vessel by a citizen of the United States, or on board of a vessel of the United States by a foreigner, the offender is to be considered *pro hac vice*, and in respect to this subject, as belonging to the nation under whose flag he sails. If it be committed, either by a citizen or a foreigner, on board of a piratical vessel, the offense is equally cognizable by the courts of the United States under the abovementioned law.

It is to be observed that Mr. Justice Washington was a member of the Supreme Court at and prior to the time of the decision of Palmer's case, in February, 1818, as well as during the period intervening between that decision and the case of Holmes, his opinion in which has just been quoted; and in that intervening period, in April, 1818, just after the decision in Palmer's case, he had occasion to consider that decision, and the true construction of the 8th section of the act of 1790, in the Circuit Court of the United States for the State of Pennsylvania, in the case of *U. S. v. Howard*, 3 Wash. C. C., 340. Referring to Palmer's case he said:

It was upon the whole decided that a robbery committed by any person on the high seas, on board of a ship belonging exclusively to a foreign State, or to the subjects thereof, or upon the person of a subject of a foreign State, in a vessel belonging exclusively to subjects of a foreign State, is not piracy within the true intent and meaning of the 8th section of that law. Although the offense of robbery is the only one stated in this decision; that being the only offense referred to in the question which was adjourned to the Supreme Court; yet there can be no doubt but that all the other acts of piracy, enumerated in that section, are included within the same principle.

It appears by this opinion, as well as by the opinion of Chief-Justice Marshall in *Klintock's* case, as above quoted, that the Supreme Court when the judgment in Palmer's case was rendered, understood it to decide not only that the general words employed in the act of 1790 in reference to statutory piracy must be restricted so as to apply only to offenses committed on board of American vessels, on the high seas, but also that the 8th section of the act did not include piracy by the law of nations, and, therefore, did not give the courts of the United States jurisdiction to punish it. We have seen that in *Klintock's* case, as well as in the other cases cited above from the decisions of the Supreme Court, it was subsequently held that that section did confer such jurisdiction; for, as it provided for the punishment of any person or persons for murder or robbery on the high seas, and as "the pirate is a man who satisfies his personal greed or personal vengeance by robbery

or murder in places beyond the jurisdiction of a state,”⁴⁹ it was well held in the case of *Klintock* and of the *Pirates*, that piracy by the law of nations was punishable under the terms of the section. It is, however, worthy of notice that in March, 1819, after *Palmer’s* case was decided, Congress passed a temporary act, which was subsequently renewed and made permanent, and is now substantially embodied in section 5368 R. S. of the U. S., expressly conferring on the courts of the United States jurisdiction of “piracy, as defined by the law of nations.”

No attempt was made to remove or correct the limitation placed by the Supreme Court on the general words of the act of 1790, so far as they related to statutory piracy. And although, as has been seen, the court itself, in 1820, in the cases of *Klintock*, the *Pirates*, and *Holmes*, held that the 8th section of the act of 1790, under which the indictments in those cases were framed, covered piracy by the law of nations, and was not repealed by the act of 1819, yet it never was intimated that the previous decision respecting municipal piracy, under the act of 1790, was wrong. Indeed, in the case of *Holmes*, the latest of the cases cited, we observe in the opinion of the court a decided affirmation of the view expressed by the Chief Justice in *Palmer’s* case, that the question of jurisdiction of acts of municipal piracy would be determined by the flag of the vessel on which the offense was committed. “If it [the offense] be committed,” said the court in *Holmes’* case, “on board of a foreign vessel by a citizen of the United States, or on board of a vessel of the United States by a foreigner, the offender is to be considered *pro hac vice*, and in respect to this subject, as belonging to the nation under whose flag he sails.” This principle was recognized by Congress in the act of the 3d of March, 1825, entitled, “An act more effectually to provide for the punishment of certain crimes against the United States, and for other purposes,” by which many of the provisions of different sections of the act of 1790 were replaced, as well as in the act of March 3, 1835, which, in substituting provisions for the punishment of revolt on shipboard, in place of those contained in the 8th section of the act of 1790, expressly restricted the jurisdiction of the courts to acts committed by “one or more of the crew of any American ship or vessel.”

It may, therefore, be said that in respect to offenses committed on the high seas, the jurisdiction exercised by the judicial tribunals of the United

⁴⁹ Hall’s *Int. Law*, 233 *et seq.* While piracy has been defined as robbery on the high seas, the more recent jurists hold that the depredation need not be *Inert causa*. Whart. *Cx. L.*, § 1860; Heffter, Volkerr, fl 104; Broglie, *Sur la piraterie*, iii, 135; Wheaton’s *Int. Law*, § 123, Dana’s ed., p. 195.

States, under the legislation of Congress and the decisions of the Supreme Court, does not exceed, if, indeed, in the case of citizens of the United States, it reaches, the limitations of criminal jurisdiction over the high seas as defined by Wheaton, who, in his “Elements of International Law,” lays down the following rules:

§124. Pirates being the common enemies of all mankind, and all nations having an equal interest in their apprehension and punishment, they may be awfully captured on the high seas by the armed vessels of any particular State, and brought within its territorial jurisdiction, for trial in its tribunals.

This proposition, however, must be confined to piracy as defined by the law of nations, and cannot be extended to offenses which are made piracy by municipal legislation. Piracy, under the law of nations, may be tried and punished in the courts of justice of any nation, by whomsoever and whosoever committed; but piracy created by municipal statute can only be tried by that State within whose territorial jurisdiction, and on board of whose vessels, the offense thus created was committed. There are certain acts which are considered piracy by the internal laws of a State, to which the law of nations does not attach the same signification. It is not by force of the international law that those who commit these acts are tried and punished, but in consequence of special laws which assimilate them to pirates, and which can only be applied by the State *to its own subjects, and in places within its own jurisdiction*. The crimes of murder and robbery, committed by foreigners on board of a foreign vessel, on the high seas, are not justiciable in the tribunals of another country than that to which the vessel belongs; but if committed on board of a vessel not at the time belonging, in fact as well as right, to any foreign power or its subject, but in possession of a crew acting in defiance of all law, and acknowledging obedience to no flag whatsoever, these crimes maybe punished as piracy under the law of nations, in the courts of any nation having custody of the offenders.⁵⁰

Mr. Dana, in a note citing these and other cases, states the following conclusion:

If an act of robbery or murder were committed upon one of the passengers or crew by another in a vessel at sea, the vessel being at the time and continuing under lawful authority, and the offender were secured and confined by the master of the vessel, to be taken home for trial,—this state of things would not authorize seizure and trial by any nation that chose to interfere, or within whose limits the offender might afterwards be found.

⁵⁰ Dana’s Edition, p. 193 *et seq.* Wheaton cites, as sustaining his views, the cases of *U. S. v. Klintonck* and *U. S. v. Pirates*.

In 1799 an act was passed by Congress, the provisions of which are now substantially embodied in section 5335 of the Revised Statutes, which reads as follows:

SEC. 5335. Every citizen of the United States, whether actually resident or abiding within the same, or in any foreign country, who, without the permission or authority of the Government, directly or indirectly, commences or carries on any verbal or written correspondence or intercourse with any foreign government, or any officer or agent thereof, with an intent to influence the measures or conduct of any foreign government, or of any officer or agent thereof, in relation to any disputes or controversies with the United States, or to defeat the measures of the Government of the United States; and every person, being a citizen of, or resident within, the United States, and not duly authorized, who counsels, advises, or assists in any such correspondence, with such intent, shall be punished by a fine of not more than five thousand dollars, and by an imprisonment during a term not less than six months, nor more than three years; but nothing in this section shall be construed to abridge the right of a citizen to apply, himself or his agent, to any foreign government or the agents thereof for redress of any injury which he may have sustained from such government, or any of its agents or subjects.

The act of 1799, commonly called the “Logan” statute, after the person by whose informal diplomatic enterprises its enactment was suggested,⁵¹ applied in terms, as does the section above quoted, only to citizens of the United States. It raises, therefore, no question of jurisdiction as between nations, and is of no importance in the present discussion.

The same observation may be made on the laws passed by Congress in pursuance of treaties with China, Japan, Siam, Egypt, and Madagascar, to confer on the minister and consuls of the United States in those countries, or in any other countries with which the United States has similar treaties, jurisdiction “to arraign and try, in the manner herein provided, all citizens of the United States charged with offenses against law, committed in such countries.” (Sec. 4084 R. S.) Neither, as has heretofore been stated, is any international question raised by another provision of law (Sec. 4088 R. S.) conferring a similar jurisdiction over citizens of the United States upon “consuls and commercial agents of the United States at islands and in countries not inhabited by any civilized people, or recognized by any treaty with the United States.” In such places there being no system of law, or

⁵¹ See Lawrence’s *Wheaton*, ed., 1863, p. 1003; Wharton’s *Int. Law Digest*, § 109, and same author’s *State Trials*, pp. 20, 21.

courts of justice, to which foreigners may be held answerable, it is admitted that they must remain subject to the laws and authorities of their respective governments.⁵²

There is still another law, the act of Congress of August 18, 1856, section 24, now substantially embodied in section 1750 of the Revised Statutes, to which reference should be made. By this section secretaries of legations and consular officers of the United States in foreign lands are authorized, at their respective posts or places,

...to administer to or take from any person an oath, affirmation, affidavit, or deposition, and to perform any notarial act which any notary public is required or authorized by law to do within the United States.

It is provided further that—

...every such oath, affirmation, affidavit, deposition and notarial act administered, sworn, affirmed, taken, had, or done, by or before any such officer, when certified under his hand and seal of office, shall be as valid, and of like force and effect within the United States, to all intents and purposes, as if administered, sworn, affirmed, taken, had, or done, by or before any other (s/V) person within the United States duly authorized and competent thereto.

And it is finally provided that—

If any person shall wilfully and corruptly commit perjury, or by any means procure any person to commit perjury in any such oath, affirmation, affidavit, or deposition, within the intent and meaning of any act of Congress now or hereafter made, such offender may be charged, proceeded against, tried, convicted, and dealt with in any district of the United States, in the same manner, in all respects, as if such offense had been committed in the United States, before any officer duly authorized therein to administer or take such oath, affirmation, affidavit, or deposition, and shall be subject to the same punishment and disability therefor as are or shall be prescribed by any such act for such offense; and any document purporting to have affixed, impressed, or subscribed thereto or thereon the seal and signature of the officer administering or taking the same in testimony thereof, shall be admitted in evidence without proof of any such seal or signature being genuine or of the official character of such person; and if any person shall forge any such seal or signature, or shall tender in evidence any such document with a false or counterfeit seal or signature thereto, knowing the same to be false or counterfeit, he shall be deemed and

⁵² See Lewis on *Foreign Jurisdiction*, p. 11.

taken to be guilty of a misdemeanor, and on conviction shall be imprisoned not exceeding three years nor less than one year, and fined in a sum not to exceed three thousand dollars, and may be charged, proceeded against, tried, convicted, and dealt with, therefor, in the district where he may be arrested or in custody.

I am not aware that any case has ever arisen to require a judicial construction of this act, but, as it is generally understood,⁵³ it is not confined in its operation to citizens of the United States, but applies as well to aliens committing the designated offenses; and it has sometimes been referred to as an instance of the assertion by the United States of a general international right to try and punish aliens for acts done in a foreign country. It is not difficult to show that such a view of the statute is not warranted either by its terms or by the scope or results of its operation. It is not even necessary to its justification, upon principles of international law, to adopt the reasoning of Attorney-General Williams (14 Op. 285), who, referring to the law in question, affirmed its international validity on the ground that “according to international law, the domicile of an ambassador, minister extraordinary, or consul is a part of the territory he represents for many purposes.” This is unquestionably so. But the international validity of the act of 1856 does not, in my judgment, rest solely, nor even in the main, on that ground.

It is to be observed that the act relates solely to certain officers, known to international law, who, upon the recognition and with the consent of the governments of foreign countries, discharge there the functions of official representatives of the Government of the United States. One of those functions is the performance of the official acts enumerated in the statute of 1856, namely, the taking of oaths, etc., and the performance of notarial acts, for use in the United States. And as these acts are performed under the laws of the United States, not only does the person who appears before a secretary of legation or a consular officer for any of the purposes enumerated in the act of 1856 submit himself to the laws of the United States to that extent, but if he swears falsely or does any other thing in contravention of the act, he violates a law to whose execution in its territory the foreign government has consented. The act contains, therefore, neither an assertion of a general right to punish aliens for acts done by them outside of the United States, nor even an assertion of such a right to punish them for acts so done against the Government of the United States, to say nothing of acts merely against its citizens.

⁵³ Wharton's *Cr. Law*, § 276; Williams, Attorney General, 14 Op. 285.

The general rule that the laws of a nation have no binding force, except as to citizens, outside of the national territory, actual or constructive, was again laid down by the Supreme Court in 1824, in the case of the *Apollon*, 9 Wheaton, 362. In that case, Mr. Justice Story, speaking for the court, said:

The laws of no nation can justly extend beyond its own territories, except so far as regards its own citizens. They can have no force to control the sovereignty or rights of any other nation, within its own jurisdiction. And, however general and comprehensive the phrases used in our municipal laws may be, they must always be restricted, in construction, to places and persons upon whom the legislature have authority and jurisdiction.

In a still later case heard before him in the Circuit Court of the United States at Boston,⁵⁴ Mr. Justice Story again had occasion to consider and decide the question of jurisdiction over offenses committed outside of the national territory. In this case the defendant, the master of an American whale ship, was indicted for manslaughter, by shooting at and killing a man on board of another and foreign vessel in the Society Islands. It appeared that the shot was fired by the defendant from his own vessel, and took effect as above described. Taking the view that, although the shot was fired from the American vessel, the crime was, in contemplation of law, committed “where the shot took effect,” the learned judge said:

Of offenses committed on the high seas on board of foreign vessels not being a piratical vessel, but belonging to persons under the acknowledged government of a foreign country, this court has no jurisdiction under the act of 1790, ch. 36, § 12. That was the doctrine of the Supreme Court in *United States v. Palmer* (3 Wheat., R. 610), and *United States v. Klintock* (5 Wheat., 144), and *United States v. Holmes* (5 Wheaton, 412); applied, it is true, to another class of cases; but in its scope embracing the present. *We lay no stress on the fact that the deceased was a foreigner. Our judgment would be the same if he had been an American citizen.* We decide the case wholly on the ground that the schooner was a foreign vessel, belonging to foreigners, and at the time under the acknowledged jurisdiction of a foreign government.

It would be useless to attempt to collect all the declarations and applications by the State courts of the principle that penal laws have no extraterritorial force; and I shall quote the language of only a few cases, to mark the uniform current.

⁵⁴ *U.S. v. Davis*, 2 Sumner’s C.C. 482; decided in 1837.

In the case of *Gilberts. Stedman* (1 Root, 403), which was a *qui tam* action for stealing goods from the plaintiff's shop, in Massachusetts, and for receiving and concealing them, knowing them to be stolen, it was held by the Supreme Court of Connecticut, in 1792, that the declaration was insufficient because it alleged neither the stealing of the goods nor the concealment of them in Connecticut. And the court said:

The crime charged was committed in the State of Massachusetts, and out of the jurisdiction of this court.

In the case of the *State v. Grady*, decided by the Supreme Court of same State in 1867 (34 Conn., 118), it was declared to be "undoubtedly true," "that the courts of this State can take no cognizance of an offense committed in another State."

In New York the line of decisions has also been unbroken. In the case of *The People v. Wright*, decided in 1804 (2 Caine's R., 213), the Supreme Court said—

We have no jurisdiction over offenses committed in other States.

In *Charles v. People*, decided in 1848 (1 Comstock, 180), the court again declared—

Our legislature has no extraterritorial jurisdiction; and when it forbids, in unqualified terms, the doing of an act, it must always be understood that the thing is only forbidden within this State. It cannot be pretended or assumed that a State has jurisdiction over crimes committed beyond its territorial limits. (*People v. Merrill*, 2 Parker's *Crim. Rep.*, 590.)

In *People v. Noelke*, 94 N. Y., 137 (A. D. 1883), the court, referring to the case of *Van Voorhis v. Brintnall*, 86 N. Y., 18, in which it was held that a marriage contract made in another State and there valid, was valid in New York, although it would have been invalid if made in New York; and to the case of *Ormes v. Dauchy*, 82 N. Y., 443, in which it was held that a contract made in relation to a lottery in a State in which lotteries were permitted, could be enforced in New York, where lotteries are prohibited, said:

Both cases rested upon the undeniable truth that our law could have no extraterritorial operation.

Said the Supreme Court of Alabama, *Green v. The State*, 66 Ala., 40, decided in 1880:

It is a safe principle, perhaps, to be asserted, that a crime committed in a foreign country, and in violation of the laws thereof, cannot by mere legislative fiction or construction be constituted an offense in another country.

In the case of the *State v. Knight* (*Taylor's Rep.*, 65), decided in North Carolina in 1799, the court said:

The States are to be considered with respect to each other as independent sovereignties, possessing powers completely adequate to their own government in the exercise of which they are limited only by the nature and objects of government by their respective constitutions and by that of the United States. Crimes and misdemeanors committed within the limits of each are punishable only by the jurisdiction of that State where they arise. * * * Our legislature may define and punish crimes committed within the State, whether by citizens or strangers; because the former are supposed to have consented to all laws made by the legislature, and the latter, whether their residence be temporary or permanent, do impliedly agree to yield obedience to all such laws, as long as they remain in the State; but they cannot define and punish crimes committed in another State, the citizens of which, while they remain there, are bound to regulate their civil conduct only according to their own laws.

In New Jersey the Supreme Court, in the case of *The State v. Carter* (3 Dutcher, 499), decided in 1859, said:

There cannot be two sovereignties supreme over the same place, at the same time, over the same subject-matter. The existence of theirs is exclusive of ours. We may exercise acts of sovereignty over the wastes of ocean or of land, but we must necessarily stop at the boundary of another. The allegation of an act done in another sovereignty to be a violation of our own, is simply alleging an impossibility, and all laws to punish such acts are necessarily void.

Said the Supreme Court of Indiana:⁵⁵

It may be assumed as a general proposition that the criminal laws of a State do not bind and cannot affect those out of the territorial limits of the State.

Said the Supreme Court of Arkansas:⁵⁶

The laws of this State have no extraterritorial operation. Each State possesses the exclusive power to provide for the punishment of crimes committed

⁵⁵ *Johns v. The State*, 19 Ind., 421, A. D. 1862.

⁵⁶ *State v. Chapin*, 17 Ark., 561, A. D. 1856.

within its limits, except so far as this power may have been surrendered to the Government of the United States by the Federal Constitution.⁵⁷

MEXICO'S DEFENSE

Having sufficiently disclosed the positive legislation of different countries, and its judicial construction, in respect to extraterritorial crime, I proceed to examine the arguments put forth by the Mexican Government in support of article 186 of the Penal Code. These arguments, which were communicated from time to time to this Department by Mr. Romero, Mexican Minister at this Capital, are before me in three versions—Spanish, French, and English—the first and second published in pamphlet form by the Mexican Government, and the third made in this Department from the Spanish text communicated by the Mexican Minister.

The first of these arguments is in a note addressed to Mr. Bayard by Mr. Romero, on the 7th of August, 1886, while Mr. Cutting was still in prison. This note opens with a statement of the circumstances of the case, derived, as Mr. Romero states, from private reports received by him from Paso del Norte. The only point I shall notice in this statement is the allegation that Mr. Cutting “distributed in Paso del Norte, Mexico, several copies of the *Sunday Herald* (the Texas paper) containing his article against Medina,” and that, “for this cause, the following day, June 21, he was summoned anew by Medina for defamation, in conformity with articles 642 and 186 of the Mexican Penal Code.” As has been shown, article 642 merely defines defamation; and as, by Mr. Romero’s statement, the only other law invoked was article 186, the inference is that the warrant issued for Mr. Cutting’s arrest was based on the publication of the alleged libel in Texas, and not, as Mr. Romero’s information led him to suppose, on a charge of circulating that libel in Mexico. But we are not compelled to resort to inference, for it is stated in Judge Zubia’s decision that on the 22d of June the plaintiff appeared and “broadened” his original accusation, on which the warrant of arrest had been issued, by the allegation that the defendant had circulated the *Sunday Herald* in Mexico.

After summarizing the facts, Mr. Romero proceeds to discuss the legal aspect of the case, as follows:

The Government of the United States believes that Cutting is under trial in El Paso solely because of an article published in El Paso, Texas, in

⁵⁷ See also *Haven v. Foster*, 9 Pick. (Mass.), 112; *State v. Moore*, 6 Foster (N. H.), 448; *In re Carr*, 28 Kansas, 1.

compliance with article 186 of the Mexican Penal Code, and it considers that article incompatible with the principles of international law.

I think it proper to state, with reference to the first point, that as I understand it, Cutting is on trial for the publication in *El Centinela*, a periodical published in Paso del Norte, Mexico, of an article against Medina which is deemed defamatory, and although there may have been adduced as an aggravating circumstance the publication of the other article in El Paso, Texas, I do not think that this is the principal crime of Cutting.

And to sustain this view, Mr. Romero argues that the “conciliation” signed by Medina and Cutting on the 14th of June did not terminate the prosecution of Cutting absolutely, but only on condition of his complying with the terms of the agreement.

This argument has already been noticed, and it has been contended that to treat the publication by a citizen of the United States of a libel in Texas as a branch of a “conciliation” in Mexico, and as consequently subjecting the publisher to criminal liability in Mexico, is the same thing in principle as the claim made in article 186 of a right to regulate and punish in Mexico the acts of foreigners in their own country, provided a Mexican is concerned. This, it is conceived, would be a sufficient answer to Mr. Romero’s argument, even if it had not appeared that the sentence imposed on Cutting by Judge Zubia, and subsequently adopted and sustained by the Mexican Government, as will hereafter be more fully shown, rested not only on the ground that the publication in Texas violated the terms of the “conciliation” and restored Cutting’s liability to criminal prosecution, but also distinctly and in the alternative on the ground that the publication in Texas created an original liability to prosecution and punishment under article 186.

Mr. Romero then takes up this article, and says that the Penal Code in which it is found, “was drawn up by a commission of distinguished Mexican lawyers who threw on the subject the light of a special study of penal legislation, and who adopted from the European codes all that appeared to them most advanced and adaptable to the circumstances of Mexico”; and in support of this he cites the Penal Codes of Belgium, France and Italy, and argues that the present tendency of criminal law is in the direction of a wider jurisdiction. On this subject more will be said hereafter. And I will now pass to another branch of Mr. Romero’s argument, which, translated, reads as follows:

The system of punishing crimes committed in foreign parts, especially when these, although perpetrated abroad, have their complement or realization

or produce their effects in the country which punishes them, is in practical application in several countries, not merely in the provisions of their penal codes, but in the trials daily conducted and in the doctrines of various modern criminal authorities.

It is true that, under the laws (common law) of the United States and England, there is no jurisdiction to take cognizance of crimes committed in a foreign land; yet, in spite of this, there has just occurred a trial for libel, in London, on suit instituted by Mr. Cyrus Field against Mr. James Gordon Bennett, editor of the *Herald*, of New York, by reason of articles published in New York in Mr. Bennett's paper, which Mr. Field regarded as defamatory of himself, and in which Mr. Bennett was condemned by the English courts to pay \$25,000 for the damages and injuries occasioned to Mr. Field by the aforesaid articles, notwithstanding that they had been published in New York and not in London. It should, moreover, be borne in mind that Mr. Bennett is not a resident of London, as Mr. Cutting is of Paso del Norte.

It is true that the basis of judgment of the English courts appears to be: that, although the offense was committed in New York, its effects were produced in London, where the *New York Herald* circulates; but precisely the same reason exists in the case of Cutting, in the supposition that although the article was published in El Paso, Texas, it circulated in Paso del Norte, Mexico, where Medina was known, and where it may be said that it produced its effect.

Several writers on the American and English Penal Code maintain doctrines similar to those put forth in article 186 of the Mexican Penal Code.

Joel Prentiss Bishop, in his *Commentaries on the Criminal Law*, 7th edition, 1882, vol. I, chapter VI, section no, page 59 (Boston: Little, Brown & Co.), says as follows:

“One who is personally out of the country may put in motion a force which takes effect on it; and in such a case he is answerable where the evil is done though his presence is elsewhere. Thus, murder, *libel*, false pretenses, &c, * * If a man standing beyond the outer line of our territory, by discharging a ball kills another within it, or himself being abroad circulates through an agent, libels here * * * or does any other crime in our own locality against our laws, he is punishable, though absent, the same as if he were present”.

In support of this doctrine, Bishop cites various American and English authorities, who sustain the principles enunciated by him.

This same doctrine is maintained by Bishop in his work entitled: *Criminal Procedure or Commentaries on the Law of Pleading and Evidence and Practice in Criminal Cases*. (Third edition, 1880, vol. I, Book II, Chapter IV, Section 53, page 27, Boston: Little, Brown & Co.), wherein he says as follows:

“*Personal presence.* The law deems that a crime is committed in the place where the criminal act takes effect. Hence, in many circumstances one becomes liable to punishment in a particular jurisdiction while his personal presence is elsewhere. Even, in this way, he may commit an offense against a State or country upon whose soil he never set his foot, as explained in criminal law.”

Bishop then goes on to mention defamation (*libel*) among the crimes which are punished in the place where they produce their effects, even though the party responsible does not reside there, and he cites various authorities to support his theory.

The only observation I desire to make on this argument is that it blends two wholly distinct, and indeed antagonistic, principles of criminal jurisdiction, and treats them as if they were the same. It is one thing to say that a man who, outside of the territory of a country, commits a criminal act within it, may be punished by its courts, if brought within reach of their process; it is quite another thing to say that a man can be punished by the courts of a country for acts done outside of it, merely because the object of those acts happens to be one of its citizens. The Government of the United States has never intimated that if Cutting had been arrested and tried on the charge of circulating, which in law would have been “publishing,” a libel in Paso del Norte, the Mexican courts would not have had a right to punish him for having done so, merely because the printing was done in Texas. In law the circulation of a libel is a publication of it; it is “published” whenever and wherever it is circulated; and whenever and wherever a man actually circulates a criminal libel he commits a substantive criminal offense, whether he is corporeally present or no. The malicious intent, the guilty will, accompanying a lawless act, makes the actor, although not corporeally present at the place where his act takes effect, just as much a criminal there as if he were physically present.

The quotations made by Mr. Romero from Bishop’s works on *Criminal Law and Criminal Procedure*, to show that it is held in England and the United States that corporeal presence is not always essential to the commission of crime, may be accepted as legally and logically sound, and as lucid, forcible, and satisfactory statements of a general legal principle.

Opposed to this is article 186, against the principle of which it would be difficult to find more decided and more effective argumentative opposition than is contained in the works of Mr. Bishop, from which Mr. Romero has quoted. Article 186 asserts that a foreigner, who, in a foreign country, commits an act there against a Mexican, may afterwards be punished for it in Mexico. It discards both the locality of the act and the locality of the

actor, one of which, at least, must, according to the theory propounded by Mr. Bishop, have been within the territorial limits of the country, in order to give its court jurisdiction over a foreigner. In section 110 of the 1st volume of his Criminal Law, and immediately preceding the quotation made by Mr. Romero from that section, Mr. Bishop declares it to be a general principle, "that no man is to suffer criminally for what he does out of the territorial limits of the country." Adverting in section 115 to the same question, he says:

When the citizen abroad commits an offense it is competent and consistent with the law of nations, and in every respect just, for his own government to provide for his own punishment through its own courts. But in most other circumstances one government has no just right to punish what is done within the territorial limits, or the ships on the high seas of another government.

Not only is Mr. Bishop clear on this point, but he holds that where a statute is couched in such general terms as to include offenses committed abroad by foreigners it is the duty of the court to construe the statute in accordance with the law of nations. In section 112, volume I, of his *Criminal Law*, he says:

Doubtless, if the legislature, by words admitting of no interpretation, *commands a court to violate the law of nations*, the judges have no alternative but to obey. Yet no statutes (*I. e.* in England and the United States) have ever been framed in a form thus conclusive; and, if a case is *prima facie* within the legislative words, still a court will not take jurisdiction should the law of nations forbid.

Discussing, in his work on statutory crimes, the same subject, he says:

Statutes in terms binding persons beyond the territorial jurisdiction are, in the construction, *restricted where the law of nations limits the right, as extending only to the subjects of the government legislating.* (*Stat. Crimes*, 2d ed., § 141, p. 129.)

Although the judgment in the civil suit of *Field v. Bennett et al.*, to which Mr. Romero refers, was a judgment by default, and has, since the date of his note, been set aside by the Queen's Bench Division of the Supreme Court of Judicature, it is proper to advert to the fact that the rules governing the jurisdiction in civil and in criminal cases are founded in many respects on radically different principles, and that an assumption of jurisdiction over an alien in the one case is not to be made a precedent for a like assumption in the

other. In the first place, civil proceedings are instituted only at the suit of private persons for the enforcement of private rights; criminal proceedings are conducted by the public authority for the vindication of the national sovereignty and control. In civil suits, the courts of a nation will enforce foreign laws and foreign judgments; in criminal matters, it is a universal rule that the courts of one country will not enforce the laws of another. Thus in the protection and enforcement of private rights national boundaries are in a great measure obliterated; while, in criminal proceedings, they define the only jurisdiction in which, unless by treaty, the law can be enforced.

Taking these principles into consideration, the case of *Field v. Bennett et al.* could not have been regarded as an authority in favor of extraterritorial criminal jurisdiction, even if the defendant had come within reach of the process of the court and the judgment against him had not been reversed by the Queen's Bench. But, as the case now stands, it cannot be regarded as a precedent for extraterritorial claims of any kind.

The facts are⁵⁸ that there had appeared in the *New York Herald*, a paper published by the defendant, Bennett, in New York, and having an office in London and circulating in large numbers in Great Britain, certain paragraphs alleged by the plaintiff to be false and libellous, and to have done him great injury. One of these paragraphs read as follows:

London, Feb. 4, 1885. —Mr. William Abbott, broker and operator, Tokenhouse-yard, supported by many stockholders of the Anglo-American Cable Company, announces that at the Friday meeting of the directors of the company he will introduce a resolution to expel Mr. Cyrus W. Field from the directorship, on the ground that he is unworthy of any position of confidence and trust.

The other read as follows:

At a meeting of the company (meaning the Anglo-American Cable Company), held last week, Mr. William Abbott moved that Mr. Cyrus W. Field should not be re-elected. This worthy philanthropist, it would appear, was concerned with Jay Gould in the issue of Wabash preference stock, on which sham dividends were paid until the British public had been induced to buy it, when it fell from 92, the issue price, to about 12. According to American newspapers, Mr. Cyrus Field made by this operation about one million sterling. In these circumstances Mr. Abbott was right in opposing the re-election of this gentleman.

⁵⁸ See London *Times*, July 27, 1886.

The plaintiff testified that he was a special partner in the firm of Field, Lindley & Co., the largest shippers of grain from America to Europe, and having agencies in London, Liverpool, Glasgow, Bristol, and other British and continental ports. He was besides director of ten large corporations, seven of which were in America and three in London. For some years past he had spent more than half his time in England, where he had a great many friends. There was not a shadow of foundation for either of the libels, and they were calculated to do him immense injury.

On these facts the jury at the Middlesex sheriff's court, before which, the judgment having been allowed to go by default, the case came for the assessment of damages, rendered a verdict for the plaintiff of £5,000.

The question raised before the Queen's Bench was whether the defendant had ever been properly brought within the jurisdiction of the English courts. It was admitted that since the institution of the suit he had not been in England, and the process was served, not on him personally, but, under an order of the Court of Appeal, on the other defendant, named Hall, who acted as Mr. Bennett's counsel in London, and was joined in the action as a co-defendant. The judgment of the Queen's Bench Division, consisting of the Lord Chief-Justice Coleridge and Mr. Justice Denman, was delivered by the Chief-Justice. In the course of the opinion, he said:⁵⁹

It is hardly contended before us that this was a case in which service of a writ or notice of a writ out of the jurisdiction could have been allowed if the application had been originally made for such service so noticed. The action is for libel; the defendant is neither a British subject nor in British dominions, and service of a writ therefore upon him is forbidden by the order. [Referring to order 67, rule 6, and order 11, rules 1 and 6, regulating service of process.] * * * Hut it is contended that, although the writ itself could not be served, there may be a substituted service of it ordered under order 68, rule 6. We doubt whether this rule has any application for service out of the jurisdiction. But if it has, it is limited in terms to cases where the writ itself can be personally served, as matter of law; but where it cannot from circumstances be promptly served personally, in matter of fact. It is only in such cases that substituted service of the writ or the substitution of notice for service is permitted by the rules. But this is no such case; and it seems to us that in allowing substituted service the Court of Appeal acted beyond their powers. It follows that all the proceedings, beginning from and including the order of the Court of Appeal, must be set aside with costs.

⁵⁹ See London *Times*, Dec. 16, 1886.

It thus appears that the only point decided by this case is that the process of the British courts has no extraterritorial force as to foreigners.

The next argument on the part of the Mexican Government is in a communication from Mr. Mariscal to Mr. Romero, dated the 12th of August, 1886, and transmitted by the latter to the Department of State on the 30th of the same month. When this paper was despatched by Mr. Mariscal Judge Zubia had, as we have seen, just delivered his decision, in which article 186 was sustained and enforced. Mr. Mariscal, therefore, made only a passing reference to the question of the breach of the “conciliation,” but proceeded directly to the defense of article 186, and devoted his observations chiefly to that subject. The substance of his argument is that the doctrine that crime is local is peculiar to the common law; that in countries which have derived their legal institutions from the Roman system of jurisprudence the territorial principal is not acknowledged; that even in England and the United States there exist important exceptions to the theory of the common law; and that the question of the punishment of foreigners for offenses committed outside of the national territory “depends upon the principle which may have been adopted touching the competence in general over certain offenses perpetrated abroad; since it does not seem just to impose penalties therefor upon citizens and leave the foreigner in like circumstances unpunished.”

Now, it is true that the territorial theory of criminal jurisdiction is more strictly carried out in England and the United States than in any other country, because in the common law, which prevails in both, criminal offenses whether by citizens or by foreigners, are considered as purely local. And it may readily be admitted that, as Wheaton says in a passage quoted by Mr. Mariscal, “this principle is peculiar to the jurisprudence of Great Britain and the United States,” and that “even in these countries it has frequently been disregarded by the positive legislation of each.”

But the simple answer to the inference Mr. Mariscal seeks to draw from this fact is, that the controversy raised by the Cutting case is not as to the expediency or in expediency, or as to the prevalence or non-acceptance, of the strict local theory of criminal offenses. When Wheaton says that this principle is peculiar to the common law, he does not refer to any question of right on the part of a nation to punish foreigners for acts committed outside of its territory. As we shall hereafter see, he utterly repudiates the notion that such a right exists in international law. The idea in his mind was the local principle of criminal offenses as applied to citizens. This he called peculiar to the common law. Like Mr. Bishop, who, as has been shown, also denies the extraterritorial principle in respect to foreigners,

while advocating it in respect to citizens, Wheaton did not, as will hereafter be seen, doubt the right of a nation to punish its own citizens for offenses committed abroad. This is a matter which each nation may regulate as it deems expedient. The local principle of the common law is not due to any doubt as to the right of a Government to punish its own citizens, but solely to the manner in which the criminal branch of that law was developed. The most ancient part of English criminal legislation was that which regulated the procedure. The country was divided into counties, in each of which there were juries, grand and petit. The grand juries, or *jurys d'accusation*, were supposed to know what passed in their own county, and nothing else. They held to this rule with such rigor that if a man was wounded in one county and died in another, the criminal sometimes escaped prosecution, and it was to remedy this defect that the Act of 1549, 2 and 3 Edw. VI, c. 24, was passed, the result of which was to make the criminal justiciable in either country. (Sir J. F. J. Stephen, in *Journal du droit int. privé*, 1887, p. 129.) It was simply a matter of procedure and convenience involving no question of sovereign right or of international law, and the statutory modifications of the ancient practice, which have from time to time been made in respect to British subjects, have no significance in the present discussion.

As having relevance to the present case Mr. Mariscal cites the opinion of the Attorney-General in relation to the civil suit for damages brought in a Pennsylvania court in 1794 against a Frenchman, then lately governor of Guadalupe, for an alleged wrongful seizure and condemnation by him of a vessel belonging to the plaintiff. The French minister asked that the suit might be stopped, *not on the ground that the defendant, being a foreigner, was not subject to suit on civil process*, but on the ground that, as the act on which the suit was founded was done by him in virtue of his authority as governor, he was not personally liable to suit for it. The question having been referred to the Attorney-General, Bradford, he gave an opinion, saying that “with respect to his suability, he (the late governor) is on a footing with any other foreigner (not a public minister) who comes within the jurisdiction of our courts;” and that “if the circumstances stated form of themselves a sufficient ground of defense, they must, nevertheless, be regularly *pleaded*.”

The bearing of this case on the jurisdictional claim asserted in article 186 of the Mexican Penal Code is not apparent. As has heretofore been stated, jurisdiction in civil suits and in criminal prosecutions rests on different grounds and proceeds upon opposite principles. While it is a universal principle, admitted even by those countries which have gone farthest in the direction of punishing extraterritorial crime, that the courts of one nation will neither enforce the penal laws nor the penal sentences of the tribunals

of another nation, yet this territorial circumscription of the operation of law is so far discarded in civil cases that it may be said that the principal basis of civil responsibility as between persons in different places is the recognition and enforcement by the courts of one country, in civil matters, of the laws and judgments of other countries. So far has this rule been carried that it has lately been held in England⁶⁰ that a foreign judgment affecting the succession to property in that country would be enforced, and could not be impeached or reviewed there, although it involved a question of English law which was misconstrued. The civil liability of man to man is not circumscribed by national boundaries; the subjection of a foreigner to the sovereignty of a state exists only when by his own acts he brings himself within the territorial operation of its laws.

Mr. Mariscal further argues that the principle of article 186 “is not only in accord with the most authoritative doctrines of private international law, but also with the positive legislation of several nations which command respect in such a matter, such as France and Austria, where such offenses [by foreigners outside of the country] are punished if they have been committed against the nation; Prussia, where they are all punished in conformity with the law of the country wherein they are committed; Bavaria and Norway, without this characteristic and without the requisites and conditions exacted by our code.” On the question of doctrine he cites by name Foelix, Voet, Boehmer, Martens, Saalfeld and Pinheiro-Ferreira, and says that Fiore might be added by reason of his general theories. The names of these writers, excepting the first and the last, are evidently taken from the work of the first named, Foelix, on private international law, published in 1866, in paragraph 574 of which they are, with the exceptions stated, given in the order in which they are found in the note of Mr. Mariscal. This paragraph, after stating that writers are not in accord on the subject in question, mentions by name Voet, Boehmer, Martens, Saalfeld and Pinheiro-Ferreira as advocates of various degrees of extraterritorial jurisdiction over foreigners; and Schmalz, Abegg, Feuerbach, Homan, Sumner⁶¹ and Rolin as opponents: and adds that Mittermaier does not contradict their opinion. It is not singular that the list of Foelix, published in 1866, and incomplete as it was then, does not contain the names of many high and recognized authorities on international law at the present day; nor that for the same reason Mr. Mariscal should have

⁶⁰ *In re Trufort*, before Mr. Justice Sterling, reported in London *Times*, July 27, 1887; following decision in *Castrique v. Imrie*, L. R., 4 H. L., 414; *Godard v. Gray*, L. R., 6 Q. B., 139.

⁶¹ The author doubtless referred to the opinion of Mr. Justice Story in the case of *U. S. v. Davis*, 1 Sumner's *Rep.*, p. 482. He refers to the Report, but gives the reporter as the authority.

been led into the error of citing the legislation of Bavaria and of Prussia, which has been superseded by the German Imperial Code of 1872, whose restriction of extraterritorial jurisdiction over foreigners to offenses against the safety of the state and coinage felonies has been seen. It will hereafter be shown that Fiore, while recognizing extraterritorial jurisdiction to that extent, refuses to admit the international validity of such a claim as that contained in article 186. Foelix, so far as I am able to ascertain, expresses no personal opinion on the subject; but, although he quotes the codes of Bavaria, Wurtemberg, Oldenburg, Hanover, Thuringia and Prussia, all of which, until superseded by the German Imperial Code of 1872, gave to the tribunals of the state jurisdiction of offenses committed outside of its territory by foreigners against subjects, he states, at the end of the paragraph above cited, that “positive legislations do not, as a general rule, admit the prosecution of a foreigner charged with *crimes* or *delits* in another state, save only in the case of a violation of law prejudicial to the state (considered as a whole), in the territory of which the prosecution is undertaken, or when it concerns *crimes* of the highest gravity.”

On the 13th of August, 1886, Mr. Mariscal despatched to Mr. Romero another communication, in continuation of that of the preceding day, which has just been examined. In this despatch of the 13th of August is enclosed a copy of *El Foro*, a legal journal published in the City of Mexico, containing an article on the Cutting case by Judge Jose M. Gamboa, of that city. To this article due reference will be made, after notice has been taken of the points in Mr. Mariscal’s despatch.

In continuation of the effort made in his preceding communication to sustain article 186 by the legislative example of other countries, Mr. Mariscal cites the French law of 1808, which was replaced by the law of 1866, now in force, but which, as he states, the latter did not greatly alter. We have seen how the Court of Cassation at Paris in the case of Fornage in 1873 construed the law of 1866, and repudiated the doctrine on which article 186 is bottomed. Turning now to the provisions of the law of 1808 for the punishment of foreign offenses, we find them to be as follows:

5. Every Frenchman who is guilty, outside of the territory of France, of an attempt against the safety of the state, of counterfeiting the seal of the state, national moneys having circulation, national papers, bills of banks authorized by law, may be prosecuted, judged and punished in France, according to the French laws.

6. This provision may be extended to foreigners who, being authors of, or accomplices in, the same crimes, shall have been arrested in France, or of whom the Government shall have obtained the extradition.

7. Every Frenchman who shall have been guilty, outside of the territory of the kingdom, of a *crime* against a Frenchman, may, on his return to France, be there prosecuted and punished, if he has not been judged and prosecuted in the foreign country, and if the offended Frenchman makes complaint against him. (French Criminal Code of 17 November, 1808, promulgated on the 27th day of the same month.)

In respect to offenses committed abroad by foreigners, it is seen that the provisions of this law are substantially identical with those of the law of 1866. It further appears that even in respect to French citizens, provision is made for their punishment for acts done outside of the state only when those acts amount to a *crime* (felony), and not when they constitute merely a *delit* (or misdemeanor). And so it was held by the Court of Cassation in 1864 (*Journal du Palais*, 1864, p. 404), in the case of Jacques Trottet, for reference to which, as well the case of Fornage, previously cited, I desire to acknowledge my obligations to the Marquis de Chambrun. The syllabus of this case reads as follows:

When an act referred to the Court of Assizes as constituting a CRIME committed in a foreign country by a Frenchman against another Frenchman, is reduced by the finding of the jury to a simple DÉLIT, the Court of Assizes ceases to be competent to take cognizance of it: Article 7, C. Crim. Procedure, according to the terms of which the Frenchman who is guilty of a crime against a Frenchman in a foreign country can be prosecuted and punished in France on his return, having no application to the case where the act has only the character of a DÉLIT.

The facts in the case were that Trottet, a Frenchman, having been indicted by the grand jury of the Imperial Court of Chambery for a willful assault and battery on another Frenchman, causing inability to work for more than twenty days, and with premeditation, which made the offense a *crime* (felony), the case was referred for trial to the Court of Assizes of Haute Savoie, sitting with a jury. On the trial the jury found the facts as alleged, except as to premeditation, which their verdict negatived, thus reducing the offense to a *delit* (misdemeanor). And the case having been finally brought before the Court of Cassation, that tribunal rendered the decision which is summarized in the syllabus above quoted.

With the exception of the brief mention of the French law of 1808, the rest of Mr. Mariscal's paper of the 13th of August is almost exclusively devoted to the praise of a draft of a penal code, a part of which was approved by the Italian Chamber of Deputies in 1877. This draft was principally the work of Professor Mancini, a former Italian minister of justice, and has undergone much discussion in Italy, both before and since its approval by the Chamber of Deputies. But even if it were identical, in respect to the punishment of foreigners, with article 186 of the Mexican Penal Code, it could hardly be contended that the doctrine had made much progress in Italy, where, both before and since its approval by the Chamber of Deputies it has not only been the subject of continual controversy, but where the work containing it, although begun more than twenty years ago, remains in effect a mere *projet*, and, as is admitted by Mr. Mariscal, is not yet in force.

It is, however, pertinent to observe that in the *projet* in question there are important qualifications of foreign jurisdiction, which escaped notice in Mr. Mariscal's paper of the 13th of August. For the purpose of showing these qualifications I shall not quote particular provisions of the *projet* itself, but shall avail myself of two admirable discussions of it—one by M. Alberic Rolin, an advocate of the Court of Appeal of Ghent, and secretary of the Institute of International Law, which was published in the *Revue du Droit International*⁶² in 1877; and the other by M. Fiore, the distinguished authority on international law and professor of that subject at the University of Turin, which was published in the same journal⁶³ in 1879. We learn from these sources that four *projets* have been discussed in Italy, which, because of their non-conformity in respect to the principles of international penal law, have provoked numerous controversies as to the limits of its extraterritorial authority. "The first *projet*" says M. Fiore, "of a penal code is that which was formulated in 1868 by the commission instituted for that purpose. That *projet* was the object, in 1870, of many modifications by a commission composed of three members. The Minister Vigliani introduced in it yet other modifications, and presented it to the Senate on the 24th of March, 1874. The Senate, after long discussions, modified it again on certain points. The Minister Mancini presented the fourth draft of the *projet* in November, 1876, and the first book has been adopted by the Chamber of Deputies." As to the application of the penal law on the territory, the four *projets* conformed, but in respect to the repression of offenses committed abroad they differed widely. By article 7 of the *projet* of 1868, it was proposed that if a foreigner, af-

⁶² Vol. XI, p. 461 *et seq.*

⁶³ Vol. XI, p. 308 *et seq.*

ter having committed abroad an offense punishable under the Italian law with imprisonment at hard labor, or with imprisonment or banishment, should enter the kingdom, he should, his extradition having first been offered to and refused by the government where he committed his offense, be tried and punished according to the Italian law. And in case of an offense punishable with less than five years imprisonment, it was provided that a complaint should be made by the injured party, or by the government of the country to which the offended person belonged. This theory was thought by the courts to be exorbitant, and “the court of Parma, among others,” says M. Fiore, “proposed that the citizen himself should not be punished for offenses committed abroad, save for those against the safety or economic life of the state. In pursuance of those observations, the theory of extraterritoriality was modified in all the other *projets*”.

A proposal was made by the Ministerial Commission in 1876 to revive the provisions of article 7 of the *projet* of 1868.

“But”, says M. Fiore,

...the magistracy, the law faculties and the colleges of advocates observed that there could be no interest in punishing the foreigner who, outside of the country, commits an offense to the prejudice of another foreigner, and that to meet every peril it would be sufficient to extradite or expel him. *The Minister Mancini*, in his *projet*, did not adopt in an absolute manner either the one or the other of the two systems; but proposed that prosecutions against the foreigner, in the cases in which he was justiciable, should be discretionary and before all preceded by an offer of extradition, and that, where the offer should not have been accepted by the government of the place where the crime was committed, the government should be free either to expel the foreigner from the kingdom, or else to arraign him in case the crime should be of the number of those prescribed in the convention of extradition, or one of the crimes against the law of nations, or against persons, property, or public credit, or else amounting to fraudulent bankruptcy or an outrage on good morals.

Such are the qualifications of the claim of extraterritorial jurisdiction, as proposed in the Mancini codification. And in regard to them, M. Rolin, in the article to which I have already adverted, says:

Crimes and délits committed by a foreigner outside of the territory are not judged and punished in Italy (by the Mancini *projet* as adopted by the Chamber of Deputies) save under a conjunction of exceptional circumstances. It is a great deal that they should ever be. We may say, it is true, that, when the party injured is an Italian subject, when extradition has been offered and refused, when the act is punished as well by

the Italian as by the foreign laws, it would be an outrage for a foreigner to be permitted to reenter Italy as if for the purpose of defying there its authority. *But if we are free to expel him*, it would be as hard to apply to him, for an act committed previously in a foreign country, under the empire of foreign laws, the penalties pronounced by the Italian laws which he did not know, *to which he was not subject on any ground, and which consequently he could not violate. Neither the system of territorial authority, nor that of the personal authority of the penal law, nor that which combines both*, could justify in such case the action of the national tribunals.

Mr. Mariscal supplements his argument of the 13th of August with a list of nations whose laws punish to a greater or less extent extraterritorial crime. To this list reference will be made hereafter. And I shall now proceed briefly to notice the argument of Judge Gamboa, without, however, referring to his citations from Foelix' work of 1866 of laws which have since become obsolete.

Judge Gamboa's argument opens with a statement of facts, which it is unnecessary to review, because, for the purposes of this report, the facts have been accepted as set forth in the decision of Judge Zubia.

The whole of Judge Gamboa's argument may be summed up in a single sentence, which he quotes from Foelix, and which reads as follows:

The competence of the authorities and the form of procedure before them are controlled by the law of the country where the action is instituted, whatever may be the law under whose empire have occurred the acts which give rise to such action.

As a general proposition this may be accepted as incontestable. The competence and forms of procedure of the judicial tribunals of a country are regulated and defined by its municipal law. There is no doubt that *under the law of Mexico* the courts of Chihuahua are competent to try a foreigner for offenses begun and consummated in his own country against a Mexican. But this is not the question raised by the United States in the case of Mr. Cutting. That question is whether the provisions of the law of Mexico, as contained in article 186 of the Penal Code, *are in contravention of the rules of international law*. And to this question the Mexican judicial tribunals are not competent to make a definitive reply. "According to the rule of law," said Judge Zubia, "*judex non de legibus sed secundum leges debet judicare*, it does not belong to the judge to examine the principles laid down in said article 186, but to apply it in all its force, it being the law in force in the State of Chihuahua." To this decision the Government of the United States has made no objection. It has not questioned the competency of the Mexican

court under the Mexican law. But it has held that that law, and consequently all proceedings under it, are in violation of the principles of international law.

All the salient points of the Mexican defense have now been examined, except the list (enclosed in Mr. Mariscal's paper of August 13,) of codes that provide for the punishment of extraterritorial crimes. It will be recollected that it has already been shown that the jurisdictional claim contained in article 186 is not sustained by the penal legislation of the present day. And we have seen how, notwithstanding the constant appeal, doubtless made under a misapprehension, to the Code of France, the Court of Cassation has peremptorily and completely repudiated the notion that, because of the *exceptional provisions* as to crimes against the safety of the state and against the currency, the French Code could be held in *principle* to assert criminal jurisdiction over foreigners for acts done outside of France. The principles of public law, so the court held, did not warrant such a pretension; and that this view is correct will hereafter be copiously proved by the opinions of the highest authorities on international law at the present day.

There being no principle of international law that permits the tribunals of a nation to try and punish foreigners for acts done by them outside of the national territory or jurisdiction, *it necessarily follows that any assumption to do so, in respect to particular crimes, must rest, as an exception to the rule, either upon the general concurrence of nations, in respect to the crimes in question, or upon an express convention.*

It follows, therefore, that it is not enough to quote, in favor of article 186, the law of France, or of any other country, whose legislation makes provision for the punishment of foreigners who, outside of the national territory and jurisdiction, commit offenses against the safety of the state, or coinage felonies, or other particular crimes. *It must be shown that article 186 is sustained both in amplitude of extent and in form by a general concurrence of positive legislation.*

This, as we have seen, cannot be done. And it will now further be shown, by the list of codes enclosed with Mr. Mariscal's communication of the 13th of August, that the claim set forth in article 186, of the right of a nation to punish a foreigner for an offense committed against one of its citizens outside of its territory, has been generally abandoned and may now be regarded as obsolete. The list contains merely the names of the countries and the dates of the codes cited, quotations from the provisions of some of them being made in the article of Judge Gamboa. Most of the codes are ranged under the head of "nations that punish crimes committed in foreign countries by their own subjects," and the rest under the head of "nations that punish, more or less, crimes committed in foreign countries by foreigners

when such foreigners enter their territory.” But as most of the codes ranged under the first head, the principle of which is not in dispute, are repeated under the second head—*e. g.* the Code of France—I shall place all in one list, and make, opposite each, appropriate explanations.

LIST OF CODES	COMMENTS
France, Law of 1866.	Still in force, but punishes only <i>crimes</i> against the safety of the state, and <i>crimes</i> of counterfeiting seals of state, national moneys, etc.
Austria, Code of 1872.	Still in force, but punishes only <i>crimes</i> , and not <i>delits</i> , and then, except in offenses against the safety of the state and currency felonies, only after offer of surrender.
Italy, Code of 1859.	Still in force, but substantially same as Austrian Code.
Belgium, Law of 3 October, 1836.	Replaced by law of April 17, 1878, which is substantially identical with that of France of 1866. But the law of 1878 made little change in Belgian jurisdiction, which since 1794 has closely followed that of France.
Portugal, Code of 1852.	Replaced by law of July 1, 1869, under which foreign jurisdiction extends only to Portuguese.
Greece, Code of 1834.	Punishes foreign <i>crimes</i> and <i>delits</i> against subjects, and is still in force.
Ionian Isles, Code of 1841.	
Holland, Penal Code. (No date given.).	The Dutch Code, which punished foreigners for assassination, arson, and certain other grave and enumerated <i>crimes</i> , committed abroad against subjects, was modified by law of January 15, 1886, which is substantially identical with French law of 1866.
Hanover, Penal Code. (No date given.).	As quoted by Foelix, in 1866, punished foreigners for offenses committed abroad against Hanoverians; <i>but this is superseded by German Imperial Code of 1872, which does not recognize this principle, and confines jurisdiction of extraterritorial offenses of foreigners to crimes against safety of state and coinage felonies.</i>
Norway, Code of 1842.	Same provision as former Hanoverian law, <i>but prosecution is discretionary with the Government.</i>
Russia, Penal Code. (No date given.).	Bears date 1866, and punishes foreigners for offenses abroad against Russians.

LIST OF CODES	COMMENTS
Bavaria, Code of 1861. Prussia, Code 1851.	Punished foreigners for offenses abroad against subjects, <i>but is superseded by German Imperial Code of 1872.</i>
Wurtemberg, Code of 1839.	Same comment as on Bavarian Code.
Saxony, Code of 1838.	Same.
Baden, Code of 1845.	Same.
Oldenburg, Code of 1814.	Same.
Brunswick, Code of 1840.	Same.
Hesse, Code of 1841.	Same.
German Empire, Code of 1872.	See comment on Hanoverian Code.

Placing the Ionian Isles under the Greek system, it is seen that in the foregoing list there are only two legislative systems now in force which in extent and form sustain article 186; that of Russia, of 1866, and that of Greece, formulated in 1834. As for the rest, such of them as might have been cited to sustain the Mexican claim have been placed by time beyond the purview of the present discussion, except for the purpose of showing the rejection of their principle in positive legislation.

Nor is this principle sustained by the legislation of the Spanish-American republics.

In the Argentine Republic criminal jurisdiction in respect to foreigners is confined, as in the United States, to offenses committed where the Republic, or one of its states, has exclusive jurisdiction; save in the exceptional cases stipulated in treaties with foreign powers.⁶⁴

In Chili the territorial principle prevails, it being provided not only that foreigners, but also that Chilians, shall not be punished for crimes or offenses committed out of the territory of the Republic, save in the cases indicated by the laws.⁶⁵

In respect to offenses against the safety of the state committed outside of the Republic, article 106 of the Penal Code provides as follows:

⁶⁴ I desire to acknowledge my obligations for a written statement as to the Argentine laws to Mr. Severo Ygarzabal, of the Argentine Legation. See for specific provisions *Códigos y leyes usuales de la República Argentina*; Buenos Aires, 1884; especially § 77, 78, Penal Code.

⁶⁵ Article 6 of the Penal Code of 1874.

Any one who, within the territory of the Republic, conspires against its external security by inducing a foreign power to declare war against Chili shall be punished by imprisonment in the penitentiary for life. If hostilities have ensued he shall suffer the death penalty.

The provisions of this article shall be applied to Chilians even where the plots to induce a declaration of war against the Republic have been carried on outside of its territory.

It is thus seen that even in respect to crimes against the safety of the state the Chilean Code distinguishes between citizens and foreigners, and punishes the latter only when they carry on their conspiracies with foreign powers from the territory of the Republic, and are therefore within its territorial jurisdiction.

As to counterfeiting the currency, securities and certificates of debt, issued under Chilean law, article 174 of the Penal Code provides as follows:

Any one counterfeiting the shares or the promises to pay up the shares, of joint stock companies, bonds or other securities legally issued by municipalities or public establishments of whatever denomination, or interest coupons, or dividends belonging to these various securities, shall be punished by detention from its intermediate to its highest grade, and by a fine of from five hundred to a thousand dollars if utterance thereof has been made in Chili, and by detention in its intermediate grade, and by a fine of from one to five hundred dollars when the utterance has been in a foreign country.

Here again adherence to strict territorial theories is illustrated by the mitigation of the sentence where the utterance of the forgeries has been effected abroad; so that the punishment shall apply only to what was done within the national territory, namely, the forgery, and not to its foreign utterance.

Nor does the Penal Code depart from the territorial principle in respect to libels. On this subject article 425 provides as follows:

Concerning slanders or insults published by means of foreign newspapers, prosecutions may be instituted against those *who, from the territory of the Republic, have sent the articles, or given instructions for their insertion, or contributed to the introduction or circulation of those newspapers in Chili, with the manifest intent to spread the slander or insult.*

The Penal Code of Colombia of 1873 follows as to acts of foreigners committed outside of the national territory, the lines laid down in the French law of 1866, and in case of private injuries, confines the jurisdiction over

crimes and offenses to those committed by one native against another. On these subjects article 77 provides as follows:

Punishment shall be inflicted in conformity with this code, without the plea of ignorance of its provisions serving to exculpate, on natives and foreigners, who, *within the territory of the Republic*, commit any crime or offense, saving as regards the latter class of persons, the exceptions fixed by international law; on the diplomatic agents of the Republic who commit in a foreign country any crime or offense, and on the same or any other officials of the Government in a foreign country who commit any act of disobedience or unfaithfulness to the said Government, or any crime or offense in the exercise of their functions; on natives and foreigners who, out of Colombian territory, have become guilty as principals, accomplices or accessories of any crime against the security and tranquillity or the constitution of the Republic; who have counterfeited or introduced into Colombia counterfeit money of the nation; who have introduced into the country foreign counterfeit moneys which have legal circulation in Columbia; who have counterfeited or introduced counterfeit stamps or postage-stamps; who have counterfeited the great seal of the Republic, or those of the administrative department, or those which the courts and other authorities use conformably with the law, or instruments of public credit settled by, or admitted as a debt of, the nation, or bonds, warrants or receipts of the national treasuries, or other offices of the Treasury Department, which circulate under the government's guaranty, or the notes of legally incorporated banks; provided that in all these cases they have not been tried and sentenced in the nation in whose territory the offense was committed, and that they have been arrested in Colombia, or the Government has obtained their extradition.

On natives and foreigners who commit acts of piracy, and are arrested by the Colombian authorities, provided that they have not been tried and sentenced in another country for the said crimes.

On the commanders, officers, crew and marines of national war vessels who commit any crime or offense on the high seas or on board of their vessel in the waters of a foreign nation.

On the captains, passengers and crew of merchant vessels of Colombia, who commit any crime or offense on the high seas, or within the waters of a foreign nation, provided that, in the last case, they have not been tried and condemned in the nation within whose jurisdiction the offense has been committed.

On natives who have committed any crime or offense against a native in a foreign country, provided that they have not been tried and condemned for the said offense or crime in the nation in which it was committed, and provided that being in Colombia the action has been commenced against them by the parties interested in conformity with the law.

In respect to the law of Costa Rica, I find in Orozco's *Elements of the Criminal Law of Costa Rica*,⁶⁶ published in San Jose in 1882, the following statement:

The jurisdiction of the courts is thus limited to the territory of the nation, since offenses committed by natives of Costa Rica or foreigners outside of its jurisdiction are not subject to the punishments of the Penal Code. All the codes of the world recognize this theory, and ours declares it by saying that "crimes and offenses committed out of the territory of the Republic by Costa Ricans or foreigners shall not be punished in Costa Rica except in the cases provided by the law."⁶⁷

The exception to which this article refers, in harmony with the laws of other nations, is none other than the crimes or offenses committed by Costa Ricans or foreigners against the external safety of the Republic. As this class of offenses directly affects the independence and sovereignty of the nation, all legislators have conceded to the courts of the injured state the right to try and punish them whatever may have been the place of their commission, and without paying any attention to the question whether the latter belongs to a foreign nation, belligerent or neutral.

The collection before me of the laws of Peru is very incomplete, and I am therefore unable to speak with certainty as to recent legislation in that country. But in the Penal Code of 1863 the territorial principle was observed; and in respect to offenses by foreigners against the safety of the state, jurisdiction was confined to those who were in the Republic at the time of their criminal activity. (Article 114.)

The only assertion I have discovered in Spanish-American legislation (after a necessarily imperfect examination of it,) of the principle of article 186 of the Mexican Penal Code, is in the law of Venezuela, which provides for the punishment, under certain conditions, of foreigners who, having, outside of the territory, committed against a Venezuelan the crime of arson, of murder, of robbery, or any other crime subject to extradition, shall come to reside in the Republic. (Seijas' *Spanish-American Int. Law*, vol. I, p. 526 *et seq.*, Caracas, 1884.) This provision, it is true, is neither identical in extent nor in form with article 186, because the offenses that fall under the Venezuelan law are fewer in number and more restricted as to grade, than those that are reached by the Mexican statute; and the element of residence is lacking in the latter. I am unable, however, to see that this element affords ground for a distinction in principle between the Venezuelan and the Mexican law. The

⁶⁶ See p. 15 of work quoted.

⁶⁷ Article 6.

mere residence of a foreigner in a state to which he owes nothing but local allegiance cannot be conceded to create a retroactive criminal responsibility there for his previous conduct in other jurisdictions.

OPINIONS OF PUBLICISTS

It will now be shown that the pretension of a state to punish foreigners for offenses committed by them against its citizens outside of the national territory is condemned by the leading authorities on international law. In this relation I shall first cite Fiore, who, in his *Droit International Privé*, says:⁶⁸

Each state possesses and exercises, exclusively, jurisdiction over its own territory—

I. Over all persons found there, whether citizens, naturalized persons, or foreigners. * * * Jurisdiction extends outside—

1. Over certain places assimilated to territory, in pursuance of special conditions;

2. Over certain acts done outside the territory, in certain specified cases.

The right which pertains to every sovereign as regards *his own citizens* (allegiance, *sujétion*, *sudditanza*) and in virtue of which he may require obedience of them, is certain and uncontested. * * *

This is not to be understood in the sense that the sovereign of a state may coerce his own citizens to obey when they are in the territorial domain of another sovereign, or that he may there exercise *imperium* and *jurisdictio*. That would involve a parallel exercise of two jurisdictions within the same territory. Nevertheless a sovereign may, when *his men citizens* return to their native country, require them to render an account of their infractions of the laws which govern them, even if such infractions were committed in a foreign country; and when there is occasion therefor he may punish them, in case the right violated in a foreign country was protected by the national penal law. * * *

The rights of jurisdiction of territorial sovereignty as regards foreigners are exercised in the same manner as they are in regard to natives, so long as such foreigners reside within the territory of the state. They are in fact considered as temporary subjects. "A foreigner," says Mangin, "becomes subject to the law of a country to which he goes; he is subject to the public power of that country. This is a principle of public law which is admitted among all nations." * * *

What does not, however, appear to us to be clear, is the theory of those authors who would seek to extend the rights of territorial sovereignty over

⁶⁸ 2nd ed., Paris, 1885, vol. I, p. 408, *et seq.*

foreigners to the points of attributing to that sovereignty the full competence to put them on trial for any offense whatever, in whatever country committed. They say that their theory rests on the principle that important offenses infringe the rights of all mankind, and that, in consequence, every sovereign power has the right to punish them, on the sole condition of having the culprit in its power. "The penal laws," says Pinheiro-Ferreira, "do not punish the culprit because he has cast a stigma on this or that country by his crime, but because, in committing it, he has attacked, in the person of his victim, the whole human race; he is, therefore, justiciable by all tribunals, and, wherever he be, the public ministry should make it its duty to bring him before the judicial power of the country whose laws and whose magistrates he has insulted by flattering himself that, through the impunity they might accord to him, they would become the accomplices of his crime."

It seems to us that each sovereign power has the right to provide for the preservation of order in its own country and for the protection of the rights recognized and proclaimed by the constituted authorities as appertaining to the citizens of the state, with regard to the actual circumstances of the time and the place where they may be found; but we do not believe it allowable to regard the social powers as the mandataries of God, or that they have the power to punish invasions of the moral law. We do not thereby refuse to admit the principles of the moral law or to recognize that grave crimes are in contravention thereof; but we do not believe that human judges possess positive *criteria* for exactly estimating the moral wrong and proportioning the penalty to the aggression against the moral law. * * *

Now, in admitting the theory of Pinheiro-Ferreira and those who share his views, a contradiction is inevitable, because, on the one hand, it cannot be admitted that the tribunals of a state can adjudge and punish by the application of the foreign law which has been violated, for it is contrary to the independence of sovereign states to execute each other's penal laws; *and, on the other hand, those tribunals themselves could not apply the law of their own state, if that state did not possess the authority necessary to compel obedience from the accused in a foreign country, for we cannot admit that a rule of action may be violated which was not obligatory in the place where the offense was committed.*

Fiore refers for a more explicit discussion of this subject to his work entitled *Droit Penal International*. Adverting, in the second chapter of that work, to the theory that an individual is protected in all places by the laws of his country, and that consequently the tribunals of that country may take cognizance of acts committed to his prejudice in another state, he says:

We cannot admit that doctrine, for it does not seem to us that the extraterritoriality of penal law ought to depend on the quality of the person to the prejudice of whom the offense has been committed.

The learned author regards as punishable, when committed outside of the state, offenses against the safety of the state and against the public credit, and certain other offenses against rights which may be considered as protected by the laws of the state, whether committed by citizens or by foreigners. But in respect to other offenses he expressly declares that “no sovereign can exercise his repressive power on territory under the dominion of another sovereign”.⁶⁹

Phillimore says:⁷⁰

The general rule, Foelix remarks, adopted by the positive legislation of states on this subject, which is one of public law, is to permit the criminal prosecution of a foreigner on account of crimes committed in another state only in those cases in which either the state in which the prosecution is to be carried on has been in its collective capacity injured by the crime, or in which the crime has been of the gravest kind (*de la plus haute gravité*). The effect of this rule is to make the criminal law of a state a *personal statute* to its subjects, traveling with them, and inseparably attached to them, wherever they happen to be; and such is the doctrine of Paul Voet and others. It was the opinion of Bartolus that *if*, and *when*, a state did take cognizance of crimes committed by foreigners in a foreign state, it must proceed according to the criminal law of that state — *Ut possit contra eum procedi et punire secundum statuta sua civitatis; a proposition sufficiently impracticable, it should seem, to prove the wisdom and justice of abstaining altogether from such experiments.*

Wheaton says:⁷¹

The judicial power of every independent state, then, extends, with the qualifications mentioned —⁷²

1. To the punishment of all offenses against the municipal law of the state, by whomsoever committed, within the territory.
2. To the punishment of all such offenses, by whomsoever committed, on board its public and private vessels on the high seas, and on board its public vessels in foreign ports.
3. To the punishment of all such offenses by its subjects, wheresoever committed.
4. To the punishment of piracy, and other offenses against the law of nations, by whomsoever and wheresoever committed.

⁶⁹ *Droit Pénal International*, Paris, 1880, p. 94; *Droit International Privé*, ed. 1885, sec. 493.

⁷⁰ R. Phillimore, p. 707.

⁷¹ Page 180, Dana's edition.

⁷² These qualifications relate to the extraterritorial privileges of foreign sovereigns, ambassadors, and other privileged persons, who are exempted from local allegiance.

It is evident that a state cannot punish an offense against its municipal laws, committed within the territory of another state, unless by its own citizens.

Hall, a late and very able English authority, says:

Whether laws of this nature (punishing foreigners for offenses committed abroad) are good internationally; whether, in other words, they can be enforced adversely to a state which may choose to object to their exercise, appears, to say the least, to be eminently doubtful. It is indeed difficult to see upon what they can be supported. Putting aside the theory of the non-territoriality of crime *as one which unquestionably is not at present accepted either universally or so generally as to be in a sense authoritative*, it would seem that their theoretical justification, as against an objecting country, if any is alleged at all, must be that the exclusive territorial jurisdiction of a state gives complete control over all foreigners not protected by special immunities while they remain on its soil. But to assert that this right of jurisdiction covers acts done before the arrival of the foreign subjects in the country is in reality to set up a claim to concurrent jurisdiction with other states as to acts done within them, and so to destroy the very principle of exclusive territorial jurisdiction to which the alleged rights must appeal for support. It is at least as doubtful whether the voluntary concession of such a right would be expedient except under the safeguard of a treaty. In cases of ordinary crimes it would be useless, because the act would be punishable under the laws of the country where it was done, and it would only be necessary to surrender the criminal to the latter.⁷³

Story, in his work on the Conflict of Laws, says:⁷⁴

§ 620. The common law considers crimes as altogether local and punishable exclusively in the country where they are committed.⁷⁵ No other nation, therefore has any right to punish them; or is under any obligation to take notice of or to enforce any judgment rendered in such cases by the tribunals having authority to hold jurisdiction within the territory where they are committed.⁷⁶ Hence it is that a criminal sentence of attainder in the courts of one sovereign, although it there creates a personal disability to sue, does not carry the same disability with the person into other countries. Foreign

⁷³ Hall's *International Law*, 2d ed., 1884, p. 190.

⁷⁴ 5th ed., 1857, p. 984 *et seq.*

⁷⁵ "Crimes," said Lord Chief Justice De Gray, in *Rafael v. Vreelst*, 2 Wm. Black, R. 1058, "are in their nature local, and the jurisdiction of crimes is local."

⁷⁶ Rutherf. Inst. B. 2, ch. 9, g 12; Martens, *Law of Nations*, B. 3, ch. 3, § 22, 23, 24, 25; Merlin, Repertoire, Souveraineté, J. 5, n. 5, p. 379 to 382; *Commonwealth v. Green*, 17 Mass. R., 515, 545, 546, 547, 548.

jurists, indeed, maintain on this particular point a different opinion, holding that the state or condition of a person in the place of his domicile accompanies him everywhere. Lord Loughborough, in declaring the opinion of the court on one occasion said: "Penal laws of foreign countries are strictly local, and affect nothing more than they can reach, and can be seized by virtue of their authority. A fugitive who passes hither comes with all his transitory rights. He may recover money held for his use, and stock, obligations and the like, and cannot be affected in this country by proceedings against him in that which he has left, beyond the limits of which such proceedings do not extend." Mr. Justice Buller, in the same case, on a writ of error, said: "It is a general principle that the penal laws of one country cannot be taken notice of in another." The same doctrine was affirmed by Lord Ellenborough in a subsequent case. And it has been recently promulgated by Ixird Brougham, in very clear and authoritative terms. "The *lex loci*," says he, "must needs govern all criminal jurisdiction from the nature of the thing, and the purpose of the jurisdiction."

§ 621. The same doctrine has been frequently recognized in America. On one occasion, where the subject underwent a good deal of discussion, Mr. Chief-Justice Marshall, in delivering the opinion of the Supreme Court, said: "The courts of no country execute the penal laws of another."⁷⁷ On another occasion, in New York, Mr. Chief-Justice Spencer said: "We are required to give effect to a law (of Connecticut) which inflicts a penalty for acquiring a right to a *chose in action*. The defendant cannot take advantage of nor expect the court to enforce the criminal laws of another state. They are strictly local, and affect nothing more than they can reach."⁷⁸ Upon the same ground, also, the Supreme Court of Massachusetts have held that a person convicted of an infamous offense in one state is not thereby rendered incompetent as a witness in other states.⁷⁹ [So, in a late case in chancery,⁸⁰ a foreigner in England was not allowed to withhold certain documents, whose production was sought by a bill of discovery, upon the plea that their contents would render him liable to the penal laws of his own country; they having no such effect in England, and the courts of the latter country having no regard to the penal laws of a foreign state.]

§ 622. The same doctrine is stated by Lord Kames as the doctrine in Scotland. "There is not," says he, "the same necessity for an extraordinary jurisdiction to punish foreign delinquencies. The proper place for punish-

⁷⁷ *The Antelope*, 10 Wheat. R. 66, 123.

⁷⁸ *Scoville v. Canfield*, 14 Johns, R. 338, 340. See also *The State v. Knight*, Taylor's N. C. Rep. 65.

⁷⁹ *Commonwealth v. Green*, 17 Mass. R. 515, 540, 541, 546, 547. [Contra in North Carolina, *State v. Chandler*, 3 Hawks, 393; *Chase v. Blodgett*, 10 New Hampshire, 22.]

⁸⁰ *King of Two Sicilies v. Wilcox*, 1 Simons, N. S. 301.

ment is where the crime is committed. And no society takes concern in any crime but what is hurtful to itself".⁸¹

§ 623. The same doctrine is laid down by Martens as a clear principle of the law of nations. After remarking that the criminal power of a country is confined to the territory, he adds: "By the same principles a sentence, which attacks the honor, rights, or property of a criminal, cannot extend beyond the courts of the territory of the sovereign who has pronounced it. So that he who has been declared infamous is infamous in fact, but not in law. And the confiscation of his property cannot affect his property situated in a foreign country. To deprive him of his honor and property judicially there also would be to punish him a second time for the same offense."

§ 624. Pardessus has affirmed a similar principle. "In all the states of Christendom (says he) by a sort of general consent and uniformity of practice, the prosecution and punishment of penal offenses are left to the tribunals of the country where they are committed. The principle of the French legislation that the laws of police and bail are obligatory upon all, who are within the territory, is a principle of common right in all nations." Bouhier also admits the locality, or, as he terms it, the reality of penal laws; and of course he limits their operation to the territory of the sovereignty, within which they are committed.⁸²

§ 625. On the other hand Hertius and Paul Voet seem to maintain a different doctrine, holding, that crimes committed in one state may, if the criminal is found in another state, be upon demand punished there. Paul Voet says: *Statutum personale ubique locorum personam comitatur, &c, etiam in ordine ad poenam a cive petendam, si poena civibus sit imposita.* And he, as well as some others of the foreign jurists, enters into elaborate discussions of the question, whether, if a foreign fugitive criminal is arrested in another country, he is to be punished according to the law of his domicil, or according to the law of the place where the offense was committed. If any nation should suffer its own courts to entertain jurisdiction of offenses committed by foreigners in foreign countries, the rule of Bartulus would seem to furnish the true answer, *Delicta furni unter juxta mores loci commissi delicti, et non loci ubi delictum committitur.*

⁸¹ Kames on *Equity*, B. 3, ch. 8, § I. See also Ersk. Inst. B. 1, tit. 2, p. 23.

⁸² Bouhier, Cout. de Bourg. ch. 34, p. 588. See also Matthæi, Comm. ad Pand. lib. 48, tit. 20, § 17, 18, 20. Mr. Hallam has remarked: "The death of Servetus has, perhaps, as many circumstances of aggravation as any execution for heresy that ever took place. One of these, and among the most striking, is, that he was not the subject of Geneva, nor domiciled in the city, nor had the *Christianissima Restitutio* been published there, but at Vienne. According to our laws, and those, I believe, of most civilized nations, he was not answerable to the tribunals of the Republic." Hallam's *Introduction to the Literature of Europe*, vol. 2 (Lond. edit. 1839), cap. a, i 27, p. 109.

Bar, the distinguished professor of law in the University of Gottingen, who, since the first publication of his work on International Law in 1862, has seen the extraterritorial pretensions of the German States, which he condemned, swept away by the Imperial Code of 1872, defines⁸³ four theories of criminal jurisdiction of which the first three are as follows:

1. The theory that a criminal statute is limited to the territory for which it was enacted, and that any act committed in another country is beyond its influence.
2. The theory that the criminal law of a state applies not only to crimes committed there, but also to those committed by its citizens abroad.
3. The theory that proposes to extend still further No. 2, and lay down that the state has a right to protect itself and its subjects from injury, and is therefore privileged to visit any injury with punishment.

On the third theory, Bar says:

But although it is true that the protection of persons and property is secured by criminal law, the right to punish does not flow from the right to protect: the latter may justify any measures of defense or self-defense, but gives no right to correct. But even if a law of punishment could be derived from the right of defense and self-defense, yet, since the obligation to protect by punishment lies, in the first instance, upon the state in which the injured parties are, such a law would be subsidiary only, and the state whose permanent subjects those injured persons are, would primarily have no share in the matter, beyond supporting all other states in applying their criminal law. * * *

A union of such divergent principles (territoriality, personality and right to protect) must, at the same time, lead to the most manifold doubts and the most irreconcilable results. * * *

But⁸⁴ as regards the right of the state to punish foreigners who may commit in a foreign country acts prejudicial to the state or its subjects, it is to be remembered that foreigners are not bound to pay any heed to the ways and means which our state takes to attain the aim of its being; indeed, it may be that, as is the case in uncivilized states, they have views diametrically opposed to ours as to the means by which the individual may be perfectly developed within the state. If we propose to compel foreigners to respect our laws in their own country, this is simply to declare that the regulations by which we attain the final end of our state are the only justifiable regulations, *and to extend the territory of the state beyond its bounds.*

⁸³ P. 626 *et seq.*, Gillespie's translation, Edinburg, 1883.

⁸⁴ P. 654, edition referred to.

To this we must add that there is no obligation on a foreign state to suffer the presence of our subjects within its territory, and even if there were a complete obligation of such a kind, it could only be pressed against the state itself by means of public law, not against its individual subjects by means of criminal law. The foreign state has to fix under what conditions it will suffer the presence of our subjects within its territory, and what rules it will prescribe for the intercourse of its permanent or temporary subjects with our subjects.

As regards the case of an act which is prejudicial to a private person who belongs to our state, there cannot even be any considerations of expediency urged for the extension of the criminal law in such a case. Every civilized state punishes common crimes without caring whether they have been committed upon a foreigner or a native subject.

Field, in his International Code, proposes the following rules:

643. The criminal jurisdiction of a nation extends to foreigners—

1. Who commit theft beyond its limits, and bring, or are found with, the property stolen, within its limits; or,

2. Who, being beyond its limits, abduct or kidnap, by force or fraud, any person, contrary to the laws of the place where such act is committed, and send or convey such person within the limits of the nation, and are afterwards found therein; or,

3. Who, being within its limits, cause, or aid, advise or encourage, another person to commit any act, or be guilty of any neglect within the same, which is a criminal act or neglect according to the laws of the nation, and who are afterwards found within its limits. —*Penal Code, reported for New York, Sec. 15.*

644. The criminal jurisdiction of a nation extends also to foreigners found within its jurisdiction who have committed at any place beyond its territorial limits, either as principals or accessories, any of the following infractions of its criminal law:

1. A crime against its national safety; or,

2. Counterfeiting or forging its national seal, national papers, national money having currency within its limits, or bills of any bank authorized by its laws.

These provisions are taken from the law of June 27, 1866, amending articles 5, 6, and 7 of the *French Criminal Code*, vol. 9, p. 557.

Wharton, in defining, in his work on the Conflict of Laws, different theories of criminal jurisdiction, says:⁸⁵

⁸⁵ 2nd ed., 1881, § 809.

(b) That penal jurisdiction belongs to the country of arrest, provided such jurisdiction be necessary for the prevention of crime. That this view cannot be logically maintained is argued at large in another work, whose positions cannot, for want of space, be here recapitulated. (Whart. *Crim. Law*, 8th ed., §§ 2, *et seq.*)

(c) That penal jurisdiction belongs to the country of arrest, provided such jurisdiction is necessary to protect or indemnify parties injured. So far as concerns the question of prevention this position is blended with the last. So far as concerns jurisdiction for the purpose of binding over a dangerous person to keep the peace, it is what has always been exercised by justices of the peace under the English common law. Every justice of the peace is authorized by that law to require such persons, on cause being shown that injury to persons or things is justly to be apprehended from them, to give bail for good behavior, or, in default of such bail, to be committed to prison. The claim, however, put forward in this connection by several codes, goes beyond this. It assumes that criminal jurisdiction is based on the right of a sovereign, in order to protect his subjects from injury, or to indemnify them for injuries sustained, to penally prosecute the offender, whether he be subject or alien, or whether the offense was committed at home or abroad. Aside, however, from the objections noticed under the last head to the assumption of penal jurisdiction over aliens for offenses committed abroad against their own sovereigns, there are two special difficulties in the way of the reasoning on which this particular claim is advanced. In the first place, the right of protection, as such, justifies, not punishment of others, but simply defense of the party endangered. Secondly, to urge protection or indemnity as a ground of jurisdiction involves, as Bar acutely observes, a *petitio principii*. To assume that a sovereign has jurisdiction because one of his subjects is injured by the defendant, is to assume the defendant's guilt, concerning which it is the object of the procedure to inquire. And once more, if the government can only intervene to protect or indemnify subjects, a large class of offenses must go unpunished; such as those against foreigners, or those in which joint defendants, as in case of some sexual crimes, are equally guilty of the common wrong.

It is proper here to advert to the views of President Woolsey, as expressed in his work on International Law, which has been quoted against the position of the Government of the United States in the case under consideration. I shall quote from the last (the fifth) edition, revised and enlarged, as published in 1883. In § 76, which contains the passages that have been cited to sustain the Mexican law, the author says:

Each nation has a right to try and punish, according to its own laws, crimes committed on its soil, whoever may be the perpetrator. But some nations extend the operation of their laws so as to reach crimes committed by their

subjects upon foreign territory. In this procedure municipal law only is concerned, and not international; and, as might be supposed, laws greatly differ in their provisions. (1) One group of states, including many of the German states, some of the Swiss Cantons, Naples (once), Portugal, Russia and Norway, punish all offenses of their subjects, committed in foreign parts, whether against themselves, their subjects, or foreigners, and this not in accordance with foreign but with domestic criminal law. (2) At the opposite extreme stand Great Britain, the United States and France, which, on the principle that criminal law is territorial, refrain from visiting with penalty crimes of their subjects committed abroad. * * *

The same difference of practice exists in the case of crimes committed by *foreigners* in a *foreign* country against a state or one of its subjects, who are afterwards found by the injured state within its borders. England and the United States seem not to refuse the right of asylum, even in such cases. France punishes public crimes only, and such as Frenchmen would be liable for, if committed abroad. (See this § above.) So Belgium and Sardinia, but the latter state also, in the case of wrongs done to the individual Sardinian, first made an offer of delivering up the offending foreigner to the *forum delicti*, and if this was declined, then gave the case over to its own courts. Many states, again, act on the principle that it is right to punish a foreigner as a subject for foreign crimes against themselves or their subjects.

Nearly all states consider *foreign crimes*, against foreign states or their subjects, as beyond their jurisdiction. A few refuse sojourn on their soil to such foreign wrong-doers. A few go so far as to punish even here, in case the party most nearly concerned neglects to take up the matter. Thus Austria, if an offer of extradition is declined by the offended state, punishes and relegates the criminal.

From this exposition it is evident (1) that states are far from universally admitting the territoriality of crime. (2) That those who go farthest in carrying out this principle depart from it in some cases, and are inconsistent with themselves. To this we may add (3) that the principle is not founded on reason, and (4) that, as intercourse grows closer in the world, nations will the more readily aid general justice. Comp. § 20b.

This section (20b) is connected in its line of reasoning with section 20a, from which I will quote the following passage:

There must be a certain sphere for each state, certain bounds within which its functions are intended to act, for otherwise the territorial divisions of the earth would have no meaning. In regard to the right of *furnishing in any case* outside of the bounds of the state there may be rational doubts. Admitting, as we are very ready to do, that this is one of the powers over its subjects, we can by no means infer that the state may punish those who are not its subjects, but

its equals. And yet, practically, it is impossible to separate that moral indignation which expresses itself in punishment from the spirit of self-redress for wrongs. As for a state's having the vocation to go forth, beating down wickedness, like Hercules, all over the world, it is enough to say that such a principle, if carried out, would destroy the independence of states, justify the nations in taking sides in regard to all national acts, and lead to universal war.

In section 20b are found the following passages:

The inquiry, whether a state has a right to punish beyond its own limits, leads us to the more general and practically important inquiry, whether a state is bound to aid other states in the maintenance of general justice, that is, of what it considers to be justice. The prevalent view seems to have been that, outside of its own territory, including its ships on the high seas, and beyond its own relations with other states, a state has nothing to do with the interests of justice in the world. Thus laws of extradition and private international law are thought to originate merely in comity. * * * This is the most received, and may be called the narrow and selfish view. On the other hand, the broad view, that a state in getting justice done everywhere, if its aid be invoked, and even without that preliminary, would occasion more violence than could thus be prevented.

It is thus seen that while the learned author in § 76 criticises the doctrine of territoriality as “not founded on reason,” in § 20a, he says:

In regard to the right of *punishing in any case*,⁸⁶ outside of the bounds of the state, there may be rational doubts. Admitting, as we are very ready to do, that this is one of the powers of the state over its subjects, we can by no means infer that the state may punish those who are not its subjects but its equals.

The fair and just inference from these contrasted propositions is that, when in § 76 the learned author criticised the territorial principle as unreasonable, he was considering it solely in connection with the theory of *personal* jurisdiction, as applied to citizens or subjects of a state. Even on this supposition it is going a great way to characterize the territorial theory as unreasonable. It may not be expedient always to apply the strict rule of territoriality to citizens, but so general is the recognition of the *reason* of the doctrine that among the legislative systems in force to-day that punish extraterritorial offenses of citizens, there is, as we have seen, scarcely one, if any at all, that does not impose important limitations and conditions

⁸⁶ These are the learned author's italics.

upon the exercise of the power. And it is not too much to say that until the conditions of time and space shall have been overcome, and humanity shall have realized the millennial dream of the obliteration of national boundaries, and the unification of legal systems following the extinction of all diversity of creeds and aspirations, the penal law will continue to be essentially territorial.

The grounds of the territorial theory of criminal jurisdiction have been stated by Sir G. C. Lewis in a passage so remarkable for clear, condensed and cogent reasoning that it is well to quote it in this place. It reads as follows:⁸⁷

The system of tying the entire criminal law of a country round the neck of a subject, and of making him liable to its operation, in whatever part of the world he may be, converts the criminal law into a personal statute, and puts it on the same footing as the law respecting civil *status*. Now the personal statute of one country, in civil matters, is recognized by another, so that there is no conflict of laws. But if the criminal law were a personal statute a foreigner would at the same time be subject to two criminal laws—the criminal law of his own state and that of the state of his domicile. No text-writer and no state disputes the rule that all foreigners in a country are subject to its criminal law.

The received rule as to the territoriality of criminal law rests on a sound basis. The territorial sovereign has the strongest interest, the greatest facilities, and the most powerful instruments for repressing crimes, whether committed by native-born subjects or by domiciled aliens in his territory. But a sovereign government, which pursues its subjects into foreign countries, and keeps its criminal law suspended over them, attempts a task in which, even if undertaken with earnestness, it is sure to fail; but which will probably be performed in a careless, indifferent, and intermitting manner. A government has no substantial interest in punishing crimes in the territory of another state; it has not on the spot officers of justice to discover and arrest the criminal; the transport of witnesses to a distance is a troublesome and costly operation; the difference of language, law, and customs creates further impediments. A failure of justice, and an acquittal, is therefore likely to occur, even if the utmost diligence is used; but it may be assumed as certain that, unless some special motive exists, little diligence will be used. A government would feel, with respect to offenses committed abroad in a civilized country, that it was, at the best, undertaking a work of supererogation; perhaps that it was interfering in a matter which, as the law of the place provided for it, would most properly be left alone. The experience of this and other countries shows that a criminal law applicable to offenses committed in foreign lands (such as the act of 33

⁸⁷ *Foreign Jurisdiction*, p. 29 *et seq.*

Hen. 8 and 9 Geo. 4) is for the most part a *brutum fulmen*, and that it is rarely carried into execution. The slumber of the law is therefore in practice a sufficient security to the native subject against its oppression. But if a government was to set to work vigorously to execute such a system of foreign criminal law as that which is embodied in the Austrian and Prussian codes, the sense of insecurity would infallibly lead to loud complaints, and the legislature would be urged into the adoption of a less ambitious course. Guilty men might occasionally be brought to justice; but innocent men, charged with the commission of crimes in distant parts of the world, would be almost incapable of defending themselves against the accusation and of proving their innocence. Even an educated person, provided with money and friends, might find it difficult to extricate himself from such a position; but a poor, uneducated, friendless man might be almost at the mercy of a false accuser. Such a law, if a government afforded funds and encouragement for its enforcement, might be a formidable weapon in the hands of unscrupulous malignity.

It may, therefore, be laid down as a general principle, resting on grounds of the most enlarged expediency, that a criminal law ought to be local; that the sovereign ought to enforce it with respect to all crimes committed within his territory, and in national ships upon the high seas; but should not seek to apply it to crimes committed in the territory or ships of other civilized states.

But although, in explanation of the generalizations at the close of § 76 of President Woolsey's work, which appear to have had reference solely to the question of punishing the extraterritorial offenses of citizens, I have quoted his express condemnation elsewhere of the pretension of a state to punish foreigners for offenses committed abroad, it is necessary to notice the statement made in the same section that "many states, again, act on the principle that it is as right to punish a foreigner as a subject for foreign crimes against themselves or their subjects." It is observed that the only legislative systems referred to in this section (except those of Great Britain, the United States, France, Portugal, Russia, Belgium, Holland and Norway, of which only Russia and Norway, and the latter not in an absolute manner, assert a right to punish foreigners for offenses committed abroad against citizens or subjects,) are those of "many of the German states, some of the Swiss Cantons, Naples (once)" and Sardinia. The citation of the legislation of these states, which are the "many states" referred to, is accounted for by the learned author's statement, made in a note to § 76, that the facts therein set forth "are drawn from an essay, by R. von Mohl, in his *Staatsr. Volkerr. u. Politik*. vol. I, 644-649." This volume was published in 1860, and, as it antedated the unification of Italy and the formation of the German Empire, quoted the then independent legislation of Sardinia, and of

Hanover, Oldenburg, Prussia, Baden, Saxony and Coburg. It fails, however, to notice the Swiss Federal law of 1853, and cites many ancient cantonal statutes long antedating the formation of the Swiss Confederation.

Aside, however from President Woolsey's specific declarations of opinion, adverse to the right, which § 76 of his work has sometimes been quoted to sustain, of a nation to punish the extraterritorial offenses of foreigners, it would be difficult to find a stronger condemnation of such a pretension than is contained in § 77, which relates to extradition. In this section he says:

The considerations which affect the question, what a government ought to do in regard to fugitives from foreign justice, who have escaped into its territory, are chiefly these: *First*, that no nation is held to be *bound* to administer the laws of another, or to aid in administering them; *secondly*, that it is for the interest of general justice that criminals should not avoid punishment by finding a refuge on another soil, not to say that the country harboring them may add thereby to the number of worthless inhabitants; *thirdly*, that the definitions of crime vary so much in different nations that a consent to deliver up all accused fugitives to the authorities at home for trial, would often violate the feeling of justice or of humanity; and *fourthly*, that truth can be best ascertained and justice best administered near the *forum criminis*, and where the witnesses reside. There is also a substantial agreement among the most civilized nations in regard to proof and to penalty in criminal law. Some have contended for an absolute obligation to deliver up fugitives from justice; but (1) the number of treaties of extradition shows that no such obligation is generally recognized, else what need of treaties giving consent to such extradition, and specifying crimes for which the fugitive should be delivered up. (2) It may be said that the analogy of private international law requires it. If a nation opens its courts for the claim of one foreigner on another, and in so doing applies foreign law to the case, why should it not open them for claims of a foreign government against violators of its law? But the analogy fails. In *private* claims the basis of right is admitted with a general agreement by the law of all states. In *public* prosecution of criminals different views of right are taken, as it respects offenses, method of trial and degree of punishment.

Every consideration advanced by the learned author in respect to extradition is in direct antagonism to the claim of article 186 of the Mexican Penal Code. Extradition ought to be granted, so he argues, because it is for the interest of general justice that criminals should not avoid punishment by finding a refuge on another soil, and because truth can be best ascertained, and justice best administered, near the *forum criminis*, and where the witnesses reside:—all of which is sound territorial doctrine. But at the same time we are

to consider that to consent to deliver up all accused fugitives to the authorities at home for trial would often violate the feelings of justice and humanity!

To apply this argument to the case of Mexico, there exists between the United States and that country a reciprocal treaty of extradition, under which each government has agreed to deliver up to the other, persons who, after judicial examination, shall be found to have been duly charged with the commission, within the jurisdiction of the demanding government, of certain offenses enumerated in the treaty; but in no case is either government required to deliver up its own citizens. Among the offenses enumerated in the treaty, libel, the offense with which Mr. Cutting was charged, is not found. Hence the claim made by the Mexican Government in the Cutting case, under article 186 of the Penal Code, is not only to try and punish, according to its laws, a citizen of the United States (whose extradition could in no case have been required under the treaty), for an offense committed in his own country, but to try and punish him for an offense for which the surrender of a Mexican could not have been demanded by his government, even if he had committed it on Mexican soil. Surely such a claim may be said to “violate the feelings of justice and humanity.”

Heffter, in his work on the *International Law of Europe*, says:⁸⁸

As regards criminal jurisdiction the following principles are in the main to be recognized: I. It can only extend—

a. To crimes and offenses committed in the country by a person, whether native or foreigner, being in the said country;

b. To crimes committed in a foreign country by a subject against the laws of his own country, which are binding on him even in a foreign land.

While the second proposition is in theory often not admitted, and all right to inflict punishment in the case of offenses committed abroad denied to the state, yet the practice of individual states goes even further and permits each, by almost universal acknowledgment, to punish all those crimes which are committed by a foreigner in a foreign country against its existence and most important political interests. Formerly the exercise of the office of punishing on behalf of another perfectly competent state, when commissioned by the latter, was not regarded as inadmissible. Yet the constitutional principle which now prevails is opposed to this, namely, that no one should be withdrawn from the jurisdiction of his natural, *i. e.*, his constitutional judge.

⁸⁸ This work was first published in Germany in 1844, and new editions, with changes and additions to keep it abreast of the times, were issued in 1848, 1855, 1861, 1867 and 1873. Translations of it were published in France in 1857, 1866, 1873 and 1883, the last edition being copiously annotated by Geffcken. Heffter, who was a professor in the University of Berlin, an attorney for the crown, and a counsellor of the Supreme Court of Justice at Berlin, died in 1880. I quote from § 36 of the last German edition.

In support of the principles thus stated, Heffter refers to his work on Criminal Law, published in 1854, in which⁸⁹ he sustains his position with great clearness and conclusiveness of argument and with ample citation of authorities. He also refers to M. Faustin Hélie's *Traite de Instruction criminelle*, and to an opinion of the law faculty of Halle, given in 1832, in which it was held that, in order to render a person criminally liable for his conduct, there must be an *obligatio ex lege*, which does not exist in the case of a foreigner outside of the national jurisdiction. Like Bar, who still survives, Heffter lived to see the pretension of many of the German states to punish foreigners for offenses committed outside of the state against subjects, disappear before the Imperial Code of 1872.

In the great work of M. Faustin Hélie,⁹⁰ the subject of foreign jurisdiction is discussed with almost unequalled elaboration and completeness. And after arguing that, in respect to crimes against the safety of the state, the right of self-defense may be invoked to justify their punishment, he says that this argument cannot be extended to extraterritorial offenses by foreigners against citizens, for the following reason:⁹¹

The state to which the injured citizen belongs cannot invoke the right of defense, for its safety is not compromised by a private crime committed on one of its citizens; it cannot invoke the trouble caused by the presence of the criminal on its territory, for that is a matter for expulsion. And then, how is it possible to apply to that foreigner a law which did not govern him at the moment of the perpetration of the act? How can it be made to retroact to a period in which it could not touch him, since he was a foreigner and the crime was committed in a foreign country?

The question is examined by the learned author in all its bearings, and no ground whatever is found to justify the exercise by the state of such jurisdiction.

Pradier-Fodéré, the learned editor of Grotius, founder and honorary dean of the faculty of political and administrative sciences of the University of Lima, and honorary professor in the school of political science at Paris, in his recent work on Public International Law, European and American, says:⁹²

⁸⁹ §§ 25-27. Inclusive.

⁹⁰ *Traité* &c, vol. 2, §§ 127, 128.

⁹¹ *Id.* p. 591.

⁹² *Traité de Droit International Public Européen et Américain suivant les progrès de la science et de la pratique contemporaines* par P. Pradier-Fodéré, Paris, 1887, vol. 3, § 1840.

1840. Should the penal law of a state punish crimes committed outside of the territory of that state by foreigners against its own citizens? We must admit, at the outset, that it is the duty of the local sovereignty whose territory has been the scene of the crime to act first; this is demanded in the interest of the success of the preliminary examination, in the interest of the exemplary repression of crime, nay, in the interest of the proper administration of justice, for, in the locality in which the crime was committed the public will better appreciate the various circumstances which accompanied it, the consequences to which it has given rise, and the grounds of aggravation, mitigation, or of excuse that may exist; the seriousness of the social disturbance caused will also be more accurately measured in that locality. The territorial competence of the penal law becomes to such an extent obligatory, owing to its advantages, and the principle that a criminal act should be punished in the place where it is committed is so dominant that the state whose citizen or subject has been injured would have good ground to offer to the state in whose territory the crime was committed the extradition of the perpetrator of that crime, in case of his having taken refuge on the soil of the victim's country. It may happen, however, that the foreign state to which the criminal belongs, and in whose territory the crime was committed, refuses to prosecute, or that its judicial institutions furnish no guarantees.

Is a state that has been injured in one of its citizens then theoretically authorized to bring the guilty party to trial, if it has him in custody? The affirmative is taught by those philosophers who think that crimes should be considered as a violation of universal law, and that any jurisdiction is competent to repair the disturbance caused by them in the moral order of society; it is likewise maintained by those authors who consider that penal jurisdictions are instituted for the protection of those under them, by legally repressing unlawful acts of which they may be the victims, and the state to which the injured parties belong resumes all its rights, and should secure, as far as possible, the judicial repression which is indispensable to the security of those citizens when the authorities of the foreign country in which they have been the victims of a crime do not protect those who dwell in or cross the territory of that country, thus disregarding the reciprocity of protection and the solidarity of reparation and justice that should be a bond between civilized states. "Is it not a spectacle revolting to conscience and reason," said Bonjean, "to see this foreigner, who, after murdering a Frenchman on the soil of one of the neighboring states, comes to seek an asylum in the very country of his victim, insulting by his presence and his impunity the legitimate grief of the relatives and friends of the murdered man?"⁹³

These observations are certainly entitled to weight, but they cannot prevail against considerations which are not less weighty. As a general rule, with

⁹³ Bonjean, Report on the bill relative to crimes committed in a foreign country, p. 34.

very few exceptions, the law, as well as penal jurisdictions, is territorial, and the laws or customs under which the guilty party lived at the time when he committed the crime, cannot be set aside. How can we admit that a foreigner ought to be punished for having violated laws which he was in no way bound to obey? "I am obliged to obey the laws when I live under the laws, but when I do not live under them can they still be binding upon me?"⁹⁴ "It does not seem to us," says Pasquale Fiore, "that the extraterritoriality of penal law ought to depend upon the quality (citizenship) of the person to whose detriment the offense was committed. It is true that a man is born a citizen of a given country, and that he is subject, as such, to the social power of his native land, which, by its laws, secures to him the free exercise of his rights, and that he should everywhere be protected by the sovereignty of his country. On the other hand, however, he may remove from his country and enter the territory of another state; he may submit to a foreign social power, which, by right, takes the place of the social power of his native country as regards the protection of the persons and property of those who, living within the territory that is subject to it, have become its temporary subjects."⁹⁵ * * *

It will be observed that if a crime committed in a foreign country were due to the nationality of the victim, if it consequently menaced exclusively the safety of persons belonging to that nationality, and if it remained unpunished, or even without sufficient repression, this would be a subject for diplomatic representation. (*V. supra*, nos. 1363 *et seq.*)

OPINION OF THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL LAW

The subject of criminal jurisdiction received the early attention of this learned association, and in a report⁹⁶ by M. Brocher, of the University of Geneva, at the annual meeting of the Institute in Paris in September, 1878, the following conclusions were stated;

1. The general principles of criminal law, and the exigencies of a good administration of repressive justice, unite in establishing, so far as is practicable, the supremacy of territorial jurisdiction.
2. (This jurisdiction covers all acts which invade rights in the territory of each particular state.

⁹⁴ Montesquieu, *Persian Letters*.

⁹⁵ Pasquale Fiore, *Treatise on penal international law*, Antoine's French translation, 1880, no. 81, p. 88.

⁹⁶ *Annuaire de l'Institut* for 1880, pp. 50 *et seq.*: Wharton's *Conf. of Laws*, § 810; 1 *Crim. Law Wag.*, 091 (1880).

3. The criminal jurisdiction of a state is not limited to cases in which the perpetrator was, at the time of the offense, on the soil of such state. It should extend to acts which, transpiring abroad, affect domestic peace and order.
4. This extension of territorial jurisdiction is correlative to facts which present themselves in various aspects. Among these maybe mentioned, (1) a shot on one side of a boundary taking effect on the other side; (2) swindling letters issued from one country and operating in another; (3) poisonous food sent into a foreign land addressed to a specific person; (4) forgery of commercial paper meant to operate extraterritorially; (5) treason and political offenses by subjects abroad, counterfeiting of public money and other securities; (6) acts committed abroad to elude home law, such as a duel arranged within the territory to take effect outside; (7) accessory help and co-conspiracy in cases in which the principal offender acts intra-territorially; (8) acts penetrating to the moral core of the state, such as bigamy, incest or adultery committed by two subjects abroad; (9) acts of piracy, and other acts of a similar class committed on the high seas or in barbarous lands on the ground that each state has territorial rights in such regions.
5. Simple residence in a country gives territorial jurisdiction of all things done by such resident in such country; though not of things done by him before his arrival.
6. Domicile, as distinguished from residence, does not usually impose subjection by the domiciled person to the state for acts done when he is absent from the state.
7. Nationality, in certain states, is a basis of criminal jurisdiction; all persons who are members of a nationality being subject, wherever they may be, to the laws of the nationality to which they belong. Such nationality, however, is not to be considered as a personal law, binding a citizen of a nation to obey its laws wherever he may be. Its extraterritorial effect should be limited to special cases; as, for instance, those in which the order of a state is assailed by its subjects abroad, and it has no other means of redress.

When this report came up for discussion at Brussels in 1879, it was advocated by its author, who claimed that each state, besides *territorial*, was entitled to exercise a *quasi-territorial* jurisdiction, authorizing it to assume, in all matters relative to its public order and security, jurisdiction over persons in foreign lands; and he cited several examples to show that this jurisdiction

could be sustained on neither the territorial nor the personal theory. It is true that in this way an offense might be subjected to two jurisdictions,— that of the country where the crime takes effect, and that of the country where it is concocted,—but for this purpose a hierarchy of jurisdiction should be recognized, to be graduated as follows: Where the act is concocted and takes effect exclusively in a particular territory, that territory should have jurisdiction; if in two territories, then the territory of concoction, as well as of execution, should have jurisdiction.

Professor von Bar replied that the scheme proposed would give each state almost universal jurisdiction, which would endanger the authority of other countries, as well as the security of individuals.

Mr. Westlake took the ground that the claim by a state of a right to punish the subjects of other states for acts committed by them outside of its territory, derogates from the security which a foreigner admitted within such territory ought to enjoy; and that this pretension would give rise to diplomatic collisions. He admitted the right of a state to punish for acts done on its territory, and also for acts done by its citizens abroad. An individual, he argued, is punished for violating the law of the country in which he lives, because he is bound to know this law; he cannot be punished for violating a foreign law, which he is not bound to know.

Prof. Goos, of the University of Copenhagen, also thought that M. Brocher went too far. He did not deny the competence of the state to prosecute for all the cases enumerated in the report. But he gave to the right of the state a different basis. He admitted the territorial competence and the personal competence; he rejected everything that went beyond that. Such was the system of the Danish Code of 1866, and it sufficed perfectly for the national security.

The president, M. Rolin-Jacquemyns, a Belgian jurist and statesman of eminence, and minister of the interior, questioned whether, in addition to territorial and personal jurisdiction, a third scheme, the quasi-territorial, could be recognized.

M. Asser, of Amsterdam, a professor of law in that city, and author of several learned papers on international law, did not think that the question should be presented in so absolute a manner. There were cases where a foreigner outside of the territory of the prosecuting country commits an attempt against that country; such is, for example, the case of a conspiracy against the safety of the state. Would they argue that in such case foreigners could not be prosecuted? He was convinced that MM. Westlake, de Bar, and Goos did not wish to go so far; they could without being illogical admit here an exception, since the prosecuting state would definitively limit itself

to exercising the right of legitimate self-defense. Besides, the prosecuted delinquent has committed an attempt, intentionally and knowingly, against the safety of the state, and violated laws which he knew.

Mr. Westlake and M. Goos refused to admit such an exception.

Prof. von Bar conceded that there would be jurisdiction in the attacked state when the state in which the offender resides will not interfere.

Prof. Neumann, of the University of Vienna, urged that public safety is a sufficient ground for punishment. The Austrian Code went still further, authorizing Austrian courts to punish a foreigner, resident in Austria, for an offense committed by him in a state which refuses to make a demand for his extradition.

The following proposition by Prof. von Bar was adopted by a vote of 19 to 7:

Each state has the right to punish for acts committed outside of its territory by foreigners, in violation of its penal laws, when these acts constitute an attack (*atteinte*) on the social existence of the state, compromising its safety, and which are not cognizable by the penal law of the country where they take place.

The president then put the question whether the “quasiterritorial” jurisdiction assumed was to include other acts than those determined by the proposition of Prof. von Bar—that is to say, whether a state can punish a foreigner who commits abroad offenses against its laws other than those designated in that proposition. This was answered in the negative by a vote of 17 to 9.

The subject came before the Institute for final resolution at its session in Munich in September, 1883, under the presidency of the Baron Holtzendorff, on a report presented by Dr. von Bar and M. Brusa. There were present at this session M. Arntz, professor in the University of Brussels; Dr. von Bar, of the University of Gottingen; M. Brusa, of the University of Turin; Dr. von Bulmerincq, a privy counsellor, and professor at the University of Heidelberg; M. Clunet, of Paris, manager of the *Journal du droit international privé*; M. Gessner, of Berlin; Prof. Goldschmidt, of the University of Berlin; Prof. Holland, of the University of Oxford; Baron Holtzendorff, of the University of Munich; M. Lueder, professor at the University of Erlangen; M. Marquardsen, member of the Reichstag of the German Empire, professor at the University of Erlangen; M. Martens, of the University of Saint Petersburg; M. Moynier, of Geneva; Baron Neumann, professor at the University of Vienna, member of the Chamber of Peers; M. Pierantoni, professor at the University of Rome, Senator of

the Kingdom of Italy; M. Renault, professor of law, of Paris; M. Rivier, professor at the University of Brussels; M. de Stein, of the University of Vienna; Sir Travers Twiss, of London; Mr. Westlake, of London; Prof. A. V. Dicey, of Oxford; M. Harburger, of the University of Munich; Count Kamarowsky, of the University of Moscow; Prof. Koenig, of the University of Berne; M. Lehr, counsel to the embassy of France in Switzerland, of Lausanne; Prof. Lyon-Caen, of the faculty of law and the school of political science, Paris; Prof. de Martitz, of the University of Tübingen; M. de Montluc, counsellor to the court of Angers; M. Perels, of Berlin; M. Prins, professor at the University of Brussels; M. Roszkowski, of the University of Leopold, Galicia; M. Sacerdoti, of the University of Padua.

Prof. Brocher had made a supplementary report at the session of the Institute at Oxford in 1880, but the question of extraterritorial jurisdiction, which was adjourned at the session at Brussels, was not formally discussed at Oxford, nor at the following session at Turin. But, at the latter place, MM. de Bar and Brusa were charged with the preparation of a report which the former presented at the meeting at Munich in 1883. The report contained fifteen propositions, covering the whole ground of criminal jurisdiction. But, although it would be of great interest to give them in full, together with the discussion upon each, I shall confine myself to such features as are strictly pertinent to the present question.

The report, in the first place, adopted as the basis of criminal jurisdiction the territorial principle. On this subject Prof. von Bar, in a separate report accompanying the propositions, said that history taught that penal law was derived from the law of revenge. In remote times the party injured pursued the criminal, and either slew him or accepted a ransom. At that epoch the difference between an intentional and an unintentional offense vanished. This point was clear; it was useless to give proofs; it was known to everyone who studied at all the history of law, or possessed any knowledge of the usages and manners of savage peoples of our own times. The great problem, however, of criminal law at the present day is to measure the injury according to the culpability of the agent. But there arise difficult questions of morality, of the influence of the mental condition, etc.

And there also arises, he continued, that other question, that of the competence of the penal law, it being admitted in our day that no one ought to be punished if he cannot know the penal law which punishes the act of which he is to undergo the penalty.

As it is clear that in general it is only when a person sojourns in a country or is a citizen of it that he can have knowledge of its penal laws, or else,

if knowledge of the law is not regarded as necessary, be imbued with their fundamental moral principles, according to the fundamental principle of culpability itself the competence of the penal law ought to be confined to acts committed in the territory or committed by citizens abroad. It may be said in reply that in the case of a sojourn more or less momentary in a foreign territory, where an individual of foreign origin does not or may not know the laws of the place where he sojourns, and that even in the case of a citizen sojourning in a foreign country, yet always preserving his nationality, there may be no knowledge of the national laws. These are very exceptional cases, in reference to which it is not possible to make the laws. Hut if the state wishes to punish acts committed by foreigners outside of its territory, it can do so only by discarding the principle of culpability and holding itself competent only on the principle of vengeance attenuated by humanitarian considerations. It is only in exceptional cases, of most urgent necessity, that the state ought to reserve to itself the right to punish acts committed abroad by foreigners.

In respect to the punishment of extraterritorial offenses by citizens, the 7th resolution reported by MM. de Bar and Brusa, read as follows:

Each state reserves the right to punish its citizens according to the penal laws of the nation. But, in general, it does not punish the acts of citizens committed abroad when those acts are not punishable by the law of the place. In punishing the acts of citizens committed abroad the state applies the penalty of the foreign law, if it is lighter. There are excepted from these rules the cases mentioned below in proposition eight.

The 7th proposition, after various objections, was displaced, and the following amendment, proposed by Mr. Westlake, was adopted in its stead:

Each state reserves the right to extend its national penal law to acts committed by its citizens abroad.

Proposition 8, which was intended to define the permissible extraterritorial jurisdiction over foreigners, read as follows:

Each state may punish, independently of the law of the place of activity of the culprit, and of his nationality, all violations of law against its own political security.

Equally *by simple exception*, in view of a practical necessity, and on condition of an express and formal sanction, the state may punish certain other acts committed in a foreign country, even when the territorial legislation does not consider these acts as punishable, or when it assures conditions reputed excessively favorable for its citizens.

MM. de Neumann and Prins wished to add the words *against the political and economic safety*, the public credit forming an essential element of the life of the state.

M. de Montluc objected to the words “economic safety” and “public credit.”

Dr. von Bar, yielding to the opinion of MM. de Neumann and Prins, proposed to add the words *crimes against the public credit*.

MM. Renault, Lyon-Caen and de Montluc proposed to strike out the word *political*.

Dr. von Bar then withdrew his amendment and went back to the terms of the resolution presented at Brussels in 1879, which, as has been seen, read as follows:

Each state has the right to punish for acts committed outside of its territory by foreigners in violation of its penal laws, when these acts constitute an attack (*atteint*) on the social existence of the state, compromising its safety, and which are not cognizable by the penal law of the country where they take place.

This resolution was adopted by a large majority, and without modification.

A final negative was given to M. Brocher’s proposition for a distinct ground of territorial jurisdiction, which was discussed at the session of 1879 as *quasi-territorial*. This negative answer was embodied in the following resolution, which was submitted to the Institute in the report of MM. de Bar and Brusa:

The penal justice of a country in the territory of which, according to the intention of the guilty person, the effects of his activity are, or ought to be, realized, is not competent by reason of those effects alone.

This resolution was adopted apparently without objection or division.

The argument of Dr. von Bar, in support of the resolution, and against the general quasi-territorial jurisdiction proposed by M. Brocher, was that to hold a man in all cases criminally liable in every place for the mere effects there of acts done in other countries, would not only be fraught with general danger to individuals, but would give room for vexations and extortions. No one could be sure of not committing an offense according to a foreign law, of not being unexpectedly arrested on a voyage, or of not having his fortune and his credits seized in a foreign land. He would have to consult the codes, the special laws even, of every country in the world. Police and

fiscal laws, he said, seem constantly on the increase, and the rules applied in them are naturally more or less arbitrary. A merchant writing a letter to a foreign correspondent and offering merchandise, could, for having written that letter, or for not having paid for a stamp, be brought before a foreign tribunal. The writer, the publicist, conforming to the laws of his country and of the place of publication, ought to dread to be prosecuted before foreign tribunals, which would perhaps rate a frankly-spoken word as an injury, and a scientific work as blasphemy.

We have now seen that the claim made in article 186 of the Mexican Penal Code of a right to punish foreigners for offenses committed abroad against Mexicans is neither sustained by positive legislation nor warranted by the recognized and established principles of international law. I shall now show that the denial of that right in the Cutting case was not merely supported but required by the traditions of the government.

INTERNATIONAL PRECEDENTS

It has been constantly laid down by the Executive Department of the Government of the United States, as a rule of action, that the criminal jurisdiction of a nation is confined to acts committed upon its actual or constructive territory. "We hold," said Mr. Calhoun, when Secretary of State⁹⁷—

...that the criminal jurisdiction of a nation is limited to its own dominions and to vessels under its flag on the high seas, and that it cannot extend it to acts committed within the dominion of another without violating its sovereignty and independence.

In his note to the Chevalier Hiilsemann, of the 20th of September, 1853, in relation to the case of Koszta, Mr. Marcy said:

The conflicting laws on the subject of allegiance are of a municipal character, and have no controlling operation beyond the territorial limits of the countries enacting them. All uncertainty as well as confusion on this subject is avoided by giving due consideration to the fact that the parties to the question now under consideration are two independent nations, and that neither has the right to appeal to its own municipal laws for the rules to settle the matter in dispute, which occurred within the jurisdiction of a third independent power.⁹⁸

⁹⁷ Mr. Calhoun to Mr. Everett, Sept. 25, 1844; Mss. Inst. Great Britain.

⁹⁸ Mss. Dept. State.

Mr. Cass, as Secretary of State, said:

By the laws of nations every independent state possesses the exclusive right of police over all persons within its jurisdiction, whether upon its soil or in its vessels upon the ocean, and this national prerogative can only be interfered with in cases where acts of piracy are committed, which, by the public law of the world, are cognizable by any power seizing the vessel, thus excluded from the common rights of the ocean.⁹⁹

The question of extraterritorial jurisdiction was discussed in Congress in the cases of Warren and Costello, two naturalized American citizens, who were tried and sentenced in Dublin, in 1867, for treason felony, on account of participation in the “Jacmel” (Fenian) expedition. It was proved that they had come over to Ireland in that vessel, and had cruised along the coast for the purpose of effecting a landing of men and arms in order to raise an insurrection. At the trial, in order to connect them with the Fenian conspiracy that existed at Dublin and to show their *animus* in cruising along the Irish coast, evidence was introduced of certain acts and declarations of the prisoners in the United States. It was ultimately shown that this evidence was introduced merely in proof of the criminal design with which the prisoners entered the British jurisdiction and of the criminal object of their acts there. But, while still under the impression that the acts and declarations in the United States were being made the foundation of a criminal prosecution in Dublin, the House of Representatives, on the 15th of June, 1868, adopted a resolution requesting the President to take such measures as should seem “proper to secure the release from imprisonment of Messrs. Warren and Costello, convicted and sentenced in Great Britain, for words and acts spoken and done in this country”, &c.

The position that the penal laws of a country have no extraterritorial force was taken by the Department of State, under the advice of the Attorney-General, in the case of Carl Vogt, in 1873. The facts were that Vogt, a Prussian subject, charged with the crimes of murder, arson and robbery, committed in Brussels, Belgium, fled to the United States, from which his extradition was demanded by the Government of Germany, under the provisions of the treaty between the United States and Prussia of June 16, 1852, by which the contracting parties engaged to deliver up to each other fugitives from justice charged with certain crimes, including those above mentioned, *committed within the jurisdiction of either party*.

⁹⁹ Instruction to Mr. Dallas, Great Britain, February 23, 1859.

Having been arrested, Vogt was brought on a writ of *habeas corpus* before Judge Blatchford, sitting in the Circuit Court of the United States at New York, who held that as the German Empire made provision by law for the punishment of its subjects for certain offenses committed outside of the territory, among which were those specified in the requisition, the prisoner was liable to extradition. The examination then proceeded before the commissioner and Vogt was committed for surrender.

The case was then referred by Mr. Bancroft Davis, Acting Secretary of State, to the Attorney-General, who, in an opinion dated July 21, 1873, held that although, by the law of Germany, the accused, a German subject, might be justiciable in that country, yet under the treaty the *locus delicti* was material, and unless it was *within the jurisdiction* of the demanding Government, the provisions of the treaty did not apply.

To affirm, said the Attorney-General,

that the jurisdiction of Germany, by virtue of its own laws for the punishment of crimes, extends over the territory of Belgium, is equivalent to holding that the same jurisdiction extends to France, Great Britain, and United States, and indeed to every nation and country of the world. * * * Germany has an undoubted right to punish her subjects, if she chooses, for crimes committed in Belgium or the United States, but it would not be proper, therefore, to say that Belgium and the United States are within her jurisdiction; but it would be proper to say that she has made provision to punish her subjects for crimes committed without as well as within her jurisdiction. * * * All nations have jurisdiction beyond their physical boundaries. Vessels upon the high seas and ships of war everywhere are *within* the jurisdiction of the nations to which they belong. Limited jurisdiction by one nation upon the territory of another is sometimes ceded by treaty, as appears from the treaties between the United States, Turkey, China, Siam, and other powers. Constructive jurisdiction may possibly exist in special cases, arising in barbarous countries or uninhabited places; so that effect can be given to the word "jurisdiction," as meaning more than territory, without holding that Germany has jurisdiction over crimes committed in Paris, London, or Washington. * * * To recognize the claim of Germany in this case would establish a precedent that might lead to serious international complications. * * * To facilitate the punishment of crime is desirable, but the United States cannot, with dignity and safety, admit that any foreign power can acquire jurisdiction of any kind within their territory by virtue of its local enactments. * * * To recognize the claim to jurisdiction accompanying the requisition in this case may open the door to confusion and controversy as to claims of jurisdiction in other respects made under local laws by foreign governments. The plain and practical rule upon the subject seems to be that the jurisdiction of a nation is commensurate with,

and confined to, its actual or constructive territory, excepting changes made by agreement; and to this effect are the authorities.

The surrender of Vogt to the German Government was accordingly refused, and he was subsequently surrendered to Belgium under a treaty which was afterwards negotiated, but made retroactive in its terms. In the course of the negotiations, Mr. Fish, adverting, in a note to Mr. Delfosse, the Belgian Minister, to the decision of Judge Blatchford, said:

I deem it proper to say that the laws did not afford an opportunity to invite a revision of the action of the court in that case by a higher [judicial] tribunal. Had there been such an opportunity, the President entertains little doubt that the decision would have been reversed; and the course of reasoning upon which it was founded, and to which you refer, would have been shown to be erroneous.¹⁰⁰

It may be remarked as a coincidence that in the same year in which the case of Vogt occurred a precisely similar question was determined in the same way by the privy council in England in the case of *Attorney-General for the Colony of Hong Kong v. Kwok-a-Sing*, L. R., 5 P. C., 179; decided June 19, 1873, only a month before the date of the Attorney-General's opinion in the Vogt case, which contains no reference to the case of *Kwok-a-Sing*.

The defendant in this case was one of a cargo of Chinamen shipped at Macao on the 30th September, 1870, on a French vessel, called *La Nouvelle Penelope*, bound for Peru, in South America. On the 4th October, 1870, when at sea, *Kwok-a-Sing*, with certain other coolies, killed the captain and several of the crew of the vessel, and then, taking possession of her, compelled the remaining seamen to conduct her back to China, where the coolies landed and abandoned the ship. Some of them were tried in China. *Kwok-a-Sing* fled to Hong-Kong, from whence the Chinese authorities asked for his extradition. Pursuant to this request, an investigation was held, which resulted in his commitment for surrender for crimes and offenses against the laws of China by participating in the murder of a portion of the crew of the French ship *Nouvelle Penelope* at sea and feloniously seizing a boat of the ship and landing. The warrant of commitment was issued under Hong-Kong Ordinance No. 2, of 1850, which was passed to carry into effect a treaty between Great Britain and China for the extradition of Chinese criminals fleeing to Hong-Kong, and which provided for the commitment to prison on probable cause, with a view to their surrender, of fugitive Chinese

¹⁰⁰ Mr. Fish, Secretary of State, to Mr. Delfosse, August 11, 1873.

charged with “any crime or offense against the laws of China” *Kwok-a-Sing* was then brought before the Chief Justice of the Supreme Court of the Colony, who ordered his release on several grounds, among which was that the demand for extradition must come from the country in which the crime was committed (citing i Phill. *Inter. Law*, p. 413), which was not so in the case under consideration, the crime having been committed at sea on a French ship, and not in China. From this decision an appeal was taken to Her Majesty in Council, where the case was heard before Sir J. Colville, Sir R. Phillimore, the Lord Justice Mellish, Sir Barnes Peacock, and Sir Montague E. Smith. The judgment of their lordships was delivered by the Lord Justice Mellish, who said their lordships had to consider whether there was evidence that *Kwok-a-Sing* had been guilty of crimes against the laws of China within the meaning of the ordinance above referred to. He was accused of two crimes, murder and piracy.

The alleged murder,

...continued his Lordship, was the murder of a Frenchman on board a French ship, in which *Kwok-a-Sing*, was a passenger, on the high seas. They [their Lordships] have, therefore, to consider whether murder by a subject of *China* of a person who was not a subject of *China*, committed outside the Chinese territory, is a crime against the laws of *China* within the meaning of the ordinance, and they are of opinion that it is not. Their Lordships cannot assume, without evidence, that *China* has laws by which a Chinese subject can be punished for murdering beyond the boundary of the Chinese territory a person not a subject of *China*. Up to a comparatively late period England had no such laws. Moreover, although any nation may make laws to punish its own subjects for offenses committed outside its own territory, still, in their lordships’ opinion, the general principle of criminal jurisprudence is that the quality of the act done depends on the law of the place where it is done. * * * On the whole, therefore, on these two grounds — first, that it cannot be assumed without evidence that there is any law in *China* to punish a Chinese subject for a murder committed upon a foreigner within foreign territory; and, secondly, because, even if it could be assumed that there was such a law, still this offense, having been committed within French territory, ought to be treated as an offense against French law, and not as an offense against Chinese law, their lordships are of opinion that there was no evidence before the magistrate that *Kwok-a-Sing*, in murdering the French captain, committed an offense against the laws of *China* according to the true construction of the ordinance.

On this ground their Lordships held that the magistrate’s warrant committing *Kwok-a-Sing* for surrender was illegal and beyond his jurisdiction,

and that the Chief-Justice's order for the release of *Kwok-a-Sing* from imprisonment under the warrant was right, and ought to be approved.

As an illustration of the international complications to, which the Attorney-General referred in the case of Vogt as likely to result from extraterritorial pretensions, and as an example of a denial of such pretensions by one government to another, we may advert to a remarkable and important incident in the history of the relations between France and Great Britain.

On the 1st June, 1852, M. Th. Vernier, a deputy of the *Corps Legislatif* of France, presented, on behalf of a commission¹⁰¹ appointed to examine a *projet* of a law modifying articles 5, 6 and 7 of the Code of Criminal Procedure of 1808, a report recommending a *projet* which had been adopted by the council of state and by the commission, and which was as follows:

Articles 5, 6 and 7 of the Code of Criminal Procedure are abrogated and replaced as follows:

ARTICLE. 5. Every Frenchman who, outside of the territory of France, is guilty of a *crime* or a *dilit* punished by the French law, may be prosecuted and judged in France, but only on the request of the public ministry.

If the *crime* or *delit* has been committed against an individual Frenchman or foreigner, the prosecution and judgment shall not take place before the return of the accused to France.

* * * * *¹⁰²

ARTICLE 6. The foreigner who, outside of the territory of France, is guilty of a crime, whether against the public welfare or against a Frenchman may, if he comes into France, be arrested and judged there conformably to the French laws.

As regards *delits*, the prosecution shall take place only in the cases and under the conditions determined between France and foreign powers by diplomatic conventions.

All prosecutions cease against a foreigner of whom extradition has been demanded and obtained.

ARTICLE 7. * * * * *¹⁰³

When a person has committed a *dilit*, or when the crime has been committed against an individual Frenchman or foreigner, no prosecution is carried on against the accused Frenchman or foreigner, if it appears that he has been definitively judged outside of France for the same acts, and against an ac-

¹⁰¹ The commission consisted of MM. Charles Lafitte, president; O'Quiv, secretary; Riche, de la Haiechois, Duboys, de Beauverger and Vernier.

¹⁰² The omitted portion refers solely to certain judgments by default.

¹⁰³ The omitted portion relates only to the competence of tribunals.

cused foreigner if he establishes the fact that the act does not constitute either a crime or a *délit* in the country where it took place.

In respect to those provisions of the *project* relating to offenses committed by foreigners outside of France, the report said:

The extension proposed by article 6 of the *project* is the consequence of that admitted by article 5. After having accorded to the foreigner as against the Frenchman the protection of our laws, it is just that, by an equitable reciprocity, we should assure the punishment of punishable acts committed by a foreigner against our citizens. Besides, we cannot permit the soil of France to become a place of refuge or of impunity for the foreigner who, even outside, shall have attacked French interests. Moreover, it is the arrival of the foreigner in France, after the crime or *délit* has been committed by him, that, in creating an interest in the repression, affords the first condition of the prosecution.¹⁰⁴

On the 10th June, 1852, the *corps législatif* adopted the *project* reported by M. Vernier, by a vote of 191 to 5.¹⁰⁵

The measure then went to the Senate, but was subsequently withdrawn by the government.

In the debates on the law of 1866, now in force, it was asserted more than once, and not denied, that the bill of 1852 was withdrawn on account of the opposition of foreign powers.¹⁰⁶ And in reply to a question by M. Jules Favre, M. Rouher, Minister of State, admitted that it stopped negotiations between France and Great Britain for a treaty of extradition.

Turning now to Hansard's Debates in the British Parliament, we find both these facts fully confirmed.

On the 8th June, 1852, Lord Malmesbury, Minister for Foreign Affairs, moved in the House of Lords, a second reading of the bill giving sanction to an extradition convention with France, then lately concluded. The question was generally discussed, and in the course of the debate Lord Brougham referred to the bill before the French legislature to give French tribunals jurisdiction over offenses committed abroad, whether by citizens or by foreigners.

Lord Malmesbury thought his noble and learned friend was mistaken. The bill, he thought, was confined to Frenchmen.

¹⁰⁴ *Le moniteur*, 4 June, 1852, p. 832.

¹⁰⁵ *Id.* 10 June, p. 369.

¹⁰⁶ *Le moniteur*, 31 May, 1866; M. Picard.

Lord Brougham said that was the way the bill stood when he last saw it, and he was glad to hear it stated that it was confined to Frenchmen, which till then he had never heard alleged.

On the 14th June (the French *projet de loi* was passed by the *corps legislatif* on the 10th) Lord Brougham arose and implored Lord Malmesbury, before the next stage of the bill, to reconsider the propriety of withdrawing the measure, a step warranted by the change in the French law.

Lord Malmesbury replied that he had already made up his mind upon the subject. He had come down to the House intending to announce at the proper time that Her Majesty's Government thought fit to withdraw the bill at present. He referred to the mistake into which he had fallen on a previous evening, which originated in an error of the person who wrote the despatch to him, and which the British ambassador at Paris had desired him to explain. "Before I leave this subject," said Lord Malmesbury, "I only wish to state that it would be extremely dangerous, I think, at the present moment, for Her Majesty's Government to continue this act of Parliament under the new law which has been passed in France".

On the 25th June the Marquess of Clanricarde inquired of Lord Malmesbury whether Her Majesty's Government intended to communicate any correspondence with Her Majesty's ambassador at Paris, or the French ambassador in London, concerning the law lately enacted in France, which had caused the withdrawal of the surrender of criminals bill, and which was not compatible with the relations at present existing between the two countries.

Lord Malmesbury replied that he had no correspondence *which he could lay before the House*; but that the French Government had acted in the most friendly and frank manner, and had no sooner perceived the hostility in the House to the *projet de loi*, than they gave him *an assurance that the projet de loi would not be persevered in*.

The Marquess of Normanby¹⁰⁷ expressed great satisfaction at this announcement, and said he could not sit down without stating "that during the whole period which he had labored in endeavoring to maintain amicable relations between the two countries he had seldom listened to any statement with greater pleasure than that of the noble Earl with regard to the manner in which the French Government have acted with respect to the withdrawal of the *projet de loi* referred to".¹⁰⁸

Another denial of the right of a nation to punish foreigners for acts done by them abroad was made both by Great Britain and the United States

¹⁰⁷ Formerly British Ambassador at Paris, &c., &c.

¹⁰⁸ See Hansard, 3 series, vol. XXXII, pp. 194-314, 563, 1278-1383.

upon the passage by the Brazilian Chambers in 1875 of the law now in force in Brazil on that subject, although it is not nearly so extensive and absolute in its provisions as article 186 of the Mexican Penal Code. The adoption of the law was first made known to the Government of the United States by its Minister at Rio, in a despatch¹⁰⁹ bearing date the 20th of August, 1875, and enclosing a copy of the law. In a later despatch, dated April 20, 1876, he called the attention of the Department more specifically to the provisions of the measure, and reported that the British *chargé d'affaires* at Rio had been instructed by the Earl of Derby in a despatch enclosing a copy of an opinion of the law officers of the crown to notify the Government of Brazil that Her Majesty's Government could not consent or submit to any action by Brazil under the law which would punish British subjects in Brazil for acts done by them either in Great Britain or in any other foreign country not subject to Brazilian jurisdiction.¹¹⁰

To this despatch Mr. Fish, Secretary of State, replied on May 26, 1876, as follows:

Your despatch, No. 322, of the 20th ultimo has been received. It represents that the British Government, pursuant to the opinion of the law officers of the crown, has instructed its minister to inform the Government of Brazil that it will not acquiesce in the application of the Brazilian law to which you refer to acts done by British subjects outside of the jurisdiction of Brazil. This decision may be regarded as obviously sound, and is entirely concurred in by this Government.

If, therefore, there should be occasion, you will inform the Minister of Foreign Affairs that we cannot consent to the prosecution or punishment of a citizen of the United States pursuant to the objectionable statute adverted to.¹¹¹

In the same year (1876) this doctrine was again announced by Mr. Fish in the case of Peter Martin, tried and sentenced in British Columbia. The circumstances of the case were that Martin, a naturalized citizen of the United States, was tried at Laketon, British Columbia, for an assault on an officer in the execution of his duty, prison breach, and escape from custody; and, having been found guilty, was sentenced to fifteen months imprisonment at Victoria, in the same province, there being no jail or secure place of confinement at Laketon. He was accordingly placed in the

¹⁰⁹ *For. Rel.*, 1875, p. 123.

¹¹⁰ *For. Rel.*, 1876, p. 25.

¹¹¹ *For. Rel.*, 1876.

custody of constables to be conveyed to Victoria. A part of the route taken lay through Alaska, and was traversed by canoe, via the Stickine River, near the mouth of which, and within the Territory of Alaska, the party made a landing for the purpose of cooking food. While they were thus engaged the prisoner obtained possession of a loaded gun and made a deadly assault on one of the constables, but was overpowered and conveyed to Wrangle Harbor, from whence he was taken by steamer to Victoria.

It having been reported that Martin would be tried at Victoria for this assault, Mr. Fish, on the 2d of November, 1876, wrote to the British Minister at Washington, Sir Edward Thornton, and after reciting the facts substantially as above stated, said:

It further appears, from what has been intimated by the consul [of the United States, at Victoria], that Martin will be fully committed for this assault, and that his case will be given to the grand jury, where a true bill will most likely be found against him, and that the case then will come up in the Supreme Court some time during the present month.

From the facts presented in the case, it is suggested that the person in question should not be tried for the offense with which he is charged, it having been committed, as is reported, within the jurisdiction of the United States, and that, such being the case, he should be set at liberty.

I will, therefore, thank you, at your earliest convenience, to call the attention of Her Majesty's proper authorities to the matter, in order that a thorough examination of the facts in the case may be made.

On the 10th of January, 1877, Mr. Fish addressed another note to Sir Edward Thornton, informing him that a despatch had been received from the consul at Victoria, stating that Martin had been tried there before the Hon. P. P. Crease, a justice of the Supreme Court of the province for the assault committed on the Stickine River, and had been found guilty and sentenced to one year and nine months imprisonment at hard labor, to take effect after the expiration of the term of fifteen months to which he was sentenced at Laketon. The consul's despatch further stated that as the evidence at the trial was conflicting as to the precise distance of the scene of the assault from the mouth of the Stickine, and as the boundary line between the British and American territory was not definitely marked the judge charged the jury that, under these circumstances, the court had either jurisdiction or concurrent jurisdiction, and that the proceedings were just and proper. To this line of argument Mr. Fish answered, first, that if the colonial officers, in transporting Martin from Laketon to Victoria conducted him at any time within and through the unquestioned territory of

the United States, they committed, in so doing, a violation of the sovereignty of the United States, which rendered his further detention unjustifiable. And in respect to the question of jurisdiction of the assault he said:

I must not allow this question to pass without entering an explicit dissent from the doctrine which seems to be advanced by the learned judge who presided at the trial of Martin, that jurisdiction or concurrent jurisdiction vests in Her Majesty's colonial authorities or courts over offenses committed within any part of the Territory of Alaska, even though so near to the treaty line that uncertainty or doubt may exist on which side of such line the offense is committed. It cannot, I think, be necessary to argue this point, or to do more than record this dissent and denial of a doctrine which, I have no doubt, Her Majesty's Government agrees with me in repudiating.¹¹²

On the 25th of September, 1877, the British *chargé d'affaires* at Washington addressed a note to Mr. F. W. Seward, Acting Secretary of State, saying:

I have the honor to inform you that I have just learned from the Deputy Governor of Canada that the Dominion Government has concluded the inquiry into the circumstances of the case, and has decided upon setting Peter Martin at liberty without further delay.

In his annual message of the 6th of December, 1886, the President defined the position of the United States on the jurisdictional question involved in the Cutting case, as follows:

The admission of such a pretension would be attended with serious results, invasive of the jurisdiction of this Government, and highly dangerous to our citizens in foreign lands. Therefore I have denied it, and protested against its attempted exercise, as unwarranted by the principles of law and international usages.

A sovereign has jurisdiction of offenses which take effect within his territory, although concocted or commenced outside of it; but the right is denied of any foreign sovereign to punish a citizen of the United States for an offense consummated on our soil in violation of our laws, even though the offense be against a subject or citizen of such sovereign. The Mexican statute in question makes the claim broadly, and the principle, if conceded, would create a dual responsibility in the citizen, and lead to inextricable confusion, destructive of that certainty in the law which is an essential of liberty.

When citizens of the United States voluntarily go into a foreign country they must abide by the laws there in force, and will not be protected by their

¹¹² *British and Foreign State Papers*, vol. 68, pp. 1227-1228.

own Government from the consequences of an offense against those laws committed in such foreign country; but the watchful care and interest of this Government over its citizens are not relinquished because they have gone abroad; and if charged with crime committed in the foreign land a fair and open trial, conducted with decent regard for justice and humanity, will be demanded for them. With less than that this Government will not be content when the life or liberty of its citizens is at stake.

Whatever the degree to which extraterritorial criminal jurisdiction may have been formerly allowed by consent and reciprocal agreement among certain of the European states, no such doctrine or practice was ever known to the laws of this country or of that from which our institutions have mainly been derived.

In the case of Mexico there are reasons especially strong for perfect harmony in the mutual exercise of jurisdiction. Nature has made us irrevocably neighbors, and wisdom and kind feeling should make us friends.

The overflow of capital and enterprise from the United States is a potent factor in assisting the development of the resources of Mexico, and in building up the prosperity of both countries.

To assist this good work all grounds of apprehension for the security of person and property should be removed; and I trust that in the interests of good neighborhood the statute referred to will be so modified as to eliminate the present possibilities of danger to the peace of the two countries.

Three causes have operated during the present century to diminish extraterritorial pretensions in criminal matters:

1. The growth of the idea of nationality and of national equality;
2. the development and extension of commercial intercourse;
3. the more general recognition and performance by independent states of their rights and duties under international law.

The first cause has operated to produce a clearer apprehension of the objects of national existence and of the bounds of national authority; the second has rendered more apparent the necessity of personal immunity from vexatious and unjust prosecutions under foreign and unknown laws; the third has made governments more ready to abandon assumptions of authority which infringe the rights of other sovereign powers.

The infliction of punishment involves an exercise of power; and power implies subjection. This principle holds good in public as well as in private affairs. The punishment by one state of the citizen of another for an act for which he was solely answerable to the laws of the latter, or even for an act for which he was not answerable to the laws of the former, is a public wrong.

For a nation to hold its penal laws to be binding on all persons within the territory of another state, is to assert a right of sovereignty over the latter, and impair its independence. A state may, if it see fit, tie its criminal law about the neck of its citizen and hold him answerable for its violation everywhere. But even this power of control has its limitations. For the citizen so bound is nevertheless not exempt from obedience to the law of the place where he may be, and it would be no defense to a charge of having violated it to say that the act complained of was required by the penal law of his own country. The local allegiance would be paramount; his double allegiance would be his misfortune, for relief from which he could appeal to the mercies of his own government alone.

When a man in his own country violates its laws, he is answerable for his misconduct to those laws alone; and it is his right to be tried under them and in accordance with the methods of procedure they prescribe. To say that he may be answerable to another law because the person he attacks is a foreigner would in principle subject him in his own country not merely to a dual, but to an indefinite responsibility. Such a pretension is an assertion not only of an *imperium in imperio*, but of *imperia in imperio*. It would expose citizens and all other persons in the United States to liability to as many penal systems as there happened to be nationalities represented in the foreign population. Every fresh accession to that population would extend the operation, and potentially increase the variety, of foreign penal systems in force in this country.

The mere statement of such a proposition is a sufficient refutation of it.

When a citizen of the United States commits in his own country a violation of its laws, he is entitled as a matter of right to be tried under and in accordance with its constitution and laws. As Heffter says, he should not be withdrawn for trial for such an act from his constitutional judge. While he is answerable in such case to the laws of his country, he is entitled to the rights of defense and the safeguards of liberty which they provide, and in accordance with which alone can his guilt be established. The methods of trial are not a matter of form, but an essential and inseparable part of every system of criminal jurisprudence.

In respect to the punishment, advocated by so many continental jurists and provided for in so many continental codes, of offenses against the safety of the state, it is beyond the purview of this report to enter into an elaborate discussion, and attempt to state a definitive conclusion. The grounds of necessity and self-defense, on which this claim of jurisdiction is based, are conditional and circumstantial rather than strictly legal, and the very mention

of them is suggestive of international controversies and complications. It is within the competence of every independent state to decide what measures it shall take to secure its safety. On the other hand, it may become necessary for foreign powers to consider whether those measures violate their sovereign prerogatives or the rights of their citizens.

All of which is respectfully submitted:

John B. MOORE
Third Assistant Secretary of State.

To the Honorable
T. F. Bayard,
Secretary of State.

EXHIBIT A
SENTENCE OF JUDGE ZUBIA

Vista la presente causa instruida contra A. K. Cutting, quien declaró ser soltero, de 40 años de edad, originario del Estado de Nueva-York, residente en esta villa y editor del periódico *El Centinela*, por delito de difamacion.

Vista la preparatoria del inculpado, el pedimento del representante del Ministerio público, lo expuesto por la parte civil C. Emigdio Medina, la exposicion del defensor C. Jesus E. Islas y todo lo demás que del proceso consta y ver convino.

Resultando, 1o.: Que en el número 14 del periódico intitulado *El Centinela* que se publica en este lugar, correspondiente al 6 de Junio próximo pasado, apareció un párrafo de gacetilla en inglés, en el que se critica de fraudulento un prospecto publicado en El Paso, Texas, anunciando la aparicion de un periódico intitulado *Revista Internacional*.

Resultando, 2o.: Que el C. Emigdio Medina considerándose aludido é injuriado en ese párrafo se presentó al alcalde segundo en turno de lo criminal en esta villa, promoviendo juicio de conciliacion en contra de A. K. Cutting, como editor responsable de *El Centinela*.

Resultando, 3o.: Que presentes las partes ante el Juez conciliador convinieron en publicar en el mismo periódico *El Centinela* una retractacion que fué redactada por Medina y corregida por Cutting, cuya publicacion debia hacerse por cuatro veces en inglés, y si lo permitia el Sr. A. N. Daguerre, editor tambien del periódico, seria publicada en español.

Resultando, 4o.: Que Cutting, lejos de cumplir lo estipulado en la conciliacion, publicó el veinte del mismo mes de Junio la retractacion solamente en inglés en *El Centinela*, en letra diminuta y con faltas sustanciales que la hacen casi ininteligible, publicando en la misma fecha un aviso ó remitido en el *The El Paso Sunday Herald*, en el que ratifica y amplía los conceptos difamatorios que publicó contra Medina y califica de indigno el acto de conciliacion que se verificó ante el alcalde segundo de esta villa.

Resultando, 5o.: Que el ofendido se presentó en forma acusando á Cutting por el delito de difamacion conforme á los artículos 643 y 646, fraccion segunda, del Código Penal, por cuyo motivo se libró la orden correspondiente de detencion.

Resultando, 6o.: Que en 22 del mismo mes la parte ofendida amplió la acusacion manifestando: que aunque el periódico *The El Paso Sunday Herald* se publica en Texas, Cutting lo hizo circular en gran número en esta poblacion y en el interior de la República, habiéndolo leído más de tres personas, por cuyo motivo se mandaron recoger los ejemplares que se encontraban en la oficina ó despacho del mismo Cutting.

Resultando, 7o.: Que dentro de los términos legales se tomó al inculpado su declaracion preparatoria en la que declinó la jurisdiccion del juzgado, por tratarse de un acto consumado en Texas, poniéndose bajo la proteccion del Cónsul de los Estados- Unidos, y se decretó el auto de formal prison, habiéndose comunicado á quienes corresponde.

Resultando, 8o.: Que seguida la averiguacion por todos sus trámites, el inculpado insistió en su anterior respuesta, y al prevenirle nombrara defensor por haber renunciado el C. Lic. José Maria Barajas, se negó á hacerlo, nombrándose de oficio al C. A. N. Daguerre, socio del mismo Cutting en la redaccion de *El Centinela*; pero habiendo renunciado á su vez, recayó el nombramiento en el C. Jesus E. Islas, quien ha desempeñado el cargo hasta presentar su alegato de defensa.

Resultando, 9o.: Que en virtud de la conclusion del Ministerio público relativa á haber lugar á la acusacion, se puso de manifiesto el proceso en la secretaria por el término que señala el artículo 409 reformado del Código de Procedimientos penales, y vencido el termino sin haberse opuesto excepcion alguna, se citó á las partes para el debate que se verificó el dia 5 del actual en la forma y términos prescritos por el mismo Código, terminando el acto con la citacion para sentencia.

Considerando, 1o.: Que conforme al artículo 121 del Código de Procedimientos Penales, la base del procedimiento criminal es la comprobacion del hecho que la ley reputa delito; y en el presente caso, está plenamente comprobada la existencia de este hecho, puesto que lo constituye la publi-

cacion que apareció en *El Centinela* correspondiente al 6 de Junio próximo pasado, en la que se calificó de fraudulento el prospecto que se dió á luz para anunciar la publicacion de la *Revista Internacional*.

Considerando, 2o.: Que si bien es cierto que respecto de este hecho hubo un acto conciliatorio, que habría dejado satisfecha á la parte ofendida si se hubiera cumplido, tambien lo es que ese acto no llegó á cumplirse y, por lo mismo, quedó en pié la responsabilidad del delito.

Considerando, 3o.: Que la prueba de la falta de cumplimiento del compromiso contraído en el juicio de conciliacion está precisamente en el remitido publicado por Cutting en el *The El Paso Sunday Herald* en el que ratifica la original asercion de que Emigdio Medina es un defraudador y estafador, y á la vez en la publicacion hecha en *El Centinela* de la misma fecha, suprimiendo todas las mayúsculas y poniendo el nombre de Medina con letra microscópica, á fin de dificultar su lectura.

Considerando, 4o.: Que la ratificacion conforme al Diccionario de Escriche, es la confirmacion y aprobacion de la que hemos dicho ó hecho: Tiene retroactivo y por consiguiente no constituye un acto diverso de aquel á que se refiere: *ratihabitio retrotrahitur ad initium*, ni nace de ella una nueva responsabilidad distinta de la que surgió al principio.

Considerando, 5o.: Que siendo esto asi, la responsabilidad criminal de Cutting surgió de la publicacion hecha en *El Centinela* que ve la luz pública en esta villa, la cual fué ratificada en el periódico de Texas sin que esta ratificacion constituyera un nuevo delito que deba ser castigado con una pena diversa de la que corresponde por la primera publicacion.

Considerando, 6o.: Que aun en el supuesto no concedido de que la difamacion procediera del remitido publicado con fecha 20 de junio en el *The El Paso Sunday Herald*, el artículo 186 del Código Penal mexicano previene “que los delitos cometidos en territorios extranjeros por un mexicano contra mexicanos ó contra extranjeros, ó por un extranjero contra mexicanos”, podrian ser castigados en la República y con arreglo á sus leyes si concurrieren los requisitos siguientes: 1o., que el acusado esté en la República ya sea porque haya venido espontáneamente ó ya porque se haya obtenido su extradicion: 2o., que si el ofendido fuere extranjero, haya queja de parte legitima: 3o., que el reo no haya sido juzgado definitivamente en el pais en que delinquirió, ó que si lo fué no haya sido absuelto, amnistiado ó indultado: 4o., que la infraccion de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República: 5o., que con arreglo á las leyes de ésta, merezca una pena más grave que la de arresto mayor; requisitos que se han perfectamente llenado en el presente caso, supuesto que Cutting fué aprehendido en territorio de la República; hay queja de parte legitima ó sea

del C. Medina, quien presentó su querrela en la forma prescrita por la ley; el reo no ha sido juzgado definitivamente, ni absuelto, amnistiado, ni indultado en el país en que delinquiró; el delito de que se acusa á Cutting tiene ese carácter en el país en que lo ejecutó y en la República, segun es de verse en el Código Penal vigente en el Estado de Texas, artículos 616, 617, 618 y 619, y en el Código Penal del Estado de Chihuahua, artículos 642 y 646; y segun este último artículo, en su fraccion segunda, la infraccion de que se trata merece pena más grave que la de arresto mayor.

Considerando, 7o.: Que segun la regla de derecho *Judex non de legibus, sed secundum leges debet judicare*, no corresponde al juez que decreta examinar el principio asentado en el referido artículo 186, sino aplicarlo en toda su plenitud, por ser la ley vigente en el Estado.

Considerando, 8o.: Que esta regla general no tiene más limitacion que la expresada en el artículo 126 de la Constitucion general, que dice; “Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella, y todos los tratados hechos ó que se hicieren por el Presidente de la República con la aprobacion del Congreso, serán la ley suprema de toda la Union. Los jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion, leyes y tratados, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados”.

Considerando, 9o.: Que el repetido artículo 186 del Código Penal, lejos de ser contrario á la ley suprema ó á los tratados hechos por el Presidente de la República, ha tenido por objeto, segun es de verse en la parte expositiva del mismo Código, página 38, “que obre de lleno el principio en que se funda el derecho de castigar, esto es, la justicia unida á la utilidad”.

Considerando, 10o.: Que aun suponiendo, sin conceder, que el delito de difamacion se hubiere ejecutado en territorio de Texas, la circunstancia en que tuvo en esta villa el periódico *El Paso Sunday Herald*, de la que se quejó el C. Medina, motivando el decreto en que se mandaron recoger los ejemplares existentes en la oficina de Cutting, situada en esta misma villa, constituye propiamente la consumacion del delito, conforme al art. 644 del Código Penal.

Considerando, 11o.: Que segun el artículo 70 reformado de la Constitucion general, los delitos que se cometen por medio de la imprenta deben ser juzgados por los tribunales competentes de la Federacion ó de los Estados, conforme á su legislacion penal.

Considerando, 12o.: Que la publicacion hecha por Cutting en *El Centinela*, ratificada despues en el *The El Paso Sunday Herald* y en el *The Evening Tribune*, que obran en el proceso, ataca la vida privada del C. Emigdio Medina al atribuirle el delito de fraude y estafa, y por lo mismo

está comprendida en la taxativa puesta á la libertad de imprenta por el artículo constitucional citado.

Considerando, 13o.: Que tratándose de hechos consumados en el territorio del Canton Bravos, perteneciente al Estado de Chihuahua, corresponde al Juez que suscribe juzgarlos conforme á la legislación vigente en el mismo Estado, particularmente si se tiene en consideracion que el inculcado reside en esta villa, donde tiene su domicilio hace más de dos años, segun consta de las declaraciones visibles a fojas 20, 21 y 22 del proceso, afirmacion que no ha sido contradicha por Cutting, quien declara á fojas 19 que reside en ambos lados, esto es, en Paso del Norte, México, y en El Paso, Texas, sin residencia fija en ninguno de los dos lados.

Considerando, 14o.: Que á mayor abundamiento, Cutting reconoció expresamente la jurisdiccion de las autoridades de esa villa, compareciendo ante el Alcalde de 2o. turno de lo criminal y contestando la demanda conciliatoria que por difamacion interpuso en su contra el C. Medina.

Considerando, 15o.: Que la responsabilidad de Cutting está plenamente probada, puesto que aparece consignada en documentos fehacientes que de ninguna manera han sido contradichos por su autor; y si alguna duda hubiere respecto de la intencion dolosa con que se hizo la primera publicacion, desaparecería en vista de las ratificaciones posteriores hechas en el *The El Paso Sunday Herald* y en el *The Evening Tribune*, en las que Cutting expresa textualmente que Emigdio Medina es un *defraudador, estafador, cobarde y ladrón*; quedando así llenados los requisitos que señala el artículo 391 del Código de Procedimientos Penales.

Considerando, 16o.: Que para graduar la pena que deba aplicarse, hay que tener presente, que aunque el hecho que se imputa al ofendido le causa deshonra y perjuicio grave, y no existen circunstancias atenuantes, se trata de un delito de carácter privado entre dos editores, en el que solo han concurrido las circunstancias agravantes á que se refieren las fracciones séptima y undécima del artículo 44 y los artículos 656 y 657, fraccion cuarta, del Código Penal: no apareciendo plenamente justificadas las demás que menciona el Ministerio público, pues si bien es cierto que el presente caso ha producido grande alarma á la sociedad, esto no ha provenido del delito que se imputa á Cutting, sino de las medidas inadecuadas que se han tomado para su defensa: siendo en consecuencia de perfecta aplicacion la parte final del artículo 66 del Código citado; y

Considerando, finalmente, 17o.: Que el responsable de un delito lo es de sus consecuencias, quedando obligado á la indemnizacion civil en los términos que se disponen en los artículos 326 y 327 del Código Penal.

Con apoyo de las disposiciones citadas y de los artículos 646, fracción segunda, 661, 119 y 218 del mismo Código, se resuelve con las proposiciones siguientes:

Primera: por el delito de difamación cometido en la persona del C. Emigdio Medina, se condena á A. K. Cutting á sufrir un año de servicios públicos y á pagar una multa de 600 pesos, ó en su defecto á cien días más de arresto.

Segunda: se le condena igualmente á la indemnización civil, que se fijará como lo dispone el artículo 313 del Código Penal.

Tercera: amonéstese al reo, para que no reincida en el delito por el cual se le condena, advirtiéndole las penas á que se expone.

Cuarta: esta sentencia se publicará en los términos que previene el artículo 661 del propio Código.

Quinta: remítase esta causa al Supremo Tribunal de Justicia, para los efectos á que se contrae la parte final del pedimento del agente del Ministerio público, relativa á la intervención que ha tenido el Cónsul americano en este proceso.

Sexta: notifíquese á las partes y adviértase al reo el término que tiene para apelar de esta sentencia.

El C. Lic. Miguel Zubia, Juez letrado del Distrito Bravos, fallando en definitiva, así lo proveyó con testigos.

Miguel ZUBIA.
A., L. FLORES.
A., S. VARGAS.

Lo comunico á vd. para su conocimiento.

FELIX FRANCISCO MACEYRA.

EXHIBIT B

ARRÊT

LA COUR;—Attendu que si, en principe général, les Cours d'assises saisies par un arrêt de la chambre des mises en accusation non attaqué dans les délais fixés par l'art. 296, C. inst. cr., ne peuvent se déclarer incompetentes, soit parce que le fait incriminé ne constituerait qu'un délit, soit par le motif que l'accusé aurait dû être renvoyé devant une autre Cour d'Assises, ou même

devant un tribunal d'exception, cette régie est fondée sur ce que les Cours d'Assises, étant investies de la plénitude de juridiction en matière criminelle, peuvent, sans commettre aucun excès de pouvoir et sans sortir des limites de leurs attributions, connaître de tous les faits punis par la loi française; mais que cette juridiction, quelque générale qu'elle soit, ne peut s'étendre aux délits commis hors du territoire par des étrangers, qui, à raison de ces actes, ne sont pas justiciables des tribunaux français;—Attendu, en effet, que le droit de punir émane du droit de souveraineté, qui ne s'étend pas au delà des limites du territoire; qu'à l'exception des cas prévus par l'art. 7, C. inst. crim., dont la disposition est fondée sur le droit de légitime défense, les tribunaux français sont sans pouvoir pour juger les étrangers à raison des faits par eux commis en pays étranger;—Que leur incompétence à cet égard est absolue, permanente; qu'elle ne peut être couverte ni par le silence, ni par le consentement de l'inculpé; qu'elle existe toujours la même, à tous les degrés de juridiction, et que la chambre des mises en accusation, par son arrêt de renvoi, ne peut donner à la cour d'assises le droit, qu'elle n'a pas elle-même, de statuer sur un fait non soumis à la loi française;—Attendu, en fait, que Raymond Fornage a été traduit devant la Cour d'assises de la Haute Savoie, comme accusé d'un vol commis dans le Canton de Valais (Suisse); qu'avant l'ouverture des débats il a posé des conclusions tendant à ce que cette Cour se déclarât incompétente, par le motif qu'étant né en France de parents étrangers, et n'ayant pas réclamé la qualité de Français, il n'était pas justiciable des tribunaux français à raison d'un fait commis en pays étranger;— Attendu que cette exception, qui mettait en contestation la légalité même de la poursuite et le droit de juridiction de la Cour d'assises, constituait nécessairement une question préjudicielle qui devait être jugée par cette Cour avant tout débat sur le fond du procès; que le demandeur n'a pu être privé du droit d'exciper de ce moyen péremptoire, ni par son silence pendant le cours de l'instruction, ni par le défaut de pourvoi contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation, qui, d'ailleurs, n'a pas été appelée à statuer sur la question de nationalité posée pour la première fois devant la Cour d'assises;—Attendu qu'en le déclarant non recevable à présenter cette exception par le motif qu'il ne s'est pas pourvu dans le délai fixé par la loi contre l'arrêt de renvoi, la Cour d'assises de la Haute Savoie a faussement appliqué les art. 296, 297 et 301 du C. d'inst. crim.; et qu'en ordonnant qu'il serait procédé à l'ouverture des débats sans statuer sur la question préjudicielle de nationalité soulevée par l'accusé, elle a violé l'art. 408 du même Code, et méconnu les droits de la défense;—Casse, etc.

Du 10 janv. 1873.—Ch. crim.—MM. Faustin Hélie, prés.; Réquier, rapp.; Bédarrides, av. gén.

El caso Cutting. ¿Extraterritorialidad del Ley? Documentos derivados de una reclamación diplomática de Estados Unidos de América contra México, incluyendo un estudio introductorio del caso, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el 27 de octubre de 2017 en Arte Gráfico y Sonoro, Agys Alevin, S. C., Retorno de Amores 14-102, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, tel. 5523 1151. Se utilizó tipo *Baskerville* en 9, 10 y 11 puntos. En esta edición se empleó papel interiores: *book cream* 78 x 95 de 60 gramos; portada: couché de 250 gramos y consta de 200 ejemplares (impresión *offset*)

Los sucesos derivados de algunos insultos pueriles ocurridos en Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez), a finales del siglo XIX, entre un ciudadano mexicano y uno de Estados Unidos no sólo desencadenaron un pleito judicial, sino un enfrentamiento en las relaciones entre ambos países. Incluso, se dice, fueron un motivo para invadir México y anexar parte de los estados norteros a la bandera de las estrellas.

La lucha de intereses mezquinos, favorecidos por el gobierno de Estados Unidos, por un lado, y la defensa de los intereses nacionales por parte de la dictadura porfirista, por otro, se enfrentaron en el campo de la diplomacia, donde al final salieron triunfantes los alegatos mexicanos.

La presente obra rememora esa lucha de pasiones en torno a una reclamación diplomática estadounidense, con rechazo a la jurisdicción mexicana y preparativos militares para invadir México, que Jorge Alberto Silva trata de rescatar para evitar que queden sepultados en el olvido.



www.juridicas.unam.mx

